



MANUAL DE CALIFICACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

PDDH

San Salvador, Junio de 2010

Manual de Calificación de Violaciones a Derechos Humanos con enfoque de Género

PDDH



San Salvador, Junio de 2010

323.4

P9641 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
Manual de Calificación de violaciones a Derechos Humanos con enfoque de Género
sv PDDH, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.-- la. ed. --
San Salvador, El salv. : Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, 2010
260 p. ; 28 cm.

ISBN 978-99923-73-53-8

1. Derechos Humanos-El Salvador- Manuales. 2. Derechos Civiles-El
Salvador. Discriminación contra la mujer-El Salvador. I. Título.

BINA/jmh

ESTA PUBLICACIÓN ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PDDH Y HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO DE ITALIA Y DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, IIDH.

PDDH

Lic. Oscar Humberto Luna

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

Coordinador Nacional de Tutela

Dr. Salvador Eduardo Menéndez Leal

Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos

Coordinadora del Proyecto

Licda. Raquel Caballero de Guevara

Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia

Consultor

Lic. Víctor Rodríguez Rescia

5ª. Calle Poniente y 9ª. Avenida Norte, N° 35, Edificio AMSA, San Salvador, El Salvador, C. A.

Teléfono.: 2222-1604 y 2271-6101; Email: adjuntadelamujer@gmail.com www.pddh.gob.sv

ITALIA

Licda. Caterina Bertolini

Excelentísima señora Embajadora en El Salvador

Lic. Saverio Rosini

Agregado Comercial de la Embajada

IIDH

Dr. Roberto Cuellar

Director Ejecutivo

Dr. Juan Navarrete

Sub Director



INDICE

Contenido	Pág.
I. Presentación	13
II. Antecedentes	17
III. Diagnóstico inicial sobre el enfoque de género dentro de la PDDH	20
IV. Tipología de Violaciones de derechos humanos	24
V. Metodología de calificación propuesta	24
VI. Aspectos generales del manual	27
VII. Metodología de uso del manual	36
VIII. Plantilla de calificación de violaciones a derechos humanos	36
A. Derechos Civiles:	45
• Derecho a la vida	46
• Derecho a la no desaparición forzada de personas	50
• Derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana	52
• Derecho a la personalidad jurídica	54
• Derecho a la identidad y al nombre	54
• Derecho a la propia imagen	55
• Derecho a la privacidad o a la intimidad (regulación de intervenciones telefónicas)	56
• Derecho al honor o reputación	58
• Derecho a la documentación personal	59
• Derecho a la nacionalidad	60
• Derecho a asilo político	63
• Derecho a la integridad personal	64
• Derecho a no ser sometido a tortura física ni psicológica	70
• Derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes	77
• Derecho a vivir libre de esclavitud y de servidumbre	80
• Derecho a la libertad personal	83
• Prisión por deudas, Prohibición.	88
• Derecho a libertad de tránsito, circulación y residencia	89
• Derecho al domicilio (residencia).....	91
• Libertad de asociación	93
• Derecho de reunión	95
• Derecho a la libertad y acceso a la información	99
• Derecho de respuesta y de rectificación.....	100
• Derecho al acceso a la justicia	102
• Derecho de petición	106
• Derecho a la protección judicial	108
• Garantías judiciales	112
• Derecho a un debido proceso judicial	124
• Derecho a un debido proceso administrativo	124
• Derecho a la legalidad	127
• Principio de irretroactividad de la ley	129
• Indemnización por error judicial	130

Contenido	Pág.
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a la verdad 132 Libertad de opinión, pensamiento y expresión 142 Libertad de conciencia, religión y culto 143 Derecho a la propiedad privada 144 Derecho a la igualdad y a la no discriminación 149 Derecho a la reparación por violación de derechos humanos 152 	
B. Derechos Políticos:	153
<ul style="list-style-type: none"> Derecho al voto..... 153 Derecho a ser elegido..... 158 Derecho a acceder a cargos públicos en condición de igualdad/equidad.... 160 Derecho a participar en la dirección de asuntos públicos. 160 	
C. Derechos de segunda generación (Derechos Económicos, sociales y Culturales, DESC)	163
<ul style="list-style-type: none"> Derechos Económicos, sociales y Culturales. Progresividad y no regresividad 163 Derecho a un nivel de vida adecuado (proyecto de vida digna)..... 163 Derecho a la constitución y protección de la familia 169 Derecho a la vivienda 173 Derecho al trabajo y derechos conexos 174 Derecho a la libertad sindical 181 Derecho a la seguridad social 185 Derecho a la salud 189 Derecho a la alimentación 192 Derecho a la educación 193 Derecho a la cultura y a gozar de los beneficios de la cultura 199 Derecho al acceso al agua..... 202 Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico 203 Derecho a la propiedad social y colectiva 204 	
D. Derechos de tercera generación	210
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a la paz 210 Derecho al desarrollo y al desarrollo sustentable 212 Derecho al patrimonio común de la humanidad..... 216 Derecho al medio ambiente sano 217 Contaminación visual 225 	

Contenido	Pág.
E. Derechos de las mujeres y enfoque de género	225
• Derechos de las mujeres y enfoque de género	225
• Derecho a la vida	228
• Derecho a un proyecto de vida digno	229
• Derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	230
• Derecho a la protección de su integridad física y psíquica, prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes	234
• Prohibición de discriminación en razón de género	240
• Derecho a acción afirmativa	242
• Derecho a la educación	242
• Derecho a la salud y tratamientos diferenciados	243
• Derecho al trabajo sin discriminación	245
• Derecho a la libre asociación	247
• Derecho a la propiedad y desarrollo sin discriminación	248
• Derecho a la información	249
• Derecho al acceso a la justicia diferenciada	249
• Derecho a la igualdad en el matrimonio y en relaciones familiares	252
• Derecho a participar en la vida política y pública del país	253
F. Derechos de niños, niñas y adolescentes	254
• Derecho a que haya política de prevención y combate contra la discriminación de personas menores de edad	254
• Derecho a la supervivencia y al desarrollo	258
• Derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes	259
• Derecho a no ser abusado, descuidado o maltratado por las personas responsables de su cuidado personal	259
• Derecho a la prevención y protección contra todo tipo de explotación sexual comercial y laboral (prostitución ajena, trata y tráfico de personas, turismo sexual, tráfico de órganos, explotación laboral)	259
• Derecho a medidas de atención, asistencia, recuperación y rehabilitación a víctimas de explotación sexual comercial menores de edad	259
• Derecho al nombre y a la identidad	260
• Derecho a la protección de su vida privada	262
• Derecho a la protección de su imagen	262
• Derecho a no ser trasladado/a o retenido/a ilícitamente	262
• Derecho a expresarse libremente sin más límites que los establecidos por la ley	262

Contenido	Pág.
• Derecho a recibir información adecuada y comprensible acorde a su edad....	262
• Derecho a asociarse y a celebrar reuniones pacíficas	263
• Derecho a recibir dirección y cuidado de los padres, salvo cuando sea para la protección de su interés superior	263
• Derecho a ser adoptado por persona idónea, con las garantías y controles previos y posteriores establecidos por la ley	263
• Derecho a recibir pensión de alimentos	263
• Derecho a la salud	263
• Derecho a recibir cuidados en las diferentes discapacidades	264
• Derecho a los beneficios de servicios e instalaciones de guarda de niños	264
• Derecho a la educación, formación y orientación profesionales	264
• Derecho al descanso, esparcimiento y actividades culturales	266
• Derecho a protección contra las “peores formas de trabajo infantil”.....	266
• Derecho a recibir cuidados especiales en situaciones de excepción	267
• Derecho a recibir cuidados especiales en situaciones de calamidad o desastres naturales	267
• Derecho a una administración de justicia diferenciada al régimen de adultos....	267
• Derecho de las personas menores de edad privadas de libertad a estar en lugares separados de los adultos	268
• Derecho a recibir asistencia legal especializada	268
• Derecho a participar y estar representados en procesos donde puedan estar afectados	268
• Derecho a personas menores de edad viviendo con VIH/SIDA a recibir protección especial contra toda privación o vulneración de sus derechos.	268
G. Derechos de las personas adultas mayores	269
• Derecho a que haya política de prevención y combate contra la discriminación de adultos mayores	269
• Derecho a la protección contra toda forma de abuso y explotación	271
• Derecho a su autonomía y desarrollo	271
• Derecho a salud preferente	271
• Derecho a obtener beneficios y prestaciones de seguridad social	271
• Derecho a participar en las políticas o decisiones del Estado que les afecten.	271
• Derecho al trabajo sin discriminación	272
H. Derechos de personas con discapacidad.....	273
• Derecho a no ser discriminado por condición de discapacidad	273
• Derecho a un nivel de vida adecuado.....	275

Contenido	Pág.
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a que se remuevan obstáculos físicos y materiales para facilitar su acceso a edificios y lugares públicos. Derecho a que se facilite su acceso a servicios de transporte público Derecho a optar a cargos públicos Derecho a ejercer derechos políticos y cargos públicos Derecho a acceso a la justicia diferenciada Derecho a una salud diferenciada Derecho a una educación diferenciada Derecho y acceso al trabajo en condición diferenciada Derecho a la seguridad social diferenciada 	275 275 275 275 276 276 277 277 278
I. Derecho de las personas viviendo con VIH/SIDA	278
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a la no discriminación Derecho a la vida Derecho a la integridad física Derecho a un trato humano Derecho a salud y acceso a medicamentos antirretrovirales adecuados 	278 281 281 281 281
J. Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes	282
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a que exista una política de prevención y combate contra la discriminación racial Derecho a una justicia diferenciada y reconocimiento de la jurisdicción indígena plena y de la costumbre para resolver sus conflictos internos e interculturales Derecho a la protección contra toda forma de abuso y explotación Derecho al reconocimiento y respeto de su identidad cultural Derecho a la propiedad y posesión de territorios indígenas Derecho al acceso a la educación diferenciada y diversa Derecho al desarrollo conforme a su cosmovisión Derecho a la salud diferenciada e integrada con sus sistemas tradicionales.... Derecho al trabajo sin discriminación Derecho a la consulta previa Derecho a la protección de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios 	282 292 293 293 294 297 298 298 298 299 301
K. Derechos de personas privadas de libertad	301
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a un proyecto de vida digna Derecho a no ser torturada 	301 310

Contenido	Pág.
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a ser tratada humanamente y con respeto a su integridad física y psíquica 310 Derecho a identidad 310 Derecho a la documentación..... 310 Derecho a la intimidad 311 Derecho a no ser restringido en sus derechos en grado mayor que los señalado por la ley o por su condena 311 Derecho a libertad ambulatoria dentro del Centro de detención 311 Derecho a separación en razón de edad, sexo, situación jurídica y motivo de la detención 311 Derecho a la salud sin discriminación 311 Derecho a la educación 312 Derecho a acceder a los beneficios de la cultura 312 Derecho a mantener relaciones familiares 313 Derecho al trabajo 313 Derecho al acceso a la justicia y garantías del debido proceso 314 	
L. Derechos de personas migrantes 318	
<ul style="list-style-type: none"> Derecho a ser tratado de manera digna y sin discriminación..... 318 Derecho a no ser sometido a condiciones de detención por causa de su situación jurídica migratoria irregular 325 Derecho a ser protegido contra toda forma de maltrato, abuso o explotación 326 Derecho a la salud 326 Derecho a la educación 326 Derecho a la libertad de pensamiento y expresión 326 Derecho a mantener relaciones familiares 327 Derechos laborales sin discriminación 327 Derecho a las libertades sindicales 328 Derecho a preservar su idioma, religión, costumbres y tradiciones 328 Derecho a la justicia sin discriminación 328 Derecho de los emigrantes salvadoreños 328 	
M. Personas refugiadas y desplazadas 326	
<ul style="list-style-type: none"> Derecho al refugio de personas en situación de riesgo por conflictos armados o desplazamientos 326 Derecho a la integridad física y psíquica. 326 Derecho a regresar libre y voluntariamente a su lugar de origen en condiciones de seguridad 326 Derecho de no devolución..... 326 	

Contenido	Pág.
<ul style="list-style-type: none"> • Restitución de bienes confiscados 326 • Reparación por daños y perjuicios..... 326 • Derecho a la rehabilitación 327 • Derecho a participar en decisiones públicas que le afecten 327 	
N. Derechos de personas con orientación sexual diversa 338	
<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la no discriminación (homofobia)..... 338 • Derecho a la vida (combate a crímenes de odio)..... 340 • Derecho de acceso a instituciones y oficinas públicas 341 • Protección ante la homofobia 341 	
O. Derechos de los consumidores 341	
<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a recibir información adecuada y suficiente 343 • Derecho a organizarse para la defensa de sus intereses 343 • Derecho a la protección de sus intereses económicos 343 • Derecho a que se promueva la competencia leal empresarial 344 • Derecho a que se combatan los monopolios y oligopolios 344 • Derecho a que se promuevan modalidades de consumo sustentable 345 • Derecho de acceso a la justicia 345 • Derecho a recibir reparación por daños y perjuicios 345 	



Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

MANUAL DE CALIFICACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

PRESENTACIÓN

Me es grato presentarles este manual de calificación de violaciones a derechos humanos y libertades fundamentales, el cual aspira a convertirse en una útil y valiosa herramienta orientada a la debida calificación tanto de los derechos protegidos así como de las conductas – individuales y colectivas- vulneradoras, en directa consonancia con los estándares y parámetros prefijados nacional e internacionalmente.

Es claro que una calificación acertada de los diversos casos sometidos al Ombudsman le permite a éste identificar, con mayor precisión y de preferencia anticipadamente, ciertas prácticas o patrones que reflejen un determinado grado de sistematicidad; asimismo, le facilita advertir dentro del catálogo de derechos protegidos cuáles son aquellos que están siendo afectados, qué individuos o grupos sociales son vulnerados y otros aspectos igualmente relevantes. Todo ello coadyuvará, seguramente, a establecer con eficacia y certidumbre las acciones y medidas encaminadas a una mejor tutela, promoción y educación en materia de derechos y libertades básicas lo cual a su vez abonará a la construcción de una cultura social de irrestricto respeto a los derechos humanos.

Vale citar que la institución nacional de rango constitucional defensora de los derechos humanos resultante de los entendimientos refundacionales de Chapultepec, alcanzados hace

casi dos décadas, como es esta Procuraduría, cuenta con un manual de calificaciones que data desde hace doce años, adicionalmente dispone de una tipología de hechos violatorios vigente desde hace tres años. Dichos instrumentos con todo y sus imperfecciones han sabido guiar la labor institucional pero han carecido, desafortunadamente, de un enfoque integral e integrador que permita identificar propuestas de incidencia en las políticas públicas, lo cual constituye una de las cinco líneas estratégicas de la actual gestión (2007-2010).

En atención a lo expresado y gracias a la inestimable cooperación brindada por la Embajada de la República de Italia acreditada en nuestro país, la cual agradezco ampliamente, fue posible la contratación del acreditado consultor costarricense, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, para la elaboración de un nuevo manual y de una novedosa tipología que se adecuen a una rica, dinámica y profusa realidad interna y externa, y que promuevan el abordaje de casos con un enfoque más integral incorporando la debida visión de género.

Finalmente, en mi carácter de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos presento al personal de la institución este Manual de Calificación elaborado bajo una perspectiva de equidad género y, el cual aspira a convertirse en el principal instrumento de consulta que oriente técnicamente a los operadores/as en la calificación de derechos protegidos y de hechos violatorios. En el entendido que el Manual que no se aplica no sirve, aliento al personal de la PDDH a utilizar el contenido del mismo.

Junio 2010



Salvador Eduardo Menéndez Leal
Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos
Director Nacional de Tutela

PRÓLOGO

El presente texto denominado “Manual de Calificación de Violaciones a Derechos Humanos con enfoque de género” se convertirá a partir de su publicación, en el instrumento técnico que guiará al personal de la institución en la calificación de los derechos protegidos y de hechos violatorios a los mismos. Dicho documento parte de un abordaje integral o sistémico de derechos, con énfasis especial en el enfoque de género.

Los criterios que se utilicen en esta calificación se hayan en consonancia con la normativa nacional e internacional, con la jurisprudencia y con las recomendaciones derivadas del sistema universal de protección de derechos humanos así como del sistema interamericano.

Vale decir a manera de antecedente, que desde su creación en el año de 1992, la Procuraduría únicamente ha contado con un Manual de Calificaciones, el cual entró en vigencia en el año de 1998. Sin embargo, pese a los sustantivos aportes en materia de tutela de derechos humanos y libertades fundamentales del instrumento en cuestión, se estableció la necesidad de revisarlo exhaustivamente con la finalidad de adaptarlo a la cambiante realidad nacional y a los vertiginosos y crecientes requerimientos institucionales.

En mi carácter de Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos y como Director Nacional del Sistema Nacional de Protección a Derechos Humanos, estimo pertinente advertir que si bien es cierto este Manual configura una valiosa herramienta metodológica que servirá, sin duda alguna, de fuente de consulta y de guía a los operadores y operadoras de dicho sistema en la calificación de las presuntas violaciones a derechos humanos, éste no

debe constituirse en obstáculo o impedimento para la admisibilidad de casos. En el anterior orden de ideas, y tal como lo consigna el Art. 11 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH, no se podrá sustentar la inadmisibilidad de un caso por la sola razón de que los hechos o derechos no correspondan al catálogo comprendido en el apuntado Manual; debiendo, en tal caso, recurrir a lo prescrito en la Constitución de la República (1983) en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en las normas jurídicas secundarias y en la jurisprudencia que reconozca el derecho invocado o presuntamente afectado.

Por lo tanto, exhorto al personal operador del sistema de Protección que haga uso del presente Manual teniendo presente, en todo momento, el principio pro homine a efecto que las personas que acuden ante la institución nacional de derechos humanos, reciban una efectiva protección de sus derechos y libertades.

Finalmente agradezco en nombre de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la valiosa cooperación financiera del Gobierno de la República de Italia y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que hacen posible esta publicación.

MANUAL DE CALIFICACIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

Antecedentes

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en adelante (PPDH), contrató una consultoría para la elaboración de un manual de calificaciones de derechos humanos con enfoque de género. No obstante, sobre la marcha de la investigación, se recomendó involucrar todos los enfoques y cobertura a la mayor cantidad de grupos en situación de vulnerabilidad y no solo el de género, razón por la cual se amplió el ámbito del manual de calificación.

Aún así, se aprovechó el proceso de investigación y de entrevistas para documentar la situación y visión institucional de la PPDH respecto de los derechos de las mujeres y el enfoque de género hacia adentro de la entidad y hacia fuera.

Como insumos básicos se tuvo en consideración la creación de dos instrumentos para facilitar la calificación de violaciones de derechos humanos en la PPDH: el Manual de Calificación de Violaciones a los Derechos Humanos editado por Manuel Rodríguez Cuadros y la “Tipología de Derechos Protegidos y Hechos Violatorios”, elaborada por la misma PPDH y en proceso de validación.

Del análisis de ambos documentos, se puede verificar lo siguiente:

- ✦ El Manual de Calificación de Violaciones es un buen documento que permite ordenar y calificar las denuncias que llegan a la PPDH mediante criterios de derechos violados teniendo como referente la normativa nacional salvadoreña, tratados de derechos humanos vigentes en el país y jurisprudencia y precedentes nacionales y de los sistemas de Naciones Unidas y de la OEA (Sistema Interamericano).
- ✦ Como herramienta metodológica permite ordenar criterios de calificación e investigación de denuncias con un enfoque jurídico que puede ser muy útil en esa dimensión, pero que requiere de enfoques más integrales para identificar propuestas de incidencia más enfocadas en políticas públicas y recomendaciones generales que permitan efectos más generales (*erga omnes*) para evitar la repetición de hechos similares, y no solo la resolución de casos concretos.
- ✦ Contiene metodología para la calificación e investigación de casos individuales y de casos emblemáticos generadores de dos tipos de informes: resolución de peticiones individuales e informes temáticos para incidir de manera más general en la rectificación de políticas del Estado o prácticas violatorias de derechos humanos.
- ✦ Es un manual que se configuró sobre una clasificación tradicional de los derechos humanos que se basa sobre violaciones a un común denominador de personas y que toca algunos derechos a grupos vulnerables o excluidos, pero no profundiza en los enfoques respectivos.

- ✦ No se visibiliza enfoque de género ni de violación de derechos humanos de las mujeres, salvo pequeñas referencias a algunos derechos, pero sin sistematización alguna.
- ✦ Se encuentra desactualizado, especialmente por la falta de enfoques de violaciones de derechos colectivos, más allá de los derechos económicos, sociales y culturales.

La “Tipología de Derechos Protegidos y Hechos Violatorios”, es un documento complementario al Manual de Calificación de Violaciones que logra sistematizar un catálogo más amplio de derechos humanos, así como de eventuales hechos generadores de esas violaciones. De esta tipología se resalta lo siguiente:

- ✦ Utiliza un enfoque más dirigido a las víctimas según especificidad y no como un conglomerado de personas con un común denominador similar. A diferencia del Manual de Calificación, se centra sobre la persona humana con enfoque de grupo con necesidades distintas para que la calificación y el abordaje sea más integral y específico.
- ✦ Se incluye una categorización y enfoque de género que no estaba visible en el Manual de Calificación. Sin embargo, ese enfoque de género no es suficiente.
- ✦ Identifica 12 derechos de las mujeres que pueden resultar violentados desde una perspectiva de género.
- ✦ No identifica el derecho a la vida o la violencia en el caso de mujeres por su condición de tal (feminicidios y femicidios, respectivamente).

Como observación general, ninguno de los documentos analizados logra desarrollar un enfoque de género que permita una metodología de análisis cualitativo sobre esa temática.

En el contexto institucional, existen varias iniciativas y documentos elaborados por la PDDH, que refieren a la elaboración de una política de género y a la agenda de la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia en esa materia, a saber:

1. La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia coordinó la investigación que culminó con la Plataforma de Derechos Humanos de las Mujeres, en la que participaron organizaciones de la sociedad civil involucrados en esa temática.
2. Se encuentra en proceso de instrumentación e implementación la Política Institucional de Equidad de género dentro de la PDDH.
3. Líneas estratégicas en el trabajo de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.
4. Propuesta de creación en el Gabinete de gobierno de El Salvador del Ministerio de la Mujer a iniciativa de la PDDH.
5. Creación del espacio de coordinación entre la Mesa Permanente de Género, Mesa Permanente de Mujer y Familia, El ISDEMU, en acompañamiento con la PDDH;
6. Desafíos y propuestas para trabajar el tema de género dentro de la PDDH.

7. Normas Básicas sobre Derechos Humanos de las Mujeres y Documentos Afines (PDDH).
8. Informe Especial del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos presentado al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
9. Declaración Universal y Recomendaciones a El Salvador de los diferentes Comités de Naciones Unidas;
10. Convención CEDAW y Recomendaciones para El Salvador del Comité CEDAW, del 7 de noviembre de 2008;
11. Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres privadas de libertad, y las niñas y los niños viviendo con sus madres en los Centros Penales de El Salvador;
12. Primer Informe Situacional sobre Violencia Sexual en Niñas y Adolescentes;
13. Primer Informe Situacional sobre Embarazo en Adolescentes y su impacto en el Derecho a la Educación;
14. Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, Instrumentos de Protección.

Tomando en cuenta esos antecedentes, la PDDH identificó la necesidad de elaborar un nuevo manual de calificación de violaciones de derechos humanos, que tenga un énfasis en los derechos de las mujeres y el enfoque de género. Para esos efectos, se realizaron las siguientes actividades preparatorias hasta la fecha:

✎ Revisión de la tipología de derechos de las mujeres en el quehacer general y realizar las actualizaciones o modificaciones necesarias.

✎ Una misión técnica del consultor contratado (del 4 al 8 de mayo de 2009), con el fin de obtener insumos sobre la situación de la cultura institucional en materia de género de la PDDH y lograr una primera visión diagnóstico de la manera en que se trabaja el tema de los derechos de las mujeres y la cuestión de género. En esta visita se realizaron las siguientes actividades:

1. Entrevista con el Procurador de Derechos Humanos
2. Reunión con el Procurador Adjunto DESC.
3. Reunión con las Jefaturas de los Departamentos de tutela (denuncias, investigación-procuración, verificación y observación preventiva y atención de crisis, unidad técnica, seguimiento y verificación penitenciaria.
4. Reunión con la Mesa Permanente de Género, coordinada por la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.
5. Reunión con la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.
6. Entrevista con la Procuradora Adjunta de Medio Ambiente.
7. Reunión con el Procurador Adjunto.
8. Participación en reunión ordinaria del Consejo Directivo de la PDDH.
9. Reunión con el Procurador Adjunto de Derechos Civiles.

10. Entrevista con el Procurador Adjunto de la Niñez.
11. Reunión con Delegados y Delegadas Departamentales.
12. Reunión con personal jurídico de distintas unidades.
13. Reunión evaluativa de todas las jornadas, con el Procurador Adjunto y la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia.
14. Verificación del funcionamiento del software y el programa y base de datos de tramitación de denuncias de la PDDH.

Diagnóstico inicial sobre el enfoque de género dentro de la PDDH.

De la lectura de los documentos citados y de las entrevistas realizadas a funcionarios de la PDDH, se logró obtener los siguientes hallazgos preliminares –sujetos a validación posterior– en relación con el nivel de cultura general de la PDDH respecto del tema de género, con el fin de buscar una línea de base para la elaboración del Manual de Calificación de Derechos Humanos y Hechos Violatorios en contra de las Mujeres en el Quehacer Institucional de la PDDH.

- ✦ La existencia de una Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Mujeres dentro de la estructura de la PDDH no garantiza en sí misma, la existencia de una cultura institucional de género idónea que logre permear en todos los estratos de la Procuraduría. De hecho, no la hay, razón por la cual esa Procuraduría Adjunta se ha avocado a diseñar una política institucional de equidad de género que se encuentra en proceso de implementación, ya fue validada y será implementada oportunamente.
- ✦ Desde los orígenes del funcionamiento de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, sus logros han tenidos altos y bajos, o bien, no ha habido una proyección institucional hacia adentro que permita obtener un efecto multiplicador hacia fuera, situación que ha cambiado con el actual Procurador, quien ha delineado y autorizado una propuesta integral de política de género hacia adentro y hacia fuera de la institución.
- ✦ La actual Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Mujeres reconoce esas debilidades del pasado, razón por la cual se ha propuesto impulsar una política institucional sobre bases firmes de sostenibilidad que incluyen la identificación de líneas y planes estratégicos con indicadores de seguimiento y de impacto institucional para luego proyectar incidencia “hacia fuera”.
- ✦ En la actualidad, las principales actividades de la Procuradora Adjunta de la Mujer van dirigidas hacia incidencia pública del tema de género, ya sea como coordinadora de la Mesa Nacional de Género, como desde la divulgación del enfoque de género de la PDDH a partir de la emisión de varios informes temáticos en esa materia; campañas de sensibilización en el ámbito nacional y actividades múltiples de promoción y prevención de los derechos de las mujeres y el combate de la violencia de género.
- ✦ Como aspecto novedoso, la Procuraduría Adjunta ha identificado espacios complementarios para cumplir con su mandato, tanto dentro del marco de las

Naciones Unidas, como ante el Sistema Interamericano. Ejemplo de ello es el informe Especial del Señor Procurador presentado al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW, o la participación en audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- Si embargo, hacia adentro de la institución, se identifican debilidades debido a la ausencia de una política institucional en materia de género que está en proceso de ser resuelta y que pudiera lograr la construcción de una “cultura institucional de género” que debe ser la base de un cambio cualitativo para lograr mejor atención y resolución de casos a favor de los derechos humanos de las mujeres.
- Entre esas debilidades están las siguientes: Si bien las Procuradurías Adjuntas se involucran de manera directa en el conocimiento y resolución de algunas denuncias individuales concretas, no lo hacen en relación con la totalidad de ellas, siendo que la tramitación de la mayoría de los casos siguen un procedimiento común general, que inicia con el levantamiento de las denuncias, su respectiva calificación de derechos violados, pasando por la investigación y elaboración de los informes específicos, hasta la firma de la resolución por parte del titular de la PDDH. En palabras del Procurador Oscar Luna, la mayoría de las resoluciones no necesariamente llevan el enfoque temático propio de cada Procuraduría Adjunta porque los profesionales de la Unidad de Procuración no están agrupados por materia temática, sino que son resolutores generales, lo cual invisibiliza incidencia puntual sobre el aspecto de género o de otra naturaleza que debiera representar un “plus” en el mensaje que se debe enviar a las instituciones del Estado para generar cambios de prácticas con mayor profundidad.
- Todos los funcionarios de la PDDH entrevistados acusan poca o nula capacitación en materia de derechos de las mujeres y enfoque de género. Todos y todas reconocen la importancia del tema y ven con buena actitud las políticas y actividades de cambio que se implementan, en cuenta la elaboración del Manual de Calificación con ese nuevo enfoque.
- No está claro todavía si es viable reestructurar el método de trabajo para que las Procuradurías Adjuntas en general, y la de Mujeres en particular, se involucren de manera más directa en el conocimiento y resolución de casos si se llega a implementar una adecuada estandarización y especialización de criterios de calificación temática. Ello no tiene que ver tanto con falta de voluntad, sino en cuanto a limitación de recursos humanos de las respectivas Procuradurías Adjuntas como recargo a sus ya copadas agendas de trabajo.
- Hasta el momento no se percibe un ambiente de resistencia institucional o sectorial para incluir el enfoque de género como eje transversal en el tratamiento y resolución de casos individuales, aún cuando se observaron algunos niveles de excepticismo, pero no por negativismo, sino porque no quieren que el proceso se quede en expectativas inalcanzables. Por el contrario, están deseosos de que se haga el abordaje, pero en especial, quieren ser sensibilizados y capacitados en ese ámbito que, para algunos, es totalmente novedoso.

Además de esos hallazgos específicos en el tema de enfoque de género, hay otras dificultades o limitaciones estructurales e institucionales. Entre las principales están las siguientes:

- ✧ A pesar de que la PDDH ha venido haciendo un esfuerzo importante por “desjudicializar” la tramitación de denuncias individuales, se mantienen resabios que dificultan una visión más integral u holística en los enfoques que deben darse a los casos y a las recomendaciones que se emiten.
- ✧ El personal de la PDDH que recibe denuncias, investiga y elabora los informes finales, son prácticamente abogados en su totalidad. Esta situación se debe a un sesgo y una falta de claridad en la amplia dimensión que debe tener el mandato de la PDDH, el cual no es entendido por otras instituciones del Estado y, particularmente por el Tribunal de Cuentas, el cual eliminó una plaza de un profesional en psicología en la Unidad de Denuncias por considerar que en ese despacho solo se requieren profesionales en derecho.
- ✧ El tema de derechos humanos, y particularmente el de género, no es en absoluto patrimonio de profesionales en derecho; por el contrario, se requiere de un enfoque interdisciplinario para lograr una verdadera comprensión del estado del arte en el tema de los derechos de la mujer y el enfoque de género donde la psicología social, la sociología y profesionales en materia de trabajo social, tienen otras herramientas e insumos que no están disponibles dentro de la PDDH para complementar el enfoque jurídico.
- ✧ La PDDH como agente de primer contacto con las víctimas de violaciones de derechos humanos, se manifiesta a través de su ventanilla de información y de denuncias. En esa unidad, no hay trabajadores sociales, psicólogos u otro personal que debiera brindar atención a mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos que llegan en situación de crisis. Si bien muchas de las denuncias que se presentan podrían ser rechazadas *ad portas* porque al inicio no hay indicios de responsabilidad estatal, especialmente en casos de violencia de género, ello no descalifica esos casos del interés de la PDDH por identificar patrones de violación del Estado por omisión en prevenir y combatir este tipo de violencia cometida directamente por particulares.
- ✧ La PDDH no tiene capacidad de brindar “atención” y “asistencia” a víctimas mujeres de violaciones de derechos humanos porque no tiene una oficina de victimología. A lo sumo, facilita “orientación” para que las personas puedan recurrir a otras instancias en busca de apoyo y atención.
- ✧ El manual de tipologías que utiliza actualmente la PDDH es una herramienta útil para todas las unidades que intervienen en el conocimiento de un caso, pero debe ser de apoyo fundamental para la calificación de primer nivel que debe realizar la Unidad de Denuncias, ya que si no se realiza una adecuada clasificación de hechos y derechos violados, se crea una cifra oculta de casos de mujeres y de enfoque de género, o de otros enfoques igualmente necesarios como ambiental, desarrollo y otras temáticas sociales.
- ✧ No se realiza una alimentación adecuada de las estadísticas de casos de violación de derechos de las mujeres y de enfoque de género, ya que la saturación de denuncias y el

poco personal que atiende la Unidad de Denuncias (4 funcionarios), además de su poca rotación y estímulos, genera inercia y disminuye la creatividad natural que debe existir para el ejercicio de calificación y clasificación de denuncias.

- ✦ El manual de calificación en uso, debe ser revisado y actualizado por todas las unidades y Procuradurías Adjuntas, ya que se han identificado deficiencias, confusiones y lagunas que deben ser suplidas para mejorar los espacios de respuesta institucional.
- ✦ Una nueva tipología o calificación de denuncias tiene riesgos, como una eventual necesidad de requerir más servicios e información especializada de las Procuradurías Adjuntas y, en particular, la de la Mujer. Ello por cuanto se van a evidenciar más casos de violaciones de derechos de las mujeres.
- ✦ Está claro que las Procuradurías Adjuntas no realizan tareas resolutorias, sino que elaboran criterios y directrices que deben ser tomadas en consideración por las unidades de procuración, de análisis y por las oficinas departamentales y locales. Sin embargo, al no existir una especialización temática en el personal resolutor, los informes que elaboran carecen muchas veces de enfoque de género o de otros enfoques que deben ser necesarios para ordenar recomendaciones más oportunas en casos concretos con enfoque general (*erga omnes*). Por ello, una propuesta inicial es que los funcionarios de procuración y todos los que elaboren resoluciones, deban ser evaluados para reconfigurar equipos especializados que resuelvan en atención a ejes temáticos.
- ✦ Sin embargo, el enfoque de género no debe ser tratado como una área especializada solo para un grupo de expertos en el tema. Uno de los principales retos pendientes es que los derechos de las mujeres sean tratados de manera transversal, lo cual requiere de un esfuerzo mayor porque ello solo se puede lograr si hay una cultura de género donde de manera sostenida se capacite y sensibilice en ese enfoque.
- ✦ Si bien las Procuradurías Adjuntas no son unidades resolutorias, sino que se avocan a tener más incidencia en casos e informes generales temáticos, es lo cierto que no existe práctica, costumbre ni experiencia de debatir y resolver casos emblemáticos entre ellas mismas cuando haya correlación de intereses y temas. Si en ciertos casos algunas Procuradurías han compartido ciertos informes, ha sido más por razones accidentales o por afinidad circunstancial, no por práctica.
- ✦ La PDDH debiera generar una propuesta de mayor diálogo e interrelación para que las Procuradurías Adjuntas asuman más compromiso de trabajo en equipo a partir de una agenda común de discusión de casos emblemáticos que requieran de sinergias complementarias para mejorar la calidad de los informes y de la certeza e incidencia que deben tener sus recomendaciones.
- ✦ El manual de calificación de denuncias con enfoque de género que se llegue a elaborar tendrá un impacto institucional muy limitado si no va acompañado de una estrategia paralela de planeamiento estratégico que incluya recursos materiales y humanos, pero sobre todo de voluntad de generar espacios de debate y de sinergias temáticas dentro de actividades de discusión y análisis periódicos para medir impacto.

TIPOLOGIA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Presupuestos:

1. Sensibilización sobre la importancia de un enfoque de género como política institucional de la PDDH y la más amplia cobertura de derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.
2. Capacitación y actualización sobre derechos de las mujeres, enfoque de género y derechos de otros grupos en situación de vulnerabilidad.
3. Capacidad de sistematización y análisis de problemáticas de las violaciones de derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad en el contexto salvadoreño.
4. Fortalecimiento de sinergias entre las distintas Procuradurías Adjuntas para la resolución de casos con enfoque más holístico e integral.
5. Compromiso de las Procuradurías Adjuntas para ajustar métodos y protocolos de trabajo colectivo con una agenda periódica para tratar temas de manera integrada.
6. Fortalecer la estrategia de investigación y resolución de casos de violaciones de derechos humanos desde la emisión de resoluciones y recomendaciones que trasciendan del caso concreto para que tengan mayor incidencia de interés público para revisar y reformular políticas públicas, planes y programas sobre la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad.

El nuevo manual de calificación de violaciones de derechos humanos

Metodología de calificación propuesta

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos requiere de un instrumento que le permita sistematizar de mejor manera las quejas que investiga. La misma PDDH ha reconocido esta carencia al haber realizado recientemente una nueva tipología de calificaciones de violaciones de derechos humanos, que se encuentra en proceso de revisión y validación (“Tipología de Derechos Protegidos y Hechos Violatorios”).

No obstante, esa tipología carece de enfoques transversales sobre temáticas generales y, de manera especial, de una metodología que permita acentuar y proyectar una cultura de enfoque de género hacia adentro de la institución y hacia la sociedad en general, así como de una mayor profundización respecto de enfoque de otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La reformulación de un manual de tipologías de denuncias en la materia presupone definiciones en dos órdenes estrechamente vinculados:

1. *Fáctico*: Si la clasificación de las quejas debe regirse por un listado de hechos predeterminados que facilite la identificación de derechos violados.
2. *Valorativo*. Implica definir si el referente del manual serán los derechos humanos o la legislación ordinaria, situación que cobra especial relevancia cuando el alcance de los primeros trasciende de esa normativa e involucra tratados internacionales vigentes en el país.

3. *Lógico*. Exige definir un criterio consistente para identificar las propias violaciones. Es preciso decidir si los hechos violatorios seguirán siendo el punto de partida o si el criterio para identificar las violaciones debe basarse en los derechos, para después encuadrar en éstos las diversas conductas violatorias que se dan en la realidad.
4. *Estratégico*. La inclusión de enfoques transversales para tener mayor incidencia en políticas públicas, planes y programas que permitan resolver situaciones generales y sistemáticas, en particular en relación con temas de derechos de las mujeres y otros grupos en situación de exclusión y discriminación.

Cabe señalar que un enfoque “desde los derechos” como el que utiliza la PDDH, permite identificar qué derechos humanos violan las autoridades con cada conducta violatoria, sin necesidad de desarrollar un catálogo interminable de supuestos en los que se puede materializar dicha violación.

Las conductas que se enmarcan dentro de un hecho violatorio pueden ser casi infinitas. Así, la solución radica en la necesidad de ser más precisos en la descripción de las conductas para la adopción de criterios que faciliten la reconducción hacia los derechos violados.

Si se logra identificar una metodología que combine hechos y derechos violados se puede obtener una radiografía más precisa de la situación. Un acto específico de corrupción, por ejemplo, puede implicar violaciones a los derechos de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, entre otros. De igual manera, una actuación negligente puede afectar el derecho al trabajo y a la salud. Este criterio permitiría identificar los hechos específicos de cada caso en la integración del expediente de queja correspondiente.

Un enfoque que combine hechos y derechos violados permitiría, además, un análisis mucho más completo mediante:

1. El análisis transversal de las afectaciones a los derechos de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, tales como niñas, niños y adolescentes, migrantes, mujeres, indígenas, personas privadas de libertad, etc. De esta forma se indicaría, por ejemplo, que se trata de una violación a los derechos de las mujeres, pero se haría “el cruce” con el derecho implicado en cada caso para poder distinguir si se trata de una violación a la integridad personal o a la libertad de expresión o a la no discriminación.
2. La identificación de conductas prohibidas en forma específica por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), tales como la tortura, el genocidio, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. En estos casos siempre es conveniente enmarcar los derechos violados dentro de los conceptos adoptados por la comunidad internacional. Al presentar la información sobre los derechos cuya violación por parte de una autoridad haya sido acreditada, se señalarían, por un lado, las conductas violatorias ya identificadas por el DIDH y los derechos que con ellas se vieron afectados y, por otro lado, se haría una síntesis de las conductas no delimitadas de manera específica y se señalarían los derechos humanos violados por ellas.

Esta estrategia permitiría precisar, casuísticamente, los derechos humanos que resultan violentados para las víctimas directas y las indirectas.

Asimismo, este procedimiento habrá de facilitar la determinación de la reparación del daño, ya que ésta depende funcionalmente de los derechos que hayan sido violados a cada una de las víctimas. De la misma forma se permite establecer la interdependencia entre los derechos que resultan violados por un mismo hecho o un conjunto de hechos.

Este método permite obtener lo siguiente:

1. Catálogo de derechos humanos generales e identificación provisional de los hechos dentro del derecho humano transgredido.
2. Investigación y determinación de los hechos (verificación fáctica).
3. Inclusión de los hechos en el marco de los derechos humanos.
4. Desarrollar una línea de “enfoque” temática y transversal que permita integrar los hechos y las violaciones hacia propuestas de reparaciones más emblemáticas y generales para darle efecto *erga omnes*.

Para identificar el universo de los derechos humanos resulta indudablemente valioso contar con un sistema de fuentes organizado por temas, a la manera de un catálogo que remita a los instrumentos internacionales, a las sentencias y resoluciones internacionales, a las recomendaciones de organismos internacionales, a las observaciones generales, las resoluciones declarativas de organismos internacionales, así como a las reservas y declaraciones interpretativas de los Estados. También debería incluirse en este universo al propio derecho interno de los Estados, en tanto sea más protector de los humanos a partir del principio de interpretación *pro homine* o *pro persona humana*.

La adopción de un enfoque basado en derechos, previstos en un sistema de fuentes propio de los derechos humanos tendría, entre otros, los siguientes beneficios:

1. Le otorgaría consistencia y continuidad a los criterios de la PDDH sobre la forma en que los derechos humanos son violados y sobre la manera de reparar su violación. De este modo se evitaría que la PDDH de la impresión de actuar de manera arbitraria al calificar de diferente manera hechos similares.
2. Permitirá que las autoridades y la opinión pública adquieran conciencia sobre los derechos violados en El Salvador a partir de las acciones y omisiones atribuibles

a cada autoridad, contribuyendo con ello a robustecer la cultura de los derechos humanos.

3. Permitiría apreciar las distintas formas en que la autoridad viola un derecho, a fin de estar en mejores condiciones para evitar su repetición.
4. Serviría para valorar la forma en que las violaciones inciden de manera diferenciada en hombres y mujeres, en grupos en situación de vulnerabilidad, en distintas zonas geográficas, en zonas urbanas y rurales, entre otras posibilidades.
5. Contribuiría con ello a una mejor rendición de cuentas de la PDDH.

Si la PDDH mantiene criterios consistentes y verificables en sus observaciones, planteamientos y recomendaciones a partir de una adecuada sistematización de las quejas que recibe, podrían establecerse precedentes que, a manera de jurisprudencia, servirían de pauta no sólo a la PDDH, sino a todo el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos e inclusive a los órganos jurisdiccionales.

Aspectos generales del manual

Método y principios de interpretación del DIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reunido los principios más protectores de interpretación de las normas de derechos humanos; en particular, el principio pro persona humana según el cual debe aplicarse siempre la norma que más favorezca a la persona humana independientemente de su jerarquía; principio que se encuentra claramente establecido en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)¹. Si bien el desarrollo de los principios interpretativos tiene su origen en el diseño de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no debe soslayarse la enorme contribución de la jurisprudencia de la Corte IDH para ampliar los márgenes establecidos por la Convención y lograr con ello una mayor protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

De forma análoga a la actuación de la Corte IDH, la PDDH está en posibilidad de aplicar principios interpretativos de normas de derechos humanos a fin de brindar la más amplia protección a los quejosos que se acercan a ella. Aun cuando existen distintos métodos de interpretación del derecho, sería congruente con un organismo de protección de los derechos humanos aplicar aquéllos que son propios de ese tipo de normas, específicamente aquellos que ya han sido probados como idóneos para lograr el nivel más alto posible de protección. En resumen, nos referimos a una interpretación sistemática, integral, *pro homine* (o *pro persona*) y dinámica, principalmente.

1 El artículo 29 de la CADH establece que "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno; y d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza."

La postura aquí sostenida se fortalece al recordar el contenido del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este precepto establece que las normas de los tratados no pueden interpretarse de manera aislada sino como parte del sistema dentro del cual se inscriben,² en este caso el sistema de derechos humanos reconocido por el orden jurídico salvadoreño. De ahí que la PDDH tenga que interpretar las normas constitucionales y la legislación ordinaria que contienen o regulan derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales en la materia, de tal forma que todo el sistema de derechos humanos guarde armonía. En efecto, aún cuando la Constitución contenga buena parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y la legislación ordinaria los desarrolle o incluso amplíe, el Derecho de los Derechos Humanos suele ofrecer un ámbito de protección más amplio que el contenido establecido en el derecho interno. Sin embargo, cuando se presente el caso contrario el mayor desarrollo en el derecho interno habrá de nutrir al DIDH.

De acuerdo con lo anterior, en aquellos casos donde la norma nacional prevea una mayor protección que la garantizada por el DIDH, la PDDH podrá utilizar los principios de interpretación de normas de derechos humanos a los que hemos hecho referencia para extraer de su contenido la mayor protección posible. La PDDH podrá insertar la norma nacional dentro de un sistema de derechos humanos más amplio que reconozca al DIDH.

Lo que no es deseable que suceda, es que se subordine el alcance del DIDH al derecho nacional. Esta forma de buscar congruencia tiene un costo muy alto: la disminución del alcance y el contenido de los derechos reconocidos en instrumentos internacionales que forman parte del orden jurídico salvadoreño.

De conformidad con lo anterior, los principios que rigen la interpretación de las normas de derechos humanos son, principalmente, los siguientes:

1. Sistemático. La interpretación de normas de derechos humanos se basa principalmente en el reconocimiento de los derechos humanos como un sistema donde todas sus fuentes se interpretan recíprocamente. Esta visión sistemática de los derechos humanos permite no sólo integrar el derecho nacional e internacional sino también utilizar resoluciones de otros países a fin de informar de mejor manera un caso específico.

Cabe agregar que la Corte IDH ha resuelto que este sistema de derechos humanos a nivel internacional puede identificarse como el *corpus juris* del DIDH, el cual “está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos

2 Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “[...] 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado, b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. [...]”.

jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”³. De esta forma la Corte IDH no ha limitado su interpretación a las normas del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos sino que ha reconocido y utilizado tratados ratificados por los países que forman parte del Sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, a fin de lograr la interpretación más protectora posible. Asimismo, la Corte IDH no limita su alcance interpretativo a normas obligatorias sino que aprovecha las ventajas de declaraciones y resoluciones no judiciales, como las observaciones generales de los órganos de tratados de Naciones Unidas conocidas como normas de *soft law* o derecho emergente.

2. Integralidad. Una consecuencia directa de la *sistematicidad* de los derechos humanos es su integralidad. Todos los derechos se interrelacionan entre sí, de tal forma que al considerar la interpretación de una norma de derechos humanos ésta no puede analizarse de manera aislada sino mediante el reconocimiento de los vínculos que tiene con todos los derechos para verificar, por ejemplo, si una determinada interpretación no afecta el alcance protector de otro derecho.
3. *Principio Pro homine o pro persona humana*. Dado que las normas de derechos humanos están creadas para proteger los derechos humanos “no puede sino concluirse que la interpretación debe ser siempre a favor del individuo. En este sentido, la Corte IDH estableció que “el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una alteración del sistema”.⁴ La interpretación *pro homine* es, entonces, el norte que debe seguir todo funcionario vinculado con la promoción y protección de los derechos humanos, ya sea en el ámbito administrativo, político o judicial.
4. Interpretación evolutiva. La Corte IDH reconoce que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”.⁵ Las normas que consagran derechos humanos deben interpretarse de acuerdo con las necesidades y condiciones que estén presentes al momento de realizar la interpretación, de tal modo que las normas no se vean paralizadas o pierdan sentido con el paso del tiempo. En otras palabras, corresponde a los operadores del derecho de los derechos humanos promover la evolución de los derechos humanos mediante su interpretación y correlación.

Estos principios se refieren directamente a normas de derechos humanos (vinculantes o no) y la referencia a los principios generales del derecho es un presupuesto básico para realizar cualquier tarea de interpretación.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, Serie A No. 16, párrafo 115.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Viviana Gallardo y otros, N° G 101/81, Resolución del 13 de noviembre de 1981, párrafo 16.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular..., op. cit., párrafo 114.

Adicionalmente, es conveniente considerar dos cuestiones de fundamental importancia, no tanto para la interpretación de los derechos humanos, sino para su aplicación: los principios de igualdad, equidad y de proporcionalidad.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha agregado que para ser proporcional una medida debe restringirse a lo que estrictamente requiera una situación dada, por lo que habrá de analizarse siempre caso por caso.⁶ De extraordinaria importancia en esta materia son los *Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos*, elaborados por un grupo de expertos a petición de la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.⁷ Este documento establece los criterios que se consideran obligatorios para los Estados de acuerdo al estado actual del DIDH, entre ellos figuran los siguientes:

2. El alcance de las limitaciones mencionadas en el Pacto no se interpretará de manera que pueda menoscabar la esencia del derecho de que se trate. [...]
5. Todas las limitaciones a un derecho reconocido por el Pacto serán establecidas por la ley [...].
8. Podrá impugnarse toda limitación impuesta y recurrirse contra su aplicación abusiva [...].
10. Siempre que, conforme a las disposiciones del Pacto, se exija que una limitación sea “necesaria” [...].

Observaciones generales

La clasificación de los derechos humanos en generaciones tiene un valor didáctico que ha servido para explicar el contexto de su procedencia. Suele hablarse de generaciones para explicar el carácter sucesivo del “nacimiento” de los derechos humanos, pero en un sentido histórico esta secuencia en su creación no es exacta, como se puede apreciar en el caso del derecho a la educación que suele adscribirse a la segunda generación a pesar de que éste ha sido reivindicado desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio de 1793.

Tanto en la investigación académica como en la práctica de la comunidad internacional especializada se ha advertido que dicho modelo, al asignar características diferentes a los derechos que agrupa en cada generación, favorece la concepción de grados de jerarquía entre ellos y diferencia su fuerza de exigibilidad. Clasificar o dividir a los derechos humanos en generaciones produce un efecto que menoscaba su universalidad, indivisibilidad e interdependencia.

⁶ Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General 29, Suspensión de obligaciones en Estado de Excepción, HRI/GEN/1/Rev.7, párrafo 215, 2001.

⁷ Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 41º periodo de sesiones, Siracusa, Sicilia, abril y mayo 1984.

La característica de la universalidad hace referencia a que los derechos humanos se pueden predicar de todas las personas, con independencia de su contexto y de la circunstancia temporal, espacial, política o cultural en la que se encuentren. La indivisibilidad, por su parte, pone el énfasis en el fundamento único de los derechos humanos, la dignidad de la persona, por lo que se opone a toda posible jerarquización que pueda impedir el desarrollo integral del ser humano. Finalmente, la interdependencia indica la interrelación entre todos los derechos.

La adopción del modelo generacional utilizada en este manual no es como presupuesto teórico, ni pretende fragmentar los derechos humanos. Únicamente tiene una finalidad organizativa que diluirá cualquier intento de segmentación mediante el enfoque y análisis integral y temático que se utilizará como eje transversal del documento.

Observaciones sobre los sujetos titulares de los derechos y los “enfoques temáticos”

En principio, los titulares de los derechos humanos son todas las personas físicas y por ello en la mayoría de los derechos examinados no hace falta aludir al titular del derecho siguiendo la pauta del artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “persona es toda persona humana”. Sin embargo, en algunos casos sí existe un titular específico o un grupo que es particularmente afectado por la violación de ciertos derechos en razón de su pertenencia (mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas y afrodescendientes, etc), lo que atañe una especial protección o enfoque temático, incluso la utilización e invocación de determinados principios de interpretación como el “interés superior del niño(a), o el derecho a que el Estado adopte todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la educación para las mujeres, o la relación intrínseca entre derechos humanos y derechos colectivos o de grupos (derecho a la integridad cultural de los indígenas).

Estos enfoques tendrán más que una intención clasificatoria, la finalidad de que los funcionarios de la PDDH opten por dictaminar resoluciones atinentes a la prevención y protección de los derechos humanos, no solo de las víctimas concretas, sino a favor de los grupos a los que se afectó en razón de que la violación supone que fue cometida en función de la pertenencia a ese colectivo específico.

Los enfoques temáticos irán dirigidos para que la PDDH pueda proyectar recomendaciones para incidir en mejorar políticas públicas, planes o programas a favor de los grupos más vulnerables y excluidos.

Merece un comentario adicional el tema de los derechos fundamentales referidos a las personas jurídicas o morales porque no se puede restringir las violaciones solamente a personas físicas, a pesar de lo establecido en el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conviene, no obstante, tomar en cuenta la importancia que puede tener la protección de víctimas en su calidad de agentes económicos o sociales constituidos como

personas jurídicas, tales como los accionistas de una sociedad mercantil, los integrantes de una empresa familiar o inclusive en organizaciones de la sociedad civil. A ese respecto, se utiliza como precedente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cantos vs. Argentina, en la que se reseñó lo siguiente:

“[...] si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. No obstante, vale hacer una distinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas por este Tribunal, bajo el marco de la Convención Americana. En este sentido, ya esta Corte ha analizado la posible violación de derechos de sujetos en su calidad de accionistas.”⁸

Adicionalmente, conviene mencionar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en tanto entes colectivos sujetos de derechos.⁹

Observaciones sobre la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes y de particulares

La competencia de la PDDH para conocer de quejas o denuncias por violaciones de derechos humanos de los habitantes depende de un presupuesto necesario (*sine qua non*): que al menos uno de los hechos denunciados haya sido cometido por agentes del Estado en sus funciones y que los órganos naturales encargados de su investigación y reparación no hayan resuelto la respectiva denuncia o petición o haya habido negación u obstaculización de justicia.

Igualmente y de carácter más excepcional, la PDDH puede conocer de quejas de violaciones de derechos humanos cometidas por particulares, incluyendo personas jurídicas que actúan al amparo o con la aquiescencia del Estado, o por omisión del Estado. En esas situaciones se entiende al particular como una suerte de “funcionario de hecho”.

Ejemplos de esos casos son: particulares que ejercen funciones propias del Estado, el cual las delega o las permite por omisión o por falta de control (grupos paramilitares); violencia intrafamiliar sistemática en escenarios en que el Estado no tiene políticas o planes de prevención de la violencia familiar; otorgamiento de permisos o suscripción de contratos con empresas o particulares para la explotación de bienes y servicios de interés público en que se generan violaciones de derechos humanos (otorgamiento de permisos de explotación de recursos en

⁸ Corte IDH, Caso Cantos vs. Argentina, excepciones preliminares, sentencia de 7 de septiembre de 2001, párr. 29.

⁹ Véase lo señalado respecto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

territorios indígenas sin realización de consulta previa), etc.

Todos esos actos imputables al Estado conllevan la obligación de respetar, la cual implica la abstención de realizar una conducta determinada, es decir, se trata de una obligación de carácter negativo. Sin embargo, la obligación de garantizar conlleva la realización de un conjunto de conductas, entre ellas las de prevenir, investigar, procesar, sancionar y reparar. Esta doble obligación que debe cumplirse en cada derecho se hace más patente en derechos como el derecho a la vida o a la integridad personal, ya que su violación acarrea necesariamente la búsqueda de los responsables individuales para evitar impunidad. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido parámetros claros de prevención, investigación, procesamiento y reparación.

- La “prevención”, en materia de derechos humanos debe entenderse como una obligación por sí misma y no sólo como una forma de evitar la consumación de una conducta contraria a una obligación, en este caso el respeto a la integridad personal. Por ejemplo, el derecho a la integridad personal conlleva la obligación de prevenir las conductas prohibidas y no sólo la de abstenerse de realizarlas. Dentro de esta obligación se encuentran, entre otras acciones, la tipificación del delito de tortura,¹⁰ la capacitación a los cuerpos de policía y la adopción de medidas de seguridad en los centros de reclusión para proteger a las personas que ahí se encuentren.¹¹
- Investigar, procesar y sancionar. Sobre estas obligaciones internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado lo siguiente:

a la luz de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la integridad personal conforme al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de dicho tratado, existe la obligación estatal de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura.¹²

Si bien es cierto que la PDDH no está obligada a seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sí está obligada a aplicar la norma que más beneficie al quejoso para alcanzar mayor protección. La PDDH no sólo deberá verificar que los agentes del Estado se abstengan de realizar o permitir las conductas que violan el derecho a la integridad

¹⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de enero de 1999, Serie C No. 44, párrafos 84 y 87.

¹¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 273. Ver también la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura artículos 1 y 6.

¹² Ibid., párrafo 345, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vargas Areco vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155, párrafo 79; Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de septiembre de 2005, Serie C No. 132, párrafo 54; y Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo 156.

personal, sino también deberá asegurarse de que aquellos que atenten contra ese derecho sean investigados, juzgados y, en su caso, sentenciados.

- Reparar. En las quejas donde se haya comprobado la violación a los derechos humanos, la PDDH está obligada a solicitar la reparación del daño adecuada en favor de las víctimas (directas e indirectas), así como de los familiares de éstas. Dicha obligación incluye la supervisión de su cumplimiento integral. Adicionalmente, la PDDH tiene facultades para acompañar a las víctimas en la solicitud de medidas de reparación frente a otras autoridades, aun cuando no haya participado de manera directa en la determinación de la violación.

En cuanto a la modalidad de la reparación, ésta dependerá del tipo de daño que se haya causado a la víctima; sin embargo, aquí cabe señalar que el espectro de la reparación del daño en el ámbito de los derechos humanos es mucho más amplio en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que en cualquier otro órgano internacional o nacional de derechos humanos.

Caracterización y fundamentación de los derechos

Si bien en principio podría ser útil una definición general de cada derecho humano que sirva de base para la calificación de violaciones de derechos humanos, los riesgos de establecer parámetros conceptuales subjetivos son particularmente peligrosos para un tipo de manual como el presente.

Es por ello que se propone en este manual seguir una “caracterización” de los derechos humanos, más que una definición de cada uno de ellos. Para esos efectos, se tendrán en consideración los siguientes parámetros:

- a) Para determinar la existencia de una violación a los derechos humanos, el referente obligatorio es la Constitución Política de El Salvador conjuntamente con la normatividad internacional (vinculante y no vinculante) en la materia, y en especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el tratado general de derechos humanos más afín en el ámbito regional. El contenido de cada derecho se define dogmáticamente a la luz de estas normas y de su constante interpretación progresiva por parte de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos.
- b) La intención es que no haya definiciones cerradas para que no se limite el alcance de cada derecho.
- c) Pretender que puede alcanzarse una definición única y exhaustiva de cada derecho

refuerza la asimilación de los derechos humanos a los tipos penales, en el sentido de limitar las violaciones de los primeros a una fórmula determinada. Esto, que tiene razón de ser en el derecho penal, por virtud del principio de legalidad, no debe regir en el ámbito de los derechos humanos, puesto que aquí no está de por medio la responsabilidad individual de los servidores públicos sino la del Estado.

- d) En la caracterización de los derechos, corresponde generar líneas que provoquen análisis e interpretaciones integrales, así como los enfoques y tendencias desde la competencia de la PDDH en términos de hacer recomendaciones más generales.

Debido a que la elaboración de un manual que sirva de guía a los funcionarios de la PDDH para calificar las quejas y los derechos humanos violados en cada caso, parece acertado referirse a los alcances y límites de cada derecho y hacer una caracterización amplia del mismo que lo diferencie de otros.

Resulta esencial que la elaboración de una guía tenga fundamentación en el texto constitucional, en el resto del derecho interno, así como en los acuerdos y tratados internacionales aplicables (los cuales comprenden también a los instrumentos declarativos e interpretativos). Esto no significa que el manual deba convertirse en un compendio de normas.

Por ello, más que una compilación de normas de derechos humanos y de normas ordinarias, debería encontrarse en un manual de este tipo un conjunto de criterios de aplicación de fuentes que cumpla dos funciones fundamentales: a) lograr que prevalezcan aquellas normas vigentes que conceden una mayor protección, y b) desaplicar las normas que contravienen el derecho constitucional o incluso aquellas normas constitucionales que contravienen el DIDH.

Para cada uno de los derechos que se incluyen en el manual se presentan hechos violatorios a título de “Algunas formas de violación”. Asimismo, con la intención de ubicar su fundamentación, el documento transcribe los preceptos constitucionales, normas de derecho interno de carácter secundario y, en algunos casos, las normas de DIDH que se verían vulneradas con el hecho violatorio identificado.

Ante la imposibilidad de enlistar todos los posibles hechos violatorios respecto de cada derecho se alude a “algunas” formas de violación con el fin de que cada vez que se presenten demandas con hechos o situaciones novedosas antes no descritas, las mismas se incluyan con posterioridad en el inventario fáctico de la PDDH.

Análisis de la parte dogmática del manual

El manual de calificaciones parte de una propuesta que contenga elementos que permitan un análisis deductivo desde la vinculación de derechos y los hechos violatorios y opciones de enfoque integral y temático, de modo que sirva como una guía mínima de insumos para los funcionarios de la PDDH.

A pesar de la tendencia de combatir las categorías de derechos humanos en derechos de primera, segunda y tercera generación, es indudable que esa tipología permite hacer una sistematización de derechos que puede ayudar a definir tipologías de derechos, pero que debe generarse un enfoque integral y holístico y no una segmentación de derechos.

En ese sentido la visión integral de los derechos humanos que informa el manual, parte de la doctrina de la universalidad e integralidad de los derechos humanos establecida en la Declaración de Teherán de 1968, reforzada por la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993. Esta declaración señala en su punto 5 que:

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.¹³

En ese entendido, los funcionarios de la PPDH deben abogar por buscar puntos de encuentro interpretativos entre esa visión de universalidad e interdependencia y el relativismo cultural.

No obstante, solo para efectos de sistematización de derechos para su calificación, en este manual se recurre a la utilización de la clásica tipología de derechos humanos en generaciones; no así para valorar su valor exigible o justiciable.

Metodología de uso del Manual

El uso del manual es sencillo porque parte de la base de tres columnas que se basan sobre los siguientes ejes:

¹³ Cf. Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. A/Conf.157/23. Original: Inglés.

DERECHO	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS Y ENFOQUE
----------------	-------------------------------	--

La clasificación de los derechos se basa en la la tipología clásica de generaciones por derechos individuales o de primera generación (civiles y políticos); derechos colectivos o de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) y derechos de tercera generación.

El desarrollo de los hechos calificativos de violaciones de esos derechos humanos (columna del centro), trata de abarcar todas las variables posibles de situaciones que normalmente pueden presentarse en el contexto de las quejas o denuncias que tramita la PDDH, pero con la claridad de que no es una lista cerrada, sino que debe quedar abierta para que vaya siendo ampliada conforme se presenten nuevos escenarios y violaciones no contempladas con anterioridad. Es por ello que un manual de calificaciones de violaciones de derechos humanos nunca podrá ser un producto acabado.

En la columna de la derecha, se elabora un comentario general sobre doctrina, jurisprudencia, enfoque y conexividad con otros derechos violados o que complementan un enfoque más integral. En la medida de lo posible, en esa columna se hacen valoraciones y recomendaciones hacia las formas en que los funcionarios de la PDDH podrían hacer análisis y estrategias que sirvan para la investigación de las quejas, así como para su resolución.

Al finalizar la plantilla de calificación de violaciones de los derechos humanos generales desde las categorías tradicionales, se adicionan derechos y hechos violatorios respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad, iniciando por los derechos de las mujeres y enfoque de género, derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos de las personas adultas mayores, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas y pueblos indígenas, derechos de las personas privadas de libertad, derechos de las personas migrantes, derechos de las personas con orientación sexual diversa y derechos de los consumidores.

Debido a que no es posible repetir muchos de los comentarios comunes a los derechos

humanos que se violan a cada uno de esos grupos en situación de vulnerabilidad, únicamente se hacen observaciones en relación con las especificidades y el enfoque concreto y se hacen las remisiones para que los lectores y lectoras retomen la información previamente desarrollada en las categorías generales de derechos.

Para tener una visión general del catálogo de derechos violados, a continuación se presenta una lista corrida de esos derechos y posteriormente se desarrolla la plantilla con las tres columnas arriba descritas.

DERECHOS DE LA PRIMERA GENERACION (CIVILES Y POLITICOS)

Derechos Civiles:

- Derecho a la vida
- Derecho a la no desaparición forzada de personas
- Derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana
- Derecho a la personalidad jurídica
- Derecho a la identidad y al nombre
- Derecho al domicilio (residencia)
- Derecho a la propia imagen
- Derecho a la privacidad o a la intimidad (regulación de intervenciones telefónicas)
- Derecho al honor o reputación
- Derecho a la documentación personal
- Derecho a la nacionalidad
- Derecho a asilo político
- Derecho a la integridad personal
- Derecho a no ser sometido a tortura física ni psicológica
- Derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes
- Derecho a vivir libre de esclavitud y de servidumbre
- Derecho a la libertad personal
- Prisión por deudas, Prohibición.
- Derecho a libertad de tránsito, circulación y residencia
- Derecho al acceso a la justicia
- Derecho de petición
- Derecho a la protección judicial
- Garantías judiciales
- Derecho a un debido proceso judicial
- Derecho a un debido proceso administrativo
- Derecho a la legalidad
- Principio de irretroactividad de la ley
- Indemnización por error judicial
- Derecho a la verdad
- Protección a la honra y a la dignidad

- Derecho de reunión
- Libertad de asociación
- Libertad de opinión, pensamiento y expresión
- Libertad de conciencia, religión y culto
- Derecho a la propiedad privada
- Derecho a la igualdad y a la no discriminación
- Derecho a la reparación por violación de derechos humanos

Derechos Políticos:

1. Derecho al voto
2. Derecho a ser elegido
3. Derecho a acceder a cargos públicos en condición de igualdad/equidad
4. Derecho a participar en la dirección de asuntos públicos.

Derechos de segunda generaciónn (DESC)

- Derecho a un nivel de vida adecuado (proyecto de vida digna)
- Derecho a la constitución y protección de la familia
- Derecho a la vivienda
- Derecho al trabajo y derechos conexos
- Derecho a la libertad sindical
- Derecho a la seguridad social
- Derecho a la salud
- Derecho a la alimentación
- Derecho a la educación
- Derecho a la cultura y a gozar de los beneficios de la cultura
- Derecho al acceso al agua
- Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico
- Derecho a la propiedad social y colectiva
-

Derechos de tercera generación

- Derecho a la paz
- Derecho al desarrollo y al desarrollo sustentable
- Derecho al patrimonio común de la humanidad
- Derecho al medio ambiente sano
 - Derecho a la protección al medio ambiente
 - Contaminación visual
 - Consulta pública en materia de medio ambiente

DERECHOS DE GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Derechos de las mujeres y enfoque de género

- Derechos de las mujeres y enfoque de género
- Derecho a la vida
- Derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual
- Derecho a la protección de su integridad física y psíquica, prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
- Prohibición de discriminación en razón de género
- Derecho a acción afirmativa
- Derecho a la educación
- Derecho a la salud y tratamientos diferenciados
- Derecho al trabajo sin discriminación
- Derecho a la propiedad y desarrollo sin discriminación
- Derecho a la información
- Derecho al acceso a la justicia diferenciada
- Derecho a la igualdad en el matrimonio y en relaciones familiares
- Derecho a participar en la vida política y pública del país

Derechos de niños, niñas y adolescentes

- Derecho a que haya política de prevención y combate contra la discriminación de personas menores de edad
- Derecho a la supervivencia y al desarrollo
- Derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes
- Derecho a no ser abusado, descuidado o maltratado por las personas responsables de su cuidado personal
- Derecho a la prevención y protección contra todo tipo de explotación sexual comercial y laboral (prostitución ajena, trata y tráfico de personas, turismo sexual, tráfico de órganos, explotación laboral)
- Derecho a medidas de atención, asistencia, recuperación y rehabilitación a víctimas de explotación sexual comercial menores de edad
- Derecho al nombre y a la identidad
- Derecho a la protección de su vida privada
- Derecho a la protección de su imagen
- Derecho a no ser trasladado/a o retenido/a ilícitamente
- Derecho a expresarse libremente sin más límites que los establecidos por la ley
- Derecho a recibir información adecuada y comprensible acorde a su edad
- Derecho a asociarse y a celebrar reuniones pacíficas
- Derecho a recibir dirección y cuidado de los progenitores, salvo cuando sea para la protección de su interés superior
- Derecho a ser adoptado por persona idónea, con las garantías y controles previos y posteriores establecidos por la ley

- Derecho a recibir pensión de alimentos
- Derecho a la salud
- Derecho a recibir cuidados en las diferentes discapacidades
- Derecho a los beneficios de servicios e instalaciones de guarda de niños
- Derecho a la educación, formación y orientación profesionales
- Derecho al descanso, esparcimiento y actividades culturales
- Derecho a protección contra las “peores formas de trabajo infantil”
- Derecho a recibir cuidados especiales en situaciones de excepción
- Derecho a recibir cuidados especiales en situaciones de calamidad o desastres naturales
- Derecho a una administración de justicia diferenciada al régimen de adultos
- Derecho de las personas menores de edad privadas de libertad a estar en lugares separados de los adultos
- Derecho a recibir asistencia legal especializada
- Derecho a participar y estar representados en procesos donde puedan estar afectados
- Derecho a personas menores de edad viviendo con VIH/SIDA a recibir protección especial contra toda privación o vulneración de sus derechos.

Derechos de las personas adultas mayores

- Derecho a que haya política de prevención y combate contra la discriminación de adultos mayores
- Derecho a la protección contra toda forma de abuso y explotación
- Derecho a su autonomía y desarrollo
- Derecho a salud preferente
- Derecho al trabajo sin discriminación
- Derecho a obtener beneficios y prestaciones de seguridad social
- Derecho a participar en las políticas o decisiones del Estado que les afecten.

Derechos de personas con discapacidad

- Derecho a no ser discriminado por condición de discapacidad
- Derecho a un nivel de vida adecuado
- Derecho a prevención y combate de la discriminación por discapacidad
- Derecho de políticas de acción afirmativa
- Derecho a que se remuevan obstáculos físicos y materiales para facilitar su acceso a edificios y lugares públicos.
- Derecho a que se facilite su acceso a servicios de transporte público
- Derecho a optar a cargos públicos
- Derecho a ejercer derechos políticos y cargos públicos
- Derecho a acceso a la justicia diferenciada
- Derecho a una salud diferenciada
- Derecho a una educación diferenciada
- Derecho y acceso al trabajo en condición diferenciada
- Derecho a la seguridad social diferenciada

Derecho de las personas viviendo con VIH/SIDA

- Derecho a la no discriminación
- Derecho a la vida
- Derecho a la integridad física
- Derecho a un trato humano
- Derecho a salud y acceso a medicamentos antirretrovirales adecuados

Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes

- Derecho a que exista una política de prevención y combate contra la discriminación racial
- Derecho a la protección contra toda forma de abuso y explotación
- Derecho al reconocimiento y respeto de su identidad cultural
- Derecho a la propiedad y posesión de territorios indígenas
- Derecho al acceso a la educación diferenciada y diversa
- Derecho al desarrollo conforme a su cosmovisión
- Derecho a la salud diferenciada e integrada con sus sistemas tradicionales
- Derecho al trabajo sin discriminación
- Derecho a la consulta previa
- Derecho a la protección de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios
- Derecho a una justicia diferenciada y reconocimiento de la jurisdicción indígena plena y de la costumbre para resolver sus conflictos internos e interculturales

Derechos de personas privadas de libertad

- Derecho a un proyecto de vida digna
- Derecho a no ser torturada
- Derecho a ser tratada humanamente y con respeto a su integridad física y psíquica
- Derecho a identidad
- Derecho a la documentación
- Derecho a la intimidad
- Derecho a no ser restringido en sus derechos en grado mayor que los señalado por la ley o por su condena
- Derecho a libertad ambulatoria dentro del Centro de detención
- Derecho a separación en razón de edad, sexo, situación jurídica y motivo de la detención
- Derecho a la salud sin discriminación
- Derecho a la educación
- Derecho a acceder a los beneficios de la cultura
- Derecho a mantener relaciones familiares
- Derecho al trabajo

- Derecho al acceso a la justicia y garantías del debido proceso
- Derecho a jurisdicción especial de ejecución de la pena
- Derecho a defensa legal gratuita
- Derecho a evaluaciones oportunas para optar a beneficios penitenciarios
- Derecho a acceder a información personal
- Derecho a visitas conyugales, familiares y de personas allegadas
- Derecho a obtención oportuna de permisos especiales y de salida
- Derecho a la libertad de religión y culto.

Derechos de personas migrantes

- Derecho a ser tratado de manera digna y sin discriminación
- Derecho a no ser sometido a condiciones de detención por causa de su situación jurídica migratoria irregular
- Derecho a no ser discriminado por su condición migratoria
- Derecho a ser protegido contra toda forma de maltrato, abuso o explotación
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación
- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión
- Derecho a mantener relaciones familiares
- Derechos laborales sin discriminación
- Derecho a las libertades sindicales
- Derecho a no imponer restricciones a sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios, salvo las impuestas por ley a todos los habitantes
- Derecho a educación sin discriminación
- Derecho a preservar su idioma, religión, costumbres y tradiciones
- Derecho a la justicia sin discriminación
- Derecho a la notificación consular
- Derecho a asistencia y protección consular
- Derecho de personas salvadoreñas en el exterior
- Derecho de defensa y protección frente a la expulsión

Personas refugiadas y desplazadas

- Derecho al refugio de personas en situación de riesgo por conflictos armados o desplazamientos
- Derecho a la integridad física y psíquica.
- Derecho a regresar libre y voluntariamente a su lugar de origen en condiciones de seguridad
- Derecho de no devolución
- Restitución de bienes confiscados
- Reparación por daños y perjuicios
- Derecho a la rehabilitación
- Derecho a participar en decisiones públicas que le afecten

Derechos de personas con orientación sexual diversa

- Derecho a la no discriminación (homofobia)
- Derecho a la vida (combate a crímenes de odio)
- Derecho de acceso a instituciones y oficinas públicas
- Derecho de petición ante cualquier instancia pública y judicial

Derechos de los consumidores

- Derecho a recibir información adecuada y suficiente
- Derecho a organizarse para la defensa de sus intereses
- Derecho a la protección de sus intereses económicos
- Derecho a que se promueva la competencia leal empresarial
- Derecho a que se combatan los monopolios y oligopolios
- Derecho a que se promuevan modalidades de consumo sustentable
- Derecho de acceso a la justicia
- Derecho al proceso legal administrativo
- Derecho a recibir reparación por daños y perjuicios

**Plantilla de
calificación de
violaciones a
derechos humanos**

PLANTILLA DE CALIFICACION DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Abreviaturas:

CP: Constitución Política de El Salvador

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos

DERECHO	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS Y ENFOQUE
<p>Derecho a la vida y derecho a un proyecto de vida digna</p> <p>CP.</p> <p>ARTICULO 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos...</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida...ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muerte dolosa o culposa en manos de funcionarios del Estado o de particulares actuando bajo el control o con la aquiescencia del Estado • Ejecuciones extralegales o extrajudiciales • Amenazas de muerte • Ausencia de "proyecto de vida digna" de: niños, niñas y adolescentes de la Calle o Viviendo en la Calle; niños, niñas y niños bajo la custodia del Estado y de personas indígenas. (Ver cuadro de grupos en situación de vulnerabilidad). • Muerte de mujeres por su condición de tales; Feminicidio por actos de funcionarios o de 	<p>El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha asegurado, en relación con el derecho a la vida, que "se trata del derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación (Art. 4)."¹ En efecto, el propio PIDCP establece en su artículo 6 que el derecho a la vida es "inherente a la persona humana". Ningún otro derecho dentro del Pacto es calificado como "inherente".</p> <p>A pesar de su carácter de norma <i>ius cogens</i>,² el derecho a la vida admite restricciones importantes, entre ellas, la pena de muerte y el uso de la fuerza. En tanto que en El Salvador se ha abolido la pena de muerte, no se abordará ese tema en este análisis, salvo para los casos a que se refiere el artículo 27 de la Constitución que indica que "sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional", que es una situación totalmente excepcional y que hace que esa norma sea prácticamente inoperante.</p>

¹ Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación general No. 6, El derecho a la vida, 30 de abril de 1982, párrafo 1.

² Artículo 4 del PIDCP y artículo 27 de la CADH.

<p>vencida en juicio con arreglo a las leyes...</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 27.- Sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 4. Derecho a la Vida</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.</p> <p>2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se</p>	<p>particulares y ausencia de políticas públicas para prevenirlos o investigarlos. Ver: Grupos en situación de vulnerabilidad, Derechos de las Mujeres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de adopción de medidas cautelares o provisionales de parte del Estado para prevenir y evitar daños irreparables a la vida e integridad física y psíquica de las personas. Estas medidas podrían haber sido adoptadas por el Estado mismo, o bien como parte del cumplimiento de medidas cautelares o provisionales emitidas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. 	<p>En la redacción del PIDCP y en la CADH se tuvo especial cuidado en no imponer ninguna ideología en cuanto al momento del inicio de las obligaciones que resultan del derecho a la vida.</p> <p>Tratándose del derecho a la vida es necesario que existan obligaciones positivas del Estado en cuanto a la necesidad de sancionar a aquellas personas que priven de la vida a otra. Las obligaciones positivas de los Estados abarcan la investigación, el enjuiciamiento, la probable sanción y la reparación del daño a las víctimas o a sus familiares. Las facultades de la PDDH en este punto son muy amplias aunque poco ejercidas. La PDDH no sólo puede vigilar que la actuación de los agentes del Ministerio Público se realice con la debida diligencia como parte del seguimiento a una recomendación, sino que puede y debe investigar quejas relativas a un homicidio entre particulares que no ha sido investigado apropiadamente por un agente del Ministerio Público o aquellos casos en los cuales la víctima no obtuvo una reparación del daño.</p> <p>Asimismo, el derecho a la vida debe protegerse por ley. La forma más común de hacerlo es mediante la tipificación del delito de homicidio, pero también mediante la incorporación al sistema de normas específicas que controlen el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y militares del país. En el caso de homicidio de mujeres por su condición de tales, la inclusión del delito de feminicidio en el Código Penal, su correcta aplicación e interpretación, así como la investigación objetiva y no revictimizante que deben realizar los órganos que investigan y condenan, son parámetros que deben ser monitoreados y vigilados por la PDDH.</p>
---	--	--

³ Véase el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, OEA, Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, 24º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C No. 160, párrafo 344.

⁴ Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación general No. 6, *op. cit.* 100, párrafo 5.

<p>Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.</p> <p>3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.</p> <p>4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.</p> <p>5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravedad.</p> <p>6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.</p>		<p>En otro orden de ideas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha incluido también dentro del derecho a la vida otras obligaciones de carácter positivo, al establecer que “sería oportuno que los Estados Partes tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias.”⁴</p> <p>La Corte Interamericana ha ampliado esta idea con la incorporación de la doctrina del proyecto de vida digna para niños y niñas viviendo en la calle, para personas menores de edad bajo custodia del Estado y para miembros de comunidades indígenas que han sido excluidos de sus territorios ancestrales (Casos Austraum Villagrán Morales y otros contra Guatemala; Caso del Instituto de Reeducción del Menor “Panchito López” contra Paraguay y Caso de la Comunidad Yakie Axa contra Paraguay, respectivamente).</p> <p>De acuerdo con esa doctrina del “proyecto de vida digna”, el análisis del derecho a la vida desde una visión de derechos humanos no se puede circunscribir a una visión penal, de manera que no solo se sancione la conducta que cause la muerte de otra persona, sino la invisibilización de estos grupos vulnerables en términos de las obligaciones que debe asumir el Estado para proveerles de opciones de vida digna por medio de acciones afirmativas y servicios públicos básicos.</p>
--	--	---

		<p>Por otra parte, un área de preocupación especial es si resulta necesario incluir en el derecho a la vida el tema del aborto como una forma de violación del derecho a la vida. Ningún tratado internacional de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño, define ni el momento en el que comienza la vida ni el momento en que comienza la protección del derecho a la vida. Inclusive la CADH, al incluir en su artículo 4 la frase “en general, desde el momento de la concepción”, está permitiendo que los Estados regulen las condiciones conforme a las cuales se podrá realizar un aborto, sin sancionarlo como violación a los derechos humanos, aún cuando también hay situaciones importantes de retroceso en algunos países que incluso han penalizado el aborto por razones médicas.</p> <p>El debate sobre ese tema en los casos concretos, de penderá de lo que llegue a resolver en su momento la PDDH, incluyendo si se reconoce o no personalidad jurídica al feto.</p> <p>En relación con la pena de muerte, la PDDH debe asumir un papel más activo en la importancia de derogar del todo esa pena capital en el país, pero además, para que no se vuelva a instaurar en el futuro, razón por la cual corresponde hacer una campaña de ratificación de los tratados de Naciones Unidas y de la OEA en materia de erradicación de la pena de muerte.</p> <p>En materia de riesgo de afectación del derecho a la vida en escenarios de criminalidad, el Estado debe definir planes y programas de protección a la vida e integridad de las víctimas de delitos, sus familiares y testigos.</p>
--	--	---

⁵ European Court of Human Rights, *Vo vs. France*, Demanda 53924/00, Sentencia del 8 de julio de 2004.

<p>Derecho a la no desaparición Forzada de Personas</p> <p>ARTICULO 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, ..., ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes;... Toda persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier autoridad o individuo restrinja ilegalmente su libertad.</p> <p>Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.</p> <p>Artículo II</p> <p>Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desaparición forzada de personas por agentes del Estado o particulares actuando al amparo o con la aquiescencia del Estado • Ineficacia del recurso de hábeas corpus para ubicar a la persona desaparecida • Negativa a investigar la desaparición • Negativa al acceso a la información sobre las condiciones de detención o aprehensión que derivaron en la posterior desaparición • Obstáculos a la investigación de la desaparición • Incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de las Hermanas Serrano en relación con la creación de un banco de sangre para facilitar la identificación de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante el conflicto armado interno. 	<p>La desaparición forzada de personas es todo acto por el cual una o varias personas son detenidas y privadas de libertad de forma arbitraria e ilegal por el Estado o sus agentes públicos o por particulares que actúan con su consentimiento o apoyo, quienes posteriormente se niegan a proporcionar información sobre el paradero de la víctima, no procediendo ni a la investigación de oficio ni a la tramitación de los recursos presentados por los familiares.</p> <p>La desaparición forzada de personas involucra una concatenación de violaciones a varios derechos humanos que muchas veces inicia con una detención arbitraria, práctica de torturas y, finalmente, una ejecución extrajudicial que culmina con la desaparición de los restos de la persona.</p> <p>La desaparición en sí misma tiene efectos permanentes hasta tanto no aparezca la persona con vida –si no ha sido ejecutada- o los restos de la víctima; por ello se le reconoce como un delito de carácter continuado.</p> <p>Es probable que la falsa creencia de que si no aparece “la prueba del delito”, no hay delito, pudo haber favorecido la práctica de las desapariciones forzadas de las personas en épocas de la dictadura y la represión por parte de los cuerpos de seguridad estatal. Dichosamente, la jurisprudencia internacional reiterada ha sido categórica al condenar a Estados por violación de derechos humanos cuando por medio de sus agentes, o de particulares actuando con el consentimiento del Estado, solía detenerse a personas sin orden judicial sin que hubiera luego noticia de su paradero. En esos casos, la prueba de la detención y el desconocimiento del paradero a partir de ese momento pueden ser evidencia suficiente para condenar internacionalmente por ese delito.</p> <p>Como se indicó, es común que las prácticas de desapariciones forzadas ocurran a partir de una detención arbitraria. En esos casos, toda persona arrestada o privada de libertad tiene consagrados una serie de derechos, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derecho a que las autoridades se identifiquen en el momento de la aprehensión o arresto. - derecho a ser informada, en el momento del arresto, de los motivos del mismo. - derecho a ser llevada inmediatamente ante una autoridad judicial competente.
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - derecho a un trato digno y a no ser sometido a torturas o tratos crueles. - derecho a permanecer en centros de detención oficiales destinados a la reclusión de personas. - derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida, a la brevedad posible, sobre la legalidad de su arresto y ordene su libertad si la privación de la misma es ilegal. - derecho a acceder a un abogado o representante legal. - derecho a que la familia de la persona detenida o quien ésta identifique sea informada sin demora del arresto y del lugar donde se encuentra el detenido.
<p>Características de la desaparición forzada:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos. • Es un delito continuado y permanente mientras no se establezca el paradero o destino de la víctima. • No existe ninguna circunstancia que justifique el delito de desaparición forzada, del mismo modo que no pueden invocarse circunstancias eximentes de la responsabilidad, tales como la obediencia debida a órdenes superiores de autoridad civil o militar. • Es un delito que no prescribe (imprescriptible) y que no permite indulto o amnistía para sus ejecutores • Es un crimen de lesa humanidad cuando se comete de forma masiva o sistemática
<p>La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada como :</p> <p>...la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.⁶</p> <p>Inclusive, la desaparición forzada ha sido tipificada como un crimen de lesa humanidad en el artículo 7.1.i) del Estatuto de la Corte Penal Internacional. No cabe duda que, al determinar los derechos violados, es conveniente enmarcarlos dentro de una categoría que ha sido reconocida por el Derecho Penal Internacional.</p> <p>Dentro del contexto del conflicto armado salvadoreño, la desaparición forzada de</p>

<p>Derecho a la seguridad personal y seguridad ciudadana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de políticas criminales adecuadas para combatir la delincuencia en todas sus modalidades • Inseguridad ciudadana • Afectación a la integridad física y psíquica de las personas ante la falta de seguridad ciudadana 	<p>La seguridad personal tiene relación con la obligación del Estado de garantizar la vida e integridad de las personas, no solo de las afectaciones de funcionarios públicos, sino también de actos de particulares, en especial, de cualquier modalidad de delincuencia. Desde la función de la PDDH, corresponde analizar e incidir en las políticas de seguridad ciudadana y su eficacia para que todos los habitantes tengan seguridad personal en su ámbito personal y familiar. Generalmente, el Estado responde a la criminalidad de manera reactiva y sesgada y es incapaz de responder con eficacia frente a las verdaderas causas del problema que normalmente. Por el contrario, la lucha contra la criminalidad ha significado siempre una puerta abierta a la trasgresión y desconocimiento de derechos fundamentales de aquellos sectores sociales más deprimidos económicamente sobre los cuales se suele incidir en este problema.</p> <p>La ineficacia, la corrupción y especialmente, la extralimitación de funciones por parte de las instituciones armadas encargadas de preservar el orden público, además de ser generadoras de una forma de violencia contra la población, produce un sentimiento generalizado de temor y desconfianza frente a ellas.</p> <p>En ese contexto, las condiciones de seguridad y la definición del rol que las instituciones del Estado y la sociedad tienen, también forman parte de este proceso, porque la solución a este problema hoy se asume como parte de las condiciones indispensables de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos de sus ciudadanos.</p> <p>El conjunto de hechos y delitos cotidianos que ocurren en viviendas, calles y vecindarios del entorno ciudadano es lo que comúnmente se le denomina como “inseguridad ciudadana”. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años a causa de factores de orden estructural y coyuntural, cuyas secuelas sociales más comunes son el desempleo, la iniquidad y falta de solidaridad social. Los factores coyunturales se expresan también en la existencia de poderosas mafias ligadas al narcotráfico, cambios en los valores sociales y en ciertas medidas de los gobiernos de turno.</p>
--	--	--

⁶ La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas todavía no ha sido firmada ni ratificada por El Salvador.

		<p>Por ello, es importante destacar la necesidad de la incidencia de la PDDH en la formulación de una política de seguridad pública y ayudar a definir los elementos constitutivos de esta. Para asumir un enfoque esta tal frente a la inseguridad, el nuevo paradigma, es el de la <i>visión integral de seguridad para los habitantes</i>, el cual debe contribuir al fortalecimiento de un Estado democrático defensor de los derechos humanos y tener una sociedad civil fuerte, cuyo eje de su fortaleza esté precisamente en la defensa del conjunto de los derechos de todos sus habitantes y no en su vulneración.</p> <p>La seguridad como un derecho humano</p> <p>La seguridad personal, para su cabal realización, exige el cumplimiento de otros derechos humanos relacionados con ella, como la integridad física y la vida en sentido estricto, pero también, y desde un punto de vista mucho más integral e indivisible, la realización de todos los derechos humanos sin distinción, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. La seguridad en general, es el entorno que requiere el ser humano para ejercer su proyecto de vida y alcanzar el punto máximo de su derecho humano al desarrollo. Esto quiere decir que incluye también el ambiente social, la estabilidad en el empleo o de una fuente de ingresos, la certeza de poder disfrutar en el presente y en el futuro inmediato los bienes individuales, familiares y colectivos, así como la confianza que se tiene en el funcionamiento de un orden social, jurídico y político justo que lo garantiza.</p> <p>En una sociedad democrática el concepto y el alcance de la palabra “seguridad” están vinculados, en primer lugar al derecho humano a la libertad y seguridad de cada persona; en segundo, a la estabilidad y correcto funcionamiento de las instituciones públicas que realizan el estado democrático de derecho y por último en la seguridad y estabilidad del derecho que vincula y organiza las relaciones entre las personas y entre estas y los bienes. Por lo tanto, la seguridad no es la orientación sustantiva del orden público, sino una cualidad de éste. En la medida que las personas realizan sus derechos fundamentales, las instituciones aseguran esos derechos y los particulares se someten en sus relaciones a la ley, la seguridad surge como la consecuencia del orden democrático de derecho, como una variable dependiente del mismo.</p>
--	--	--

<p>Derecho a la personalidad jurídica</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica</p> <p>Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación formal o material ilegal o arbitraria para que cualquier persona humana pueda ejercer sus derechos y deberes en el territorio nacional. • Falta de cobertura nacional para expedir documentos registrales de nacimiento e identificación de personas nacidas en el territorio nacional. • Destrucción o pérdida de registros e información de personas. • Destrucción de registros de personas presuntamente desaparecidas. 	<p>Este derecho complementa la garantía inherente a los derechos de la persona humana de ser registrada oficialmente para poder gozar de derechos como la nacionalidad, acceso a la educación y a los servicios públicos que presta el Estado a sus ciudadanos. Desde el punto de vista de los derechos políticos, es básico contar con la expedición de documentos registrales para ejercer el derecho al voto y otros derechos colaterales.</p> <p>La situación más generalizada de violación de este derecho corresponde con la inexistencia de oficinas registrales para inscribir a personas menores de edad nacidas a lo largo de todo el territorio nacional y que no contaron con los servicios públicos médicos para ingresar al circuito oficial registral, o bien por ser hijos o hijas de padres indocumentados. Situaciones similares pueden estudiarse en el caso Jean y Bosico vs. República Dominicana resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.</p> <p>Otra situación que podría ser objeto de estudio de la PDDH es la eventual reclamación de una persona transexual que haya optado por realizarse una operación de cambio de sexo y que al momento de solicitar un cambio en su nombre por razón de género, le sea rechazada la solicitud por parte del Registro Civil.</p> <p>Se deben tener en consideración los casos especiales, en los que diversas organizaciones han tenido dificultades en el otorgamiento de su personalidad jurídica por las instancias administrativas encargadas de autorizarlas: sindicatos por el Ministerio de Trabajo; asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, por el Ministerio del Interior; las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS), por parte de las alcaldías; los partidos políticos por el TSE; y otras más: cooperativas, sociedades mercantiles etc.</p>
<p>Derecho a la identidad y al nombre</p> <p>CP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones u obstáculos legales o materiales injustificados para expedir documentos de nacimiento e identificación de personas nacionales. • Restricciones u obstáculos ilegales y arbitrarios para impedir 	<p>Este derecho es muy similar al derecho al reconocimiento de la personalidad, ya que la identidad y el nombre son las formas más comunes en que se materializa el reconocimiento de la personalidad jurídica. De ahí que aplican las mismas observaciones hechas en el apartado respectivo a ese derecho.</p> <p>De manera más específica, se puede presentar la situación de personas menores de edad que no son reconocidos registralmente por su padres, por lo</p>

<p>ARTICULO 36.-</p> <p>...</p> <p>Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. La ley secundaria regulará esta materia.</p> <p>La ley determinará asimismo las formas de investigar y establecer la paternidad.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 18. Derecho al Nombre</p> <p>Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.</p>	<p>expedición de documentos de filiación y estatus familiar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restricciones u obstáculos ilegales para expedir documentos de identificación y de estatus nacional, o migratorio especial si se cumplen los requisitos de ley. 	<p>que su apellido, que hace parte integral del derecho al nombre, quedaría alterado para efectos de reconocimiento de derechos fundamentales de la niñez, así como de derechos civiles y patrimoniales. Las diligencias de investigación de paternidad deben ser cada vez más accesibles y gratuitas para que las personas menores de edad puedan tener, por la vía de sus representantes legales, una oportunidad más expedita para la verificación de la paternidad y de su nombre definitivo.</p> <p>Para mayor abundamiento, se puede consultar la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Jean y Bosico vs. República Dominicana.</p> <p>Se debería agregar la calificación de “arbitrario” además del adjetivo “ilegal” a las restricciones al derecho al nombre, puesto que en algunos casos reportados por la PDDH, personas han denunciado que no han podido inscribir a sus hijos en el registro del estado familiar, por interpretaciones arbitrarias del artículo 11 de la ley del nombre de la persona natural que señala:</p> <p>«Art. 11.- No se podrá asignar nombre propio, cuando fuere lesivo a la dignidad humana, impropio de personas o equivoco respecto al sexo, salvo en este último caso cuando tal nombre esté precedido de otro determinante del sexo.»</p>
<p>Derecho a la propia imagen</p> <p>CP.</p> <p>ARTICULO 2.- ...Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de normativa que garantice la reclamación por violación al derecho a la imagen. • Obstáculos en la investigación de casos que afectan la imagen de las personas. • Obstáculos en la determinación de reparaciones por afectación a la imagen. • Exposición fotográfica o filmica que afecten la imagen de personas menores de edad en 	<p>El derecho a la imagen, tal y como lo define el artículo 2 de la Constitución Política, está íntimamente ligado con el derecho al honor que reconocen los tratados internacionales en derechos humanos.</p> <p>Este derecho debe analizarse a la luz de lo que dispone también el derecho civil respecto de los derechos a la imagen de personas privadas y de personas que en razón de su profesión, oficio, o fama, han llegado a ser personajes públicos, lo que genera otros matices de apertura y acceso a la información que podría pasar a ser del dominio público, pero que tampoco invisibiliza un núcleo duro de datos que siempre deben mantenerse dentro de la confidencialidad propia de toda persona humana. En razón de su interrelación con el derecho a la privacidad o intimidad, se recomienda hacer el vínculo con esos derechos.</p>

	<p>cualquier medio de comunicación televisiva, escrita o en Internet.</p> <p>Se debe señalar dentro de la casuística lo resuelto caso “los más buscados” expediente 01-0181-05 acumu 0542-05, que implicaba la presentación pública de f delincuentes de alta peligrosidad:</p> <p>«En esa oportunidad esta Procuraduría consideró que a la vida privada de las personas, la exposición pública de su imagen o datos de la ante los medios de comunicación social como miembros de pandillas o au categorizándolos de delincuentes, amparándose bajo sobre los resultados de sus investigaciones; a la v estigmatización social, y se les afecta su derecho seguridad personal; además tal situación repercute conglomerado de derechos inherentes a la persona hu Es relevante destacar, que si bien a las autoridades obligación y el derecho correlativo de informar sob ante diversas problemáticas de la realidad nacional lesionar los derechos humanos de las personas, a cu cumplimiento se encuentran obligadas. Por tanto, el expresión en su connotación de libertad de informa garantía de no vulneración de otros derechos como e privacidad.»</p>	<p>por la PDDH en el llamado lado al 01-0234-05 y 01-otografías de supuestos</p> <p>constituye una injerencia blica de su imagen o datos de la ante los medios de tores de hechos ilícitos, el argumento de informar ez, que origina su al honor, propia imagen y en el ejercicio pleno del mana.</p> <p>s salvadoreñas les asiste la re las medidas adoptadas , tal ejercicio no debe yo respeto, garantía y ejercicio de la libertad de r, está limitado por la l honor, la honra y la</p>
<p>Derecho a la privacidad o intimidad</p> <p>CP.</p> <p>ARTICULO 2.-</p> <p>...Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.</p> <p>Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Injerencia ilegal en las comunicaciones privadas de las personas en cualquier tipo de medio (correspondencia escrita, electrónica, etc.). • Intervenciones telefónicas ilegales. • Violación al domicilio. • Omisión estatal de tomar medidas adecuadas para la protección de la información obtenida producto de las intervenciones en las comunicaciones. 	<p>El derecho a la privacidad es el derecho de todo ser humano a que no sean conocidos, o dados a conocer por terceros, hechos, circunstancias o cualquier información personal sin su consentimiento, si no deben ser del dominio público conforme a la ley</p> <p>Esta definición debe ampliarse con el DIDH. En este sentido, es necesario establecer ciertos criterios para que las restricciones al derecho a la privacidad obedezcan a una causa legítima más allá de la reserva de ley.</p> <p>La necesidad de esta delimitación cobra mayor importancia cuando consideramos las aparentes contradicciones entre el derecho a la privacidad y otros derechos, como el derecho a la información y a la libertad de expresión, entre otros.</p>

<p>ARTICULO 20.- La morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las personas.</p> <p>La violación de este derecho dará lugar a reclamar indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 24.- La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad</p> <p>1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.</p> <p>2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de protección de los datos personales contenidos en registros públicos y privados. • Incorporación ilegal de datos personales a un registro o bases de datos determinadas y divulgación no autorizada. 	<p>Otros derechos involucrados con la privacidad y la intimidad son la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la privacidad informática o el derecho de respuesta, entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la privacidad o a la intimidad <p>1-Hacer el señalamiento que el artículo 24 de la constitución ha sido reformado, en el sentido de permitir la intervención por autorización judicial de las telecomunicaciones, por lo que sería apropiado mencionar lo relativo a la “calidad de la ley”, y los requisitos expuestos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Valenzuela Contreras versus España)</p> <p>Nueva redacción del artículo 24 Cn.</p> <p>«Art. 24.- La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra.</p> <p>Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor.</p> <p>La violación comprobada a lo dispuesto en este artículo, por parte de cualquier funcionario, será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.</p> <p>Una ley especial determinará los delitos en cuya investigación podrá concederse esta autorización. Asimismo señalará los controles, los informes periódicos a la Asamblea Legislativa, y las responsabilidades y sanciones administrativas, civiles y penales en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta medida excepcional. La aprobación y reforma de esta ley especial requerirá el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los Diputados electos.»</p> <p>En el proyecto de ley especial para la intervención de las telecomunicaciones, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa se asignan funciones especiales a la PDDH que deben ser destacadas:</p> <p>(Artículo 33 del proyecto) El Centro llevará un registro inalterable conforme la</p>
---	---	--

<p>3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.</p>		<p>técnica lo indique de todas las intervenciones que realice mediante autorización judicial.</p> <p>La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos deberá designar personal idóneo para que practique anualmente una auditoría a las actividades del Centro y remitirá el informe respectivo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. También procederá a realizar auditorías específicas si lo estimare conveniente cuando mediare una denuncia sobre la violación del derecho a la intimidad o secreto de las telecomunicaciones. En ese caso las auditorías específicas se anexarán al informe general.</p> <p>En estos supuestos, los funcionarios de la Procuraduría estarán obligados a guardar especial reserva sobre la información que obtengan en ejercicio de esta facultad de fiscalización. La Fiscalía General de la República, deberá brindar la colaboración necesaria para los efectos antes indicados.</p> <p>Los informes y resoluciones de la Procuraduría sobre el ejercicio de esta facultad sólo podrán hacerse públicos al comprobarse alguna de las infracciones previstas en la presente ley</p>
<p>Derecho a la honor y reputación CP.</p> <p>ARTICULO 2.-</p> <p>...Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.</p> <p>Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 10.- La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imputaciones falsas que lesionen la imagen e integridad moral de las personas. • Difusión ilegal o arbitraria de información privada que lesione la intimidad individual y familiar. • Difusión de imágenes de personas menores de edad por la prensa o por otros medios públicos que lesionen su integridad. • Publicación de información falsa, difamatoria o injuriosa por la prensa. • Exposición ilegal, arbitraria o involuntaria de fotografías o videos en medios de difusión pública o privada. • Omisión estatal de establecer 	<p>El derecho a la honra constituye el derecho básico e inherente a la dignidad integral de la persona humana. La violación a la imagen y reputación de las personas son variaciones o especificidades de la honra de las personas.</p> <p>Hay muchas maneras de afectar el honor de las personas, pero las principales ocurren mediante manifestaciones o expresiones vertidas ante los medios de comunicación colectiva escrita o visual. También ocurren en la esfera privada, para lo cual, el Estado, mediante el jus poniendi, ha identificado como formas de protección y reparación, la investigación por medio de delitos de injurias, difamación y calumnias.</p> <p>Igualmente, existe la opción de las reparaciones mediante procesos de carácter civil.</p> <p>Desde un enfoque de derechos humanos, la principal responsabilidad del Estado es la emisión de normas y procedimientos que faciliten la investigación de casos que afectan el honor de las personas y no obstaculizar las investigaciones. De ahí que hoy toma relevancia el debate entre la protección del derecho al honor y la mayor dimensión de protección de la libertad de expresión y la prohibición de</p>

<p>sacrificio de la libertad o <u>dignidad de la persona</u>. Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte proscripción o destierro.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad</p> <p>1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.</p> <p>2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.</p> <p>3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.</p>	<p>legislación o políticas que protejan a las personas sobre acciones de cobro por deudas abusivas y lesivas de la intimidad o del honor, por parte de empresas dedicadas al cobro extrajudicial.</p>	<p>la censura previa, donde se promueve como principal forma de reparación de los daños a la reputación de las personas, las medidas ulteriores.</p> <p>El debate se funda en una tendencia a despenalizar los delitos contra el honor y dejar la vía civil abierta como la forma menos restrictiva a la libertad de expresión y los que sostienen que el artículo 13 de la Convención Americana, en relación con el 14, no obligan a despenalizar los delitos contra el honor y, por el contrario, se reglamenta y complementa la persecución penal con el derecho de rectificación y respuesta.</p> <p>Desde la óptica de la PDDH, la principal función es combatir prácticas restrictivas de la libertad de expresión balanceadas con el respeto al honor de las personas, en especial, garantizar el honor de las personas menores de edad y su exposición en medios colectivos.</p> <p>Una situación particular es expresar una postura si la regulación actual del artículo 191 del Código Penal, que ha sido interpretado como restrictivo de la protección del honor, y la propia imagen, pues no permitiría que los periodistas, ni los directores o dueños de medios de comunicación sean enjuiciados por delitos contra el honor (calumnia, injuria y difamación). Esta situación es preocupante, porque en el sistema penal salvadoreño la acción civil va aparejada a la penal y en caso de no ser procesados por la vía penal no queda expedito el camino de la vía civil.</p>
<p>Derecho a la documentación personal</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 24.- La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones indebidas para obtener documentación personal. • Despojo ilegal de documentos. • Retención ilegal de documentos. • Destrucción ilegal de documentos. • Solicitud de requisitos excesivamente formales y procedimientos onerosos que implican para los usuarios problemas de tramitación, en los que no se tiene en cuenta la 	<p>Como derecho humano, la PDDH debe ser vigilante de las buenas prácticas y del respeto del debido proceso legal en todo tipo de investigaciones administrativas y judiciales, de manera que no haya un abuso en la incautación, manipulación u obtención de documentos y correspondencia personal sin el control de la autoridad judicial competente. En caso de que la violación ocurra en sede administrativas como Alcaldías o DUICENTROS, iguales controles debe haber para que la documentación personal sea instrumentada, aún sin control judicial.</p> <p>Como entidad veedora del debido proceso en general, más que verificar la violación de casos concretos –lo cual corresponde ventilar en el marco de los recursos ordinarios a la defensa técnica de las partes procesales afectadas- la</p>

<p>CADH</p> <p>Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad</p> <p>... 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.</p> <p>3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.</p>	<p>lejanía del desplazamiento desde el lugar de residencia, la edad del usuario, o incluso si este reside en el exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificultad de las personas privadas de libertad para obtener documentos personales y con ellos poder realizar otros trámites que los involucran a ellos y a sus núcleos familiares, por ejemplo matrimonios, declaraciones juradas para hacer constar unión no matrimonial para obtener visitas íntimas, o el reconocimiento de hijos. 	<p>PDDH debe denunciar aquellas prácticas abusivas que tomen un cariz generalizado y sistemático, como podría ser la falta de autorización judicial para la obtención de ese tipo de documentos y hacerlos valer como prueba en juicio.</p>
<p>Derecho a la nacionalidad</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 91.- Los salvadoreños por nacimiento tienen derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad.</p> <p>La calidad de salvadoreño por nacimiento solo se pierde por renuncia expresa ante autoridad competente y se recupera por solicitud ante la misma.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 5.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apatridia por no otorgamiento de documentos legales de identificación. • Falta de cobertura nacional del Registro Familiar para expedir documentos de identificación nacional. • Restricciones ilegales o arbitrarias para el otorgamiento de la nacionalización de personas extranjeras que cumplen con requisito de ley. • Despojo ilegal de ciudadanía y expulsión del territorio nacional. • Denegación de reconocimientos de nacionalidad de origen. 	<p>Las principales violaciones al derecho a la nacionalidad ocurren por omisiones del Estado de brindar cobertura global a la inscripción registral de nacimientos de niños y niñas nacidos en el territorio nacional. En ese sentido, ver derecho a la identidad y al nombre (supra).</p> <p>Igualmente, la PDDH debe ser vigilante de aquellas situaciones que puedan generar apatridia de sus nacionales, o bien la ocurrencia de hechos que colateralmente violen garantías derivadas del derecho a la nacionalidad, como podría ser la extradición de sus nacionales a favor de países requirentes.</p> <p>Siempre con miras a un enfoque general, la PDDH debe ser observante de una correcta política y enfoque de extradición de sus nacionales, de modo que en ese tipo de procesos, además del debido proceso, se debe respetar los principios básicos de las extradiciones cuando son nacionales las personas requeridas por otros Estados, así como opciones de persecución penal en el país de manera subsidiaria para combatir la impunidad.</p> <p>Conforme al artículo 28 Constitucional, cuando le corresponda a la PDDH monitorear casos de extradición, se deben revisar los convenios vigentes y especialmente los que guarden la respectiva reciprocidad, y se garanticen iguales derechos o garantías procesales que en El Salvador. Un caso especial</p>

<p>...</p> <p>No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 10.- La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona. <u>Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte proscripción o destierro.</u></p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 28.-</p> <p>El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el Derecho Internacional. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido</p>		<p>que vale la pena mencionar es el convenio de extradición vigente con Estados Unidos de Norteamérica data de 1911.</p>
--	--	--

<p>solamente por razones políticas.</p> <p>La extradición será regulada de acuerdo a los Tratados Internacionales y cuando se trate de Salvadoreños, sólo procederá si el correspondiente tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el Organo Legislativo de los países suscriptores. En todo caso, sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los Salvadoreños todas la garantías penales y procesales que esta Constitución establece.</p> <p>La extradición procederá cuando el delito haya sido cometido en la jurisdicción territorial del país solicitante, salvo cuando se trate de los delitos de trascendencia internacional, y no podrá estipularse en ningún caso por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resultaren delitos comunes.</p> <p>La ratificación de los Tratados de Extradición requerirá los dos tercios de votos de los diputados electos.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.</p> <p>2. Toda persona tiene derecho a la</p>		
--	--	--

<p>nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.</p> <p>3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.</p>		
<p>Asilo Político CP</p> <p>ARTICULO 28.- El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el Derecho Internacional. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas.</p> <p>...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Expulsión ilegal de personas asiladas políticas. • Violación al debido proceso en expulsión de personas beneficiarias de asilo político. • Deportación de personas asiladas a países en que su vida e integridad personal podrían estar en riesgo. • Violación del principio de no devolución. 	<p>El asilo político es una institución del derecho internacional de neta creación latinoamericana que se inicia como una costumbre de carácter humanitario para proteger la vida a la integridad física y psíquica de las personas, especialmente víctimas de persecución política.</p> <p>El otorgamiento del asilo político, a diferencia de otros derechos, no opera como parte de un proceso tradicional para el reconocimiento de ese estatus, sino que es una de las pocas decisiones de carácter discrecional del Estado. Por lo tanto, no opera bajo las reglas del debido proceso tradicional, sino de las valoraciones que hace el Poder Ejecutivo para brindar el asilo político cuando se han presentado pruebas que generan una convicción de que la persona solicitante está en riesgo de ser perseguida política en su país. En tal sentido, la PDDH no puede interferir en esa fase de reconocimiento del derecho de asilo, salvo que existan violaciones adicionales a derechos humanos conexos. Cuando sí puede generar monitoreo del asilo político, es cuando ya haya sido otorgado y se amenace ilegalmente su desconocimiento y, especialmente, cuando ello ponga en riesgo la integridad física o psíquica de la persona asilada.</p> <p>Un principio básico del asilo político se encuentra en la Convención de las Naciones Unidas sobre Asilo Político de 1951, conocido como principio de no devolución que consiste en la imposibilidad de enviar a la persona asilada de vuelta a su país en caso de que haya indicios importantes de que su vida e integridad personal podrían estar en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado esa doctrina en unas medidas cautelares a favor de migrantes haitianos respecto de República Dominicana (Ver Derechos de las personas migrantes).</p> <p>Si bien la PDDH no puede tener un injerencia directa en los criterios de otorgamiento discrecional del asilo político, si puede intervenir y emitir recomendaciones respecto del respeto de los derechos humanos de las</p>

		personas asiladas como migrantes y, en particular, a evitar expulsiones ilegales de asilados, especialmente si podrían ser remitidos a países donde sus vidas e integridad podrían estar en riesgo.
<p>Derecho a la integridad personal (Ver también tortura física y psicológica y tratos crueles, inhumanos y degradantes).</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 27.-</p> <p>...</p> <p>Se prohíbe..., las penas perpetuas, las infamantes, las proscritas y toda especie de tormento...</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tortura • Tratos crueles, inhumanos y degradantes • Penas y castigos crueles, inhumanos y degradantes al margen de los indicados en la ley o en la misma sentencia condenatoria. • Uso desproporcionado de la fuerza 	<p>El derecho a la integridad personal contiene prohibiciones para el Estado que son consideradas por el DIDH como no derogables, no restringibles y de <i>jus cogens</i>.⁷ La prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentra reconocida en una gran cantidad de instrumentos internacionales, tanto de carácter general universales y regionales, en el PIDCP y la CADH, como de naturaleza más específica, en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Sin embargo, su naturaleza, extensión, protección y medidas de garantía no se encuentran totalmente esclarecidas, por lo que resulta de fundamental importancia que la PDDH establezca los parámetros conforme a los cuales verificará el respeto al derecho a la integridad personal y prevendrá su violación.</p> <p>Cualquier intento de definir las conductas prohibidas (por acción u omisión de funcionarios públicos), o definir una lista taxativa de casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes relacionados con la integridad personal en su sentido amplio, como lo reconoce la CADH, podría llevar a limitar el ámbito de protección de este derecho. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos⁸ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,⁹ organismos cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado salvadoreño, se han negado a establecer una definición de las conductas prohibidas, limitándose a mencionar en general que una violación se ha producido.</p>

⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Tibi Vs. Ecuador*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 143. Véanse también los siguientes casos: Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 111; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Maritza Umutia vs. Guatemala*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 89; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, párrafo 215, entre otros.

⁸ "El Pacto no contiene definición alguna de los conceptos abarcados por el artículo 7, ni tampoco el Comité considera necesario establecer una lista de los actos prohibidos o establecer distinciones concretas entre las diferentes formas de castigo o de trato; las distinciones dependen de la índole, el propósito y la severidad del trato aplicado." Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General 20, *Prohibición general de la tortura y los tratos o penas crueles*, 10 de marzo de 1992, párrafo 4.

⁹ "Debe ahora la Corte determinar si los actos a los que se ha hecho referencia son constitutivos de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de ambos tipos de infracción al artículo 5.2 de la Convención Americana. De todas maneras, corresponde dejar claro que cualquiera que haya sido la naturaleza de los actos aludidos, se trata de comportamientos estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos." Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Cantoral Benavides vs. Perú*, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 95, entre otros.

<p>1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.</p> <p>2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.</p> <p>3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.</p> <p>4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.</p> <p>5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.</p> <p>6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.</p>		<p>El artículo 5 de la CADH, a diferencia del artículo 7 del PIDCP y de otros instrumentos internacionales, reconoce de manera general el derecho a la integridad personal sin limitarse a enumerar las conductas prohibidas. Esta ampliación tiene distintas consecuencias en la protección del derecho en estudio. En sus obligaciones respecto de la integridad personal, los agentes del Estado no sólo deben abstenerse de practicar las conductas prohibidas, sino también de realizar cualquier otra conducta intrusiva.</p> <p>Algunos elementos a tener en cuenta para demostrar hechos vinculados con violación a la integridad física y psíquica son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Huellas y marcas. La definición incorpora como un elemento del derecho a la integridad personal la necesidad de la existencia de un rastro temporal o permanente que haya resultado de la conducta prohibida. Sin embargo, este requisito no se ubica entre los establecidos por los órganos del Sistema Interamericano o del Sistema Universal de Derechos Humanos. Aunque pudiera parecer claro que cualquier interferencia en el individuo tendría como resultado alguna secuela identificable, esto podría no ser así. Además, este elemento opera en contra del individuo al que se quiera proteger, pues además de los requisitos clásicos exigidos para la configuración de las conductas prohibidas tendría que comprobarse un signo que pruebe el atentado contra la integridad personal, lo cual no es fácil de acreditar, en especial cuando la conducta prohibida causó un daño psicológico o produjo una huella temporal. A ello se debe sumar las situaciones más complejas cuando la persona afectada está en una situación de incomunicación ilegal donde pierde todo acceso y contacto con el mundo exterior, incluyendo sus familiares y abogados. Por cierto que ese tipo de incomunicación es, en sí misma, una violación a la integridad personal, tal y como lo determinó la Corte Interamericana en la sentencia de fondo en el caso Loayza Tamayo contra Perú. 2. Dolor o sufrimiento graves. Como ya se mencionó, el contenido de la primera parte del artículo 5 de la CADH protege la integridad personal en sentido amplio y, desde luego, de las conductas específicamente prohibidas (tortura y tratos o penas crueles o degradantes). De acuerdo con la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, para que se
---	--	--

		<p>configuren las conductas prohibidas es necesario que el dolor o sufrimiento puedan ser calificados como graves.¹⁰ Sin embargo, en el ámbito de la integridad personal en sentido amplio, no se requiere que los hechos sean calificados de graves. De tal forma que será necesario verificar, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de la intervención cometida por el agente del Estado.</p> <p>Esta situación se presenta con el uso excesivo de la fuerza, pues no en todos los casos ésta llega a causar dolores o sufrimiento graves, pero no por ello deja de ser una violación a la integridad personal en su sentido amplio. Así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que “todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana [...]”¹¹ En efecto, el uso de la fuerza no se sigue necesariamente de la configuración de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero sí la violación a la integridad personal aún cuando no exista el elemento de gravedad.</p> <p>Incluso los distintos escenarios en que puede requerirse el uso de la fuerza, como parte de un operativo planeado o como una reacción, por ejemplo, tienen exigencias distintas para los agentes del Estado y el uso de la fuerza se califica de excesivo o no, dependiendo de ello. También debe considerarse la idoneidad de las armas utilizadas, la forma en que se utilizan, las consideraciones respecto de las personas no involucradas, la gravedad de una situación para hacer uso de la fuerza, entre otros muchos aspectos. La inclusión de un catálogo de normas, sin embargo, no remedia estas carencias: se requiere sobre todo un examen cuidadoso de las resoluciones internacionales, así como del derecho de los conflictos armados, para arrojar luz sobre estas materias.</p> <p><i>Los escenarios:</i> Independientemente de que la violación a la integridad física y psíquica de las personas pueda ocurrir en cualquier escenario, es lo cierto que hay situaciones de mayor “riesgo” en que pueden ocurrir. De manera específica,</p>
--	--	--

¹⁰ Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Art. 1

¹¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Loayza Tamayo vs. Perú*, Fondo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, párrafo 57.

		<p>cuando la víctima está bajo cualquier nivel de custodia de agentes del Estado (privación de libertad en cualquier modalidad) o incluso en situaciones de violencia social y cultural, como cuando las mujeres, niños y adolescentes son víctimas de violencia intrafamiliar.</p> <p>a) La mujer y el derecho a la integridad personal</p> <p>Las implicaciones que el derecho a la integridad personal tiene en relación con las mujeres suelen quedar ocultas tras la dicotomía de las esferas pública y privada. En efecto, las violaciones a la integridad personal de la mujer pueden ser cometidas por agentes del Estado o por particulares, con la aquiescencia de los primeros, como es el caso de la violación sexual, la cual constituye tortura para efectos del DIDH.¹² Pero también se considera que la violencia contra la mujer es violatoria de los derechos humanos cuando proviene de un particular sin que intervenga, por acción u omisión, una autoridad, como lo establece el artículo 1º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.¹³ La violencia doméstica o intrafamiliar es una de las transgresiones a derechos humanos más recurrentes que viven las mujeres. Este fenómeno infringe no sólo el derecho a la no discriminación sino, principalmente, el derecho a la integridad personal.</p> <p>Nos encontramos en este caso frente a una expansión de la concepción tradicional de los derechos humanos. Mirar a los particulares como posibles agentes violadores de derechos humanos implica sin duda nuevos retos para la propia PDDH en su tarea protectora y preventiva.</p> <p>b) La integridad personal de las personas privadas de la libertad</p> <p>En situaciones muy particulares algunos derechos humanos pueden ser suspendidos en situación de emergencia. En esos casos –regulados por los tratados internacionales y por la misma Constitución salvadoreña–, podría haber</p>
--	--	--

¹² Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso del Penal Miguel Castro Castro*, op. cit. . 50, párrafo 312.

¹³ Organización de los Estados Americanos, *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer*, Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, 24º período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Esta convención fue ratificada por México el 19 de junio de 1998. También véase Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación general 28, Artículo 3, *Igualdad de derechos entre hombres y mujeres*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 2000, párrafo 11; y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General 19, La violencia contra la mujer, 1992, párrafo 9.

		<p>restricciones permitidas por las alteraciones derivadas del ejercicio estrictamente necesario de las tácticas de sometimiento aplicadas a personas privadas de libertad por parte de los órganos de seguridad pública. Sin embargo, las conductas prohibidas como la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, no admiten ningún tipo de justificación, ni siquiera en situación o casos de emergencia.</p> <p>El derecho a la integridad es un tema de tan alta complejidad que la sola recopilación de normas jurídicas no aclara el contenido de conceptos como el de la tortura o el de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ni la Corte Interamericana ni el Comité de Derechos Humanos se han aventurado a diferenciarlas en cuanto a establecer una definición concreta para cada una de esas conductas prohibidas. Únicamente la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido categorías de diferenciación.¹⁴ Esto no quiere decir que la normatividad sea superflua, sino que debe estar acompañada de la jurisprudencia que aclare la forma en que ha sido interpretado este derecho a fin de brindar la mayor protección posible a las víctimas en caso por caso.</p> <p>Sobre la legislación se debe agregar lo dispuesto en el artículo 11 inciso 2º Cn., que regula el hábeas corpus y el de tipo correctivo aplicable a personas privadas de libertad:</p> <p>«La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas.»</p> <p>Igualmente, la PDDH debe poner especial atención a los posibles escenarios de afectaciones al derecho a la integridad, penas o tratos crueles y la tortura:</p> <p>a) En el caso de las mujeres debe prestarse especial atención a los reiterados casos de mujeres visitantes de centros penales que son sometidas a registros intrusivos, dicha situación ha sido señalada recientemente en las observaciones del CAT a El Salvador en su último informe periódico. De igual forma, las</p>
--	--	---

¹⁴ European Court of Human Rights, Ireland v. United

Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A, No

. 25, (1978) 2.

		<p>prácticas policiales de pesquisas corporales (requisas), la forma y el sexo de los agentes que pueden hacerlo, lo cual se agrava en el momento actual donde se ha dado arbitrariamente a efectivos militares la facultad de hacer registros.</p> <p>b) Complejos militares, en especial de enseñanza militar, por los casos reportados en la PDDH sobre malos tratos a caballeros o señoras cadetes en formación, y como ejemplo la doctrina sentada por PDDH en el caso de la muerte del cadete Erick Peña Cammona.</p> <p>c) Los centros educativos escolares donde aun se reportan situaciones de castigo físico, o los casos aun más graves de acoso sexual de niños o niñas en centros escolares.</p> <p>d) Sobre el trato a los usuarios en instituciones públicas, cuando prácticas sistemáticas de malos tratos o deficiente atención, podrían llegar a convertirse en afectaciones al derecho a la integridad moral (psíquica).</p> <p>En tal sentido, corresponde recordar algunas directrices del sistema americano, sobre el uso de la fuerza:</p> <p>«66. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. . .</p> <p>75. Tal como se señaló en el párrafo 66 de la presente Sentencia, los Estados deben crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a la vida. De allí que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales. Siguiendo los “Principios sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: a) especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de</p>
--	--	---

		<p>fuego o municiones autorizados; b) aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; c) prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; d) reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; e) señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego, y f) establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurren al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.»¹⁵</p>
<p>Derecho a no ser sometido a tortura física ni psicológica</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 27.-</p> <p>...</p> <p>Se prohíbe..., las penas perpetuas, las infamantes, las proscritas y toda especie de tormento...</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política o programa de prevención de la tortura. • Prácticas sistemáticas de tortura por parte de funcionarios o de particulares actuando con la aquiescencia del Estado. • Torturas aisladas cometidas por funcionarios del Estado o por particulares actuando con la aquiescencia del Estado. • Invisibilización de casos de tortura. • Manipulación de estadísticas de casos de tortura. • Capacitación inadecuada para prevenir la tortura dirigida a los funcionarios con mayor riesgo de su comisión (se debe observar el Protocolo de Estambul). • Inadecuada tipificación del delito de tortura. • Impunidad en la investigación de 	<p>Aplica lo indicado en el apartado anterior sobre violación a la integridad física.</p> <p>El Estado de El Salvador y la PDDH deben trabajar intensamente en la prevención y combate de la tortura y para ello, se debe instrumentar las obligaciones internacionales que imponen tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) y la Convención Interamericana para Combatir la Tortura.</p> <p>Lamentablemente, El Salvador todavía no ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención de la Naciones Unidas contra la Tortura para Prevenir la Tortura y los Tratados Crueles Inhumanos y Degradantes (OPCAT), el cual, entre otras cosas, permite al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) a hacer visitas no anunciadas a lugares de detención, pero principalmente, impone a los Estados partes la creación del “Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”.</p> <p>Igualmente, la PDDH debe verificar que el Estado instrumente el Protocolo de Estambul como una herramienta valiosa para mejorar la realización de valoraciones médico psicológicas de personas privadas de libertad, lo que a su vez funciona como prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.</p>

¹⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), Vs. La República Bolivariana de Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006.

<p>1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.</p> <p>2. Nadie debe ser sometido a torturas...</p>	<p>casos de tortura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obstáculos en la investigación de casos de tortura. • Errónea tipificación de hechos comisivos de tortura por otros delitos menos graves. • Amenazas a víctimas de tortura o a sus familiares para que no denuncien sus casos. • Represalias a víctimas de tortura o a sus familiares por haber denunciado casos de tortura. • Inexistencia de facilidades y de protección para que víctimas privadas de libertad pueden denunciar casos de torturas. • La comisión de los siguientes hechos por parte de los funcionarios del Estado: "Plantones al sol en el día y al sereno en la noche"; "ahogamientos y sumergimientos en agua"; "aplicación del "submarino"; "venta en los ojos hasta por doce, diecisiete y veinte días"; "vendado y amarrado por cuarenta y siete días en cimitarra"; "sometimiento a golpes en diversas partes del cuerpo con palos y patadas"; "impedimento para dormir hasta por ocho días y 	<p>Delimitación del Concepto de tortura y Análisis del tipo penal.</p> <p>Antes de cualquier decisión estratégica institucional para combatir la tortura, la PDDH, debe estudiar si el Código Penal vigente en el país que tipifica la tortura como delito, así como el análisis de ese tipo penal, está conforme con los contenidos que establecen la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura ("CAT") y la Convención Interamericana para Prevenir y Castigar la Tortura. La tortura como práctica ilegítima, pero sobre todo violatoria de los derechos humanos, es un concepto que todavía requiere de precisión y de claridad en cuanto a parámetros para su tipificación penal o como práctica sistemática o su manifestación mediante casos aislados.</p> <p>Respecto de la definición del concepto de tortura, la PDDH se ha pronunciado en el sentido siguiente:</p> <p>«... 39. Por otro lado, en lo que se refiere a la tipificación del delito de tortura contenida en el artículo 297 del Código Penal¹⁷ vigente, puede observarse que ésta tampoco incluye una definición del término que comprenda las distintas hipótesis que determinan la finalidad del delito, como lo establece el referido artículo de la Convención. Por otra parte, debe señalarse que en la descripción del tipo penal no se establecen circunstancias agravantes, de manera expresa, las que a juicio de esta Procuraduría deberían considerarse para proteger a las personas o grupos que resultan especialmente vulnerables por causa de la discriminación. Asimismo, resulta un motivo de preocupación para esta institución que el mencionado artículo excluya la posibilidad de la tentativa, ya que el delito queda consumado con la realización de la tortura sin que sea preciso otro resultado.</p> <p>40. Las limitaciones anteriormente mencionadas obligan a que en el momento de decidir sobre su aplicación, el tipo penal se encuentre condicionado a la interpretación judicial o fiscal, siendo posible que la misma, no incluya la noción - cada vez mas amplia- sobre el alcance de la tortura o los malos tratos realizada por los organismos internacionales de derechos humanos. Esta situación, puede</p>
---	---	---

17 Art. 297.- El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que con ocasión de las funciones de su cargo, sometiére a otra persona a tortura física o psíquica o que teniendo la facultad de evitarlo o impedirla no lo hiciere, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación para el ejercicio del cargo o empleo respectivo por el mismo tiempo.

	<p>falta de reposo”; “amenazas de muerte al detenido, a la familia y a amigos”; “colgaduras atado de las manos”; “prohibición de agua y alimento hasta por cuatro, siete y ocho días seguidos”; “simulacro de dispararles en la cabeza”; “esposados de las manos”; “tortura de otras personas cerca de la celda para que se escucharan los gritos”; “incomunicación”; “aplicación de energía y choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo”; “ejercicios hasta el agotamiento”; “permanencia desnudos y de pie”; “provocación de asfixia”; “lavadas”; “caminar de rodillas”; “torturas psicológicas”; “sumergimiento amarrados en un lago”; “quemaduras con cigarillo”; “sacar al detenido a los allanamientos y utilizarlos como chaleco antibalas, esposado y vendado”; “simulacros de fusilamientos mientras estaba</p>	<p>convertirse en un obstáculo para lo que limite la aplicación o impida el procesamiento de los responsables.»¹⁸</p> <p>Independientemente de cualesquiera de sus manifestaciones, no debe minimizarse la importancia de la tortura en cuanto a la gravedad que representa como una de las peores maneras de socavar la dignidad de la persona humana mediante métodos de la más repugnante y cobarde utilización valiéndose de la total indefensión de la víctima.¹⁹ Precisamente la doble dimensión de violación a la integridad física y psíquica de las víctimas de tortura, así como la gravedad de la afrenta, es lo que le dan a la tortura un carácter de delito de lesa humanidad, aunque para ello deba encuadrarse como una práctica flagrante y sistemática. Esa misma gravedad es la que le ha dado la calificación de delito internacional, lo cual abre la opción de que sea un delito perseguible por cualquier Estado, independientemente del lugar de su comisión, gracia a la doctrina de la jurisdicción penal universal reconocida explícitamente en el Estatuto de Roma que creó una Corte Penal Internacional.</p> <p>El Estatuto de Roma vino a profundizar la responsabilidad penal del individuo en el plano internacional en íntima conexión con la tipificación jurídica internacional de los crímenes o delitos internacionales en sentido propio, es decir, conductas llevadas a cabo por individuos atentatorias contra los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, ante la cual han de responder, independientemente de que ocurran como parte de un conflicto armado o no.</p> <p>La tortura como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma, comportaría la violación grave de derechos humanos efectuados con carácter masivo o sistemático, es decir, con arreglo a un plan o política preconcebidos y dirigidos contra una multiplicidad de víctimas como parte de un</p>
--	---	--

¹⁸ Informe especial del señor Procurador para la Defe
Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas

nsa de los Derechos Humanos, presentado al Comité C
Cruels, Inhumanas o Degradantes. Octubre de 2009.

ontra la Tortura de Naciones Unidas (ONU), sobre la

Aplicación de la

¹⁹ Tomás y Valiente califica la tortura como “la mayo
sustitución por un instrumento sufriente que solo s
Madrid, 1996, pp. 73-74.

r vileza imaginable... porque consiste en la negaci
irve para contestar y padecer. TOMAS y VALIENTE, F

ón del hombre como ser que vale por sí mismo, sea q
uien sea, e implica su
..Sobre la tortura y otros males menores, A orillas d el Estado, ed. Taurus,

	<p>colgado de un árbol”; “introducción de armas en la boca”; “roturas de nervios como consecuencia de colgamientos”; “desnudo y sumergido en un río”; “negativa de asistencia médica para embarazo”; “fractura de costillas”; “amarrado, vendado, a veces permanentemente, golpeado con un leño, patadas”; “herida con arma de fuego por la espalda en el sitio de reclusión”; “amenaza de traer a sus familiares para torturarlos en su presencia”; “contemplación de las torturas a otras personas”; “hacerlos creer que otros sindicados por los mismos hechos lo habían señalado como participante”; “pinchazos en varias partes el cuerpo con alfileres”; “interrogatorios continuos y escritos obligados en que decía que había participado en el asalto”.¹⁶</p>	<p>ataque generalizado, lo que supone la no consideración de la humanidad los actos aislados y esporádicos de es Al momento en que El Salvador llegue a ratificar el corresponde adecuar el Código Penal para tipificar contra la humanidad conforme a los elementos y está internacional. Pero más allá de su penalidad como delito internacional, la tortura tiene un tratamiento más general cuando se enfoca como violación de derechos humanos, es decir, como un acto emanado por funcionarios del Estado o de particulares que actúan al amparo de este, ya sea por acción u omisión, lo cual deviene en responsabilidad estatal, independientemente de que se persiga al autor de la tortura por la vía penal, lo cual es independiente de aquellos actos de sus funcionarios (agentes). A pesar de que la tortura ha sido una de las prácticas más identificadas con las violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, incluso al punto de que en una primera etapa del reconocimiento de la responsabilidad internacional esponsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos se le diera una preeminencia indiscutible, junto con la práctica de desaparición forzada de personas, es lo cierto que se mantienen resabios y confusiones en cuanto a su definición y caracterización. Para efectos de esta guía, no nos referiremos a la tortura como delito internacional en los términos del Estatuto de Roma, sino como una violación de derechos humanos, sistemática o aislada, con efectos directos en la responsabilidad de los Estados. Paralelamente, se hace el abordaje de la tortura como delito en el marco del derecho penal ordinario para la determinación de la responsabilidad individual de los perpetradores, fueron funcionarios o particulares.</p>	<p>ión como crímenes contra el tipo de violencia.²⁰ Estatuto de Roma, la tortura y otros delitos graves de ese tratado ndares de ese tratado onal, la tortura tiene un ción de derechos humanos del Estado o de or acción u omisión, lo cual nte de que se persiga al dependiente de aquellos actos de sus funcionarios cas más identificadas con las anos, incluso al punto de esponsabilidad internacional una preeminencia es forzadas de personas, es lo uanto a su definición y tortura como delito sino como una violación de os directos en la ace el abordaje de la tortura para la determinación de la eren funcionarios o</p> <p>El Concepto de tortura que la PDDH debiera utilizar en este manual es la más</p>
--	---	--	--

¹⁶ Aún cuando los casos de tortura se deben valorar contextualmente para distinguirlos de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado esas situaciones como tortura. *Informe Colombia*, 1981, pág. 111, párr. 4. Aún así, se advierte que la Corte Interamericana no necesariamente ha calificado como tortura algunos hechos similares, sino como tratos crueles, inhumanos o degradantes (el submarino, la incomunicación, por ejemplo).

²⁰ Cf. *Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 48 período de sesiones*, 6 de mayo a 26 de julio de 1996, Asamblea General, Quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 10, A/51/10, p. 11.

	<p>amplia caracterización que proporciona la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Malos Tratos, Inhumanos o Degradantes, suscrita en 1985. Dicho Tratado define la tortura como:</p> <p><i>... todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a un persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin (resaltado no es del original).²¹</i></p> <p>El avance de esta definición es que los instrumentos internacionales anteriores a la Convención Interamericana contra la Tortura la restringían a casos de investigación o a castigos determinados. Como se puede observar, el desarrollo internacional, como es característico en derechos humanos, va en línea de ascenso en cuanto a niveles y ámbitos de protección: se pasa de la tortura solo para casos de investigación y castigo (Declaración de Naciones Unidas), a la inclusión de la coacción o de cualquier otro motivo basado en cualquier tipo de discriminación (Convención de Naciones Unidas), hasta un estadio completamente amplio que involucra cualquier otro fin (Convención Interamericana).</p> <p>No obstante esa amplitud de la Convención Interamericana, el parámetro más utilizado dentro del Sistema Interamericano es el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone, en términos muy genéricos, que <i>toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral</i>, así como a que <i>nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes</i>.</p> <p>Conforme a la práctica de la Corte Interamericana de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera progresiva, incluso valiéndose de otros tratados especializados en la materia de que se trate, debe utilizarse la Convención Interamericana contra la Tortura como instrumento de interpretación y caracterización de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, independientemente de que haya sido ratificada o no por el Estado involucrado.</p>
--	---

²¹ Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Malos, Inhumanos o Degradantes. Artículo 2.

		<p>De las definiciones sobre tortura trascritas, podemos obtener los siguientes elementos afines que son insumos para el trabajo de la PDDH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es un acto cometido por un <i>funcionario público</i> o por <i>otra persona</i> a instigación de <i>aquella</i> (Declaración de Naciones Unidas), o por un particular en el <i>ejercicio de funciones públicas</i>, o con <i>su consentimiento o aquiescencia</i> (Convención de Naciones Unidas); o que esos funcionarios públicos pudiendo impedirlo, no lo hayan hecho (Convención Interamericana contra la Tortura). • Conlleva -en principio- un sufrimiento <i>grave</i> de naturaleza <i>física o mental</i> (Declaración y Convención de Naciones Unidas). No obstante, la Convención Interamericana contra la Tortura, que es más proteccionista, no establece como requisito necesario un <i>sufrimiento grave</i>, puesto que incluye como acto de tortura la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen <i>dolor físico o angustia psíquica</i>. • Es un acto imbuido de <i>intencionalidad</i> por parte del actor de la tortura. En este punto debemos detenemos en lo que vendría a ser una suerte de “tortura institucional por omisión”, donde no necesariamente podría mediar un acto intencional de parte de las autoridades, pero que al fin y al cabo provocan una práctica de tortura. Nos referimos, por ejemplo, a las situaciones insalubres y en situación de hacinamiento que caracterizan a muchos de los centros de detención en los países de la región. Si bien eso podría ser un acto provocado por la negligencia de las autoridades en procurar una política penitenciaria adecuada, aunque fuera por escasez de recursos, no podría ese Estado eximirse de su responsabilidad alegando falta de intencionalidad en la generación de la tortura como efecto de las condiciones en esos “centros de detención”.²² • La tortura, en el ámbito del Sistema Interamericano, no está supeditada a fines de investigación, confesión o castigo, sino que puede ser calificada como tal por <i>cualquier fin</i> que se haya generado, en los términos de la Convención Interamericana contra la Tortura.
--	--	--

²² El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas determinó su preocupación porque en Costa Rica había sobrepoblación en los centros de detención y el régimen de máxima seguridad que únicamente permite una hora fuera de la celda representa un confinamiento excesivo. Cfr. *Conclusions and recommendations of the Committee against Torture*, Costa Rica, A/56/44, paras.130-136, 17 May 2001.

	<ul style="list-style-type: none"> • La tortura es una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante (Declaración de Naciones Unidas). • Se excluye de la tortura, las penas o sufrimiento s físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a esta , en la medida en que estén acordes con los instrumentos especializados contra la tortura y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. • La responsabilidad del agente torturador incluye tanto al actor del hecho físico como al instigador e incluso a aquel funcionario que no impidió la tortura pudiendo haberlo hecho. <p>Hay otras características de la tortura que han sido sistematizadas por la Doctrina o por la jurisprudencia internacional. Entre las más importantes destacan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es un delito de carácter internacional, lo cual habilita la universalidad de la jurisdicción al establecerse que cada Estado debe castigar a los torturadores que se encuentren en su territorio, independientemente del lugar en que se haya cometido la tortura y de la nacionalidad de la víctima y del victimario. El ejemplo más reciente, en términos de divulgación, fue el Asunto Pinochet ante la Cámara de los Lores en Inglaterra, la cual expresó que la naturaleza de <i>ius cogens</i> del crimen internacional de tortura justifica que los Estados ejerzan la jurisdicción universal sobre la tortura cualquiera sea el lugar donde se haya cometido.²³ En igual sentido, el Tribunal Penal Internacional para Juzgar los Crímenes de Guerra en Antigua Yugoslavia ha establecido que, “a nivel individual, esto es, de responsabilidad penal, parecería que una de las consecuencias del carácter de <i>ius cogens</i> atribuido por la comunidad internacional a la prohibición de la tortura es la que cualquier Estado puede investigar, perseguir y castigar o extraditar a individuos acusados de tortura que se encuentren en un territorio bajo su jurisdicción.²⁴ <p>A la luz de la Doctrina, Jurisprudencia e Instrumentos Internacionales sobre Tortura ya mencionados, la configuración de la tortura, desde el plano de la responsabilidad internacional del Estado, requiere la concurrencia de los siguientes elementos definidores: gravedad del dolor o sufrimiento físico o</p>
--	--

²³ *Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate & Others, Ex Parte Pinochet Ugarte* (No. 3), 1999, 2 All E.R. 97 (H.L.), p. 109.

²⁴ Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, *Prosecutor v. Anto Furundzija*, 10 de diciembre de 1998, Asunto IT-95-17/1-T; extractado en REMIRO BROTONS, A, *El Caso Pinochet. Los límites de la impunidad*, ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 63.

		<p>mental que se le cause a la víctima (elemento material), la intencionalidad del autor²⁵ (elemento subjetivo), la finalidad perseguida con el acto (elemento teleológico) y la participación directa o indirecta de funcionarios del Estado²⁶, ya sea por acción u omisión.</p> <p>Otro tema que es materia de la PDDH es determinar en el marco de sus investigaciones, si se trata de un caso de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Ver al respecto el apartado siguiente sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes.</p> <p>Finalmente, una recomendación en sentido general, es que todos los funcionarios de la PDDH deben conocer y aplicar las recomendaciones recientes que el CAT ha hecho al informe periódico del Estado Salvadoreño.</p>
<p>Derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.</p> <p>2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política o programa de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes. • Prácticas sistemáticas de tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios o de particulares actuando con la aquiescencia del Estado. • Capacitación inadecuada para prevenir tratos crueles, inhumanos y degradantes dirigida a los funcionarios con mayor riesgo de su comisión (Se debe observar las directrices del Protocolo de Estambul) • Obstáculos en la investigación de 	<p>Aplica lo indicado en el apartado anterior sobre violación a la integridad física.</p> <p>El principal debate sobre este derecho radica en la determinación de hechos que puedan considerarse como tortura o como trato cruel, inhumano o degradante.</p> <p>De todos los elementos que caracterizan la tortura, el que quizás ha traído más dificultad es el nivel de gravedad para distinguir entre una tortura y un trato cruel, inhumano y degradante, lo cual debe analizarse en cada caso concreto. Precisamente, la Declaración de Naciones Unidas de 1975 se refiere a la tortura como una "forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante".²⁷</p> <p>Esta diferenciación fue igualmente abordada por la Corte Interamericana en el <i>Caso Loayza Tamayo</i> en que, citando a la Corte Europea en el Caso de Irlanda contra Reino Unido, se dijo:</p> <p>La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene <i>diversas</i></p>

²⁵ Aunque en casos contenciosos ante el Sistema Interamericano, por violación al artículo 5 de la Convención Americana, no se requiere demostrar la intencionalidad, sino únicamente el hecho de que se haya cometido tortura.

²⁶ GONZALEZ GONZALEZ, R., *El control internacional de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*, ed. Universidad de Granada, 1998, pp. 82 ss.

²⁷ Cf. GONZALEZ GONZALEZ, R., *El control internacional de la tortura...* Op. Cit. P. 88,89.

	<p>casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de respuestas institucionales para la solución de situaciones que generan tratos crueles, inhumanos o degradantes. • Condiciones de hacinamiento y sobrepoblación de personas privadas de libertad. • Condiciones inhumanas y falta de satisfacción de necesidades básicas para las personas privadas de libertad o bajo la custodia del Estado. 	<p><i>connotaciones de grado</i> y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la persona (cfr. Case of Ireland v. The United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A. Núm. 25, párrafo 167). Dicha situación es agravada por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida (cfr. Case Ribitsch v. Austria, Judgment of 4 December 1995, Series A núm. 336, párrafo 36). Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana... ²⁸ (resaltado no es del original).</p> <p>En este aspecto, el dictamen pericial es una herramienta fundamental para determinar el grado de intensidad y repercusiones psicológicas que pudieron haber tenido los actos físicos o psicológicos que determinarían la comisión de una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante. Aún así, no es fácil determinar una cosa o la otra. Por lo menos así lo da a entender la Corte Interamericana, al haber considerado que hechos, de algún modo tan graves como “la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas... <u>constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes</u> en el sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana.” (subrayado no es del original).</p>
--	---	--

²⁸ Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo*. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C, núm. 33. párr.57.

		<p>En cambio la Comisión Interamericana ha mostrado mayor amplitud al calificar hechos similares como tortura y no como tratos crue les, inhumanos o degradantes. Así lo determinó en una ocasión:</p> <p>“Plantones al sol en el día y al sereno en la noche”; “ahogamientos y sumergimientos en agua”; “aplicación del “submarino”; “venta en los ojos hasta por doce, diecisiete y veinte días”; “vendado y amarrado por cuarenta y siete días en cimitarra”; “sometimiento a golpes en diversas partes del cuerpo con palos y patadas”; “impedimento para dormir hasta por ocho días y falta de reposo”; “amenazas de muerte al detenido, a la familia y a amigos”; “colgaduras atado de las manos”; “prohibición de agua y alimento hasta por cuatro, siete y ocho días seguidos”; “simulacro de dispararles en la cabeza”; “esposados de las manos”; “tortura de otras personas cerca de la celda para que se escucharan los gritos”; “incomunicación”; “aplicación de energía y choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo”; “ejercicios hasta el agotamiento”; “permanencia desnudos y de pie”; “provocación de asfixia”; “lavadas”; “caminar de rodillas”; “torturas psicológicas”; “sumergimiento amarrados en un lago”; “quemaduras con cigarrillo”; “sacar al detenido a los allanamientos y utilizarlos como chaleco antibalas, esposado y vendado”; “simulacros de fusilamientos mientras estaba colgado de un árbol”; “introducción de armas en la boca”; “roturas de nervios como consecuencia de colgamientos”; “desnudo y sumergido en un río”; “negativa de asistencia médica para embarazo”; “fractura de costillas”; “amarrado, vendado, a veces permanentemente, golpeado con un leño, patadas”; “herida con arma de fuego por la espalda en el sitio de reclusión”; “amenaza de traer a sus familiares para torturarlos en su presencia”; “contemplación de las torturas a otras personas”; “hacerlos creer que otros sindicados por los mismos hechos lo habían señalado como participante”; “pinchazos en varias partes el cuerpo con alfileres”; “interrogatorios continuos y escritos obligados en que decía que había participado en el asalto”.²⁹</p>
--	--	---

²⁹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Informe Colombia, 1981, pág. 111, párr. 4.

		Una recomendación en sentido general es que se valoren como línea de actuación institucional que las personas que han sufrido torturas, o tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, y que se presenten a denunciar a las instalaciones de PDDH, son casos que ameritan se les acompañe a la víctima para recibir atención médica, o el reconocimiento médico legal, o bien, que el acompañamiento sea a sede fiscal o policial y que sean dichas autoridades quienes realicen estas acciones.
<p>Derecho a vivir libre de esclavitud y de servidumbre</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 4.- Toda persona es libre en la República.</p> <p>No será esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre</p> <p>1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.</p> <p>2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de políticas de prevención y combate de tráfico y trata de personas para cualquier modalidad de explotación (explotación sexual laboral, explotación sexual laboral, tráfico de órganos, etc.). • Falta de combate de corrupción de autoridades migratorias, policiales, investigativas o judiciales que facilitan el tránsito, la práctica, u obstaculizan la investigación de casos de trata de personas. • Invisibilización de las causas de nuevas formas de esclavitud moderna como la trata de personas para explotación sexual comercial. • Falta de una política criminal para combatir las causas de la trata de personas o cualquier forma de esclavitud moderna. • Falta de proyecto de vida para niños, niñas, adolescentes y mujeres en riesgo de ser víctimas de trata de personas. • Falta o insuficiente protección y atención a víctimas y familiares 	<p>Hay coincidencia y consistencia en los tratados internacionales de derechos humanos y en las Constitucionales nacionales en señalar la erradicación de la esclavitud y de la servidumbre como una norma de jus cogens. En tal sentido, la abolición de la esclavitud es un enunciado universal, tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución de El Salvador y el artículo 6 de la CADH.</p> <p>Sin embargo, hoy existen prácticas conocidas como “formas de esclavitud moderna” facilitadas por la operación de redes internacionales de criminalidad organizada que actúan de manera regional. Este tipo de organizaciones practican todo tipo de explotación del hombre por el hombre, siendo la más común la trata de personas para explotación sexual comercial, pero también para explotación laboral y tráfico de órganos.</p> <p>La trata de personas es una de las peores violaciones a los derechos humanos, de hombres y mujeres, adultos y menores de edad, considerada una forma de esclavitud moderna. Es una práctica que degrada al ser humano convirtiéndolo en un objeto con el que se negocia y trafica. Por ello, el delito de trata de personas consiste en utilizar a una persona con fines de explotación con provecho propio o de un tercero, haciendo uso de la coerción o la limitación de la libertad individual. Es a través de este ilícito que a la persona humana se le convierte en un objeto que puede ser comercializado.</p> <p>El concepto de trata de personas más universalmente reconocido es el contenido en el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), ratificado por El Salvador. Dicho</p>

<p>pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzados, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluso.</p> <p>3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:</p> <p>a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;</p> <p>b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;</p> <p>c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y</p>	<p>de trata de personas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia o insuficiente programa de protección de testigos y víctimas de trata de personas. • Falta de refugios o albergues para asistencia a víctimas de trata de personas. • Falta de implementación de las obligaciones internacionales definidas por el Protocolo de Palermo en materia de tipificación, prevención, cooperación y reparación de los efectos de la trata de personas. • Falta de emisión de normativa para combatir con mayor eficiencia a organizaciones de criminalidad organizada involucradas en la trata de personas. 	<p>instrumento define la trata de personas como:</p> <p>...la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.</p> <p>El <i>Protocolo de Palermo</i> solo hace mención a la trata de personas de carácter internacional. Sin embargo, en El Salvador y en el resto de países de Centroamérica se tipifica también la trata de personas de carácter interno.</p> <p>Hasta ahora, una de las modalidades del delito de trata de personas que más se ha investigado y evidenciado en El Salvador ha sido la explotación sexual comercial (ESC). No obstante, también se encuentran otras modalidades de trata de personas como la explotación laboral.</p> <p>Para el análisis de este delito, y para efectos de estandarización de conceptos y objetivos, la PDDH debe utilizar aquellas pautas o elementos establecidos por los principales instrumentos, tratados y declaraciones vigentes, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el <i>Protocolo de Palermo</i>; • el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (<i>en adelante, el Protocolo a la Convención del Niño</i>) y;
--	--	--

<p>d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.</p> <p>Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).</p> <p>Artículo 3</p> <p>Se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o la prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • la Declaración y Plan de Acción de Estocolmo, 1996.³⁰ <p>También es importante señalar que una de las confusiones más generalizadas es la equiparación de la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes como si fueran sinónimos. La diferencia es importante ya que, aunque todo fenómeno de trata de personas puede llevar implícito el tráfico ilícito de migrantes, no todo tráfico ilícito de migrantes implica trata de personas. El tráfico ilícito de migrantes, conocido también como “coyotaje”, está más relacionado con la gestión de transportar o facilitar la movilización de las personas de un país a otro con cualquier finalidad.</p> <p>El principal papel que corresponde realizar a la PDDH es verificar si el Estado de El Salvador ha hecho todo a su alcance para prevenir y combatir la trata de personas como política pública, lo cual incluye las siguientes actividades que deben ser valoradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existencia de políticas, planes o programas de prevención y combate de la trata de personas y su grado de instrumentación. • Adecuación o no del tipo penal de la trata de personas a los estándares del artículo 3 del Protocolo de Palermo. • Niveles de combate a la impunidad desde la investigación policial y fiscal de casos de trata de personas. • Invisibilización de la trata de personas y dificultades estadísticas. • Análisis de casos investigados, resueltos y sentenciados. • Capacitación y sensibilización a funcionarios con mayor contacto de casos de trata de personas. • Estado de situación de asistencia y protección a víctimas y familiares de víctimas de trata de personas. • Medidas de protección a víctimas y testigos de casos de trata de personas. • Manejo de procedimientos de repatriación a víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.
---	--	---

³⁰ Esta última, respecto a los principales conceptos vinculados con la ESC como una de las formas de trata de personas. También se han considerado instrumentos de la OIT que integran conceptos alrededor de la trata de personas.

<p>Derecho a la libertad personal</p> <p>ARTICULO 4.- Toda persona es libre en la República.</p> <p>No será esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, ...sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ...</p> <p>Toda persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier autoridad o individuo restrinja ilegalmente su libertad.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 10.- La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona. Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Detenciones ilegales y arbitrarias. • Detenciones sin autorización judicial cuando no se está en situación de flagrancia. • Actos para provocar detención durante manifestaciones públicas y pacíficas. • Detenciones por deudas de carácter civil (con excepción de obligaciones alimentarias). • Abuso de la utilización de la prisión preventiva cuando existen garantías suficientes para la adopción de otras medidas cautelares que garanticen la investigación y la realización de la justicia. • Incorrecta aplicación de los cálculos y beneficios penitenciarios que perpetúan la prisión. • Insuficiente profesional o de medios materiales para la elaboración de evaluaciones periódicas psicológicas y sociales de personas privadas de libertad. • Rechazo automático de solicitudes de excarcelación. • Montos de excarcelación desproporcionados en relación con la condición económica de los solicitantes. • Períodos extremadamente largos de fijación de la prisión 	<p>Derecho a la libertad y distintas modalidades de manifestación</p> <p>El derecho a la libertad por sí solo dificulta la aplicación de un manual de quejas porque en materia de derecho no se puede concebir la libertad en abstracto. Siempre se trata de libertad para algo. El derecho a la libertad siempre está vinculado a otro derecho: la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal, etc.</p> <p>Hay varios tipos de libertades. La libertad de acción que es la facultad de todo ser humano de realizar u omitir cualquier conducta sin más restricciones que las establecidas por el derecho.</p> <p>Dentro de esta denominación hay varios derechos, como la libertad de expresión y de asociación, la libertad de religión y de culto, la libertad sexual, la libertad de residencia y otras. Como derechos, estas modalidades de libertad están reconocidas de manera autónoma y así se tratarán en este manual.</p> <p>En este apartado, se analizar la libertad personal, concebida en general por el DIDH como libertad física. Así lo señala el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala:</p> <p>Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal (...)</p> <p>3. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.</p> <p>Por otro lado, la esencia de la libertad personal consiste en el derecho a no ser privado de ella en forma arbitraria o ilegal. Esta concepción puede observarse en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), específicamente en el primer párrafo de su artículo 9:</p> <p>“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”</p>
--	---	---

<p>proscripción o destierro.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 13.- Ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas. Cuando un delincuente sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por cualquier persona, para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente.</p> <p>La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiere practicado.</p> <p>La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término.</p> <p>Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los</p>	<p>preventiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exagerado número de presos sin condena. • Restricción o limitación legal para que determinados delitos no puedan ser susceptibles de sustituir la medida de detención provisional Art. 294 Código Procesal Penal. • No aplicación de beneficios penitenciarios a cierta categoría de detenidos que podrían ser beneficiados con la aplicación del decreto legislativo 445: "Disposiciones transitorias para el otorgamiento de beneficios penitenciarios", en especial los internos adultos mayores de 70 años, e internos que padecen enfermedades terminales. • Falta de supervisión judicial o administrativa adecuada para las personas sometidas a medidas de seguridad. • Falta de supervisión judicial de las condiciones en que se encuentran las personas con otro tipo de restricciones a su libertad personal, como en los casos de víctimas y testigos con medidas extraordinarias de protección (en albergues), o los testigos con criterio de oportunidad que se encuentran en bartolinas policiales. • Negativa de agentes o 	<p>El derecho al restablecimiento de la libertad es el derecho a que se lleven a cabo las conductas necesarias para el restablecimiento de la libertad, cuando ésta haya sido restringida como consecuencia de la realización de un hecho ilícito, una vez que se satisfacen los supuestos previstos por el ordenamiento jurídico.</p> <p>Las detenciones legales</p> <p>La Policía es la institución llamada a ejecutar las acciones de detención de las personas que la autoridad judicial competente ordena detener para efectos de una investigación.</p> <p>La otra modalidad de detención es cuando la Policía captura a las personas en el lugar donde está cometiéndose un delito (<i>flagrancia o delito in fraganti</i>).</p> <p>En otros casos de capturas por denuncias o indicios de comisión de un delito, lo más complejo es valorar los hechos para tener algún tipo de indicio de que se debe proceder a la detención. Más que valorar solo conductas sospechosas, hay que valerse de la observación para identificar objetos que pudieran ser parte de lo sustraído, tipo de vestimenta descrita por las personas denunciantes, etc. En todo caso, cuando se hagan denuncias ante la PDDH relacionadas con detenciones ilegales, se debe verificar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No haya habido motivos razonables para creer que la persona ha cometido un delito. • Que el uso de la fuerza y la detención fueron desproporcionadas en relación con el presunto delito y la sentencia previsible. • No hay peligro de que el sospechoso huya de la escena del delito. • No había riesgo inminente de que la persona cometiera nuevos delitos. <p>También puede suceder que una detención legítima se convierta en arbitraria si la persona que está bajo la custodia policial es sometida a violaciones de sus derechos fundamentales y se le tortura con cualquier fin, o se le obstaculiza su derecho de defensa; lo mismo sucede cuando la detención policial administrativa se extiende más allá del plazo de ley (72 horas).</p>
--	---	---

<p>sujetos que por su actividad antisocial, immoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 14.- Corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas. No obstante, la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el juicio correspondiente, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por quince días o con multa, la cual podrá permutarse por un período igual.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 27</p> <p>...</p> <p>Se prohíbe la prisión por deudas...</p> <p>El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a</p>	<p>funcionarios a proporcionar la ubicación exacta del lugar en que se encuentra detenida una persona, ni la identificación clara de la unidad policial que realiza el arresto.</p>	<p>Hay otro tipo de detenciones que son igualmente ilegales, como las que se hacen de manera generalizada, sin orden judicial y sin indicio alguno de que se haya cometido un delito (redadas o pescas). Así lo determinó la Corte Interamericana en el Caso Servellón y otros contra Honduras (Cuatro Puntos Cardinales). En esa sentencia, la Corte Interamericana estableció que: "93....una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria. 96. Las detenciones programadas y colectivas, las que no se encuentran fundadas en la individualización de conductas punibles y que carecen del control judicial, son contrarias a la presunción de inocencia, coartan indebidamente la libertad personal y transforman la detención preventiva en un mecanismo discriminatorio, por lo que el Estado no puede realizarlas, en circunstancia alguna".</p> <p>Derechos relacionados con la detención</p> <p>Cuando el agente policial detiene legalmente a una persona, debe observar los siguientes derechos para que no se convierta en una detención ilegal o no se violen derechos humanos fundamentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguir los protocolos y procedimientos de detención y de trato adecuado, incluyendo el respeto a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la persona (prohibición absoluta de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes). • Si no hay resistencia manifiesta, debería provocarse un diálogo respetuoso de persuasión para realizar la detención. • Utilizar adecuadamente las esposas y otras herramientas para apoyarse en el sometimiento de la persona que se resiste a ser detenida. • Informar al detenido de las causas de su detención y de sus derechos básicos para que los ejerza: <ul style="list-style-type: none"> ○ Abstenerse de declarar contra sí mismo. ○ Permitir la comunicación con su familia. ○ Permitir la comunicación privada con el abogado de su
---	---	--

<p>los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.</p> <p>2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.</p> <p>3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.</p> <p>4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.</p> <p>5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad</p>		<p>elección o con un defensor público.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ No incomunicarlo totalmente del mundo exterior. ○ Darle alimentación adecuada. <ul style="list-style-type: none"> • Poner a la persona detenida a la disposición de la autoridad judicial competente dentro del plazo de ley (72 horas). • Derecho a un intérprete si la persona detenida no habla español. • Comunicar a la autoridad consular del país de la persona detenida si ésta fuera extranjera (notificación consular). • Si la persona detenida es menor de edad, debe extremarse los cuidados en todos los sentidos, incluyendo el nivel de utilización del uso de la fuerza, someter a la persona sin el uso de esposas y notificar a los familiares inmediatamente y a las autoridades que protegen y tutelan los derechos de las personas menores de edad. <p>Período de detención policial de 72 horas</p> <p>Una persona no puede estar detenida por la Policía por más de 72 horas. Dentro de ese plazo, debe ser puesta a la orden de la autoridad judicial competente para que resuelva sobre su libertad.</p> <p>No le corresponde a la Policía resolver sobre la libertad de la persona detenida, ni sobre la excarcelación ni de la situación jurídica. La detención policial es solamente una transición de la captura o detención inicial hacia la puesta a disposición de la persona al Juez que resolverá sobre la libertad o sobre la determinación de la prisión preventiva. Sin embargo, la regla general es que la prisión preventiva no sea la regla, sino la excepción.</p> <p>Los centros oficiales de detención</p> <p>Tanto las estaciones policiales como otros centros de detención y de prisión (centros penitenciarios), deben tener condiciones adecuadas de seguridad y de limpieza. Entre esas condiciones, deben tener al menos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deben ser lugares oficiales y conocidos. No puede haber lugares secretos o clandestinos de detención. • Deben tener espacio adecuado para alojamiento. • Alimentación apropiada.
---	--	--

<p>podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.</p> <p>6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.</p> <p>7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Salud e higiene. • Atención médica. • Espacio para ejercicio físico. • Agua potable y espacio adecuado para aseo. <p>La vigilancia y control de los lugares de detención por parte de la PDDH.</p> <p>La PDDH tiene dentro de su mandato la posibilidad de visitar todo tipo de centros de detención y elaborar informes de visitas. Lamentablemente, El Salvador todavía no ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención de la Naciones Unidas contra la Tortura para Prevenir la Tortura y los Tratados Crueles Inhumanos y Degradantes (OPCAT), el cual, entre otras cosas, permite al Subcomité para la Prevención de la Tortura hacer visitas no anunciadas a lugares de detención, pero principalmente, impone a los Estados partes la creación del “Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura”.</p> <p>En sus visitas a lugares de detención, la PDDH debe verificar que exista un protocolo de registro y vigilancia de las personas privadas de libertad y del tránsito de personas que les visitan y de las cosas y alimentos que ingresan y salen del lugar.</p> <p>El agente policial debe realizar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llevar un libro de registro de detenciones. • Llevar un libro de visitas. • Llevar un libro bitácora de todo tipo de acontecimientos que ocurren en el sitio con una breve y precisa descripción, fecha y hora y otros detalles que sean útiles. <p>Los disturbios civiles</p> <p>La Policía tiene una activa función en coordinar y garantizar que las personas que ejercen su derecho humano a la libre, pública y pacífica manifestación, lo hagan conforme a la ley. La Policía no puede obstaculizar ese derecho ni oponerse o manifestarse a favor o en contra del contenido de esas manifestaciones.</p>
---	--	--

		<p>En todo caso, ese tipo de eventos puede terminar en violencia por múltiples razones, incluso por la aparición de grupos opuestos a las marchas, o porque la manifestación deja de ser pública y pacífica.</p> <p>La intervención policial para restaurar el orden por los disturbios de esa naturaleza o por cualquier otro disturbio social, como conflictos entre aficionados a equipos deportivos, correligionarios de distintos partidos políticos o cualquier otra situación, debe ser cuidadosa y estratégicamente planificada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El restablecimiento del orden debe ser única competencia de la Policía y no de las Fuerzas Armadas. • Se debe evitar el uso de armas letales y utilizar medios de persuasión, diálogo y técnicas de resolución alternativa de conflictos (RAC). • No pueden realizarse detenciones masivas e indiscriminadas. • Las detenciones legales son solo las permitidas por ley en caso de flagrante delito. • Otras limitaciones a los derechos de las personas deben ser las estrictamente necesarias para restaurar el orden social. • La fuerza será utilizada como último medio luego de que hayan fracasado otros medios pacíficos y persuasivos. • Evitar cualquier tipo de provocación. • Poner en práctica técnicas de control de masas que reduzcan la necesidad de utilizar la fuerza. <p>Adquirir y utilizar armas incapacitantes no letales.</p> <p>Finalmente, debe tomarse en cuenta por la coyuntura que se está viviendo en el país, si resulta acertado y apegado a derechos humanos utilizar a miembros del Ejército en tareas de seguridad pública propias de la Policía.</p>
<p>Prisión por deudas, Prohibición</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 27.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa civil, procesal civil, laboral o de cualquier otra naturaleza que aplique prisión por cualquier tipo de deudas, con la salvedad de las deudas alimentarias. 	<p>La prohibición de prisión por deudas es un enunciado general que establece como única situación pausable de restricción de la libertad la comisión de un delito en flagrancia o la orden judicial en el marco de una investigación penal (prisión preventiva).</p> <p>La prisión por algún tipo de deuda de carácter civil es violatoria del derecho a la libertad, con la excepción de las obligaciones alimentarias, tal y como lo</p>

<p>...</p> <p>Se prohíbe la prisión por deudas...</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal</p> <p>...7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.</p>		<p>dispone el artículo 7 de la CADH. Sin embargo, aún en esos casos, una detención permanente por alimentos pone al obligado en una situación de incapacidad material para cumplir con esa obligación al no poder conseguir un trabajo mientras se encuentre detenido, razón por la cual debe reglamentarse el período de detención por alimentos para permitir opciones de búsqueda de empleo.</p> <p>Cualquier otra modalidad de detención por obligaciones civiles o procesales son contrarias a los artículo 27 de la Constitución y 7 de la CADH.</p> <p>Una recomendación final que deben tener en cuenta los funcionarios de la PDDH es manejar adecuadamente las diferencias jurisprudenciales o doctrinales entre una detención ilegal y una arbitraria.</p> <p>Igualmente, corresponde a la PDDH tener un claro inventario de lugares que se deben visitar donde pueden haber personas privadas ilegal o arbitrariamente de su libertad como bartolinas policiales; testigos y víctimas protegidos en albergues, las víctimas de trata de persona; centro para extranjeros en situación migratoria irregular, hospitales psiquiátricos, etc.</p>
<p>Derecho a libertad de tránsito y de circulación</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 5.- Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca.</p> <p>Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y mediante los requisitos que la ley señale.</p> <p>No se podrá expatriar a ningún</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones ilegales o arbitrarias a la libertad de circulación. • Cambio arbitrario del domicilio o residencia. • Cambio forzado del domicilio o residencia sin justificación legal o de riesgo por razones de eventuales casos fortuitos, fuerza mayor o desastres naturales. • Restricciones ilegales o arbitrarias para entrar, permanecer o salir del territorio nacional o de parte de él. • Restricciones ilegales o arbitrarias a la libre circulación durante manifestaciones 	<p>Es una modalidad de libertad que se refiere a la libertad sin restricción, de movilización, por todo el territorio nacional. Puede estar sujeto a restricciones temporales, como cuando una persona es detenida de manera legal por la comisión de algún delito. Igualmente, se pueden presentar situaciones excepcionales de control del tránsito por motivos de emergencia, catástrofes naturales, guerras o conflictos armados que justifiquen la adopción de un estado de excepción y suspensión de garantías. Así, la libertad de tránsito y circulación es susceptible de ser suspendido temporalmente en casos de emergencia.</p> <p>Los principales desafíos que enfrenta la PDDH en relación con la garantía de este derecho, se le presenta en situaciones de disturbios civiles producto del ejercicio de otros derechos como las manifestaciones públicas y pacíficas. En esos casos, el Estado puede regular la libertad de tránsito y circulación y se supone que el derecho de los manifestantes no puede generar abuso de ese derecho como para obstaculizar de manera absoluta el derecho de circulación de las demás personas que no participan de las manifestaciones.</p> <p>En ese sentido, la PDDH funge como promotora del respeto de ambos derechos</p>

<p>salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia</p> <p>1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.</p> <p>2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.</p> <p>3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.</p> <p>4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.</p>	<p>sociales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criminalización de las manifestaciones sociales mediante amenazas de detenciones ilegales o arbitrarias o de uso de la violencia o fuerza excesiva. 	<p>para lo cual las autoridades competentes deben tener claramente reglamentado los mecanismos para otorgar permisos para manifestaciones públicas y pacíficas y, por otro lado, brindar asistencia policial y seguridad para que esas manifestaciones no obstaculicen el libre tránsito del resto de los ciudadanos y no se generen conflictos o disturbios civiles.</p>
---	--	---

<p>5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.</p> <p>6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.</p> <p>7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.</p> <p>8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.</p> <p>9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.</p>		
<p>Derecho al domicilio</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 20.- La morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Violación al domicilio sin orden judicial legítima. • Desalojos administrativos violentos. • Desalojos ilegales. • Expropiaciones de viviendas sin justificación legal. 	<p>Este derecho está intrínsecamente relacionado con el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, así como a la determinación de su ubicación en el espacio para efectos de ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones.</p> <p>Una particularidad de este derecho es que el domicilio es una opción de las personas a escoger, en el marco de sus posibilidades, el lugar donde habitar. Así, la PDDH puede generar algunas directrices para que este derecho no sea</p>

<p>la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las personas.</p> <p>La violación de este derecho dará lugar a reclamar indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia</p> <p>1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.</p> <p>... 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.</p> <p>4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.</p> <p>...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Expropiaciones de viviendas legales, pero sin indemnización justa. • Desplazamientos del domicilio por razones justificadas sin propuestas de residencias sustitutas dignas y seguras. • Desplazamiento forzado por situaciones de riesgo. 	<p>vulnerado al margen de la ley en las siguientes situaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desplazamiento injustificado. • Desplazamiento justificado por razones de riesgos naturales. • Desplazamiento justificado por razones de conflictos armados y restitución al domicilio al momento de normalización de la situación. • No otorgamiento de permisos de construcción sin justificación válida. • Expropiaciones ilegales y sin justa indemnización. • Situaciones de contaminación bajo control del Estado que obligan a desplazamiento del domicilio (Ver caso Lopez Ostra contra España. Corte Europea de Derechos Humanos). <p>Se sugiere a la PDDH hacer un señalamiento sobre la protección contra desalojos forzados sin las debidas garantías, en especial la observación General N° 7 del Comité DESC. Además, se debe tener siempre presente la posición de la PDDH sobre la ley especial para la garantía de la propiedad o posesión regular de inmuebles, en la cual se afirma que esta ley es violatoria a derechos humanos.</p>
---	--	--

<p>Derecho a la libertad de conciencia, religión y culto</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 25.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 26.- Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad.</p> <p>Artículo 58.- Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, <u>religiosas</u>, raciales o políticas.</p> <p>Artículo 55.- La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exigir o crear condiciones que obliguen a las personas para abstenerse a practicar o congregarse a determinada religión o culto. • Restricciones indebidas a la libertad de profesar una determinada religión o creencias. • Restricciones indebidas a la libertad de reunión, culto o práctica religiosa. • Prácticas discriminatorias en razón de la religión o creencias de las personas que generen cualquier tipo de discriminación social, laboral, empresarial, educativa o para la prestación de servicios sociales. • Ausencia de programas que prevengan o combatan la intolerancia religiosa. • Impedimentos de entrada al país por profesar determinadas creencias religiosas. 	<p>La libertad de religión, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) Art. 18.3, es "La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias (y) estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás."</p> <p>La libertad de creencia no debe confundirse con la libertad de culto. Mientras la primera no admite limitaciones, la segunda está sujeta a restricciones, tal y como se deriva de la transcripción del artículo 18.3 del PIDHP. Resulta, por lo tanto, incorrecto afirmar que la libertad religiosa pueda tener limitaciones "establecidas por la ley".</p> <p>Por el contrario, las restricciones a la libertad de culto deben obedecer a una causa legítima y someterse a principios como el de proporcionalidad, necesidad y no discriminación.</p> <p>Igualmente, la libertad de culto debe ser tan amplia, que también protege a aquellas personas que manifiesten no tener o practicar religión o culto alguno (personas ateas).</p>
--	---	--

<p>observancia de los correspondientes deberes; <u>combatir todo espíritu de intolerancia y de odio</u>; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.</p> <p>2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.</p> <p>3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.</p>		
---	--	--

<p>4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.</p>		
<p>Derecho a la libertad de opinión, pensamiento y expresión.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 6.- Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan.</p> <p>En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumento de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento.</p> <p>No podrán ser objeto de estatización o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interferencias materiales, tecnológicas o de cualquier otra naturaleza ilegal para obstaculizar la libre expresión de ideas y opiniones. • Amenazas o coacción en razón de opiniones públicas o privadas externadas. • Censura previa ilegal e injustificada de opiniones, libros, folletos, películas o cualquier otro tipo de manifestación y expresión. • Obstáculos o restricciones materiales o legales arbitrarias para impedir difusión de ideas. • Establecimiento de impuestos y tasas excesivas a medios materiales que facilitan la libre comunicación de ideas, incluyendo barreras no arancelarias a papel, equipo o material. • Restricciones ilegales o 	<p>El tratamiento jurídico que se le debe dar al derecho de libertad de expresión siempre debe ir acompañado de la conjunción entre lo que entendemos por orden público y derechos individuales y más concretamente, con el derecho a la privacidad. Para ello, es importante transcribir la siguiente cita de la Corte Interamericana:</p> <p>“de ninguna manera podrían invocarse el “orden público” o el “bien común” como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real... Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego...”³¹</p> <p>El bien común exige la mayor cantidad y variedad de información y es el pleno ejercicio del derecho a la expresión lo que la favorece. El régimen de la libertad de expresión por el que optó la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el que menos restricciones tiene entre los sistemas más destacados de protección internacional de los derechos humanos (restricciones que pueden ser legítimas según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o según la Convención Europea de Derechos Humanos, pueden ser ilegítimas en América, por apartarse de la Convención Americana).</p> <p>Esto nos lleva a incursionar en un tema conexo con la libertad de expresión que</p>

31 La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1995. Serie A No. 5.

<p>nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisada, y demás empresas de publicaciones. Esta prohibición es aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios.</p> <p>Las empresas mencionadas no podrán establecer tarifas distintas o hacer cualquier otro tipo de discriminación por el carácter político o religioso de lo que se publique.</p> <p>Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona.</p> <p>Los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma</p>	<p>injustificadas o excesivamente onerosas que obstaculicen o limiten la existencia de medios de comunicación colectiva que requieren de la explotación del espectro radiofónico, televisivo, cablegráfico o de cualquier otro medio tecnológico moderno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancelación ilegal y arbitraria de los derechos de explotación del espectro radiofónico, televisivo, cablegráfico o de cualquier otro medio tecnológica utilizado para la libre circulación de opiniones e ideas. • Criterios arbitrarios e ilegales, o de injustificada aplicación y valoración axiológica para restringir la exhibición de espectáculos públicos. • Restricciones indebidas o falta de cooperación para impedir el acceso a información de carácter público que permita enriquecer las ideas y opiniones. • Penalización y criminalización injustificada de la libertad de opinión. • Desprotección estatal a los periodistas que son coaccionados a restringir o modificar la forma como presentan una nota, en especial cuando la modificación atenta contra la veracidad (Ver lo resuelto por la PDDH en el caso “Sin Censura” (expediente 01- 	<p>es el de la censura previa. El enunciado general es que no es posible que exista ese tipo de obstáculo, ya que se estaría violando el derecho a la libre expresión. Precisamente, de las discusiones y antecedentes que constan en las actas sobre el artículo 13 de la Convención Americana, se desprende el criterio unánime a la prohibición de la censura previa a la libertad de expresión.</p> <p>En general, en relación con la censura previa, que no hay un criterio único en la doctrina jurídica en cuanto a que sea un derecho absoluto. Hay corrientes doctrinales que, por ejemplo, aceptan interdicciones judiciales a la prensa porque consideran que no son censura previa, o bien, porque esté permitida la censura previa en casos de estado de sitio o situaciones de emergencia por estar amenazada la seguridad exterior. En el caso de intervenciones de carácter preventivo como las interdicciones judiciales, la Convención Americana las prohíbe en su artículo 13.2.</p> <p>En la actualidad, es común que se debata sobre la necesidad de establecer mecanismos para ejercer ciertos controles sobre los materiales que van dirigidos al público en general, concretamente, todo lo que guarde relación con espectáculos públicos, para lo cual se ha creado leyes, comités o instituciones de censura que son constantemente cuestionados debido a que, generalmente, aplican cierta forma de censura previa, prohibición de exhibición de películas, límites de edad, etc. Ello podría tener asidero en la preocupación válida para proteger la “salud o moral públicas”, especialmente de los menores y adolescentes, pero el tratamiento debe ser cuidadoso porque dichos términos pueden prestarse para ambigüedades. Por lo demás, en el caso de las personas mayores de edad pareciera que este tipo de restricciones son del todo improcedentes. Así lo determinó la Corte Interamericana en el Caso de la prohibición de la Película “La Última Tentación de Cristo”, contra Chile.</p> <p>Una forma ilegal que se ha utilizado para restringir la libertad de prensa ha sido el recurrir al expediente de vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de materia prima para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de equipo en general para impedir la comunicación y circulación de ideas.</p> <p>Por su parte, también deben eliminarse otros controles ilegales, como podrían</p>
--	---	---

<p>impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.</p> <p>2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:</p> <p>a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o</p> <p>b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.</p> <p>3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.</p> <p>4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos</p>	<p>0214 -03).</p> <ul style="list-style-type: none"> • No crear las medidas legislativas o tomar las medidas de carácter administrativo para investigar y sancionar la apología de la guerra y del odio. 	<p>ser las prácticas monopolísticas privadas en el suministro de materia prima o de equipo esencial para la labor periodística.</p> <p>Tal vez la limitación a la libertad de prensa permitida más contundente es la prohibición de opiniones que constituyan apología de situaciones discriminatorias contra cualquier persona o grupo de personas por motivos de raza, color, religión o nacionalidad, o bien, que se incite al odio nacional, racial o religioso o que se promueva la violencia (Artículo 13.5 CADH).</p> <p>El problema de la libertad de expresión está hoy más candente que nunca, debido principalmente, a los ataques personales recibidos por muchos periodistas en el ejercicio de su trabajo, lo que ha engrosado enormemente la lista de muertes directas por esa causa. Ello ha impulsado iniciativas que van desde la despenalización de los delitos de injurias y calumnias por la prensa cuando el tema es de interés público³², dejando únicamente los juicios civiles para la defensa del honor; hasta la aplicación de la doctrina de la información imparcial, la cual busca la eliminación de la responsabilidad civil cuando la información se basa en una fuente conocida, citada en el artículo y tratada de forma neutral y precisa.</p> <p>Conviene resaltar el trabajo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su opinión consultiva sobre la colegiatura obligatoria.³³.</p> <p>Sin profundizar en los hechos que generaron esa consulta, cabe resaltar las siguientes conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La libertad de expresión tiene dos dimensiones: es un derecho de cada individuo de no ser impedido a manifestar su propio pensamiento e implica, de otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno (Cf. OC-5, párrafo 30). • La expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de divulgación representa,
--	---	--

³² Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en 1995 en el cual determinó que los juicios contra periodistas no son admisibles en el campo penal. (OJO BUSCAR).

³³ *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).*

<p>para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.</p> <p>5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.</p>		<p>directamente, un límite al derecho de expresarse libremente (Cf. OC 5, párrafo 31).</p> <p>La libertad de expresión tiene una dimensión social : es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre seres humanos (Cf. OC-5, párrafo 32).</p> <ul style="list-style-type: none"> • No es admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyan monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista ya que, por el contrario, estos medios deben ser verdaderos instrumentos de la libertad de expresión y no vehículos para restringirla (Cf. OC-5, párrafos 33 y 34). • La legalidad de las restricciones a la libertad de expresión deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo; entre varias opiniones, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido (Cf. OC-5, párrafo 46). • El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y no puede concebirse únicamente como la prestación de un servicio público por medio de una capacitación universitaria o por quienes estén inscritos en un determinado colegio profesional, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión (Cf. OC-5, párrafos 71 y 74). <p>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de su Relatoría sobre la Libertad de Expresión, ha desarrollado una Declaración sobre la Libertad de Expresión y mantiene una agenda de visitas y de veeduría regional cuyos primeros resultados fueron la derogación de los delitos de desacato en varios países de América y se ha enfocado de manera importante en un proceso de despenalización de los delitos contra el honor con éxito muy limitado. Ese debate, sobre la despenalización de los delitos contra el honor, fue puesto en</p>
---	--	---

		<p>discusión en el Caso Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa Rica, en cuya sentencia no se profundizó sobre esa temática. A fin de cuentas, corresponde como parte del <i>jus ponendi</i> de los Estados, determinar el enfoque que se le dará al establecimiento de los efectos ulteriores de responsabilidad por afectación del uso indebido de la libertad de expresión.</p> <p>Este derecho es tan amplio que en El Salvador ha habido un importante avance al reconocerse lo relativo a la libertad ideológica, como un derecho separado pues está referido en especial a un ámbito político (relacionado con el pluralismo).</p> <p>«3. La libertad ideológica consiste, por tanto, en la posibilidad de formarse cada persona su propia cosmovisión, con el conjunto de ideas, conceptos y juicios que cada persona tiene sobre las distintas realidades del mundo y de la vida, tanto en el ámbito político, como cultural, filosófico o científico –entre otros–. La relación de la libertad ideológica con el sistema democrático está más arraigada al configurarse como un derecho bidireccional: por un lado, no sólo es manifestación de una libertad individual, sino que –en tanto colectivizado–, al mismo tiempo es presupuesto o condición de posibilidad y efectividad de los principios democrático y pluralista, al posibilitar la diversidad política y la participación de opiniones diversas en el proceso político. Desde esta óptica, el contenido de la libertad ideológica prohíbe al Estado ejercer toda injerencia o coacción dirigida, bien a mediatizar el proceso de formación de la propia visión del mundo, bien a obtener una declaración del ciudadano sobre sus creencias o, una vez exteriorizadas éstas voluntariamente, toda discriminación o sanción por razón de las mismas; ello sin perjuicio de que puedan sancionarse los comportamientos antijurídicos en sí mismos, pero no en consideración al pensamiento o ideología que los motiva.»³⁴</p>
<p>Derecho a la libertad y acceso a la información</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación arbitraria al acceso de información personal contenida en bases de datos públicos. • Denegación arbitraria de información de acceso público. 	<p>El derecho de acceso a obtener información proveniente de las autoridades del Estado hace parte del principio de transparencia y rendición de cuentas de la función pública. Es por ello que a mayor acceso a la información, mayor transparencia y fortalecimiento de las institucionales democráticas. De otra parte, el acceso a la información debe estar limitado únicamente a aspectos restringidos de seguridad del Estado (secreto de Estado), en la medida en que</p>

³⁴ Sala de lo Constitucional CSJ. Inconstitucionalidad 47-2003, sentencia del diecinueve de abril de 2005.

<p>1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. <u>Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole</u>, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ineficacia del recurso de amparo para obtención de información de acceso público. • Declaratoria injustificada de información pública como “Secreto de Estado” • Incumplimiento de los términos de caducidad de la información contenida en archivos públicos. • Obstáculos innecesarios y requisitos formales excesivos u onerosos para obstaculizar el acceso a información pública. • Omisión de rendición de cuentas como una obligación estatal genérica, especialmente de las instituciones que por vía de mandato de ley están obligadas a rendir cuentas (Alcaldías Municipales (art. 125 y siguientes del código Municipal) y Ministerio de Medio Ambiente (art 25 y 30, de la Ley de Medio Ambiente). 	<p>se ponga en riesgo aspectos básicos en ese tema. Igualmente, otros casos excepcionales para la obtención de información restringida que debido a su naturaleza requerirán reserva, serían los casos específicos de la ley de protección de víctimas y testigos, y el caso de la información obtenida mediante las intervenciones telefónicas, la que incluso debe manejarse con especial cuidado por parte del personal de la PDDH.</p> <p>Cualquier otra restricción es ilegal y debe reclamarse por la vía de amparo constitucional.</p> <p>Igualmente, el acceso a la información es la contracara de la libertad de expresión, tal y como lo ha señalado con extrema claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-5/85: “El artículo 13 [de la Convención Americana] señala que la libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...’. Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas; de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.” (<i>La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos.</i>) Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. párr. 30.)</p>
<p>Derecho de respuesta y de rectificación</p> <p>CP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negativa a rectificar información falsa, engañosa o injuriosa vertida por cualquier medio público o privado. • Inexistencia o ineficacia de 	<p>El caso del derecho de respuesta merece atención especial. Este derecho debe estar regulado para la prensa escrita, la radio y la televisión. Aunque este derecho se encuentra en íntima relación con la libertad de expresión, también debe considerarse tratándose de violaciones al derecho a la privacidad, pues ante una violación a dicho derecho la víctima deberá contar con los espacios</p>

<p>ARTICULO 6.-</p> <p>...</p> <p>Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona...</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta</p> <p>1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.</p> <p>2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.</p> <p>3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.</p>	<p>mecanismos legales para exigir en condiciones de equidad la retractación pública por daños al honor e imagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia o ineficacia de los mecanismos institucionales que garanticen el ejercicio del derecho de respuesta y rectificación. • Incumplimiento de sentencias judiciales que determinan la forma en que se debe publicar la retractación pública, o la publicación de la sentencia en similares circunstancias en que ocurrió la afectación al honor. 	<p>apropiados para aclarar lo que a ella convenga o, incluso, reclamar su derecho a la privacidad frente a intervenciones inapropiadas.</p> <p>En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a la rectificación o respuesta en su artículo 14.1:</p> <p>Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.</p> <p>Es posible reclamar este derecho a partir de la normatividad internacional aplicable en El Salvador.</p> <p>Como contrapartida de la libertad de expresión, el derecho de rectificación o respuesta representa un límite ulterior al abuso que se haga del derecho a expresarse. En vista de que, en principio, la libertad de expresión no está sujeta a censura previa y únicamente a responsabilidades ulteriores, nos encontramos ante la definición de las consecuencias del uso indebido de dicho derecho; es decir, la determinación de responsabilidad, incluso penal, producto del irrespeto a los derechos o a la reputación de los demás, siempre que ello sea debidamente demostrado. La obligación del Estado radica en facilitar los medios de existencia del derecho y del recurso de rectificación y respuesta.</p> <p>En esta fase, los medios de comunicación colectiva juegan un papel muy importante ya que es por medio de ellos que se puede afectar más ampliamente la dignidad de las personas por informaciones inexactas o agravantes y por estar dirigidas al público en general. De ahí que, como consecuencia de la responsabilidad objetiva de las empresas de comunicación, estas deben responder por dichas faltas en forma conjunta con la persona que haya generado la opinión, para lo cual se les obliga a que designen un personero responsable que no esté cobijado con inmunidad alguna para que la protección de este derecho sea efectiva. Independientemente de esta responsabilidad empresarial, que es de orden civil, está la responsabilidad penal del autor de la opinión que ocasiona el perjuicio.</p>
---	--	--

		<p>La mayoría de las legislaciones latinoamericanas parten de que la persona que emitió la opinión supuestamente injuriosa, calumniosa o difamatoria, puede ser eximida de la comisión del delito si logra demostrar que su afirmación es cierta. Es lo que en doctrina penal se ha llamado “<i>exceptio veritatis</i>” o excepción de verdad. El problema que tiene esta excepción es que, en principio, pareciera invertirse el principio de inocencia, ya que el imputado tendría la carga de la prueba de su inocencia.</p> <p>En cambio, a partir de desarrollos jurisprudenciales de los tribunales norteamericanos, se ha esgrimido una nueva corriente que invierte la carga de la prueba, especialmente tratándose de supuestas difamaciones contra <u>funcionarios públicos</u>. En tales casos, es el funcionario público quien debe demostrar que no es cierta la opinión que lo afecta en su reputación. En otras palabras, lo que se busca es generalizar la aplicación de la doctrina llamada “la real malicia”, que quiere decir que, quien se sienta ofendido, tiene que probar que la información no es verdadera y que el periodista lo sabía de antemano. Argentina está a la cabeza de esta evolución jurisprudencial en Latinoamérica.</p>
Derecho al acceso a la justicia	<ul style="list-style-type: none"> Falta de garantías objetivas para que los sistemas administrativos y de justicia puedan resolver las peticiones y demandas que reciban de manera pronta y cumplida. Falta de recursos materiales y humanos para un desempeño eficiente de la administración de justicia en sentido amplio (administrativa y judicial) Falta de independencia y autonomía judicial. Falta de una justicia diferenciada y equitativa a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Retardo injustificado sistemático en la resolución de peticiones. 	El tema de acceso a la justicia ha sido del interés de la comunidad internacional desde siempre, razón por la cual existe una prolífica lista de instrumentos internacionales en la materia, incluyendo tratados, declaraciones y normas de <i>soft law</i> o derecho emergente, que deben ser tomados en cuenta en el trabajo de la PDDH.
		LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
		<u>Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</u> , A.G. res. 34/169, anexo, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) p. 186, ONU Doc. A/34/46 (1979).
		<u>Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley</u> , ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 112 (1990).
		<u>Principios Básicos sobre la Función de los Abogados</u> , ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990).

	<ul style="list-style-type: none"> • Obstáculos en el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. • Ineficiencia e ineficacia de la justicia constitucional, en especial de los recursos de hábeas corpus y de amparo. • Inexistencia o ineficacia de recursos constitucionales para la reclamación y justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales. • Ausencia de políticas de acceso a la justicia que instrumenten una justicia más inclusiva y diferenciada a favor de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. • Tramitación del caso o su resolución por un operador de justicia no independiente ni imparcial (violación de principio de juez natural). • Proceso resuelto por un juez no creado con anterioridad por la ley (jueces especiales). • Presupuesto insuficiente y falta de recursos materiales y humanos para dotar a la Administración de Justicia de los medios suficientes para que exista una justicia pronta y cumplida en todas las materias y con especial énfasis en casos de personas en situación de vulnerabilidad. 	<p><u>Directrices sobre la Función de los Fiscales</u>, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990).</p> <p><u>Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura</u>, ONU Doc. A/CONF.121/22/Rev.1 p. 59 (1985).</p> <p><u>Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)</u>, A.G. res. 45/110, anexo, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) p. 197, ONU Doc. A/45/49 (1990).</p> <p><u>Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias</u>, recomendada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, del 24 de mayo de 1989.</p> <p><u>Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte</u>, E.S.C. res. 1984/50, anexo, 1984 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) p. 33, ONU Doc. E/1984/84 (1984).</p> <p><u>Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder</u>, A.G. res. 40/34, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) p. 214, ONU Doc. A/40/53 (1985).</p> <p><u>Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional</u>, G.A. res. 55/25, annex I, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 44, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001). http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/conventions.html</p> <p><u>Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional</u>, G.A. res. 55/25, annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001).</p> <p><u>Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional</u>, G.A. res. 55/25, annex III, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 65, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001).</p> <p><u>Tratado Modelo de Extradición</u>, G.A. res. 45/116, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 212, U.N. Doc. A/45/49 (1990).</p>
--	---	---

		<p><u>Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos penales</u>, G.A. res. 45/117, anexo, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 215, U.N. Doc. A/45/49 (1990).</p> <p><u>Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia retributiva en materia penal</u>, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 a 35 (2000).</p>
		<p>Hablar de justicia y derechos humanos, no debe ser un debate reservado a foros doctrinarios y filosóficos, sino que debe pasar por un tamiz pragmático para traducir la justicia como valor a justicia como realidad. Esa es la dimensión más realista y ello se puede lograr por medio de lo que conocemos como acceso a la justicia. Precisamente, las perspectivas de reforma y modernización de la administración de justicia en nuestra América resultan fundamentales para que el ciudadano recupere más fe en la justicia, concepto que cada vez lo perciben más distante y abstracto, prácticamente inalcanzable. La responsabilidad de ello, ha sido en buena medida, por la ineficacia e ineficiencia del principal instrumento para la realización de la justicia: el sistema judicial, que debe perfilarse como eje central de la democracia. Obtener seguridad jurídica como corolario de la solución de un conflicto social de cualquier naturaleza, incluyendo la resolución de una petición cualquiera del ciudadano, es un propósito esencial de la naturaleza humana y por ello se presenta como “valor fundante”, es decir el valor que establece las condiciones básicas para hacer posible el cumplimiento del valor superior que es la justicia.</p> <p>Desde esa perspectiva, el Poder Judicial constituye la columna vertebral de ese Estado de Derecho y la manera en que cumple su papel respecto de la necesidad de dar acceso a la justicia a aquellos que e nunca lo han tenido, es su principal desafío</p> <p>La instrumentación de la justicia inicia con el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas sin ningún tipo de distinción. Si esos derechos son irrespetados, entonces debe existir un sistema eficaz para su protección y reclamación, donde su acceso sea amplio y, especialmente, equitativo, donde las personas con recursos más limitados tengan vía preferente para su atención.</p>

		<p>La administración de justicia viene a ser el sistema sobre el que descansan todos los mecanismos jurisdiccionales de solución de controversias entre particulares o entre estos y el Estado, todo ello dentro de un contexto que supone un servicio público en un Estado de Derecho en democracia con respeto a las garantías del debido proceso legal y a todos los derechos humanos vigentes en el país. El acceso a la justicia es la posibilidad de toda persona – independientemente de su condición económica o de otra naturaleza- de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada país, y de obtener atención a sus necesidades de determinación externa de situaciones jurídicas. ³⁵</p> <p>El acceso a la justicia, en general, debería tener un alcance, en términos de cobertura, pero también en calidad y eficacia, que pueda resolver conflictos de toda naturaleza en forma justa, equitativa y pronta. Significa que todas las personas, con independencia de su sexo, origen nacional o étnico y condiciones económicas, sociales y culturales, tengan la posibilidad <i>real</i> de llevar cualquier conflicto de intereses, sea individual o grupal, ante el sistema de administración de justicia y de obtener su <i>justa y pronta</i> resolución por tribunales autónomos e independientes. En forma amplia, el sistema de justicia incluye <i>todas</i> las instituciones y procedimientos establecidos por la sociedad, sean formales, tradicionales o alternativos, para determinar derechos y resolver conflictos, primero en el orden interno y, subsidiariamente, en el orden internacional.</p> <p>El presupuesto del cual se debe partir es que los mecanismos internos de protección y reclamación de derechos, mediante el derecho de petición, funcionen adecuada y eficazmente, que cumplan con su objetivo y que se traduzcan en la realización de la justicia.</p> <p>Se requiere, entre otras cosas, adoptar prácticas de justicia y tener instituciones que rindan cuentas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades, ya que los países solo pueden promover el desarrollo humano para todos sus habitantes, cuando el sistema incorpora la rendición de cuentas y la participación ciudadana.</p>
--	--	---

³⁵ Cf. Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Acceso a la Justicia y Equidad: estudio en siete países de América Latina. José Thompson, coordinador académico. San José, Costa Rica, 2000. pág. 25.

		<p>Uno de estos aspectos que resultan esenciales para el presente marco conceptual es el del tema de la equidad y de la integración social. Se identifica una contradicción entre la construcción de una infraestructura jurídica que en la letra mejora las condiciones de la mujer, niños, niñas y adolescentes, pero que en la práctica, ciertos patrones de crianza y de socialización vulneran y empobrecen a importantes sectores de esta población.</p>
<p>Derecho de petición</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 15.- Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 16.- Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias en una misma causa.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 17.- Ningún órgano gubernamental ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones arbitrarias, ilegales o materiales para impedir el acceso material al ejercicio de acciones legales de cualquier naturaleza y en reconocimiento de los derechos de las personas. • Obstáculos materiales y económicos para que las personas en situación de vulnerabilidad pueden acceder a los sistemas administrativos y judiciales en reclamación de sus derechos. • Inobservancia de cualquiera de las 100 “Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, Aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008. • Retardo injustificado en el proceso. • Inexistencia de defensa legal gratuita en materia penal o en otras materias donde intervengan personas en situación de vulnerabilidad. 	<p>El derecho de petición, entendido como la posibilidad de que toda persona pueda ejercer una acción para reclamar en sede administrativa o judicial un derecho humano determinado, es también el instrumento procesal para pedir y acceder a la justicia. El reto principal es que el derecho de petición de todas las personas trascienda de la mera acción formal, para enfocarse en la calidad de las resoluciones que disponen la solución de un conflicto y su pronta respuesta, todo ello a partir de un parámetro constitucional y convencional dado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dispone:</p> <p><u>Toda persona</u> tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.</p> <p>Debido a su intrínseca relación, debe analizarse el acceso a la justicia y el derecho de petición, junto con el derecho a la protección judicial, los cuales se desarrollan en los apartados siguientes.</p>

<p>En caso de revisión en materia penal, el Estado indemnizará, conforme a la ley, a las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 18.- Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se haga saber lo resuelto.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 19.- Sólo podrá practicarse el registro o la pesquisa de la persona para prevenir o averiguar delitos o faltas.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 8. Garantías Judiciales</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Victimización judicial en perjuicio de víctimas de delito (victimización secundaria). • Obstrucción a la actividad petitoria dirigida a las distintas autoridades del Estado. • Incumplimiento del deber de hacer saber lo resuelto. • Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud. • Respuesta carente de fundamentación o incongruente con lo solicitado. • Restricciones o el impedimento legal a recursos (revisión del fallo). • No contar con asistencia legal en la fase de ejecución de la pena (relacionado a derechos de privados de libertad), 	
--	--	--

<p>formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.</p> <p>...</p>		
<p>Derecho a la protección judicial</p> <p>CP</p> <p>Artículo 11 inciso 2º</p> <p>La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas.</p> <p>Artículo 174. inciso 1º- La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, <u>los procesos de amparo, el habeas corpus</u>, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7ª del Art. 182 de esta Constitución.</p> <p>Artículo 247.- Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de recursos legales efectivos para reclamar violaciones de derechos humanos. • Existencia, pero ineficacia de recursos legales para reclamar violaciones de derechos humanos. • Temor generalizado justificado de abogados y defensores de derechos para tramitar casos de violaciones de derechos humanos. • Leyes de amnistía o impunidad que no permiten investigar casos de violaciones de derechos humanos. • Falta de garantías objetivas del Estado de Derecho que permitan independencia judicial. • Insuficientes recursos materiales y humanos para ejercer una administración de judicial eficiente y eficaz. • Corrupción judicial. • Retardo injustificado en los procesos. • Pérdida de credibilidad en la Administración de Justicia que 	<p>El derecho a la protección judicial se refiere a la existencia de todo un sistema general de garantías para reclamar violaciones a los derechos humanos en el ámbito interno y que normalmente si identifica con la existencia de un recurso sencillo y rápido (recurso de habeas corpus y recurso de amparo), pero también a otros recursos legales donde la reclamación por ese tipo de violaciones sea eficaz. La protección judicial involucra así a la justicia constitucional, pero también los recursos ordinarios y todo el funcionamiento de la administración de justicia.</p> <p>En esa línea, corresponde destacar la facultad constitucional de la PDDH, artículo 194, I, ordinal 4º, de promover recursos judiciales y administrativos para la protección de los derechos humanos; de la Ley de Procuraduría, art. 12, ordinal 1º: velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos y plazos legales en los distintos recursos que hubiere promovido o en las acciones judiciales en que se interesare, y una referencia a los artículos 57 y siguientes, del reglamento transitorio para la aplicación de los procedimientos del sistema de protección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.</p> <p>El principal recurso con el que se identifica la protección judicial en materia de derechos humanos es el recurso de amparo. La PDDH no se dedica a la interposición de recursos de amparo, pero sí puede y debe velar porque esos recursos funcionen de manera eficaz y eficiente, para lo cual es importante el monitoreo sistemático de la justicia constitucional como política de Estado. Para ello, la PDDH debe tomar en cuenta los parámetros del artículo 25 de la Convención Americana que dispone claramente que ese mecanismo es el idóneo para proteger los derechos humanos.</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a un <u>recurso sencillo y rápido</u> o <u>a cualquier otro recurso efectivo</u> ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que</p>

<p>Justicia por violación de los derechos que otorga la presente Constitución. El habeas corpus puede pedirse ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residen en la capital. La resolución de la Cámara que denegare la libertad del favorecido podrá ser objeto de revisión, a solicitud del interesado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 25. Protección Judicial</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.</p> <p>2. Los Estados Partes se comprometen:</p> <p>a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los</p>	<p>limita la interposición de denuncias de parte de las víctimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de auxilio jurídico gratuito para la interposición de recursos legales por violaciones de los derechos humanos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. • Altos costos, tasas o multas para someter recursos de amparo a la justicia constitucional. • Excesiva formalidad de los recursos de amparo. • Restricciones legales basadas en nacionalidad, situación jurídica o la edad para acceder a la justicia, o la excesiva formalidad para dar inicio al trámite, en especial cuando se trata de los recursos para la protección de los derechos reconocidos por la Constitución. 	<p>violan sus derechos fundamentales <u>reconocidos por la Constitución</u>, la ley o la <u>presente Convención</u>, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.</p> <p>2. Los Estados partes se comprometen:</p> <p>a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;</p> <p>b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y</p> <p>c. a garantizar el cumplimiento, por las <u>autoridades competentes</u>, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (subrayado no es del original).</p> <p>Esta garantía es un mandato para que mediante el amparo no solo se protejan derechos constitucionales, sino también <i>todos los derechos humanos reconocidos en tratados y otros instrumentos internacionales vigentes en cada país</i>. Es por lo tanto, una especie de derecho de petición que debe interpretarse en forma amplia, no sólo en la posibilidad de plantear recursos ante la autoridad judicial o administrativa en que se tramita el proceso, sino ante toda oficina judicial en la cual se pueda interponer un recurso.</p> <p>Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo la oportunidad de referirse a ese artículo 25 de la Convención Americana en los siguientes términos:</p> <p>Esta disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.</p> <p>...</p> <p>se encuentra íntimamente ligado con la obligación general</p>
---	--	---

<p>derechos de toda persona que interponga tal recurso;</p> <p>b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y</p> <p>c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.</p>		<p>del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes...³⁶</p> <p>De la lectura del artículo 25 transcrito, podemos sacar los siguientes corolarios, que deben ser respetados por todos los Estados parte en la Convención Americana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El recurso de amparo funciona en doble vía: por un lado, es un derecho en sí mismo. Efectivamente, el recurso de amparo se concibe como un derecho fundamental cuya inexistencia o ineficacia daría al traste con el derecho de petición pero, a su vez, con la posibilidad de garantizar otros derechos humanos. Por ello, no debe tener limitaciones, ni siquiera puede ser un derecho suspendible en situaciones de emergencia, tal y como lo desarrolló la Corte Interamericana al indicar que “los procedimientos de habeas corpus y amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuyas suspensión está vedada por el artículo 27.2 (de la Convención Americana) y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática”.³⁷ • Los derechos a amparar no se limitan al ámbito constitucional. Implica que los Estados deben asumir que los tratados y otros instrumentos internacionales forman parte del llamado “bloque de constitucionalidad” mediante la adecuación de la legislación interna respecto de esos instrumentos. • Todas las personas tienen derecho a ese recurso, pero no como si fuera un derecho de acción simple, sino al resultado de esa acción, que debe, además, ser logrado en forma pronta, eficaz y mediante mecanismos sencillos. • La referencia a “toda persona” es amplia, por lo que no deben establecerse distinciones de ningún tipo, incluso involucra además a personas físicas y jurídicas, nacionales, a extranjeras, inclusive a personas menores de edad; todo con la más amplia expresión del concepto universal de persona.
---	--	---

³⁶ Corte IDH. Caso *Castillo Páez*. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párrs. 82 y 83.

³⁷ Corte IDH. *El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A, núm. 8, párr. 42.

		<ul style="list-style-type: none"> • No necesariamente se refiere a un solo mecanismo de protección, pueden ser varios mecanismos, siempre que sean sencillos, rápidos, pero sobre todo, efectivos. El artículo 25 busca llevar la universalidad de esa protección a todos los procesos, no solo a acciones de garantías como el amparo y el hábeas corpus, sino incluso a los procesos de carácter ordinario, los cuáles deben tener la característica de ser rápidos, efectivos y sencillos. Por ello, dependiendo del caso y de la violación alegada, el recurso a agotar no necesariamente es el amparo, sino que puede ser un proceso ordinario, pero que tenga esas características. • La referencia a que el recurso debe ser resuelto por cualquier autoridad judicial competente es una forma amplia de extender la naturaleza del amparo a todos los procesos donde se involucre una violación de derechos humanos. El artículo 25 de la Convención Americana se ve memado así, e n aquellos países en que sólo se permite conocer y resolver cuestiones de amparo ante un solo tribunal. • El amparo puede ser ejercido por actos violatorios cometidos por cualquier funcionario, de modo que no debe quedar excluido de protección ningún acto de ningún poder público. Se involucra, por tanto, actos administrativos, sentencias, actuaciones por s violatorios provenientes de vía de hecho, etc. • La acción de amparo procede también contra actos de particulares en situaciones especiales que comprometan al Estado, o en forma autónoma, aunque ello no es aplicado así en todos los países latinoamericanos. <p><i>Restricciones y obstáculos al recurso de amparo y al artículo 25</i></p> <p>A pesar de la amplitud con que la Convención Americana describe los parámetros del recurso de amparo, en la práctica, los Estados no siempre han cumplido con la obligación de “desarrollar la posibilidad de ese recurso judicial” en los términos del artículo 25. Algunas de esas restricciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El amparo se ha reducido a una acción judicial y no se le ha implementado como un derecho constitucional que debiera ser tomado en cuenta de manera integral en cualquier tipo de causa judicial. • El amparo debería funcionar para proteger de violaciones a derechos humanos
--	--	---

		<p>de cualquier naturaleza, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales y los llamados intereses difusos, lo cual abre la opción de que se pueda accionar protección por derechos colectivos. La PDDH debe ejercer este tipo de recursos para amparar situaciones de acciones populares.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La exclusión de los actos de amparo contra determinadas actividades del Estado o de ciertas autoridades públicas es otra limitación no comprendida en el artículo 25 de la Convención Americana, el cual tutela esa protección contra cualquier acción pública. • El recurso de amparo debe ser informal, sencillo, sin complicaciones ni exigencias que lo hagan ineficaz, además, debe ser gratuito y puede ser presentado por cualquier persona sin que se necesite el auxilio de un profesional en Derecho. Por supuesto, con el hábeas corpus no solo debe ser lo mismo, sino que hay más urgencia en su resolución por naturaleza del bien jurídico tutelado. Aplicando el artículo 25 trascrito a este presupuesto, la Corte Interamericana desarrolló esas características.
<p>Derecho al debido proceso legal (garantías judiciales)</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 12.- Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.</p> <p>La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Operadores de justicia que tramitan y resuelven los casos sin observar independencia e imparcialidad. • Existencia de jueces especiales en violación del principio de “Juez Natural” (no se refiere a Juzgados especializados que si están legitimados por materia de competencia). • Retardo injustificado en el proceso. • Violación del principio de inocencia en juicio. • Operadores de justicia que prejuzgan o adelantan criterio 	<p>El derecho a un debido proceso legal es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los jueces y tribunales hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de defensa procesal”³⁸ es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro.³⁹</p> <p>El debido proceso legal es “el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera.”, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cf. Corte I.D.H. <i>Caso Genie Lacayo</i>. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 74.</p>

³⁸ *Ibidem*

³⁹ Doctrina que se colige del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

<p>pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca.</p> <p>Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor; quien así las obtuviere y empleare incurrirá en responsabilidad penal.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 8. Garantías Judiciales</p> <p>iv. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la</p>	<p>de manera pública o privada antes de que se emita la resolución judicial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se pone a disposición del imputado que no habla el idioma español, de un traductor o intérprete que lo asista gratuitamente • No se comunica al inculpa do de manera previa y detallada de la acusación formulada en su contra. • No se concede al imputado de los tiempos y medios adecuados para preparar su defensa. • Condena por medio de juicio sumarísimo. • Se obstaculiza al inculpa do el derecho a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección. • Inexistencia o calidad insuficiente de defensores públicos gratuitos. • No se nombra defensores 	<p>El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso.</p> <p>Es también lógico – al ser el proceso penal el medio por el cual se investigan hechos delictivos y muchas veces está de por medio la libertad de las personas– que haya una marcada referencia al debido proceso en los procesos penales, sin que ello desmerite la importancia de otros procesos.</p> <p>En esas circunstancias, hay una notoria especialización en las reglas y garantías en los procesos penales, tal y como se puede observar en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tratamiento que ese tratado le da al debido proceso, está contemplado fundamentalmente en su artículo 8, el cual se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7, el artículo 9,⁴⁰ el artículo 10,⁴¹ el artículo 24,⁴² el artículo 25 y el 27⁴³, todos de la Convención Americana.</p> <p>La Convención Americana desarrolla algunos principios del debido proceso que en ella se anotan o se coligen y que son consecuencia de los sistemas penales y procesal penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un “Xalantismo proteccionista” del ciudadano frente aun poder casi ilimitado y más fuerte que él: el del Estado que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social.</p> <p>Otro aspecto de gran interés, es que violaciones graves al debido proceso legal,</p>
--	--	--

⁴⁰Principio de legalidad y de retroactividad: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."

⁴¹"Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial".

⁴²"Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley".

⁴³ Se refiere a la suspensión de garantías en casos de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte y a las garantías que no pueden ser objeto de suspensión.

<p>ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.</p> <p>iv. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:</p> <p>iv. derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;</p> <p>b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;</p> <p>iv. concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;</p>	<p>gratuitos desde los primeros momentos de la detención o acusación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se impide la inculcado a comunicarse libre y privadamente con su defensor. • Inexistencia de condiciones materiales para comunicación confidencial entre el inculcado y su defensor en lugares de detención. • Se limita u obstaculiza arbitrariamente el derecho del inculcado y su defensor para proponer e interrogar testigos y peritos en juicio. • Inexistencia de medidas de protección de testigos y peritos amenazados en el contexto del proceso. • No se informa ni explica al inculcado de que tiene el derecho a abstenerse a declarar ante una acusación penal y que tiene el derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. • Inexistencia de un recurso integral en materia penal u obstáculos ilegales y arbitrarios para la interposición de ese recurso. • Funcionarios utilizan coacción o amenazas (físicas y psicológicas) para obtener confesiones del inculcado. 	<p>no solo pueden afectar ese derecho en sí, sino otros derechos colaterales como el derecho a la libertad.</p> <p>Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia.</p> <p>Precisamente, una de las críticas más actuales que se hace en relación con la protección de los derechos del imputado queda de manifiesto en el malestar que dichos derechos, y sobre todo el abuso de los mismos para obtener nulidades o atrasos en el proceso, produce en los derechos de las víctimas de los delitos. Actualmente, no es difícil constatar que el papel pasivo que desarrollan las víctimas de un delito dentro del proceso penal, además de impedirle el ejercicio de derecho de petición (artículo 25 de la Convención Americana), constituye una suerte de “victimización secundaria” que le depara perjuicios adicionales a los sufridos como consecuencia del delito.</p> <p>El artículo 8 de la Convención Americana desarrolla extensamente el derecho general a la defensa, tanto en lo penal como en toda materia sancionadora o que pueda desembocar en la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas. El párrafo 1º desarrolla dicho derecho para todo tipo de procesos y los incisos 2º a 5º específicamente para el proceso penal. El derecho general de defensa implica otros derechos, particularmente el de igualdad o equidad procesal (también llamado “igualdad de armas”) y el de audiencia previa. En materia penal contempla, además, los principios de imputación e intimación, así como el derecho a la motivación o fundamentación debida de toda resolución procesal.</p> <p>En lo fundamental, el debido proceso en general, tiene como pilares los principios de audiencia previa y la igualdad de todas las partes procesales para ejercer su derecho de defensa en idénticas condiciones, es decir, mediante el otorgamiento de iguales oportunidades para presentar y analizar pruebas, interponer recursos y presentar observaciones dentro de plazos o términos</p>
--	---	--

<p>iv. derecho del inculpa- do de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;</p> <p>iv. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpa- do no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;</p> <p>iv. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;</p> <p>iv. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se juzga a inculpa- dos nuevamente luego de que habían sido absueltos previamente por los mismos hechos acusados. Se comete “non bis in idem”. • Se obstaculiza la realización de juicios penales públicos. • No se permite a personas menores de edad o a víctimas en situación de vulnerabilidad a que alguna parte del juicio oral se realice de manera confidencial para resguardar su integridad física o psíquica y no se perjudica con esa medida la realización de la justicia. • Inobservancia del principio “nec reformatio in pejus”. • Inobservancia de una decisión fundada, coherente y motivada. • Violación al secreto de la información de testigos y víctimas bajo régimen de protección, o revelar la información obtenida de las intervenciones de las telecomunicaciones ordenadas por autoridad judicial. • Restricciones para optar a medidas sustitutivas a la detención en el proceso penal para cierta clase de delitos. 	<p>iguales para todos.</p> <p>La audiencia previa es vital, en todo tipo de proceso, para que la persona perjudicada tenga la oportunidad de defenderse de los cargos que se le imputan –independientemente de la naturaleza que sean- antes de que se emita una resolución final. La omisión de estas garantías generalmente deviene en nulidad de lo actuado, dependiendo de la gravedad de la omisión.</p> <p><i>La Justicia pronta y cumplida</i></p> <p>El derecho a que la justicia se administre en forma cumplida y prontamente, tiene que ver por una parte, con el “derecho a una sentencia justa”, y por otra, con el desarrollo de la tesis de que la duración excesiva y no justificada de los procesos penales constituye una grave violación del derecho a una justicia pronta, de conformidad con los artículos 8 y 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana.</p> <p>La Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de analizar el principio del plazo razonable, el cual se deduce de los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana. Según dicho Tribunal, tal principio tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente.⁴⁴ Para dichos efectos, y retomando el desarrollo jurisprudencial de la Corte Europea en varios de sus fallos,⁴⁵ la Corte Interamericana ha seguido varios parámetros fundamentales para determinar, si en un caso en concreto, ha habido retardo injustificado o no.</p> <p>De acuerdo con la Corte Interamericana, se deben tomar en cuenta los siguientes tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La complejidad del caso, b) la actividad procesal del interesado y, c) la conducta de las autoridades judiciales.⁴⁶
--	--	---

⁴⁴ Corte LD.H. Caso *Suárez Rosero*. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No 35, párr. 70.

⁴⁵ Ver entre otros, Eur. Court H.R., *Motta* judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; *Ruiz Mateos v. Spain* judgment of 23 June 1993, Series A no. 262.

⁴⁶ Corte LD.H. Caso *Genie Lacayo*. *Op. cit.* párr. 77.

<p>h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.</p> <p>iv. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.</p> <p>iv. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.</p> <p>iv. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.</p>	<p>La complejidad del caso dependerá del número de imputados dentro de una misma causa, la cantidad de delitos que se investigan, la voluminosidad del expediente y el acervo probatorio. Si esas circunstancias se dieran, sería normal que el proceso se prolongara un tiempo más que los procesos normales.⁴⁷</p> <p>En cuanto al segundo elemento (actividad procesal del interesado), es evidente que el procesado tiene el derecho de utilizar todos los recursos que la misma ley dispone a su favor para el ejercicio de su defensa y en resguardo del debido proceso legal. No obstante, un ejercicio abusivo y de mala fe de dichos recursos, o la interposición de recursos inexistentes que evidencie una clara intención de dilatar el proceso y obtener ciertos beneficios indirectos como, por ejemplo, la prescripción de la causa, conducen a que el retardo no sea justificado porque el mismo sería atribuible a su conducta dolosa (a lo que se puede aplicar la máxima "no se puede obtener beneficio de su propio dolo"). Todos esos deberes se imponen a las partes en general y tienen que ver con los principios éticos de acatamiento obligatorio para todo profesional en Derecho y su inobservancia podría acarrear la aplicación de un régimen disciplinario en su contra por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente.</p> <p>Finalmente, el tercer elemento (conducta de las autoridades judiciales), tiene que ver con que el retardo sea producto de la lenta tramitación del proceso en forma dolosa o negligente por parte del juzgador (vg. El no impulsar de oficio el proceso, lentitud en la evacuación de prueba ofrecida por las partes, no dictar sentencia en un plazo razonable cuando los autos se encuentran listos para dicho dictado, etc.). Así, por ejemplo, en el caso <i>Genie Lacayo contra Nicaragua</i>, la Corte Interamericana determinó que el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la parte acusadora no había sido resuelto, no obstante las diversas solicitudes de las partes. Se determinó que "[i]ncluso considerando la complejidad del asunto, así como las excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el plazo de más de dos años que ha [bia] transcurrido desde la admisión del citado recurso de casación no e[ra] razonable y por consiguiente violatorio del artículo 8.1 de la Convención Americana."⁴⁸</p>
--	--

⁴⁷ *Ibid.*, párr. 78.

⁴⁸ *Ibid.*, párr. 80.

		<p>Además de ese caso, en otro asunto (<i>Suárez Rosero</i> contra el Ecuador), se determinó que un proceso termina cuando se dicta la sentencia definitiva y firme, lo cual agota la jurisdicción correspondiente. En materia penal, se determinó que dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. En el caso concreto del señor Suárez Rosero se concluyó que el plazo global del procedimiento interno tardó más de 50 meses, período que excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana. Aunque, no se encontró justificación alguna para que el señor Suárez Rosero estuviera privado de libertad por más de tres años y diez meses cuando o la ley ecuatoriana establecía una pena máxima de dos años para el delito por el cual fue finalmente condenado (delito de encubrimiento).⁴⁹</p> <p>En conclusión, para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso, se deben estudiar las eventuales demoras y sus causas dentro de lo que se ha llamado “ <i>análisis global del procedimiento</i>”. Bajo ese criterio, la Corte Interamericana determinó en el caso <i>Genie Lacayo</i> citado que, aún “<i>cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó la Procuraduría General de la República de Nicaragua para formular acusación ante el juez de primera instancia... realizando el cómputo a partir de [la] fecha en que el juez dictó el auto de apertura del proceso, hasta [el momento] en que todavía no se ha[bía] pronunciado sentencia firme, [transcurrieron] más de cinco años en este proceso, lapso que esta Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad prevista por el artículo 8.1 de la Convención</i>”⁵⁰ (subrayado no es del original).</p> <p>Importancia capital tiene el precedente internacional anterior, máxime que el retardo en los procesos es una constante en los Estados Americanos. Por otra parte, el utilizar como eximente del retardo de un proceso el recargo de trabajo del Poder Judicial o la “congestión de los juzgados penales” –como fue alegado por Nicaragua en su contestación de la demanda en el caso <i>Genie Lacayo</i>–, no libera a los Estados de su obligación internacional de tramitar los procesos con la debida celeridad.</p>
--	--	--

⁴⁹ Cf. Corte ID.H. Caso *Suárez Rosero* Op. cit. párrs. 70-75.

⁵⁰ Corte ID.H. Caso *Genie Lacayo*, Op. cit. párr. 81.

		<p><i>El Debido Proceso en materia penal</i></p> <p>Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y el proceso penal que se genera en la propia naturaleza de este tipo de proceso donde se compromete la libertad personal del imputado. Es allí donde se presentan mayores violaciones a los derechos fundamentales, especialmente, en la etapa investigativa al momento de recopilar la prueba. Si a ello se le suma la carencia de asistencia letrada en esa fase inicial, o si se obstaculiza la comunicación abogado-imputado, tenemos que es aquí donde los derechos procesales desarrollan su máximo potencial como derechos fundamentales.</p> <p>Aunado a lo anterior, están las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de los procesados sometidos a detención preventiva como medida cautelar, ya que en esas circunstancias las violaciones al debido proceso adquieren una sensibilidad mayor. Precisamente, muchos instrumentos internacionales contienen disposiciones sobre el trato dado a las personas detenidas en espera de juicio, entre los que podemos citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, etc. Incluso, en 1990, el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente exhortó a los órganos de las Naciones Unidas a que ayudaran a los países a mejorar las condiciones de la prisión preventiva y a elaborar medidas no privativas de la libertad eficaces como opciones sustitutorias de la prisión preventiva y pidió al Secretario General que apoyara la labor realizada con esa finalidad.⁵¹</p> <p>Las exigencias del principio general del debido proceso se extreman en el campo del proceso penal, en el cual se manifiestan, además de en aquellos principios generales, en los siguientes: el derecho de defensa en sí, el principio</p>
--	--	---

⁵¹ *Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente*, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990. Informe preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas, No. de venta: S. 91.IV.2), cap. I, secc. C, resolución 17.

		<p>de legalidad, el principio de juez regular o natural, el principio de inocencia, el principio <i>in dubio pro reo</i>, el derecho a una sentencia justa, el principio de doble instancia y la cosa juzgada.</p> <p>iv. El derecho del procesado a ser asistido por un traductor o intérprete.</p> <p>La finalidad de esta garantía es que el procesado, ya sea por su elección o en su defecto, por acción gratuita del Estado, tenga la opción de obtener los servicios de traducción en caso de que no comprenda el idioma del juez o tribunal que conoce del proceso.</p> <p>Es palpable que esta asistencia, que debe ser gratuitamente proporciona por el Estado, tiene mayor relevancia en la actualidad como consecuencia de la cada vez mayor comisión de delitos de carácter internacional, como por ejemplo, narcotráfico, trasiego ilegal de órganos, adopciones ilegales, etc., lo cual incrementa el número de extranjeros que puedan estar involucrados en la comisión del delito.</p> <p>ii. (artículo 8.2.b de la Convención Americana) El principio de intimación y de imputación</p> <p>Esta garantía debe analizarse conjuntamente con la contenida en el inciso 4 del artículo 7 de la Convención Americana que establece el derecho de toda persona detenida o retenida de ser informada de las razones de su detención y a ser notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.</p> <p>El principio de intimación es el que da lugar al derecho de todo imputado a ser instruido de cargos; es decir, a ser puesto en conocimiento de la acusación desde el primer momento, incluso antes de la iniciación del proceso contra él, por ejemplo, por parte del Ministerio Público. Es obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, del juez principalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos a todo imputado, mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales; y esto sólo puede lograrse plenamente en presencia personal del mismo imputado, con su defensor.</p>
--	--	---

		<p>El alcance de esta garantía es que toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación vele porque el imputado conozca inmediatamente y de forma comprensible cuáles son sus derechos como acusado. La autoridad debe, por tanto, comprobar que el sujeto realmente ha entendido lo que se le dijo y sobre cuáles son sus derechos previstos en la Constitución y leyes del país y en el Derecho Internacional vigente en el mismo.</p> <p>Además a lo anterior está el principio de intimación, el cual consiste en el derecho del imputado de conocer la causa o el motivo de su detención, así como el funcionario que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra. Esta garantía representa el primer paso para conseguir el ejercicio pleno del derecho de defensa, ya que la única forma de refutar la acusación y la prueba de cargo y de estar en disposición de ofrecer la prueba de descargo, es el conocer con detalle la conducta ilícita que se le atribuye, la prueba en que se apoya y la autoridad que tramita el caso.</p> <p>Lo fundamental de este derecho es que el imputado no sea objeto de detenciones prolongadas, que es el período de tiempo o durante el cual se producen la mayoría de las violaciones de sus garantías procesales y, por otra parte, el que pueda ejercer el derecho de petición contra la autoridad correspondiente en forma inmediata, ejerciendo, por ejemplo, acciones de amparo o hábeas corpus.</p> <p><i>iii. (artículo 8.2.c de la Convención Americana) Concesión del tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa.</i></p> <p>Es la concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios para una adecuada preparación de la defensa, lo cual debe necesariamente valorarse en cada caso atendida su complejidad, volumen etc.</p> <p>Es el derecho del imputado de poder efectuar indicaciones tendientes a la demostración de los hechos en un proceso, ya sea a través de sus declaraciones o mediante instancias procesales oportunas. Ello incluye la facultad de pedir careos, indicar y agregar documentos, señalar testigos y todo aquello que resulte pertinente por medio de la actividad probatoria.</p>
--	--	--

		<p>Si bien un retardo indebido en una causa es una violación clara del proceso como se analizó supra, lo contrario, es decir, un proceso sumarísimo, más que representar una suerte de celeridad, constituye una clara violación al debido proceso por carecer el imputado del tiempo y de los medios para preparar su defensa. Así por ejemplo, en el caso <i>Loayza Tamayo</i>,⁵² la señora María Elena Loayza Tamayo fue puesta a disposición de un Juez Especial de Marina para su juzgamiento –siendo ella civil- el 27 de febrero de 1993 y para el 5 de marzo del mismo año (menos de 10 días después), ya se había dictado sentencia de primera instancia.</p> <p><i>iv. (artículo 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana) Defensa material y defensa técnica</i></p> <p>Es el derecho a defenderse por sí mismo o de ser asistido por un defensor privado o uno proporcionado por el Estado y el derecho irrestricto a comunicarse privadamente con su defensor.</p> <p>La defensa material o privada consiste en el derecho del imputado de defenderse personalmente y la defensa técnica –también llamada pública o formal-, consiste en que el imputado pueda ser asistido por un defensor letrado de su elección, o en su defecto, suministrado por el Estado.</p> <p>Es tal la importancia de la asistencia legal del imputado, que la Corte Interamericana en su opinión consultiva OC-11, calificó la ausencia de esta garantía como una de las excepciones para el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. En esa oportunidad dijo: “...<i>si, por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos internos necesarios para proteger un derecho garantizado por la convención, no puede exigírsele su agotamiento</i>”⁵³</p>
--	--	---

⁵² Corte ID.H. Caso *Loayza Tamayo*.Op. cit. párr. 46.

⁵³Corte ID.H., *Excepciones al agotamiento de los recursos internos* (art. 46.1, 46.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11. Punto resolutivo No. 1.

		<p>Siendo que la defensa técnica, sin restarle importancia a la defensa material, es una garantía latente durante todo el proceso, es fundamental tener como regla que todo imputado tiene el derecho de ser asistido por un profesional letrado desde el primer acto del procedimiento; es decir, desde el momento en que se le informa que será detenido a la orden de la autoridad pública.⁵⁴ Ese primer acto del procedimiento, coincide según la Doctrina, con la primera e imperfecta formulación de la acusación o inculpación formulada por la autoridad judicial⁵⁵ o policial. Precisamente, es por parte de esta última, que es más usual que ocurran violaciones al debido proceso, ya sea mediante la obtención de declaraciones sin la presencia de un abogado o mediante el uso de tácticas intimidatorias.⁵⁶</p> <p>Otra fase procesal que debe ser analizada con detenimiento en esta materia es la etapa judicial de la incomunicación legalmente decretada, durante la cual, no obstante, no deben tener acceso al imputado en ningún caso, la parte acusadora ni las autoridades de investigación. Tampoco puede el aislamiento, en modo alguno, utilizarse para debilitar la resistencia física o moral del imputado para obtener de él pruebas o declaraciones. Las restricciones necesarias que se impongan al acceso del acusado a su defensor, deben ser las mínimas indispensables para lograr el fin único de impedir que su comunicación se utilice para entorpecer la averiguación de la verdad. Además, debe permitírsele siempre la garantía sucedánea del acceso a un defensor público, el cual, sin perjudicar aquéllos fines, vele permanentemente por la garantía de sus derechos.</p>
--	--	---

⁵⁴Lo anterior fue desarrollado ampliamente por la Sala IV de la Corte Constitucional de Costa Rica, en el caso de la Sala IV, con su familia, amigos o abogado, en el momento oportuno, mientras se produce dicha detención... en efectos...". Sala Constitucional de la República de Costa Rica, voto No. 456-92.

⁵⁵Cf. González Álvarez (Daniel), *La Obligatoriedad de la Acción en el Proceso Penal Costamicense: Notas sobre la Función Requirente del Ministerio Público*. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, C.R., 2da. edición, 1992, pág. 52.

⁵⁶Precisamente es en la etapa previa a la investigación judicial, es decir cuando el detenido está en manos de la Policía administrativa, que el imputado se encuentra más vulnerable a la violación del debido proceso y de la garantía de comunicación con un defensor de su elección. Como lo sostiene Thompson, "...es en esta etapa en la que los excesos se producen con mayor frecuencia. El uso de la tortura para obtener pruebas y la imposibilidad de comunicarse con un abogado y, aún con los familiares, no son hechos ajenos a la realidad latinoamericana en la etapa investigativa de lo penal...". Thompson (José), *Op. cit.*, pág. 127.

		<p>La Corte Interamericana ha caracterizado a la incomunicación de la siguiente manera:</p> <p>“es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. Dicho aislamiento debe estar limitado al período de tiempo determinado expresamente por la ley. Aún en ese caso el Estado está obligado a asegurar al detenido el ejercicio de las garantías mínimas e inderogables establecidas en la Convención y, concretamente, el derecho a cuestionar la legalidad de la detención, y la garantía del acceso, durante su aislamiento, a una defensa efectiva.</p> <p>...</p> <p>Una de las razones por las cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido. En efecto, el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles.⁵⁷</p> <p>En el caso concreto del señor Suárez Rosero, el Tribunal Interamericano consideró que la sola constatación de que la víctima fue objeto de incomunicación con el mundo exterior y particularmente con su familia, durante 36 días, le permitió a la Corte concluir que dicho señor fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando quedó demostrado que la incomunicación fue arbitraria.^{58/59}</p>
--	--	--

⁵⁷ Caso *Suárez Rosero*. *Op. cit.* párrs. 51 y 90.

⁵⁸ Continuó manifestando la Corte Interamericana que: "La víctima señaló ante la Corte los sufrimientos que le produjo verse impedida de la posibilidad de buscar un abogado y poder ver o comunicarse con su familia. Agregó que, durante su incomunicación, fue mantenido en una celda húmeda y subterránea de aproximadamente 15 metros cuadrados con otros 16 reclusos, sin condiciones necesarias de higiene y se vio obligado a dormir sobre hojas de periódico y los golpes y amenazas a los que fue sometido durante su detención. Todos estos hechos confieren al tratamiento a que fue sometido el señor Suárez Rosero la característica de cruel, inhumano y degradante." Corte I.D.H. Caso *Suárez Rosero*, *Op.cit.* párr. 91.

<p>Derecho a un debido proceso judicial</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 14.- Corresponde únicamente al Organo Judicial la facultad de imponer penas. No obstante, la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el juicio correspondiente, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por quince días o con multa, la cual podrá permutarse por un periodo igual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Violaciones a principios y reglas básicas del debido proceso legal en materia penal, civil, administrativa, laboral o de cualquier otra naturaleza. • Falta de procuración obligatoria en procesos de familia para personas de escasos recursos o desprotección legal de una de las partes en juicio (Casos en que Procuraduría General sólo asume la defensa de una de las partes). • Ver: Garantías Judiciales. 	<p>Todo lo señalado en el apartado anterior aplica al derecho a un debido proceso judicial en general. Interposición y seguimiento. En particular, la PDDH debe enfatizar en que la complejidad técnica de ciertas acciones constitucionales, establece la obligación del Estado de proporcionar asistencia legal gratuita para su efectiva promoción. Fundamento adicional es la Observación General N° 32, del Comité de Derechos Humanos, sobre el artículo 14, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.</p> <p>Del mismo modo, los costos del proceso, sea éste judicial o administrativo, y la localización de los tribunales, son factores que también pueden redundar en la imposibilidad de acceder a la justicia y en la consecuente violación del derecho a las garantías judiciales. Los órganos del Sistema Interamericano han determinado que un proceso que demande excesivos costos para su desarrollo, vulnera el artículo 8 de la Convención Americana. La Comisión ha expresado sobre el particular que el recurso judicial que se establezca para revisar el actuar de la administración, no sólo debe ser rápido y efectivo, sino también “económico” o asequible.</p> <p>A su vez, el Sistema Interamericano ha comenzado a identificar situaciones estructurales de desigualdad que restringen el acceso a la justicia a determinados sectores de la sociedad. En estos casos, la PDDH debe destacar y verificar la obligación estatal de proveer servicios legales gratuitos y de reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos sectores sociales en situación de desventaja y desigualdad, el acceso a instancias judiciales de protección, y a información adecuada sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales disponibles para su tutela.</p>
<p>Derecho a un debido proceso administrativo</p> <p>CP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Violación del principio de “igualdad de armas”. • Violación del principio de derecho a la defensa previa. • Inobservancia del derecho a ser juzgado por autoridad 	<p>Al margen de las garantías judiciales y el derecho a un debido proceso judicial, la PDDH tiene una agenda igualmente importante en la verificación de la existencia y eficacia del derecho al debido proceso en la esfera administrativa. Es, precisamente en la esfera administrativa, donde se dirime la mayoría de las adjudicaciones de prestaciones sociales. El área de las políticas y servicios</p>

⁵⁹ En un fallo de la Sala Constitucional costarricense se estableció, con mayor rigurosidad, que la incomunicación “no tiene una finalidad relacionada con la investigación policial, solo con la jurisdiccional.. no puede utilizarse para permitir que los encargados de la investigación policial sometan a interrogatorio al detenido, ello transforma la incomunicación en tortura...” Voto No. 789-91.

<p>ARTICULO 14.- Corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas. No obstante, <u>la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el juicio correspondiente</u>, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por quince días o con multa, la cual podrá permutarse por un período igual.</p>	<p>administrativa competente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inobservancia del principio general de derecho a la defensa. • Inobservancia del principio de audiencia previa. • Inobservancia del derecho a asistencia gratuita de un intérprete. • Inobservancia del principio de presunción de inocencia. • Inobservancia de los tiempos y medios para preparar la defensa. • Inobservancia del principio de imparcialidad. • Inobservancia del derecho de recurrir de la resolución en instancias administrativas y luego ante instancia judicial. • Inobservancia de principio <i>non bis in idem</i>. • Inobservancia de principio <i>nec refomatio in pejus</i>. • Inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica. • Inobservancia del principio de oficiosidad. • Inobservancia del principio de economía y celeridad procesal. • Inobservancia del principio de proporcionalidad de la sanción. • Inobservancia del principio de equidad. • Inobservancia del principio de transparencia. • Inobservancia del principio de obtener una decisión debidamente fundamentada. 	<p>sociales no se ha regido usualmente, en su organización y funcionamiento, por una perspectiva de derechos. Por el contrario, las prestaciones se han organizado y brindado mayormente bajo la lógica inversa de beneficios asistenciales, por lo que este campo de actuación de la administración pública ha quedado tradicionalmente reservado a la discrecionalidad política, más allá de la existencia de algunos controles institucionales y sociales.</p> <p>En esta materia, el Sistema Interamericano ha fijado posición sobre la vigencia de las reglas del debido proceso legal en los procedimientos administrativos vinculados a derechos sociales que deben ser tomadas en cuenta por la PDDH. Al mismo tiempo, se ha establecido la obligación de los Estados de establecer reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la esfera administrativa que pudieran fomentar o propiciar el desarrollo de prácticas arbitrarias y discriminatorias.</p> <p>Esos estándares rigen para todo tipo de derechos, pero tienen una vigencia fundamental en la reclamación de derechos económicos, sociales y culturales y en la defensa de derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, derechos de los inmigrantes y derechos vinculados a la protección del ambiente. Así, la Comisión y la Corte Interamericana han establecido que el debido proceso legal debe ser respetado en todo procedimiento tendiente a la determinación de los derechos y obligaciones de las personas.</p> <p>En este orden de ideas, el Estado debe subrayar la necesidad de regular y restringir la discrecionalidad estatal. La Corte y la CIDH han establecido que la labor de la Administración posee límites concretos y que, entre ellos, se encuentra el respeto de los derechos humanos. En cuanto a los casos que involucran a sectores especialmente vulnerables, la Corte IDH ha identificado la necesidad de trazar vínculos entre los alcances del debido proceso legal administrativo y la efectiva vigencia de la prohibición de discriminación.</p> <p>Así, el Sistema Interamericano ha comenzado a identificar los elementos que componen la garantía de debido proceso en sede administrativa. En este sentido, la Comisión Interamericana ha considerado que entre los elementos componentes del debido proceso legal administrativo se encuentra la garantía</p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • No se garantizan adecuadamente protecciones para los denunciantes, o se establecen excesivas formalidades para poder hacer la denuncia en los procedimientos administrativos. • En el caso de los procedimientos administrativos de carácter sancionatorios o sancionadores, que no se utilicen los principios de actuación que informan al derecho penal, sino que se ejerciten usando los principios del derecho común o normas procesales generales del código de procedimientos civiles. En este sentido, se cita lo establecido por la jurisprudencia de la Sala de Constitucional: <p>« En reiteradas ocasiones ha expuesto este Tribunal que al procedimiento sancionatorio son aplicables -en tanto su naturaleza lo permita- los principios y garantías del proceso penal. En este orden de ideas, es ilustrativo señalar que el mismo Código Procesal</p> 	<p>de una audiencia para la determinación de los derechos en juego. De acuerdo con la CIDH, dicha garantía incluye: el derecho a ser asistido jurídicamente; a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, así como para promover y evacuar las correspondientes pruebas. La Comisión Interamericana también ha considerado a la notificación previa sobre la existencia misma del proceso, como un componente básico de la garantía.⁶¹</p> <p>La CIDH y la Corte también han puntualizado, como elementos que integran el debido proceso legal, el derecho a contar con una decisión fundada sobre el fondo del asunto y la necesidad de garantizar la publicidad de la actuación administrativa. Además, se ha resaltado la existencia de un derecho al plazo razonable del proceso administrativo. La Corte IDH ha establecido que un retraso prolongado en un procedimiento administrativo configura, en principio, una vulneración del artículo 8 de la Convención y que a fin de desvirtuar tal desenlace, el Estado debe probar que la demora del proceso se originó en la complejidad del caso o en la conducta de las partes.⁶²</p> <p>Otro elemento de la garantía del debido proceso legal en sede administrativa que ha tenido desarrollo en el SIDH, es el derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas. Al respecto, la CIDH ha determinado que toda norma o medida que obstaculice el acceso a los tribunales, y que no esté debidamente justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8.1 de la Convención. También la CIDH ha avanzado en algunas precisiones sobre el alcance que debe tener esta revisión, al señalar que la justicia debe ocuparse de realizar al menos la supervisión esencial de la legalidad y racionalidad de las decisiones de la Administración, a fin de acatar las garantías consagradas en la CADH.⁶³</p>
--	---	--

⁶¹ El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129.Doc. 4. 7 septiembre 2007. Original: Español, Introducción, párr. 14

⁶² Ibid. Párr.15.

⁶³ Ibid. Párr. 16.

	<p>Penal establece que si las partes tienen defensor o mandatario, las notificaciones serán hechas solamente a éstos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también ellas sean notificadas personalmente.»⁶⁰</p>	
<p>Principio de legalidad</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 8.- Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe.</p> <p>Artículo 15.- Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley.</p> <p>Artículo 86.- El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.</p> <p>Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Violación del principio “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” en materia penal. • Tipos penales normativos abiertos. • Aplicación del derecho penal por analogía. • Adopción de actos administrativos sin que haya una ley que claramente lo autorice. • Decisiones administrativas sin competencia para su adopción en ese ámbito concreto. • Abuso de autoridad. • Extralimitación de funciones públicas. 	<p>El principio de legalidad -“nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” es la regla básica del derecho penal moderno. Se encuentra recogido en el artículo 9 de la Convención Americana, el cual también obliga procesalmente, a ordenar toda la causa penal sobre la base de esa previa definición legal que, en esta materia, excluye totalmente, no sólo los reglamentos u otras normas inferiores a la ley formal, sino también todas las fuentes no escritas del derecho, así como toda interpretación analógica o extensiva de la ley sustancial o procesal. No es ocioso reiterar aquí que el objeto del proceso penal no es el de castigar al delincuente sino el de garantizarle un juzgamiento justo.</p> <p>El principio de legalidad (llamado “legalidad en general”) consiste en el apego al orden jurídico y a la obligación de que los actos de Estado deben estar autorizados por una ley. El derecho a la legalidad, en cambio, se refiere a la legalidad como derecho humano, en tanto que va más allá de la inobservancia de la ley al traer aparejado un perjuicio a los titulares de derechos.</p> <p>No toda violación al principio de legalidad implica una violación a los derechos humanos, así como no toda violación a los derechos humanos implica una violación al derecho a la legalidad.</p> <p>Esta aclaración es necesaria debido a que el alcance de los derechos humanos es más amplio que el principio o el derecho a la legalidad como tales. Hay derechos humanos reconocidos por el DIDH que no han sido incorporados por los Estados parte, situación que sucede típicamente con las reservas a tratados internacionales. Este problema es de suma importancia, ya que los derechos humanos deben ser apreciados no desde el derecho interno, sino desde el DIDH.</p>

⁶⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, 173-M-2000, sentencia del quince de abril de dos mil dos.

<p><u>Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.</u></p> <p>CADH</p> <p>Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad</p> <p>Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.</p>	<p>El Comité de Derechos Humanos de la ONU utilizó el siguiente argumento para ilustrar lo anterior:</p> <p style="padding-left: 40px;">Una detención acorde con la ley puede ser arbitraria. Según el Comité, la detención es arbitraria cuando [...] b) (Se efectúa) [C]onforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y a la seguridad.⁶⁴</p> <p>El derecho a la legalidad implica el derecho subjetivo del particular a no ser víctima de la inadecuada aplicación de las leyes. Por otro lado, para el respeto a este derecho es necesario que la autoridad cumpla con ciertas conductas obligatorias, las cuales pueden consistir en acciones u omisiones.</p> <p><i>La PDDH no es únicamente un órgano de control de legalidad</i></p> <p>Al llevar a cabo la distinción analizada en el apartado anterior, se hace necesario distinguir la función de la PDDH como protectora de los derechos humanos, de un órgano de control de legalidad.</p> <p>Efectivamente, esta característica distintiva es de suma importancia para los funcionarios de la PDDH, ya que el <i>Ombudsman</i> no es un juez y por lo tanto no debe actuar con los formalismos ni las limitaciones de éste. Si lo hiciera perdería su razón de ser y a la vez sería menos eficiente que un órgano jurisdiccional. Al respecto, no puede perderse de vista que las recomendaciones de la PDDH no son vinculantes y, precisamente en ello descansa su fortaleza.</p> <p>Es también pertinente mencionar las disposiciones constitucionales de Procuraduría del artículo 194, I, ordinales 9º y 10º, que establecen el poder emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos Humanos; y Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los Derechos Humanos; y las disposiciones pertinentes de la ley que rige a esta institución, artículo 12, ordinales 4º) Presentar propuestas de anteproyectos de leyes para el avance de los derechos</p>
---	---

⁶⁴ Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, *Caso Alba Pietraroia v. Uruguay*, Comunicación No. 44/1979, Documento de la ONU CCPR/C/OP/1, parr. 76, 1984.

		<p>humanos en el país; y 5º) Promover la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre derechos humanos;</p> <p>El derecho a la legalidad tiene un sentido formal e n cuanto implica la no aplicación o la indebida aplicación de una norma es pecífica al caso. Esta es la dimensión que tiene, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que ésta se refiere al mismo en el sent ido del “derecho aplicable.” ⁶⁵ El derecho a la legalidad implica la aplicación de la ley que corresponde al acto de autoridad, por lo que el mis mo se viola cuando el acto no tiene sustento en ley o se invoca una ley inaplicab le al caso (Magistratura de conciencia).</p> <p>Sin embargo, cuando se violan los derechos de la pe rsona, como ocurre en el caso de una detención ilegal a pesar de que, como su nombre lo indica, dicha detención sea contraria a la ley , lo que en sentido estricto se está violando son los derechos a la libertad y al debido proceso, pero no así el derecho a la legalidad en un sentido formal, puesto que el problema no estriba en que la fundamentación fuese omisa o inadecuada. De no utilizarse el concepto de violación al derecho a la legalidad en el sentido formal apuntado, toda violación a los derechos humanos reconocidos por la ley implicaría una violación al derecho a la legalidad.</p>
<p>Principio de Irretroactividad de la ley CP</p> <p>ARTICULO 21.- Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.</p> <p>La Corte Suprema de Justicia tendrá siempre la facultad para determinar, dentro de su competencia, si</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio. • No aplicación de la ley penal nueva en beneficio de la persona. • Brindar efectos retroactivos en perjuicio de cualquier tipo de normativa. • Aplicación discriminatoria de normativa nueva más favorable. • Creación de leyes para condenar actos específicos ya consumados que no eran delito al momento de su ejecución. 	<p>Este principio se refiere también a la no aplicación, en forma retroactiva, de la ley penal en perjuicio del reo y a la aplicación retroactiva de aquellas leyes penales que sí lo benefician (artículo 9 <i>in fine</i> de la Convención Americana).</p> <p>Esta garantía que en la Convención Americana se establece como que "<i>nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable</i>", es un principio esencial del derecho penal que implica una clara delimitación del "<i>ius puniendi</i>" del Estado, ya que sólo se puede ejercer la potestad punitiva de este cuando la conducta del individuo se encuadre dentro de un tipo penal previamente calificado como delito.</p>

⁶⁵ CADH, Artículo 9.

<p>una ley es o no de orden público.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad</p> <p>Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.</p>		<p>Sobre este derecho, la PDDH ha remarcado la excepcional irretroactividad de ley penal al expresar reiteradamente que el ámbito penitenciario es un “subsistema” del sistema de la justicia penal, integrado por la legislación, la policía, la justicia y las cárceles⁶⁶; por tanto, las legislaciones y disposiciones emanadas de cada uno de estos subsistemas deben estar supeditadas al respecto de este principio.</p>
<p>Indemnización por error judicial CP</p> <p>ARTICULO 17.-</p> <p>...</p> <p>Ningún órgano gubernamental ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos.</p> <p>En caso de revisión en materia penal, el Estado indemnizará, conforme a la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de normativa que permita reclamar reparaciones por la comisión de un error judicial en una investigación penal. • Interpretación restrictiva en la determinación de las reparaciones por error judicial. • Indiferencia o contubernio entre funcionarios policiales o judiciales para obstaculizar investigación de casos de reclamos por error judicial. • Reparaciones inisorias por errores judiciales. 	<p>El debido proceso como garantía fundamental y, especialmente en materia penal, exige que el juzgador y los demás actores involucrados respeten el <i>iter</i> procesal para que el resultado final del proceso se conforme con las garantías mínimas requeridas. De no ocurrir así, las secuelas de la violación al debido proceso pueden tener diferentes efectos, siendo el principal, la anulación de lo actuado en el proceso.</p> <p>Dependiendo del tipo de omisión o violación procesal, la anulación del proceso podría tener como consecuencia, incluso, la no prosecución de un nuevo proceso, como sería el caso de una violación al principio "<i>non bis in idem</i>".⁶⁷</p> <p>Otra situación es el caso del sometimiento a prisión preventiva de una persona imputada de un delito y que posteriormente recupera su libertad, ya sea por sobreseimiento o absolución. Ello plantea la cuestión de si ese imputado tiene derecho a una reparación por el lapso en que estuvo detenido debido al menoscabo sufrido, no sólo en su bien jurídico máspreciado, su libertad, sino</p>

⁶⁶ PDDH, *Informe Anual Junio 2001-Julio 2002*.

⁶⁷ Ver Corte I.D.H. Caso *Loayza Tamayo*. Op. cit

<p>ley, a las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 18.- Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se haga saber lo resuelto.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 19.- Sólo podrá practicarse el registro o la pesquisa de la persona para prevenir o averiguar delitos o faltas.</p> <p>Artículo 235.- Todo funcionario civil o militar; antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y</p>		<p>por las consecuencias económicas de dicha privación (lucro cesante y daño emergente).</p> <p>En términos generales, los tratados internacionales sobre derechos humanos señalan dicha problemática y establecen el derecho a la reparación de aquella persona que se haya visto privada en forma ilegítima de su libertad. La Convención Americana lo estipula en su artículo 10 que dice:</p> <p style="text-align: center;">Derecho a indemnización</p> <p style="text-align: center;">Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de <u>haber sido condenada</u> en sentencia firme por error judicial. (énfasis agregado).</p> <p>No obstante, pareciera que la Convención Americana no alcanza una protección tan amplia como para proteger a aquellos que hayan estado detenidos provisionalmente, sino que requiere que se haya dictado sentencia firme, por lo que en términos generales, primero habría que demostrar el error judicial mediante los procedimientos internos.</p> <p>En cambio, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula la materia con un criterio más amplio en su artículo 9. 5: "<i>toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación</i>". En otros términos, además de comprender los mismos casos de reparación establecidos en la Convención Americana (error judicial), este Pacto permite indemnización al imputado sobreseído o absuelto.</p> <p>Quiere decir que internacionalmente se ha abierto la posibilidad de exigir del Estado la reparación de daños producto de una detención ilegal o por error, situación que obliga a que en los sistemas internos se adecue la legislación para admitir esa posibilidad, tal y como ha ocurrido en algunos Estados.⁶⁸ En todo caso, estando regulada la materia en los tratados internacionales, no cabe duda</p>
---	--	--

⁶⁸ La Constitución Provincial de Córdoba establece en su artículo 42 que, "*en caso de sobreseimiento o absolución, el Estado puede indemnizar el tiempo de privación de libertad, con arreglo a la ley*". Un caso más claro es el del Nuevo Código Procesal Penal de Costa Rica, que establece en su artículo 271 lo siguiente: "*El Estado deberá indemnizar a la persona que haya sido sometida indebidamente, a una medida cautelar por un funcionario público que actuó arbitrariamente o con culpa grave, en los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública... También procederá la indemnización... cuando una persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena demostración de inocencia*".

<p>hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes.</p> <p>Artículo 245.- Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 10. Derecho a Indemnización</p> <p>Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.</p>		<p>que no se puede negar fundamento al derecho a ser reparado en los términos descritos.</p>
<p>Derecho a la verdad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emisión de leyes de amnistía o de similar naturaleza que impiden u obstaculizan el derecho de petición y de acceso a la justicia para investigar cualquier tipo de violaciones graves a los derechos humanos. • Obstáculos políticos o 	<p>A partir de la década de los noventa, y debido a situaciones complejas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, la doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se avocó intensivamente en la necesidad de dar mayor protección a poblaciones víctimas de ese tipo de violaciones producto de conflictos armados o de prácticas genocidas con fines de generar exterminio o escamio. La ausencia de tribunales penales internacionales para determinar la responsabilidad penal de los perpetradores de esos actos impulsó el debate para que desde las Naciones Unidas se fomentara la creación de nuevos tratados e instrumentos que permitieran perseguir esos</p>

	<p>administrativos para que se investiguen violaciones graves de los derechos humanos ocurridas en el pasado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obstáculos para que se conozca la verdad de violaciones graves de los derechos humanos y para la obtención de reparaciones a favor de las víctimas, sus familiares o de tipo psicosocial a los colectivos más afectados. • Omisión e incumplimiento de la autoridad fiscal para investigar casos sometidos a su conocimiento, en especial aquellos relacionados con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada guerra civil. • Actitud estatal expresa o tácitamente declarada de no cumplir con las recomendaciones o resoluciones emitidas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. 	<p>delitos más allá de lo limitada que podía resultar la jurisdicción penal de los países.</p> <p>El primer paso fue reconocer y dar un rango de preocupación universal a aquellas violaciones graves de los derechos humanos que pudieran reflejar una afectación al género humano, donde la víctima de esos deleznable actos fuera no solo la víctima directa, sino la humanidad como un todo.</p> <p>Una vez hecha esa valoración se procedió a identificar y caracterizar los hechos que podían caer dentro de esa categoría que se llamó delitos contra la humanidad o delitos de lesa humanidad. De esa cuenta, las prácticas de tortura, las desapariciones forzadas de personas, el genocidio y cualquier modalidad de exterminio, ejecuciones extrajudiciales y otros actos que impliquen vejámenes colectivos a población indefensa y vulnerable, califican como delitos de esa naturaleza. Eso sí, se estableció un límite para llegar a esa determinación: que esos delitos, para ser reconocidos como de lesa humanidad, debían ocurrir de manera sistemática y no aislada. Una tortura o una desaparición forzada no son en sí mismas delitos de lesa humanidad salvo que se determine que ocurrieron dentro de un cuadro sistemático promovido por el Estado, ya sea por acción o por omisión.</p> <p>La gravedad de esas violaciones es de tal magnitud, que se considera que su infracción implica una afrenta al género humano como un todo. Esa característica universal hace que ese tipo de violaciones puedan ser investigadas por cualquier Estado aunque los hechos no hayan ocurrido en su territorio. Esto con el fin de combatir la impunidad y permitir un espacio de investigación y condena a los responsables en cualquier rincón del mundo, por lo que se ha creado una verdadera jurisdicción penal universal. Además, este tipo de violaciones, por su gravedad, nunca prescriben, lo que facilita su persecución en cualquier momento.</p> <p>Al conjunto de acciones y a su resultado para lograr la investigación, condena y reparación de esas graves violaciones a los derechos humanos se le conoce como derecho a la verdad. Una verdad que no es solo para las víctimas y familiares, sino que se transfiere al dominio de la sociedad, la cual requiere conocer los hechos del pasado, sus causas y las formas de reparar para que no se repitan hechos similares en el futuro.</p>
--	--	--

Incluso “conocer” o “saber” la verdad trasciende de las investigaciones judiciales de casos concretos. Ello ha generado la práctica de crear “Comisiones de la Verdad”, incluyendo la conformada en El Salvador. Esta Comisión tuvo las siguientes características:

Nombre	Comisión de la Verdad
Informe final	“De la locura a la esperanza”
Origen	Acuerdos de México (1991), entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con auspicio de las Naciones Unidas.
Composición	Tres personas designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, oída la opinión de las Partes.
Duración	Plazo de 6 meses + 2 meses de redacción del informe.
Periodo analizado	11 años. Enero de 1980 - Julio de 1991 (Período de enfrentamientos entre el gobierno y el FMLN).
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> Investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. Recomendar las disposiciones de orden legal, político o administrativo que puedan colegirse de los resultados de la investigación. Dichas recomendaciones podrán incluir medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos, así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación nacional. Estas recomendaciones pueden guardar relación con casos específicos, o bien pueden ser de carácter más general.
Facultades	<ul style="list-style-type: none"> Las actuaciones de la Comisión no son jurisdiccionales. Plena libertad para utilizar las fuentes de información que estimara útiles y confiables.

			<ul style="list-style-type: none"> • Facultad para interrogar a los posibles responsables de las violaciones. • Se revelaron los nombres de quienes fueron encontrados responsables de las violaciones 	
		Metodología	<p>Recepción de denuncias y testimonios relativas a violaciones de los derechos humanos de parte de instituciones y entidades gubernamentales, al igual que de víctimas, familiares y testigos, en instalaciones destinadas para ello en todo el país y bajo total confidencialidad.</p> <p>Verificación, comprobación y reexamen de todas las afirmaciones sobre hechos, cotejándolas con un gran número de fuentes cuya veracidad ya hubiera quedado establecida al igual que con fuentes secundarias y pruebas circunstanciales.</p> <p>Se invitó a las Partes a testificar.</p>	
		Hechos a investigar	<p>Graves hechos de violencia, cometidos por ambas partes del conflicto salvadoreño, cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. No obstante el acuerdo de Chapultepec insta a la comisión a poner atención especial a los casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos por parte de la Fuerza Armada.</p> <p>La Comisión investigó dos tipos de hechos:</p> <p>a. Los casos o hechos individuales que, por sus características singulares, conmovieron a la sociedad salvadoreña y/o a la sociedad internacional;</p>	

			<p>b. Casos individuales de características similares que revelan un patrón sistemático de violencia o maltrato cuyo objetivo fue impactar por medio de la intimidación a ciertos sectores de esa sociedad.</p>
		Reparaciones	<p>"Recomendar las disposiciones de orden legal, político o administrativo que puedan colegirse de los resultados de la investigación. Dichas recomendaciones podrán incluir medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos, así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación nacional. Estas recomendaciones pueden guardar relación con casos específicos, o bien pueden ser de carácter más general.</p>

El mandato de la Comisión de la Verdad fue investigar graves actos de violencia ocurridos desde 1980 con el fin de conocer la verdad y recomendar las disposiciones legales, políticas o de naturaleza administrativa para prevenir la repetición de tales hechos y reconducir hacia la reconciliación nacional. Dada la complejidad de la situación salvadoreña, la Comisión de la Verdad dividió sus investigaciones en dos tipos de situaciones: los casos que conmocionaron a la sociedad en su conjunto y los casos de patrones sistemáticos de violencia que intimidaron a la población.

Si bien el informe de la Comisión de la Verdad es ampliamente reconocido y positivamente valorado, se hacen algunas críticas en cuanto a ciertas situaciones no contempladas como la invisibilización de la situación de violencia contra la mujer en el contexto del conflicto armado ⁶⁹ También se alega que la Comisión necesitó más apoyo de las Naciones Unidas, lo que hubiera favorecido una posición más "fuerte posición" con respecto al cumplimiento de sus recomendaciones.

⁶⁹ CUELLAR, Benjamín. *Victims Unsilenced. The Inter-American Human Rights System and Transitional Justice in Latin America. Capítulo El Salvador*. Primera edición en inglés, 2007.

		<p>A pesar de ello, las expectativas suscitadas por el Informe de la Comisión de la Verdad fueron muy amplias. Ello contrastó con la realidad inmediata: un ataque sistemático por parte del Gobierno en el poder desde el momento de la publicación del informe el 15 de marzo de 1993. Como aspecto peculiar, el Informe de la Verdad fue presentado en los Estados Unidos y no en El Salvador, lo que limitó su alcance y efecto en el ámbito nacional. Más grave aún ha sido el combate sistemático que ha hecho el Estado para minimizar su incidencia, en particular, la emisión simultánea de una ley de amnistía emitida solo cinco días después de la emisión del informe.</p> <p>La investigación y la lucha contra la impunidad</p> <p>Al comparar los procesos de justicia transicional en América Latina, El Salvador es uno de los que tiene aspectos más débiles en relación con la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos durante el conflicto armado.</p> <p>Si bien la Comisión de la Verdad recibió el mandato de investigar los graves hechos de violencia producidos desde 1980 con el fin de buscar la verdad, esa asignación no fue posible en el marco de las investigaciones penales debido a la aprobación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, una normativa similar a la que se había expedido en ese momento en otros países de la región, en especial en Argentina, Chile y Uruguay.</p> <p>El aspecto positivo de esta situación fue la rápida reacción que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Ese documento destaca las reacciones negativas de algunos sectores en relación con el Informe de la Verdad, incluyendo la rama ejecutiva, el Ejército y una sección de la Corte Suprema. La Comisión Interamericana cuestionó la Ley de Amnistía sobre la base de que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente en relación con el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos y la obligación de reparar los daños.</p> <p>Sin embargo, la Comisión de la Verdad sí podía investigar las graves violaciones de los derechos humanos desde la responsabilidad de los actores en</p>
--	--	---

	<p>el conflicto armado y dictaminar recomendaciones al respecto. Esas investigaciones fueron hechas en relación con los actos graves o flagrantes cometidos por ambas partes del conflicto (Estado y la guerrilla) y no sólo por un bando. Esta circunstancia condujo a la Comisión de la Verdad a aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.</p> <p>En ese contexto, el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres trabajadoras del Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana (UCA), fue uno de los primeros y más emblemáticos casos investigados por la Comisión de la Verdad. De igual manera, la Comisión investigó otros casos de violaciones sistemáticas como las ejecuciones extrajudiciales e n general, incluyendo masacres de campesinos cometidas por el Ejército (El Mozote) y la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en manos de "escuadrones de la muerte".</p> <p>Todo lo anterior confirma que El Salvador es el país que registra el más bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así como de otras recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció claramente la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la ley de amnistía en ese país.</p> <p>Ley de amnistía</p> <p>La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de conocer el primer caso contra El Salvador relacionado con la aplicación de la ley de amnistía del 27 de octubre de 1987. Es el caso de la Masacre de Las Hojas, cuyos hechos ocurrieron en 1983 y todos sus perpetradores se favorecieron con la aplicación de esa legislación.</p> <p>En su informe de fondo, la Comisión Interamericana dictaminó:</p> <p>Que el Decreto N° 805, aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de octubre de 1987, en la parte pertinente al presente caso, estipula en su artículo 1: "Concédese amnistía absoluta y de pleno derecho a favor de todas las personas, sean éstas nacionales o extranjeras, que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices, en la comisión de delitos políticos o comunes conexos con los políticos o</p>
--	---

		<p>delitos comunes cuando en su ejecución hubieren intervenido un número de personas que no baje de veinte, cometidos hasta el veintidós de octubre del corriente año"; y que, por lo tanto, la aprobación del Decreto de Amnistía, incluso después de haberse dictado una orden de arresto a oficiales de las Fuerzas Armadas, <u>eliminó legalmente la posibilidad de una investigación efectiva y el procesamiento de los responsables, así como una adecuada compensación para las víctimas y sus familiares, de reparación de la responsabilidad civil por el ilícito cometido</u> (subrayado agregado).</p> <p>Desde la emisión de ese informe de la Comisión Interamericana ha sido reiterado su criterio de que ese tipo de normativa no es compatible con los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni con el derecho a la verdad. En otro informe contra El Salvador, referido al asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres ejecutadas por agentes del Estado (Caso Ellacuría y otros),⁷⁰ se reconfirmó ese enfoque respecto de la ley de amnistía, pero se amplió en el sentido de que, a demás de las violaciones al derecho a la verdad y a la petición (artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1), se declaró la violación del artículo 2; es decir, se recomendó la adecuación de la legislación salvadoreña a esos estándares internacionales, lo que no es otra cosa que derogar o desaplicar la ley de amnistía.</p>
--	--	---

⁷⁰ El caso se refiere a la ejecución extrajudicial de Simeón Cañas" en San Salvador. Los sacerdotes jesuitas eran el Rector de la UCA, Padre Ignacio Ellacuría, Padre Segundo Montes, de 53 años, fundador del SCA, y los profesores Amando López, Joaquín López y Celina Mariceth Ramos, que se desempeñaba como cocinera en la residencia, y su hija de quince años, Celina Mariceth Ramos. El Salvador. 22 de diciembre de 1999. <http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm>. Consultado el 20 de diciembre de 2008.

seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la residencia de los jesuitas ubicada en el predio de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" en San Salvador. Los sacerdotes jesuitas eran el Rector de la UCA, Padre Ignacio Ellacuría, Padre Segundo Montes, de 53 años, fundador del SCA, y los profesores Amando López, Joaquín López y Celina Mariceth Ramos, que se desempeñaba como cocinera en la residencia, y su hija de quince años, Celina Mariceth Ramos. El Salvador. 22 de diciembre de 1999. <http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm>. Consultado el 20 de diciembre de 2008.

encia de los jesuitas ubicada en el predio de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" en San Salvador. Los sacerdotes jesuitas eran el Rector de la UCA, Padre Ignacio Ellacuría, Padre Segundo Montes, de 53 años, fundador del SCA, y los profesores Amando López, Joaquín López y Celina Mariceth Ramos, que se desempeñaba como cocinera en la residencia, y su hija de quince años, Celina Mariceth Ramos. El Salvador. 22 de diciembre de 1999. <http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm>. Consultado el 20 de diciembre de 2008.

		<p>Afirmó la Comisión:</p> <p>238. El Estado salvadoreño, en virtud de la actuación indebida de sus órganos de investigación (entre los cuales se encuentra un órgano <i>ad hoc</i> compuesto por militares), acusación y administración de justicia, <u>ha faltado a su obligación de investigar en forma diligente y eficaz las violaciones ocurridas, así como a su obligación de procesar y sancionar a los responsables a través de un proceso imparcial y objetivo como lo exige la Convención Americana</u>. Todo ello afectó la integridad del proceso e implicó una manipulación de la justicia con un evidente abuso y desviación de poder. El resultado es que <u>estos crímenes permanecen hasta el día de hoy en la impunidad ante una evidente denegación de justicia</u>. El Estado ha violado, además, en perjuicio de las víctimas, el derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva establecido en los artículos 1(1), 8(1) y 25 de la Convención Americana.</p> <p>239. Las únicas personas <u>declaradas culpables por los tribunales salvadoreños fueron amnistiadas poco después</u>, mediante la aplicación de la <u>Ley de Amnistía General</u>. Los autores intelectuales que han sido identificados hasta la fecha, es decir los que dieron la orden de matar a los sacerdotes jesuitas, a la señora Ramos y a su hija, pertenecientes al Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña, <u>nunca fueron investigados, procesados ni castigados</u>. Como consecuencia de la sanción de la Ley de Amnistía, <u>el Estado salvadoreño ha violado el artículo 2 de la Convención Americana</u>. Además, a raíz de su aplicación al presente caso, <u>el Estado ha violado el derecho a la justicia y su obligación de investigar, procesar y reparar establecidos en los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención Americana</u>, en perjuicio de los familiares de las víctimas y de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que pertenecían.</p>
--	--	--

240. El Estado salvadoreño ha violado el derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de las víctimas, de los miembros de la comunidad religiosa y académica a la que las víctimas pertenecían, y de la sociedad salvadoreña en su conjunto (subrayado agregado).⁷¹

Como elemento adicional, se incorpora a la sociedad salvadoreña en su conjunto como afectada por la obstaculización del derecho a la verdad. Esto permitió hacer una clara relación, y a la vez distinción, entre lo que es conocer la verdad y el acceso a la justicia para las víctimas y familiares. Se puede saber la verdad, pero no es suficiente si no va correspondida de la posibilidad de establecer la responsabilidad individual de los culpables y reclamar reparaciones, independientemente de la responsabilidad del Estado. Este caso es muy emblemático porque además fue una situación analizada con profundidad en la Comisión de la Verdad. La decisión de la Comisión Interamericana vino a complementar lo que dictaminó aquella Comisión con lo que el Estado debía hacer como una obligación internacional para obtener justicia, lo cual le permitió referirse a la naturaleza y fines de una comisión de la verdad y su distinción con el papel que deben cumplir los órganos ordinarios que investigan y condenan las graves violaciones a los derechos humanos. Sobre estos aspectos diferenciadores, la Comisión Interamericana estableció que:

...pese a la importancia que tuvo la Comisión de la Verdad para establecer los hechos relacionados con las violaciones más graves y para promover la reconciliación nacional, las funciones desempeñadas por ella, aunque altamente relevantes, no pueden ser consideradas como un sustituto adecuado del proceso judicial como método para llegar a la verdad. El valor de las Comisiones de la Verdad es que su creación no está basada en la premisa de que no habrá juicios, sino en que constituyen un paso en el sentido de la restauración de la verdad y, oportunamente, de la justicia...La Comisión de la Verdad para El Salvador dejó en claro que las actuaciones de

⁷¹CIDH. Informe No. 136/99. Caso 10.488. Ignacio Ellacuría y otros. El Salvador. 22 de diciembre de 1999. Párr. 238 ss.
<http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm>. Consultado el 20 de diciembre de 2008.

		<p>ese cuerpo no tenían carácter judicial. Es decir, dicha Comisión no tuvo el carácter de una corte o tribunal y la función judicial quedó expresamente reservada para los tribunales salvadoreños. En consecuencia, dicha Comisión careció de competencia para establecer sanciones o para ordenar el pago de compensaciones en relación con los hechos investigados y establecidos.⁷²</p> <p>Más de 20 años han transcurrido desde que se emitió esa ley de amnistía en El Salvador y más de 16 desde que la Comisión Interamericana la declaró contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Corresponde a la PDDH tener una estrategia sostenida para presionar sobre la derogación de la ley de amnistía o bien hacia su desaplicación para iniciar las investigaciones de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, y cometidos por cualquiera de los miembros de las partes en esa contienda.</p>
<p>Derecho de reunión</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 7.- Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito.</p> <p>...</p> <p>Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones ilegales o arbitrarias para reunirse pública o privadamente. • Restricciones ilegales o arbitrarias a la libre reunión de grupos sociales para la defensa y reivindicación de sus derechos e intereses. • Denegación injustificada de permisos de reuniones públicas y pacíficas. • Excesivos e injustificados requisitos y reglamentaciones para otorgar permisos para reuniones pública y pacíficas. • Manejo arbitrario e injustificado de valoraciones axiológicas sobre la “moral y las buenas costumbres” 	<p>El derecho de reunión hace parte de la libertad de expresión, en tanto permite a todas las personas reunirse de manera pública y pacífica para cualquier fin que no sea prohibido por la ley. La mayor dificultad de presenta cuando el derecho de reunión se ejerce en lugares públicos que pudieran colidir con los derechos humanos de otras personas que no forman parte de esa reunión o manifestación.</p> <p>Este derecho al igual que la libertad de expresión, se encuentran directamente relacionados con el derecho político de participación en los asuntos públicos, especialmente cuando se refiere a las protestas públicas. Como efecto de estas protestas, pueden generarse disturbios civiles donde la PDDH debe monitorear que las acciones de la Fuerza Pública sean las estrictamente necesarias para restituir el orden, incluyendo el uso adecuado de la fuerza, y de manera previa, la persuasión y la negociación.</p> <p>En esos casos, el Estado puede regular la libertad de tránsito y circulación y se supone que el derecho de los manifestantes no puede generar abuso de ese</p>

⁷² CIDH. Informe No. 136/99. Caso 10.488. Ignacio Ellacuría y otros. El Salvador. 22 de diciembre de 1999. Párr. 229, 231.
<http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm>. Consultado el 20 de diciembre de 2008.

<p>CADH</p> <p>Artículo 15. Derecho de Reunión</p> <p>Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.</p>	<p>para impedir u obstaculizar reuniones públicas y pacíficas que cumplan con los requisitos de ley.</p>	<p>derecho como para obstaculizar de manera absoluta el derecho de circulación de las demás personas que no participan de las manifestaciones.</p> <p>En ese sentido, la PDDH funge como promotora del respeto de ambos derechos para lo cual las autoridades competentes deben tener claramente reglamentado los mecanismos para otorgar permisos para manifestaciones públicas y pacíficas y, por otro lado, brindar asistencia policial y seguridad para que esas manifestaciones no obstaculicen el libre tránsito del resto de los ciudadanos y no se generen conflictos o disturbios civiles.</p> <p>En esos escenarios, la PDDH tiene una función adicional que es velar porque en casos de disturbios civiles por reuniones públicas, las fuerzas de seguridad no hagan uso abusivo de la fuerza en perjuicio de las manifestantes o de otras personas involucradas en esos acontecimientos.</p> <p>Otro dilema más complejo en esos escenarios de disturbios civiles donde corresponde a la PDDH una clara definición, es en el no involucramiento del Ejército en la realización de funciones policiales naturales para restablecer el orden en esas circunstancias.</p>
<p>Libertad de asociación</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 7.- Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.</p> <p>No podrá limitarse ni impedirse a una persona del ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación.</p> <p>Se prohíbe la existencia de grupos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones ilegales o arbitrarias para formar o registrar asociaciones, fundaciones u otras modalidades de asociación. • Manejo arbitrario e injustificado de valoraciones axiológicas sobre la “moral y las buenas costumbres” para impedir u obstaculizar la formación, constitución o registro de asociaciones que cumplan con los requisitos de ley. • Establecer por ley o por práctica requisitos o criterios valorativos extraordinarios o discriminatorios para 	<p>La libertad de asociación es una proyección más permanente del derecho de reunión al institucionalizar el objeto de un grupo de personas que decide constituirse en una modalidad de organización reconocida por la ley que incluye desde una asociación de hecho, hasta otras modalidades más formales como fundaciones, asociaciones o cualquier otra figura reconocida por el derecho civil salvadoreño.</p> <p>Le corresponde a la PDDH velar porque la modalidad de asociación que el grupo escoja no sufra restricciones ilegales o irracionales que obstaculicen su funcionamiento, como podría ser la denegación de la inscripción de esa entidad por motivos indeterminados o abstractos al amparo de criterios subjetivos como atentatorios a la “moral” y las “buenas costumbres”.</p> <p>Ese tipo de valores podrían prestarse para descalificar a grupos que se organizan para reivindicar derechos o intereses en función de discriminaciones religiosas, étnicas, por preferencia sexual o de cualquier otra naturaleza. Un precedente de esa naturaleza se produjo en Honduras cuando se prohibió la</p>

<p>armados de carácter político, religioso o gremial.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 16. Libertad de Asociación</p> <p>1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.</p> <p>2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.</p> <p>3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.</p>	<p>obstaculizar la inscripción de asociaciones que reivindiquen derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancelación o suspensión ilegal o arbitraria de la personalidad jurídica de una asociación ya inscrita. • Conminar o generar condiciones para que una persona o un grupo de personas se vean obligadas a formar parte de una asociación determinada, cualquier sea su naturaleza. • Colegiación obligatoria de periodistas para que puedan ejercer su profesión. • Impedir u obstaculizar el retiro voluntario de un miembro de una asociación. 	<p>inscripción de una asociación de "gays" y lesbianas aduciendo las autoridades registrales que sus fines atentaban contra la moral de ese país. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana y el Gobierno de Honduras procedió a allanarse la inscribir esa y otras asociaciones de similar naturaleza que estaban en proceso de inscripción.</p> <p>Pero la libertad de asociación se vincula con otros derechos, especialmente de carácter laboral, como la libertad sindical, donde hay una relación intrínseca, inclusive al momento de determinar violaciones de derechos laborales desde una perspectiva civil (Ver derecho a la libertad sindical). También se relaciona con la libertad ideológica, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad religiosa y las objeciones de conciencia y el derecho de la igualdad.</p> <p>Como recomendación general, el personal jurídico de la PDDH debe tener en cuenta y revisar de forma exhaustiva los requisitos establecidos para el reconocimiento legal de asociaciones de cualquier tipo a fin de evitar que puedan establecerse situaciones discriminatorias en especial cuando se trate de grupos vulnerables. Así, esta situación guarda estrecha relación con el reconocimiento de la personalidad jurídica.</p>
<p>Derecho a la propiedad privada</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 22.- Toda persona tiene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irrespeto a la propiedad privada sin autorización legal justificada. • Expropiación forzosa sin justificar el interés común. • Expropiación forzosa sin pago 	<p>Derecho a la propiedad</p> <p>El derecho a la propiedad es el derecho que tiene toda persona a la disposición, uso y goce de bienes muebles o inmuebles y a disfrutar de las prerrogativas derivadas de una creación artística o un invento industrial, sin interrupciones o</p>

<p>derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre testamentización.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 23.- Se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento. En cuanto a las que no tengan esa libre administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 101.- El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia</p>	<p>de justa indemnización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No reconocimiento de la posesión. • Actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho de propiedad. • Restricciones ilegales o arbitrarias a la tendencia de la propiedad. • Restricciones ilegales o arbitrarias a la libre disposición de los bienes. • Impuestos o gravámenes confiscatorios por tenencia de la propiedad. • Confiscación ilegal de bienes capitales, bonos, certificados bancarios o depósitos de cualquier naturaleza. • Desconocimiento de la propiedad privada en función social. • Omisión al no volver efectivo lo relativo a la reforma agraria, teniendo especial consideración la limitada extensión del territorio salvadoreño para evitar grandes concentraciones de 	<p>privaciones no autorizadas por el ordenamiento jurídico.</p> <p>Por otra parte, deben considerarse otras manifestaciones del mismo derecho como es el caso de la propiedad intelectual en su conjunto (no solamente las obras artísticas). Igualmente debe abarcarse al patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas.⁷³</p> <p>Si bien el derecho a la propiedad puede ser limitado por el ordenamiento jurídico para autorizar “interrupciones o privaciones”, también existen otros límites a la propiedad privada que no quedan comprendidos dentro de estas categorías. Estas limitaciones omitidas tienen que ver, precisamente, con derechos humanos tales como los derechos a la protección del medio ambiente y los derechos en materia de asentamientos humanos, tales como usos, destinos, provisiones y reservas a los predios.</p> <p>Adicionalmente, debe señalarse que no basta con que dichas “interrupciones o privaciones” (o las demás modalidades señaladas) estén “autorizadas por el ordenamiento jurídico”. Toda interrupción o privación debe estar sujeta a una causa o justificación constitucionalmente admisible. Asimismo, las normas constitucionales respectivas deberán estar en armonía con el DIDH.</p> <p>Esta definición básica amerita ser contextualizada en el marco del DIDH.</p> <p>La Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Declaración Americana y la Convención Americana, postulan el derecho humano a la propiedad, incluyendo la propiedad de naturaleza individual. No obstante ello, existe un debate importante en torno a las características que distinguen a este derecho, al grado que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no incluye el derecho a la propiedad.</p>
--	---	--

⁷³ La recientemente aprobada Declaración de los derechos de los pueblos indígenas establece los siguientes derechos: Artículo 26: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Artículo 31: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. (ONU, *Declaración de los derechos de los pueblos indígenas*, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007).

<p>digna del ser humano.</p> <p>El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 102.- Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social.</p> <p>EL Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.</p>	<p>propiedades para una sola persona y el histórico despojo de indígenas y campesinos de sus medios naturales de producción.</p>	<p>Ciertamente todo manual pretende erigirse en un instrumento útil de consulta y no en un foro de discusiones académicas. Sin embargo, conviene que quienes hagan uso del manual conozcan el debate teórico al respecto, pues este conocimiento podría ser determinante al momento de efectuar una ponderación entre derechos. Esto ocurriría, por ejemplo, en el caso de un conflicto entre el derecho a la propiedad y los derechos a la protección del medio ambiente.</p> <p>Asimismo, es pertinente remitir a la distinción que establece Luigi Ferrajoli entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales:⁷⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mientras que los derechos fundamentales son universales, en la medida en que toda persona es titular de los mismos, los derechos patrimoniales son exclusivos de algunas personas. 2. "Los derechos fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles, personalísimos. En cambio, los derechos patrimoniales [...] son derechos disponibles por su naturaleza, negociables y alienables".⁷⁵ 3. Los derechos patrimoniales se originan en un acto contractual o en actos unilaterales con los mismos efectos, como una donación, mientras que los derechos fundamentales encuentran su fundamento en la norma misma. 4. Los derechos patrimoniales obedecen a una relación de tipo horizontal, esto es, entre particulares (o regidas por las mismas reglas que aplican a particulares), mientras que los derechos fundamentales se centran en las relaciones entre los particulares y el Estado. <p>Sin pretender entrar en el debate relativo a la violación de los derechos humanos por los particulares, discusión que es amplia y profunda, es prioritario hacer una aclaración para efectos de este Manual. En caso de que la paz sea quebrantada por parte de un grupo armado o de cualquier particular, la PDDH debe analizar, en primera instancia, la actuación del Estado frente al hecho. Es el Estado el que tiene la obligación de garantizar el derecho a la paz de la población. Debe</p>
---	--	---

⁷⁴ Luigi Ferrajoli, *Derechos y garantías. La ley del más débil*, Madrid, Trotta, 1999, pp. 45-50.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 47.

<p>Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley.</p> <p>El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 106.- La expropiación procederá por causas de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización.</p> <p>Cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública o cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser previa.</p> <p>Cuando justifique el monto de la indemnización que deba reconocerse por los bienes expropiados de conformidad con los incisos anteriores, el pago podrá hacerse a plazos, el cual no excederá en conjunto de quince años, en cuyo caso se pagará a la persona expropiada el interés bancario correspondiente. Dicho pago deberá</p>		<p>tenerse en cuenta, como se ha mencionado previamente, que el Estado puede ser responsable tanto por acción como por omisión ante dicha obligación.</p>
---	--	---

hacerse preferentemente en efectivo.

Se podrá expropiar sin indemnización las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos.

Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescindibles.

CADH

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

- 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
- 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
- 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

<p>Derecho a la igualdad y a la no discriminación.</p> <p>ARTICULO 3.- Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión...</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 24. Igualdad ante la Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trato diferente por cualquier motivo con el objeto de menoscabar derechos u oportunidades a personas por su condición religiosa, étnica, migratoria, de edad, de género, preferencia sexual o de cualquier otra naturaleza. • Ausencia de políticas, planes o programas para prevenir y combatir la discriminación en todas sus modalidades. • Favorecer a determinadas personas en el otorgamiento de derechos sin respetar procesos o evaluación de requisitos y atestados en perjuicios de otras que tengan mayores calificaciones (se exceptúa de estos casos la práctica de acción afirmativa a favor de personas en situación de vulnerabilidad). • Práctica de invisibilización de un grupo vulnerable determinado frente al reclamo de sus derechos. • Omisión de establecer acciones afirmativas razonables reclamadas por un grupo determinado, como ejemplo la ley de cuotas para promover la 	<p>El derecho a la igualdad es un enunciado universal que está contenido en la mayoría de las constituciones y en los tratados de derechos humanos de carácter general. La igualdad es una expectativa jurídica de recibir idéntico trato que el resto de los miembros de una clase lógica de pertenencia, de conformidad con lo establecido por el derecho y sin interferencias originadas en la consideración de criterios no relevantes.</p> <p>Los instrumentos internacionales suelen remitirse a la igualdad de determinados grupos (o clases), como los de “hombres y mujeres”, y la aplican a ciertos ámbitos, como el de los derechos civiles y políticos (Art. 3 del PIDCP). Si bien dichos instrumentos no aportan una definición propiamente dicha de lo que es la igualdad, sí se han elaborado consideraciones con matices jurídicos, éticos, políticos y filosóficos, como las siguientes:</p> <p>La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.⁷⁶</p> <p>Lo que sí hace el DIDH es definir la discriminación como límite negativo de la igualdad. En este sentido el DIDH ha identificado diversas modalidades de discriminación, así como los parámetros objetivos sobre los que recae la misma y los efectos que produce en perjuicio de las personas.</p> <p>Las modalidades apuntadas consisten en toda distinción, restricción, exclusión o preferencia,⁷⁷ mientras que los parámetros objetivos, de acuerdo con el Pacto</p>
---	--	---

⁷⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización*, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A, No. 4, párrafo 55.

⁷⁷ Estas cuatro modalidades se enlistan en diversos documentos, como en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Art. 1).

	participación de la mujer en asuntos públicos.	<p>Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Derechos Humanos, comprenden los motivos de raza, religión, opiniones políticas o de cualquier índole posición económica, nacimiento o cualquier otra con respectivamente). La Convención Internacional sobre las Formas de Discriminación Racial, (CEDR), agregó Posteriormente otros instrumentos han agregado los civil (Convención sobre la eliminación de todas las contra la mujer); ⁷⁸ impedimentos físicos (Convención sobre los Derechos del Niño); origen étnico, nacionalidad, edad, patrimonio sobre la Protección de los Derechos de Todos los Tr sus Familias), y la “denegación de ajustes razonables Derechos de las Personas con Discapacidad). Finalmente precisan los siguientes resultados negativos de la menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en los derechos humanos y libertades fundamentales en económica, social, cultural o en cualquier otra esfera (CEDR).</p> <p>En cuanto al derecho a la igualdad, de igual forma a la asociación, corresponde hacer una recomendación a los funcionarios de la PDDH para que al recibir un caso afectado este derecho, se tenga en consideración que desigual proviene no solo por acciones particulares funcionarios públicos basándose en ideas subjetivas por medio de la misma legislación y otras prácticas administrativo. Ejemplo de ello es establecer como sangre para detectar VIH/SIDA, las políticas de ingreso Civil y el Ejército sobre personas con discapacidad sexual diversa (LGBTI); establecer requisitos como ingreso de derechos o su reclamo (exceptuando el derecho al algunos cargos públicos), etc.</p>	<p>Convención Americana sobre color, sexo, idioma, , origen nacional o social, dicción social (Art. 26 y 1, e la Eliminación de Todas a el linaje y el origen étnico. siguientes motivos: estado formas de discriminación sobre los Derechos del Niño) o (Convención Internacional abajadores Migratorios y de es” (Convención sobre los nte, en el DIDH se discriminación: “anular o condiciones de igualdad, de las esferas política, era de la vida pública” (Art. 1,</p> <p>que lo expuesto en el derecho n de carácter general a los en que se pueda considerar e la discriminación o trato de los empleados o prejuiciosas, sino también estatales en el ámbito requisitos exámenes de ingreso de la Policía nacional y personas con orientación acionalidad para el ejercicio voto y el derecho a optar a</p>
--	--	--	--

⁷⁸ Esta Convención reconoce que la “discriminación contra la mujer” puede presentarse en cualquier esfera pública y no únicamente en ámbitos de control directo por parte del Estado (artículo 1).

contra la mujer” puede presentarse en cualquier esfera

pública y no únicamente en ámbitos de control directo por

parte del Estado (artículo

		<p><i>El principio de igualdad y no discriminación.</i></p> <p>El artículo 3 de la Constitución de El Salvador establece lo siguiente:</p> <p>“Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión...”</p> <p>Es prácticamente un enunciado general suponer que el derecho a la igualdad, representado por el principio universal que dice que “todos somos iguales ante la ley”, es una regla absoluta. Ciertamente, un ideal de la sociedad es que algún día alcancemos ese nivel de igualdad, pero lo cierto es que no todos somos iguales y no todos queremos ni necesitamos las mismas cosas. En una sociedad determinada, hay colectivos de personas que tienen características y necesidades diversas, incluso formas distintas de ver, entender y percibir el mundo (la cosmovisión), la naturaleza y su espiritualidad. Esa diversidad es lo que precisamente enriquece a un país cultural y socialmente.</p> <p>Sin embargo, por razones meramente discriminatorias e históricas y, en todo caso, injustificadas, se han construido políticas por acción u omisión, que discriminan en perjuicio de las personas que se consideran diferentes, perjudicándoles en el acceso a todo tipo de servicios y oportunidades. Particularmente, los colectivos que se ven afectados con prácticas discriminatorias son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, personas indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y los “gays”, lesbianas y “trans”.</p> <p>Siendo así, el principio de igualdad y no discriminación por razones de sexo, edad, raza, religión, o por cualquier otra falsa excusa, debe entenderse como una forma de eliminar esos sesgos haciendo referencia a un principio derivado del derecho a la igualdad: el derecho a la equidad: “darle a cada quien lo suyo de acuerdo a sus necesidades”, tal y como se ha entendido siempre la idea de la justicia distributiva aristotélica.</p> <p>En ese sentido, el instrumento jurídico a utilizar para revertir los procesos históricos de discriminación es lo que se conoce como “acción afirmativa”, la</p>
--	--	---

		<p>cual normalmente se manifiesta mediante leyes, políticas públicas, planes o programas que permitan que esas personas discriminadas sin justificación alguna, puedan tener acceso a servicios u oportunidades para alcanzar un balance en la diferencia. Muchas veces se les llama leyes de "igualdad real" y se manifiestan mediante "cuotas" de acceso a puestos públicos, a servicios, a oportunidades, etc. y se pretende que sean medidas temporales, que no pueden mantenerse inveteradamente y que desaparecerán cuando se alcance realmente un nivel aceptable de igualdad entre todas las personas sin ningún tipo de discriminación.</p> <p>Le corresponde a la PDDH analizar la existencia o inexistencia o implementación o falta de implementación de políticas, planes o acciones afirmativas a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.</p>
Derecho a reparación por violaciones a los derechos humanos.	<ul style="list-style-type: none"> • Obstáculos al derecho de petición y reclamación por daños y perjuicios por violaciones graves a los derechos humanos. • Impunidad para investigar, procesar, condenar y reparar por violaciones de derechos humanos. • Leyes de amnistía que obstaculizón investigaciones y reparaciones de derechos humanos. • Omisión en resolver peticiones reparatorias. 	<p>El derecho de petición tiene como efecto inmediato resolver un conflicto por violaciones de derechos humanos y, a su vez, las reparaciones como consecuencia de esas violaciones.</p> <p>Las resoluciones administrativas o judiciales buscan establecer la responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos. Quiere decir que, en materia de derechos humanos, siempre debe haber como sujeto activo de la acción, un individuo al cual se le considera violado uno de esos derechos humanos.</p> <p>En caso de que una instancia administrativa o judicial establezca en una decisión que ha habido responsabilidad estatal, se podría determinar en el mismo fallo, la fijación de las reparaciones correspondientes en favor de la parte lesionada o bien, condenar en abstracto y dejar para otra etapa procesal, la determinación y fijación de dichas reparaciones.</p> <p>Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos contemplado en la Convención Americana, recoge ese principio fundamental del Derecho Internacional en el artículo 63.1 que es la disposición aplicable en materia de reparaciones. Dicho numeral establece lo siguiente:</p> <p>1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en</p>

		<p>el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.</p> <p>Esa reparación, en la medida de lo posible, consistirá en la restitución plena o <i>restitutio in integrum</i>, que no es otra cosa que restablecer la situación anterior a la violación y la reparación de las consecuencias que produzca. No obstante, esa no es la única forma de reparar una violación a los derechos humanos, porque puede haber casos en que no proceda la <i>restitutio in integrum</i> o no sea suficiente o adecuada.</p> <p>Pero la responsabilidad objetiva del Estado puede ir aún más allá de los actos de sus agentes. Es posible que el aparato estatal actúe de manera tal que la violación quede impune o no se restablezca a la víctima en sus derechos al haber tolerado que particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en detrimento de los derechos humanos reconocidos en la Convención.</p>
DERECHOS POLITICOS		
<p>Derecho al voto</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 72.- Los derechos políticos del ciudadano son :</p> <p>1º Ejercer el sufragio;</p> <p>...</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 73.- Los deberes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación arbitraria o no expedición oportuna de documentos electorales. • Obstaculización material para ejercer el sufragio. • Exclusión injustificada de ciudadanos del padrón electoral. • Poca o insuficiente información a los ciudadanos sobre los procesos para obtener los documentos de identidad y de los procedimientos para ejercer el voto. • Inexistencia de condiciones que garanticen la libre expresión de ideas y de la voluntad para emitir el voto. 	<p>Los derechos políticos deben verse desde tres vertientes complementarias: Ejercicio del derecho al voto, el derecho a ser elegido y la participación política. Cada uno de esos escenarios tiene barreras y obstáculos legales y/o materiales y estructurales que deben ser identificados por la PDDH para instar a las instituciones competentes para su remoción.</p> <p>Por otra parte, corresponde a la PDDH identificar y denunciar situaciones de discriminación de las minorías en el ámbito de lo que debería ser una participación política efectiva.</p> <p>De todas esas situaciones, la más compleja podría ser la de la falta de formulación de una política de participación de todos los sectores en los principales temas de Estado, así como la incorporación de normativa y prácticas de acción afirmativa.</p> <p>Esas limitaciones han generado la búsqueda de espacios de representación de</p>

<p>políticos del ciudadano son :</p> <p>1º Ejercer el sufragio;</p> <p>...El ejercicio del sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta popular directa, contemplada en esta Constitución.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 77.- Para el ejercicio del sufragio es condición indispensable estar inscrito en el Registro Electoral, elaborado en forma autónoma por el Concejo Central de Elecciones, y distinto a cualquier otro registro público.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 78.- El voto será libre, directo, igualitario y secreto.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 23. Derechos Políticos</p> <p>1. Todos los ciudadanos deben</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entorpecimiento de la confidencialidad del voto. • No generar condiciones para que las personas privadas de libertad puedan ejercer el voto en los respectivos recintos penitenciarios con resguardo de las condiciones de seguridad. • Escrutinio de votos no independiente ni transparente. • Incumplimiento de horarios para emisión del voto. • Registro o patrón electoral desactualizado. • Patrón electoral manipulado. • Obstáculos para que observadores nacionales e internacionales puedan supervisar el proceso electoral. • Restricciones abusivas a las concentraciones y la propaganda en los tiempos autorizados por la ley. • Condicionamiento al derecho al trabajo (despidos basados por determinada orientación política). • Intervenciones abusivas en teléfonos personales a horas inadecuadas. • Omisión de actuación judicial en casos de denuncias por violencia política. 	<p>hecho con riesgos de situaciones de disturbios civiles. Hoy, más que nunca, se hace necesaria la creación de instrumentos constitucionales de veeduría y control político para evitar los riesgos de un malentendido derecho a la "sublevación".</p> <p>Le corresponde a la PDDH promover los más amplios espacios de participación política en general y, de manera particular, a favor de las minorías. Para esos efectos, debe tener en cuenta los siguientes estándares internacionales:</p> <p>A. La Declaración Universal de los Derechos Humanos protege el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país y su derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (Artículo 21). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce también el derecho de todos los ciudadanos, sin distinción de ningún orden, a participar en los asuntos públicos, votar, ser elegidos y tener acceso a las funciones públicas (Artículo 25).</p> <p>En relación con las minorías, el artículo 2 de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas, religiosas y lingüísticas dispone que:</p> <p>"...2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública.</p> <p>2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación nacional.</p> <p>3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y mantener sus propias asociaciones..."</p> <p>Complementariamente, el Grupo de Trabajo sobre las Minorías, en su comentario acerca de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, observó que "el derecho de participar en todos los aspectos de la vida de la sociedad</p>
---	---	--

<p>gozar de los siguientes derechos y oportunidades:</p> <p>... b) de votar ...en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y</p> <p>... 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.</p>		<p>nacional en general es fundamental, tanto para que las personas pertenecientes a minorías promuevan sus intereses y valores, como para crear una sociedad integrada pero pluralista basada en la tolerancia y el diálogo (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2, párr. 35.</p> <p>Aspectos que la PDDH debe observar:</p> <p>Le corresponde a la PDDH en este ámbito de promoción y protección de los derechos políticos atender los siguientes elementos básicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La identificación de las dificultades y los problemas que afectan el ejercicio del derecho al voto de todas las personas y, en especial, el de las minorías. Esos obstáculos incluyen problemas de inscripción de nacimientos, obstáculos en la emisión de documentos de identidad, manipulación de los padrones electorales, inseguridad al momento de las elecciones, fraudes electorales, etc. En lo que respecta a minorías, esas dificultades aumentan en razón de su invisibilización y la exclusión política en partidos políticos tradicionales, pero también en contextos específicos como falta de representatividad en los partidos políticos, dificultades de ejercer el voto de personas privadas de libertad, etc. • La determinación de buenas prácticas y de peores prácticas en relación con la participación política en general y de las minorías, en especial. • Obstáculos y dificultades para que personas pertenecientes a minorías puedan ser elegidas y representar los intereses de sus colectivos, tanto dentro de partidos políticos tradicionales como en las instituciones de gobierno. <p>Otras variables a verificar por parte de la PDDH son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinación de los efectos de la discriminación en la participación política de las minorías. • Promover la representación verdadera y apropiación representativa de las minorías en la formulación de políticas y adopción de decisiones de interés público. • Obstáculos a la participación política de las minorías, denegación
--	--	--

		<p>discriminatoria de la ciudadanía, derecho al voto, requisito de conocimiento del idioma para inscribirse en el registro electoral, ubicación de los lugares de votación, falta de educación y analfabetismo para comprender el fenómeno político y la oferta electoral, falta de implementación de lenguaje braille y de otros lenguajes para personas sordomudas y no videntes, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de instituciones u órganos que hacen frente a los obstáculos a la participación de las minorías en la vida política. • Revisar la función de los partidos políticos tradicionales y la forma de asegurar una representación adecuada de grupos excluidos como mujeres, indígenas, gays, lesbianas y transexuales, etc. • Promover el reconocimiento de partidos políticos, asociaciones, grupos de presión de las minorías para garantizar su participación política al margen de los partidos políticos tradicionales (Ver caso Yatama contra Nicaragua en el que la Corte Interamericana solicita al Estado reformar el Código Electoral para permitir la inscripción de otras organizaciones indígenas distintas a los partidos políticos). • Aplicación de acción afirmativa en la determinación de cuotas, escaños y otros mecanismos para dar representación a las minorías. • Promoción de la autonomía cultural y de autogestión. • Promover la cultura de participación política de los niños, niñas y adolescentes con visión de construcción de capacidades al momento en que puedan ejercer el derecho al voto y una participación más activa en gobiernos estudiantiles y locales. <p>Debe hacerse hincapié de la interrelación de los derechos en especial en época electoral donde pueden verse afectados otros derechos, limitaciones a la reunión (restricciones abusivas a las concentraciones y la propaganda en los tiempos autorizados por la ley), trabajo (despidos basados por determinada orientación política), derecho a la intimidad (por intervenciones abusivas en teléfonos personales a horas inadecuadas), acceso a la justicia (cuando la autoridad deja de actuar en casos de violencia política).</p> <p>Respecto a la participación política, se debe utilizar lo dispuesto por la PDDH en sus informes electorales, en especial el derecho a la participación de los asuntos públicos:</p>
--	--	--

		<p>« Est a Procuraduría considera que la genuina democracia de las elecciones, por tal motivo es necesaria la c fomenten la participación permanente de todos los a del país. Por ello, la ciudadanía debe tener la opo relevante en los asuntos que conciemen a toda la s participación en los asuntos públicos debe ser un d ámbitos comunitarios hasta nacionales y ante todas Al respecto, el Consejo Centroamericano de Procurad Humanos ha reconocido que el ejercicio pleno de la político, forma parte integral y medular de la doct por ser el mandato mayoritario del pueblo y que con legitimidad como obligación política.</p> <p>Esta Procuraduría ha sostenido que la concreción de traduce “en el ejercicio amplio de la participació cabildos abiertos, consultas públicas, sesiones púb legislativos o municipales, planes de trabajo y pr participativo en su discusión y elaboración, comité todos aquellos mecanismos que fomenten la libre par civiles, son ejemplos de mecanismos de participació deberían ser potenciados para establecer mayores ni país. Los procesos electorales constituyen un momen política de un país en la medida en que la particip y promueve la democracia.</p> <p>Sobre el ejercicio de los derechos políticos esta participación ciudadana debe ir mas allá de ejercer elecciones, o la posibilidad de ser candidato o mie debe necesariamente pasar por el reconocimiento con la participación directa o por medio de representan una amplia reforma legal, que establezca mecanismos participación efectiva de los ciudadanos y que aseg ciudadana sea tomada en cuenta en los diferentes ni institucional.» ⁷⁹</p> <p>3-Tener en especial consideración para el análisis</p>	<p>no se agota en el día reación de mecanismos que ctiores sociales y políticos rtunidad de jugar un papel ociedad y por ende, la erecho cotidiano desde los las autoridades del Estado.</p> <p>ores de Derechos democracia como sistema rina de los derechos humanos, ello, se prevalece la</p> <p>los derechos políticos se n política”, por lo que los licas de los organismos esupuesto con enfoque s de desarrollo local, en fin ticipación en organismos n directa y participativa que veles de democracia en el to fundamental en la vida ación de la ciudadanía fomenta</p> <p>Procuraduría considera que la el voto el día de las mbro de un partido, y esto stitucional, del derecho a tes en los asuntos públicos, y que fomenten la uren que la opinión veles de decisión</p> <p>de estos derechos las</p>
--	--	--	--

⁷⁹ Informe Electoral 2009 de la Procuraduría para la 12-13.

		<p>reformas que en el ámbito electoral han sido señaladas como necesarias por esta Procuraduría, en varios informes electorales y desde diversas ópticas:</p> <ul style="list-style-type: none">-La reforma de la conformación del Tribunal Supremo Electoral, para no tener representación directa de los partidos políticos mayoritarios entre los magistrados.-La conformación de concejos municipales plurales-Impulsar el voto de los salvadoreños que residen en el exterior-La implementación total del voto residencial-Ley de partidos políticos que contribuya a la democracia interna de los partidos políticos y la rendición de cuentas de los mismos.
<p>Derecho a ser elegido</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 72.- Los derechos políticos del ciudadano son :</p> <p>...</p> <p>3º Optar a cargos públicos, cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 73.- Los deberes políticos del ciudadano son :</p> <p>...</p> <p>2º Cumplir y velar porque se cumpla</p>	<ul style="list-style-type: none">• Obstáculos ilegales o discriminatorios para que personas determinadas no puedan someter su nombre a elección.• Imposibilidad de que indígenas puedan participar en procesos electorales conforme a sus estructuras tradicionales (se les obliga a constituirse en partidos políticos).• Intimidación o amenazas a candidatos.• Exclusión o expulsión arbitraria de candidatos.• Cancelación ilegal de partidos políticos.• Establecimiento de requisitos irracionales o discriminatorios para inscripción de partidos políticos.	

<p>la Constitución de la República;</p> <p>3º Servir al Estado de conformidad con la ley.</p> <p>...</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 23. Derechos Políticos</p> <p>1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:</p> <p>a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;</p> <p>b) de... ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y</p> <p>c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.</p> <p>2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,</p>		
---	--	--

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.		
<p>Derecho a acceder a cargos públicos en condición de equidad</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 72.- Los derechos políticos del ciudadano son :</p> <p>...</p> <p>2º Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos;</p> <p>3º Optar a cargos públicos, cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de leyes de acción afirmativa que establezcan cuotas de participación dentro de los partidos políticos o para acceder a cargos públicos en condición de equidad. • Trato discriminatorio para el nombramiento de cargos públicos. • Requisitos subjetivos, irracionales o discriminatorios para optar a cargos públicos. 	
Derecho a participar en la dirección e asuntos públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Obstaculización a funcionarios y funcionarias para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. • Restricciones arbitrarias para obstaculizar a ciudadanos participar de actividades políticas. • Restricciones u obstáculos a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para participar en la discusión de asuntos de interés para la colectividad. 	

DERECHOS DE SEGUNDA GENERACION (DESC)

<p>Derechos económicos, sociales y culturales. Progresividad y no regresividad.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 26. Desarrollo Progresivo</p> <p>Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política pública para la realización de los DESC. • Falta de provisión de recursos materiales y humanos para satisfacer necesidades básicas relacionadas con DESC. • Desconocimiento legal de los DESC como derechos exigibles, justiciables y reclamables. • Obstáculos para la interposición de recursos de amparo para reclamar violaciones de DESC. • Falta de planificación y de proyección adecuada del presupuesto nacional para garantizar los DESC. • Errónea justificación de líneas presupuestarias para garantizar la mayor cantidad y calidad de DESC. • Falta de políticas de acción afirmativa a favor de las personas en situación de vulnerabilidad para un mayor logro, ventajas y beneficios diferenciados respecto de los DESC. 	<p>Ver Derecho a la vida digna y su relación con otros DESC.</p> <p>En los últimos años, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos han enfatizado en la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, siendo el principal avance, la aprobación del Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, lo cual permite a su Comité conocer peticiones individuales.</p> <p>En el ámbito interno, el principal desafío es desarrollar las posibilidades del recurso de amparo como medio de reclamación más directo para la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC, independientemente de los derechos civiles y políticos.</p> <p>En el caso de la PDDH, no hay duda de que una de sus principales funciones es proteger los DESC desde una visión integral e interrelacionada con los derechos civiles y políticos y desde un enfoque holístico que permita la mayor protección colectiva posible.</p> <p>El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido la necesidad de delinear principios y estándares sobre los alcances de los derechos al debido proceso judicial y a la tutela judicial efectiva, en casos que involucren la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. Esos estándares no sólo tienen un importante valor como guía de interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para los tribunales nacionales, y la misma PDDH, sino que pueden contribuir a mejorar la institucionalidad de las políticas y servicios sociales en los países americanos, y a fortalecer los sistemas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, así como los mecanismos de participación y vigilancia social de las políticas públicas en esta materia. Para profundizar sobre esos estándares, ver: El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129.Doc. 4.7 septiembre 2007 .Original: Español)</p> <p>La PDDH debe profundizar en un primer aspecto del derecho de acceder a la</p>
--	--	--

		<p>justicia en materia de derechos sociales: económicos o financieros en el acceso a los tribunales, la obligación positiva del Estado de remover esos obstáculos para garantizar un efectivo derecho a ser oído por un tribunal. De esta manera, numerosas cuestiones vinculadas con el efectivo acceso a la justicia -como la disponibilidad de recursos y los costos del proceso- resultan asuntos de inestimable valor instrumental para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, es común que la desigual situación económica o social de los litigantes se refleje en una desigual posibilidad de defensa en juicio.</p> <p>Tanto la Corte Interamericana como la Comisión han fijado la obligación de proveer en ciertas circunstancias servicios jurídicos gratuitos a las personas sin recursos, a fin de evitar la vulneración de su derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. La Comisión Interamericana ha identificado algunos criterios para la determinación de la procedencia de la asistencia legal gratuita en los casos concretos. Estos son: a) la disponibilidad de recursos por parte de la persona afectada; b) la complejidad de las cuestiones involucradas en el caso y c) la importancia de los derechos afectados.</p> <p>El artículo 25 de la Convención establece el deber estatal de crear un recurso sencillo, rápido y efectivo para la protección y garantía de los derechos humanos. Así, los órganos del SIDH han comenzado a delinear estándares en relación con los alcances de tal obligación en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, tanto la CIDH como la Corte IDH han identificado la necesidad de proveer <i>medidas procesales que permitan el resguardo inmediato e incluso cautelar o preventivo de los derechos sociales</i>, a pesar de que el fondo de la cuestión pueda llegar a demandar un análisis más prolongado en el tiempo.</p> <p>La Comisión Interamericana ha identificado determinadas características esenciales con las que estas medidas deben contar para ser consideradas idóneas a la luz de la Convención Americana. Así, ha postulado que debe tratarse de recursos sencillos, urgentes, informales, accesibles y tramitados por órganos independientes; que deben poder tramitarse como recursos individuales y como acciones cautelares colectivas a fin de resguardar los</p>
--	--	--

		<p>derechos de un grupo determinado o determinable; que debe garantizarse una legitimación activa amplia a su respecto; que deben ostentar la posibilidad de acceder a instancias judiciales nacionales ante el temor de parcialidad en el actuar de la justicia local y, por último, que debe preverse la aplicación de estas medidas de protección en consulta con los afectados .</p> <p>En este punto, la CIDH ha destacado que al tratarse de acciones de protección de derechos fundamentales en casos que requieren una respuesta urgente, de la formalidad de la prueba no debe ser la misma que aquella que se demanda en los procesos ordinarios. Esto pues, la idea que subyace a esta tutela de tipo cautelar es que en el corto plazo se adopten las pr ovisiones necesarias para la protección inmediata de los derechos en juego. ⁸⁰</p> <p>De manera paralela, en años recientes la Corte IDH y la CIDH han reconocido la necesidad de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, ya no sólo en su dimensión individual, sino también en su dimensión colectiva. En este marco, el SIDH ha comenzado a delinear estándares sobre los mecanismos de tutela judicial tendientes a garantizar el litigio colectivo y especialmente, en relación con el alcance de la obligación de los Estados de proveer este tipo de procedimientos de reclamo.</p> <p>Indicadores de medición de progreso en derechos económicos, sociales y culturales.</p> <p>Los derechos económicos, sociales y culturales son, por antonomasia, progresivos y no regresivos. Le corresponde a la PDDH definir algunos indicadores de medición de ese progreso. Para esos efectos, es necesaria la remisión al estudio que ha elaborado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en derechos económicos, sociales y culturales").</p>
Derecho a la vida digna (derecho a un proyecto de vida digna).	Incumplimiento de obligaciones por parte del Estado en materia	Ver Derecho a la vida.

⁸⁰ El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.LV/IL129.Doc. 4.7 septiembre 2007 .Original: Español, párr. 48.
. Párr. 30.

<p>CP</p> <p>ARTICULO 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.</p> <p>En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.</p>	<p>de salud, educación, empleo y seguridad social para que todas las personas tengan un proyecto de vida digna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento del Estado para proveer a todas las personas, pero en especial a las personas en situación de vulnerabilidad, un proyecto de vida digna. • Incumplimiento del Estado de garantizar un proyecto de vida digna para los niños, niñas y adolescentes de la calle, y viviendo en la calle (Cf. CorteIDH. Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala). • Incumplimiento del Estado de garantizar un proyecto de vida digna para las personas menores de edad que se encuentran bajo la custodia del Estado (Cf. CorteIDH. Caso de Reeducción del Menor “Panchito López” vs. Paraguay). • Incumplimiento del Estado para garantizar un proyecto de vida digna para personas indígenas que han sido sacadas de sus territorios ancestrales (Cf. CorteIDH. Caso Yackie Axa vs. Paraguay). 	<p>El derecho a un nivel de vida adecuado, o el derecho a un proyecto de vida digna, como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, es una forma de proyección de la más amplia interpretación progresiva del concepto estático del derecho a la vida.</p> <p>Mientras que tradicionalmente el derecho a la vida se presenta como la abstención de realizar actos que afecten la vida de las personas (en este caso por actos de funcionarios del Estado o de particulares actuando con la aquiescencia del Estado), el proyecto de vida digna supone una dinámica proactiva del Estado para generar condiciones de satisfacción de necesidades básicas que incidan en que sus habitantes logren un proyecto de vida digna.</p> <p>No obstante que este derecho propugna la realización de todos los derechos humanos en su conjunto, y en especial de los DESC, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha enfocado más en el enunciado de proyecto de vida digna para los niños y niñas de la calle, o viviendo en la calle (Caso Austraun Villagrán Morales y otros vs. Guatemala); para niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado (Caso del Instituto de Reeducción del Menor “Panchito López” vs. Paraguay) y para los miembros de comunidades indígenas (Caso Yackie Axa vs. Paraguay).</p> <p>El derecho a la vida no sólo se viola mediante el acto físico de extinguir la existencia de alguien. Hay quizás peores formas de hacerlo que tienen que ver con la restricción o la imposibilidad de tener una vida digna. Es, por lo tanto, también un derecho “prestacional”. Así lo ha visto la Corte Interamericana al resolver un caso contencioso en perjuicio de “niños de la calle”.</p> <p>Desde el ámbito de competencia de la PPDH, la doctrina del proyecto de vida digna se convierte, finalmente, en el <i>leit motiv</i> de su naturaleza y mandato, razón por lo cual es fundamental que sus funcionarios se familiaricen con ese concepto y, sobre todo, con su caracterización con enfoque holístico e integral. Para ello, se transcribe lo que al respecto dictaminó la Corte Interamericana en el Caso Villagrán Morales:</p> <p style="text-align: center;">El derecho a la vida es un derecho humano fundamental,</p>
--	---	--

		<p>cuyo goce es un prerequisite para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.⁸¹</p> <p>Y más adelante agregó:</p> <p>A la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”⁸², a pesar de que todo niño tiene derecho a alimentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En</p>
--	--	--

⁸¹ Corte ID.H., *Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”)*, Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.

⁸² *Convención sobre los Derechos del Niño*, Preámbulo, párr. 6.

		<p>segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida.⁸³</p> <p>La marginación extrema de las personas, o peor aún, vulnerables, hacen insostenible la posición de que sociales y culturales son un deber ser o normas meramente de grupos ya de por sí los derechos económicos, amente programáticas.</p> <p>Tan grave es la violación de derechos individuales y la no realización de unos u otros hacen que el derecho sea viable porque la vida digna a que todos aspiramos sosteniendo a partir de un desiderátum que se cree como de derechos colectivos recho al desarrollo tampoco os no puede seguirse irrealizable o utópico.</p> <p>El desarrollo del derecho a la vida y su protección del Estado particularmente sensible respecto de grupos vulnerable ha sido tal vez, uno de los principales aportes de la Corte Interamericana a la hora de integrar protección con relativa de otros derechos humanos, especialmente de orden social y cultural que corresponden con la idea de un proyecto de vida digna. Partiendo de esa postura, la Corte adopta una postura similar pero en el contexto del proyecto de vida digna de miembros de comunidades indígenas donde operan elementos culturales, religiosos, psicológicos y ancestrales que motivan toda una cosmovisión propia de un colectivo que asume su propia identidad como parte de una vida en comunidad.</p> <p>De tal modo, la Corte refuerza su postura de que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos⁸⁴. Al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, pues to que se extingue su titular⁸⁵. En razón de este carácter fundamental, no son admisibles enfoques restrictivos al derecho a la vida. En esencia, este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino</p>
--	--	--

⁸³ *Ibid.*, párr. 191.

⁸⁴ Cfr. *Caso "Instituto de Reeducación del Menor"*. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 156; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri*, *supra* nota 192, párr. 128; *Caso Myrna Mack Chang*, *supra* nota 10, párr. 152, y *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagra_n Morales y otros)*, *supra* nota 182, párr. 144.

⁸⁵ Cfr. *Caso "Instituto de Reeducación del Menor"*, *supra* nota 200, párr. 156; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri*, *supra* nota 192, párr. 128; *Caso Myrna Mack Chang*, *supra* nota 10, párr. 152, y *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagra_n Morales y otros)*, *supra* nota 182, párr. 144.

		<p>también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna⁸⁶.</p> <p>Esa existencia digna, o falta de ella, fue valorada por la Corte Interamericana mediante la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana en relación con el deber general de garantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma, y de los artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13 (Derecho a la Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁸⁷, y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 169 de la OIT. Este ejercicio interpretativo responde a la tendencia de determinar violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales junto con derechos fundamentales, como el derecho a la vida.</p> <p>Fue en ese contexto -y al haberse demostrado que los miembros de la Comunidad Yaky Axa viven en condiciones de miseria extrema como consecuencia de la falta de tierra y acceso a recursos naturales, así como a la precariedad del asentamiento temporal en el cual se han visto obligados a permanecer-, que la Corte Interamericana consideró que las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. Es por ello que la principal conclusión a la que llega la Corte Interamericana es que la visión integral del derecho a la vida que antes había elaborado en el caso de los Niños de la Calle contra Guatemala y que ahora confirmaba en una relación dialéctica entre el derecho a la propiedad de pueblos indígenas y el derecho a la vida, de la siguiente manera:</p> <p>... este Tribunal estableció que el Estado no había</p>
--	--	--

⁸⁶ Cfr. *Caso "Instituto de Reeducción del Menor"*, *supra* nota 200, párr. 156; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri*, *supra* nota 192, párr. 128; *Caso Myrna Mack Chang*, *supra* nota 10, párr. 152, y *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros)*, *supra* nota 182, párr. 144.

⁸⁷ El Paraguay ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 3 de junio de 1997. El Protocolo entró en vigencia internacional el 16 de noviembre de 1999.

		<p>garantizado el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad comunitaria. La Corte con sidera que este hecho ha afectado el derecho a una vida digna de los miembros de la Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades. A esto se suma que el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias que permitan asegurar a los miembros de la Comunidad Yakye Axa, durante el período que han permanecido sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad... (subrayado no es del original).</p> <p>Este fallo tiene también la particularidad especial de enfocar el tema de los derechos humanos de colectivos excluidos o en situación de vulnerabilidad, desde la obligación del Estado de corresponder con acciones afirmativas (o medidas positivas, como las llama):</p> <p>La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste la situación de los niños y los ancianos de la Comunidad Yakye Axa. En otras oportunidades, este Tribunal ha establecido que en materia de derecho a la vida de los niños, el Estado tiene, además de las obligaciones señaladas para toda persona, la obligación adicional de promover las medidas de protección a las que se refiere el artículo 19 de la Convención Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño⁸⁸. En el presente caso, el Estado tiene la obligación, <i>inter alia</i>, de</p>
--	--	--

⁸⁸ Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor", *supra* nota 200, párr. 160; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, *supra* nota 192, párrs. 124, 163-164, y 171; Caso Bulacio, *supra* nota 10, párrs. 126 y 134; y Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), *supra* nota 182, párrs. 146 y 191. En el mismo sentido, cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 56 y 60.

		<p>proveer a los niños de la Comunidad de las condiciones básicas orientadas a asegurar que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra su Comunidad por la falta de territorio, no limitará su desarrollo o destruirá sus proyectos de vida ⁸⁹ (subrayado no es del original).</p> <p>...</p> <p>Con base en esos supuestos, la Corte Interamericana concluye que el Estado de Paraguay violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Yakye Axa, por no adoptar medidas frente a las condiciones que afectaron sus posibilidades de tener una vida digna ⁹⁰.</p>
<p>Derecho a la protección a la familia</p> <p>CP.</p> <p>ARTICULO 2.- ...Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y <u>familiar</u> y a la propia imagen.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 32.- La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de políticas o planes para promover la unidad e integración de la familia. • Actos arbitrarios o ilegales atentatorios contra la constitución y unidad familiar. 	<p>Los principales tratados generales de derechos humanos, la Constitución de El Salvador y toda la normativa secundaria en materia de familia y niñez y adolescencia toman como principio básico, la importancia de la constitución y protección de la familia, a la cual se le endosa un papel fundamental como base o pilar de la comunidad y la sociedad en general.</p> <p>Ese enunciado general no encuentra mayor oposición. Sin embargo, lo que no es pacífico en la actualidad es el concepto de familia en sí, ya que tanto la Constitución de El Salvador, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los tratados en la materia, toman como parámetro un concepto de familia clásico, prácticamente circunscrito a “matrimonio” y a la inmediata definición de matrimonio como una unión de un hombre y una mujer.</p> <p>Desde una visión de interpretación progresiva de los derechos humanos, la equiparación de familia a matrimonio ha quedado superada y rebasada por la realidad, ya que desde el punto de vista sociológico, la familia puede estar representada por múltiples variables en el marco de la disolución de un matrimonio y la ampliación del núcleo familiar a cualquier otra modalidad de reunión familiar, sin que por ello se entienda que sea una “familia disfuncional”.</p> <p>La legislación civil, pero sobre todo la jurisprudencia de familia reconoce este</p>

⁸⁹ Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, *supra* nota 200, párr. 160; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, *supra* nota 207, párrs. 80-81, 84, y 86-88, y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), *supra* nota 182, párr. 196.

⁹⁰ Corte IDH. Caso Yakye Axa. Párr...

<p>El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges.</p> <p>El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 33.- La ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas; y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulará así mismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y una mujer.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 34.- Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del</p>	<p>concepto más amplio de familia, incluso para efectos patrimoniales y legales.</p> <p>Sin embargo, un tema que le corresponderá a la PDDH asumir, será la situación de una postura respecto de eventuales situaciones de uniones de hecho –y eventualmente legales- entre parejas de un mismo sexo, supuesto que no está contemplado literalmente en los instrumentos internacionales y nacionales, pero que ya es objeto de debate en distintos países.</p> <p>El involucramiento de elementos religiosos en este debate han distraído el enfoque de derechos humanos, a pesar de que en varios países se ha resuelto el reconocimiento legal de matrimonios de personas de un mismo sexo, aún cuando quedan pendientes otros temas como el derecho de esos matrimonios a adoptar, lo cual profundiza la discusión.</p>
--	--

<p>Estado.</p> <p>La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 17. Protección a la Familia</p> <p>1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.</p> <p>2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.</p> <p>3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.</p> <p>4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de</p>		
--	--	--

<p>responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.</p> <p>5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 15 Derecho a la Constitución y Protección de la Familia</p> <p>1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado, quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.</p> <p>2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.</p> <p>3. Los Estados partes mediante el</p>		
--	--	--

<p>presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:</p> <p>a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;</p> <p>b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar;</p> <p>c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;</p> <p>d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad</p>		
<p>Derecho a vivienda digna</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 119.- Se declarara de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hostigamiento o amenazas para el abandono de viviendas. • Realización ilegal de desalojos forzados sin ofrecer medios o alternativas apropiadas de 	<p>El derecho a la vivienda digna no puede entenderse como un derecho de todas las personas a tener una vivienda de su propiedad, sino a que haya opciones reales de lograr, al menos rentar, un espacio físico dentro de cualquier modalidad de vivienda, siempre que esté en condiciones de habitabilidad, seguridad y dignidad.</p>

<p>interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda, e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, facilitará al pequeño propietario los medios necesarios.</p>	<p>protección.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obstaculización o dilaciones excesivas para obtener documentos que otorguen seguridad jurídica sobre la ocupación de la vivienda. • Demolición de la vivienda como medida punitiva. • Desabastecimiento sistemático de servicios básicos. 	<p>El derecho a vivienda digna se puede lograr por muchas vías, siendo la principal, el que las personas tengan acceso a un salario digno que les permita satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo el alquiler o compra de vivienda.</p> <p>Desde la perspectiva de la PDDH, el tema pasa por la incidencia a que el Estado tenga definida una política nacional de acceso a la vivienda que incluya todo tipo de opciones reales, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad y, para ello, es básica la existencia de acciones afirmativas para creación de líneas de crédito preferencial para vivienda, bonos de vivienda y otras formas creativas y solidarias de resolver un problema económico y social básico que es uno de los que más violencia social genera.</p> <p>Vemos también cómo el derecho a una vivienda digna no es algo abstracto o una posibilidad remota, sino que forma parte integrante del derecho a la propiedad individual y el no poder gozar de ella va a repercutir en una privación de otros derechos fundamentales como la libertad y la seguridad de la persona. Así por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU estableció, en un caso contra Panamá, que la existencia de desalojos compulsivos, no solo violaba el derecho a una vivienda adecuada, sino el derecho de los habitantes a su privacidad y a la seguridad de su hogar.⁹¹ De ahí que en la agenda de la PDDH se incluye como una actividad de veeduría importante todo el tema de los desalojos violentos y los efectos colaterales.</p>
<p>Derecho al trabajo y derechos conexos</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 6 Derecho al Trabajo</p> <p>1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia estatal ante condiciones indignas de trabajo. • Restricción o denegación arbitraria del acceso al empleo. • Denegación arbitraria del derecho al ascenso. • Discriminación laboral • Falta de prevención y combate del acoso sexual laboral. • Falta de supervisión laboral que permita hacer inspecciones en 	<p>El derecho al trabajo es fundamental para la realización de otros derechos humanos, por lo cual debe relacionarse con derechos laborales desarrollados por el DIDH, así como con los derechos a la libertad (libertad de trabajo o libertad de asociación) y a la igualdad y a la no discriminación.</p> <div data-bbox="839 900 1541 958" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Principales Convenios de la OIT que reconocen derechos fundamentales</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (Nº 87);

⁹¹ Cf. "Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". UN doc. E/1992/23.párr 135.

<p>una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.</p> <p>2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 7 Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo</p> <p>Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones</p>	<p>todo tipo de centros de trabajo en todo el territorio nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de los Convenios de la OIT ratificados por el país. • Tolerancia hacia el trabajo infantil y de las “peores formas” de trabajo infantil. • Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral. • Incumplimiento de contratos colectivos de trabajo. • Denegación de prestaciones o derechos laborales. • Tolerancia estatal ante despidos ilegales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Relativo a la aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (Nº 98) • Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (Nº 29); • Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (Nº 105); • Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (Nº 138); • Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (Nº 182); • Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 1951 (Nº 100); • Convenio Relativo a la no Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (Nº 111). <p>La libertad al trabajo tiene ciertos límites dados por el ordenamiento jurídico y por el DIDH. Es necesario que las limitaciones a la actividad humana previstas tengan una causa o finalidad admisible de acuerdo con el DIDH. En efecto, la validez o invalidez de las limitaciones que impongan los Estados a la libertad de trabajo constituye uno de los temas cruciales en la materia. La cuestión no se resuelve con calificar dichas limitaciones de “legales”, puesto que bien puede ocurrir, y de hecho ya ha ocurrido, que la norma legal que establezca la legalidad de dichas limitaciones sea declarada inválida.</p> <p>Cabría también cuestionar el carácter de actividad “productiva” y “remunerada” respecto de una actividad laboral. Si bien es cierto que el <i>derecho al</i> trabajo productivo implica una adecuada remuneración, como lo establece la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, también es verdad que de acuerdo con la vertiente de <i>libertad de</i> trabajo, nada impide la libre decisión de ocuparse de algo no productivo ni remunerado.</p> <p>La libertad para el particular debe entenderse como el derecho a decidir libremente aceptar (o elegir) un trabajo. Asimismo, supone no ser obligado de alguna manera a ejercer o efectuar un trabajo. Esta parte del contenido normativo del derecho al trabajo se refiere a la libertad de trabajo, la cual forma</p>
---	---	--

<p>justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:</p> <p>a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;</p> <p>b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;</p> <p>c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;</p> <p>d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de</p>		<p>parte inherente del derecho al trabajo según el DID 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, S común con el Protocolo de San Salvador, establece q comprende “el derecho de toda persona a tener la op vida mediante un trabajo libremente escogido o acep libertad de trabajo queda claramente establecida co</p> <p>El Estado debe utilizar la mayor cantidad de recurs el derecho al trabajo, teniendo en cuenta la totali sociedad y no solamente los recursos presupuestales</p> <p>El derecho al trabajo no debe entenderse como un de recho absoluto e incondicional a obtener empleo, ⁹³ sino como la obligación que tiene el Estado de tomar medidas efectivas para la realización progres miras a lograr el pleno empleo, y así debe ser el e deberá tomar en cuenta la PDDH. Es importante desta reconoce la aplicación progresiva de este derecho, representan los limitados recursos disponibles, tam diversas obligaciones de efecto inmediato, tales co derecho sea ejercido sin discriminación alguna y la deliberadas y concretas en aras de la plena realiza</p> <p>El PIDESC y el Protocolo de San Salvador articulan como plenamente exigibles. Los derechos laborales h el DIDH en sus dos dimensiones: la individual y la individual de estos derechos incluye el derecho de de trabajo equitativas y satisfactorias, mientras q abarca el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse como el derecho de los sindicatos a funcionar libre colectiva de los derechos laborales está íntimamente asociación y la libertad sindical. (Ver apartado si sindical).</p>	<p>H. En este sentido, el artículo ocial y Culturales, ue el derecho a trabajar ortunidad de ganarse la tado”. De esta forma, la mo un derecho subjetivo.</p> <p>os disponibles para garantizar dad de los recursos de una ⁹²</p> <p>iva de este derecho, con nfoque institucional que car que si bien el DIDH así como los obstáculos que bién impone a los Estados mo la de garantizar que el de adoptar medidas ción del derecho al trabajo. ⁹⁴</p> <p>los “derechos laborales” an sido desarrollados por colectiva. La dimensión toda persona a condiciones ue la dimensión colectiva al sindicato de su elección, así mente. ⁹⁵ Esta dimensión e ligada con la libertad de guiente: Derecho a la libertad</p>
--	--	---	---

⁹² Centro para los Derechos Económicos y Sociales, “D

⁹³ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural

⁹⁴ *Idem*, párr. 19

⁹⁵ *Idem*, párr. 2.

erecho al trabajo”, <http://www.cesr.org> _____, fecha de consulta: 26 de agosto de 2008.

es, Observación general 18, El derecho al trabajo,

U.N. Doc. E/C.12/GC/18, 2006, párr. 6.

<p>acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;</p> <p>e. la seguridad e higiene en el trabajo;</p> <p>f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;</p> <p>g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de</p>		<p>La dimensión individual de los derechos laborales i Declaración Universal de los Derechos Humanos, el d igual salario por trabajo igual, el derecho a una r satisfactoria, así como aspectos estrechamente vinc igualdad, los cuales deben verse reflejados, en pri discriminación en el acceso al trabajo.</p> <p>Asimismo, es importante destacar que en el PIDESC, de San Salvador, se establecen principios tales com “orientación vocacional y capacitación laboral”, el trabajar”, el “apoyo a la mujer” y la “adecuada ate exigibilidad jurídica dependerá de la forma en que derecho a la igualdad y a la no discriminación. Est derechos en un sentido más amplio, son esenciales y jurídicas, aunque éstas no sean las mismas ni de la los derechos subjetivos. De esta forma, la falta a “violación” debe entenderse como un “incumplimiento fundamental destacar que en cualquiera de los casos que tienen implicaciones jurídicas que pueden hacer como la PDDH, aunque sus alcances son diferentes.</p> <p>Dada la importancia del sistema regional de protecc es conveniente introducir como fuente del derecho a Convención Americana (prohibición de trabajo forzos 7, 8, y 9, del Protocolo de San Salvador.</p> <p>Más que determinar violaciones específicas a los co que es competencia de los tribunales de trabajo- le analizar los aspectos generales para determinar si pleno empleo y condiciones dignas de trabajo en el</p> <p>Así, por ejemplo, el trabajo decente tiene un senti que establece un piso axiológico, normativo y polít</p>	<p>ncluye, como lo expresa la erecho a la obtención de emuneración equitativa y ulados con el derecho a la mera instancia, en la no</p> <p>así como en el Protocolo o “el pleno empleo”, la “apoyo a minusválidos para nción familiar”, cuya tutela y los podamos articular con el os principios rectores son tienen consecuencias misma naturaleza que las de estos principios más que una .”⁹⁶ No obstante, resulta , se trata de obligaciones se valer ante un organismo</p> <p>ión de derechos humanos, l trabajo el artículo 6 de la o) así como los artículos 6,</p> <p>ntratos laborales –aspecto corresponde a la PDDH existen políticas estatales de país.</p> <p>do universal en la medida en ico que debe cobijar a todos</p>
---	--	---	---

⁹⁶ Véase Rodolfo E. Piza Rocaforat, “Derecho al trabaj o y derechos de los trabajadores desde la perspecti culturales”, *Revista IIDH*, Vol. 40, San José de Costa Rica, Julio-Diciembre 2004.

va de los convenios internacionales sobre derechos

económicos, sociales y

<p>trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;</p> <p>h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 9.- Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 37.- El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio.</p> <p>El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá el trabajo y empleo de las</p>	<p>los trabajadores y trabajadoras. Esto quiere decir que la preocupación por el trabajo debe ir más allá de la legislación laboral vigente, con el propósito de reconocer los derechos básicos de los trabajadores y permitir una comprensión mucho más alentadora de las necesidades de las distintas instituciones y las distintas políticas en pro de los derechos y los intereses de los trabajadores.</p> <p>Los contenidos que deben caracterizar el trabajo decente se muestran en el siguiente cuadro.</p> <table><tr><td>Contenidos del concepto de trabajo decente</td></tr><tr><td>1. Empleos de calidad y en cantidad suficiente.</td></tr><tr><td>2. Respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales de los trabajadores</td></tr><tr><td>3. Ingresos adecuados</td></tr><tr><td>4. Seguridad jurídica en el empleo</td></tr><tr><td>5. Posibilidad de capacitación, formación y actualización</td></tr><tr><td>6. Diálogo social</td></tr><tr><td>7. Protección social en el empleo y en la sociedad</td></tr><tr><td>8. Se desarrolla en condiciones de libertad</td></tr><tr><td>9. Equidad para todos los miembros de la sociedad</td></tr><tr><td>10. Dignidad como eje transversal de la relacion laboral</td></tr></table> <p>El trabajo es, por lo tanto, un fenómeno que trasciende de un contrato común individual para convertirse en un fenómeno social que debe estar regulado por la acción y control del Estado desde una política pública de empleo. Este tipo de políticas, tienen como objetivo lograr el pleno empleo de los habitantes, así como la regulación de las condiciones para su desarrollo, incluyendo la supervisión de las relaciones asimétricas que surgen de la relación laboral entre los empleadores y los trabajadores. El empleador, como parte fuerte, puede ser una persona física o jurídica, así como el mismo Estado que es uno de los principales empleadores. El trabajador, como parte “débil” es siempre una persona física que cuando trabaja para el Estado se desempeña como funcionaria pública con un estatuto y normativa de derecho público, mientras que el trabajador particular o privado, es protegido por el derecho laboral común.</p>	Contenidos del concepto de trabajo decente	1. Empleos de calidad y en cantidad suficiente.	2. Respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales de los trabajadores	3. Ingresos adecuados	4. Seguridad jurídica en el empleo	5. Posibilidad de capacitación, formación y actualización	6. Diálogo social	7. Protección social en el empleo y en la sociedad	8. Se desarrolla en condiciones de libertad	9. Equidad para todos los miembros de la sociedad	10. Dignidad como eje transversal de la relacion laboral
Contenidos del concepto de trabajo decente												
1. Empleos de calidad y en cantidad suficiente.												
2. Respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales de los trabajadores												
3. Ingresos adecuados												
4. Seguridad jurídica en el empleo												
5. Posibilidad de capacitación, formación y actualización												
6. Diálogo social												
7. Protección social en el empleo y en la sociedad												
8. Se desarrolla en condiciones de libertad												
9. Equidad para todos los miembros de la sociedad												
10. Dignidad como eje transversal de la relacion laboral												

<p>personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 38.- El trabajo estará regulado por un Código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, e incluirá especialmente los derechos siguientes:</p> <p>1º En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad;</p>		<p>Por su parte, una clara política de empleo debe contener al menos los lineamientos destacados en el documento de la OIT titulado "Un trabajo decente para todos en una economía globalizada: Una perspectiva de la OIT"⁹⁷, en el que se destaca lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">"lograr el respeto universal de los principios y derechos fundamentales del trabajo, crear más oportunidades de empleo y de ingresos para mujeres y hombres, ampliar la protección social y promocionar el diálogo social"⁹⁸</p> <p>De lo que trata una política pública de empleo, no es tan sólo la creación de más puestos de trabajo sino el aumento del empleo con calidad. El trabajo decente, en consecuencia, puede incrementar la productividad de las empresas y fomentar esquemas de crecimiento más equitativos y sostenibles.</p> <p>Desde el tratado que dio origen a la OIT (el Tratado de Versalles de 1919) se establece, que el trabajo no es una mercancía y que los representantes de trabajadores y empleadores tienen derecho a entablar diálogos que produzcan decisiones democráticas para el bienestar común.⁹⁹ Luego, en 1944, la OIT adoptó la Declaración de Filadelfia en la que se definen nuevamente los fines y objetivos de la Organización, entre las que se encuentran:</p> <p style="text-align: center;">"Fomentar programas que tiendan a garantizar pleno empleo y la elevación del nivel de vida; la posibilidad de emplear trabajadores en ocupaciones en las que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos, y de contribuir al máximo al bienestar común; adoptar, en materia de salarios y</p>
---	--	---

⁹⁷ Ver: Un trabajo decente para todos en una economía globalizada: Una perspectiva de la OIT Presentado por el Sr. Juan Somavia Director General de la OIT a la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC (30 de noviembre - 3 de diciembre de 1999). Disponible en: <http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/1999/seattle.htm#note1>

⁹⁸ Ibid. Pág. 14.

⁹⁹ Ver el texto del Tratado de Versalles originado en el contexto de la Conferencia de Paz de 1919.

<p>2º Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural.</p> <p>En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, es obligatorio asegurar el salario mínimo por jornada de trabajo...</p>		<p>ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo , medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario o mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección; lograr el reconocimiento efectivo de l derecho de negociación colectiva, la cooperación de emplead ores y de trabajadores para mejorar continuamente la efici encia en la producción; extender las medidas de seguridad so cial para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa". ¹⁰⁰</p> <p>La OIT ha planteado en diferentes oportunidades que las políticas de trabajo decente deben ser parte clave de las estrategias qu e se planteen para el desarrollo, y así alcanzarlo de una manera equitati va y sostenible. Desde 1999 esta preocupación se ha reactivado para enfrentar l os retos de la nueva ola de producción económica a nivel trasnacional, buscando garantizar niveles de empleo más altos pero en condiciones que permitan l a plena aplicación de las capacidades de los trabajadores y su bienestar.</p> <p>Es por ello que los gobiernos, por medio de sus res pectivos Ministerios o Secretarías de Trabajo, deben darse a la tarea de l iderar el proceso de la implementación de políticas públicas que fomenten e l trabajo decente, pues aun cuando muchos aspectos relacionados con la evolució n del mercado laboral tienen que ver con el sector privado, es necesario que este proceso esté orientado por políticas estatales claramente establ ecidas, sometidas a permanente control. Por su parte, es obligación de la PDDH verificar que existan esas políticas de empleo y que se ajusten a esos estándares internacionales, incluyendo los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr como objetivo general el pleno empleo. • Monitorear y evaluar las tasas de empleo por medio de indicadores confiables y objetivos. • Verificar y controlar el cumplimiento de los derechos laborales y los
--	--	--

¹⁰⁰ Ver: <http://www-ilo-mirror.comell.edu/public/spanish/about/iloconst.htm#anexo>

		<p>derechos humanos conexos con los derechos laborales contenidos en la normativa nacional y en los tratados vigentes en el país.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantizar una política de seguridad social alrededor del empleo. • Construcción de procesos de diálogo social para garantizar la sostenibilidad y legitimidad de la política pública de empleo.
<p>Derecho a la libertad sindical</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 8 Derechos Sindicales</p> <p>1. Los Estados partes garantizarán:</p> <p>a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricción u obstaculización a la constitución o inscripción de sindicatos o asociaciones de trabajadores y de empleadores. • Discriminación por razón de filiación sindical. • Persecución sindical. • Amenazas y falta de investigación de hechos que incidan en riesgos a la integridad física y psíquica de sindicalistas. • Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral de directivos sindicales. • Negativa u obstaculización para la negociación y celebración de contratos colectivos. 	<p>La libertad sindical</p> <p>La libertad sindical es un derecho insigna que se reconoce y protege de manera central en distintos Convenios y procedimientos de la OIT.</p> <p>La libertad sindical es la manera en que se realizan los derechos sindicales de los trabajadores y que antes de haber sido reconocidos como tales, fueron actos perseguidos como delitos. Hoy, son la base del derecho laboral colectivo y son de los derechos laborales más “observados” por parte de la OIT por medio de la verificación de instituciones como la negociación colectiva y la huelga.</p> <p>La libertad sindical es parte integrante de los derechos humanos fundamentales y piedra angular de las disposiciones que tienen por objeto asegurar la defensa de los intereses de los trabajadores. De acuerdo con el Preámbulo de la Constitución de la OIT, el reconocimiento del principio de libertad sindical es un requisito indispensable para “la paz y armonía universales”. De igual forma la Declaración de Filadelfia, proclamada en 1944, señala que “la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante”.</p> <p>Como derecho humano que es, la libertad sindical es un derecho de todos los trabajadores, y no debe estar sujeto a otras restricciones como a la nacionalidad. De ahí que llama la atención lo que establece el artículo 47 de la Constitución Política de El Salvador cuando señala: “Los miembros de las directivas sindicales deberán ser salvadoreños por nacimiento”.</p> <p>Toda vez, que el Derecho a la Libertad Sindical es un principio que está establecido en la propia Constitución de OIT, se constituye para todos sus Estados Miembros, por el sólo hecho de serlo, en una obligación para el mismo. Por tal motivo, no obstante que un Estado Miembro no haya ratificado los</p>

<p>internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;</p> <p>b. el derecho a la huelga.</p> <p>2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.</p> <p>3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.</p>	<p>Convenios sobre Libertad Sindical, tiene igualmente la obligación de cumplir y aplicar las directrices que le son consustanciales.</p> <p>La libertad sindical tiene una relación intrínseca con otros derechos humanos tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>El derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias.</i> • <i>Libertad de asociación.</i> • <i>La libertad de opinión y expresión.</i> • <i>El derecho de reunión.</i> • <i>El derecho de petición y a un debido proceso legal por medio de jueces independientes e imparciales.</i> <p>Los Convenios 87 y 98 pertenecen a la categoría de instrumentos de la OIT que tienen por objeto promover y garantizar derechos humanos fundamentales dentro de la esfera más amplia de los derechos sociales. Los principios contenidos en estos convenios no presuponen ningún patrón uniforme de organización sindical, pero constituyen la pauta según la cual debería juzgarse la libertad de un movimiento sindical; cualquiera que fuese su forma de organización.</p> <p>Los dos instrumentos se refieren a ámbitos distintos de vigencia de los derechos sindicales, si bien, ambas normas, tienen por finalidad garantizar el ejercicio de estos derechos. Mientras el Convenio 87, concierne al libre ejercicio del derecho de sindicación en relación fundamentalmente con el Estado, el Convenio 98, protege esencialmente a los trabajadores y sus organizaciones frente a los empleadores.</p> <p>Principios contenidos en los Convenios 87 y 98 en relación con la libertad sindical</p>
--	--

<p>CP</p> <p>ARTICULO 39.- La ley regulará las condiciones en que se celebrarán los contratos y convenciones colectivos de trabajo. Las estipulaciones que éstos contengan serán aplicables a todos los trabajadores de las empresas que los hubieren suscrito, aunque no pertenezcan al sindicato contratante, y también a los demás trabajadores que ingresen a tales empresas durante la vigencia de dichos contratos o convenciones. La ley establecerá el procedimiento para uniformar las condiciones de trabajo en las diferentes actividades económicas, con base en las disposiciones que contenga la mayoría de los contratos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en cada clase de actividad.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 47.- Los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tiene el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo</p>		<p>Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948.</p> <p>(En relación con el Estado)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>derecho de sindicación sin ninguna distinción</i>(Art. 2). Sin embargo, pueden ser excluidos por la legislación nacional las fuerzas armadas y la policía (Art.9). • <i>Creación de organizaciones</i> sin autorización previa, por parte de la autoridad pública (Art. 2). • <i>Libre elección del tipo de organizaciones</i> (Art.2). • <i>Funcionamiento de las organizaciones libres de injerencia de las autoridades públicas</i> (Art.3). • <i>Organizaciones de trabajadores y empleadores no sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.</i> (Art.4). • <i>Creación de Federaciones y Confederaciones</i> (art.5). 	<p>Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949.</p> <p>(en relación con los empleadores)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prohibición de discriminación sindical: No se puede sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;</i> tampoco se puede despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador,
--	--	---	--

<p>derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas.</p> <p>Dichas organizaciones tienen derecho a personalidad jurídica y a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus funciones. Su disolución o suspensión sólo podrá decretarse en los casos y son las formalidades determinadas por la ley.</p> <p>Las normas especiales para la constitución y funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales del campo y de la ciudad, no deben coartar la libertad de asociación. Se prohíbe toda cláusula de exclusión.</p> <p>Los miembros de las directivas sindicales deberán ser salvadoreños por nacimiento y durante el período de su elección y mandato, y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamente, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa calificada previamente por la autoridad competente.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Afiliación internacional</i> (Art.5). • <i>Dotación de Personalidad jurídica</i> (Art.7). • <i>Derecho a la Negociación Colectiva:</i> (Art. 3). 	<p>durante las horas de trabajo. (art.1 del C.98).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Prohibición de Actos de injerencia</i> (art.2). • <i>Garantía institucional de la sindicación</i> (art.3). • <i>Fomento de la negociación colectiva</i> (Art. 4). <p>Además de los Convenios 87 y 98, que son emblemáticos, existen otros relativos a la libertad sindical. Entre los principales destacan los siguientes:</p> <p><i>Convenio N° 11 Sobre el derecho de asociación (agricultura) 1921</i></p> <p><i>Convenio N° 135 Sobre representación de los trabajadores, 1971</i></p> <p><i>Convenio N° 141 Sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975</i></p> <p><i>Convenio N° 151 Sobre relaciones laborales en la administración pública, 1978</i></p> <p><i>Convenio N° 154 Sobre la negociación colectiva, 198</i></p> <p>En el marco de las Naciones Unidas, este derecho fue reconocido en el Convenio de la OIT número 87:</p>
---	--	---	--

		<p>Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas (artículo 2).</p> <p>No obstante, aún cuando no haya oposición abierta al principio de la libertad de asociación, en la práctica se ponen obstáculos para su pleno ejercicio.</p> <p>Tanto la Constitución de 1919 de la OIT como la Declaración de Filadelfia de 1944 (incorporada a la primera) proclaman varios principios fundamentales en la esfera de los derechos laborales y humanos. Así, el preámbulo de la Constitución habla de "reconocimiento del principio de libertad sindical" para combatir la injusticia, la miseria y las privaciones. La Declaración de Filadelfia reafirma que "la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante" (artículo I, párrafo b)) y constituye uno de los principios fundamentales sobre los cuales está basada la OIT. En 1998, cuando una vez más se ponen en tela de juicio la validez y la universalidad de los derechos laborales y humanos fundamentales, la Conferencia Internacional del Trabajo ha declarado que todos los Estados Miembros tienen el compromiso «de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe [...] los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios [fundamentales de la OIT], es decir: a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; [...]» (artículo 2).</p>
<p>Derecho a la seguridad social</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 9 Derecho a la Seguridad Social</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaciones indebidas para otorgar pensiones o beneficios de seguridad social. • Denegación ilegal o arbitraria de los beneficios o prestaciones de seguridad social. • Suspensión ilegal de derechos adquiridos respecto de pensiones o beneficios. 	<p>La seguridad social es un referente colateral que involucra beneficios adicionales a un contrato laboral individual. La Convención de Seguridad Social No. 102 de 1952 de la OIT establece que hay nueve clases de beneficios en lo que a Seguridad Social se refiere. Esos parámetros deben ser vigilados por la PDDH y se refieren a los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cuidado médico, • beneficios en caso de enfermedad, de vejez, de desempleo, de accidentes de trabajo,

<p>seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.</p> <p>2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 43.- Los patronos están obligados a pagar indemnización y a prestar servicios médicos, farmacéuticos y demás que establezcan las leyes, al trabajador que sufra accidente de trabajo o cualquier enfermedad profesional.</p> <p>ARTICULO 45.- Los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de los principios de solidaridad y universalidad para garantizar seguridad social con equidad a favor de las personas en grupos en situación de vulnerabilidad. • Incumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación para el acceso y otorgamiento de los beneficios de seguridad social. • Incumplimiento de los principios de favorabilidad cuando han cumplido los requisitos de ley para obtener pensión. • Desprotección de sectores vulnerables para que accedan a los beneficios de la seguridad social. • Inadecuado, deficiente o inexistente control por parte de las autoridades competentes de garantizar el derecho a la seguridad social. • Tolerancia del Estado ante la omisión de afiliar a los trabajadores o de cancelar sus respectivas cotizaciones. • No asignar recursos para ampliar progresivamente la cobertura de la prestación del servicio de seguridad social. • Inadecuada inversión de los fondos destinados a mantener el sistema de seguridad social. 	<ul style="list-style-type: none"> • beneficios para la familia, • beneficios de maternidad, • beneficios por invalidez y para los sobrevivientes. • Cobertura de necesidades urgentes de los trabajadores y protección ante posibles contingencias. <p>Más importante que una caracterización subjetiva del derecho a la seguridad social, le corresponde a la PDDH un planteamiento estratégico que incida en la importancia de una política pública de seguridad social que propugne por la obtención de los beneficios antes descritos, no solo como derechos, sino como una responsabilidad colectiva a partir del cumplimiento de los principios de universalidad y, especialmente, de solidaridad, que son los que deben informar a una sociedad inclusiva, donde las personas que más oportunidades y logros materiales han tenido, asuman como responsabilidad social una cuota de esos beneficios que, en última instancia, los obtuvieron en el contexto de seguridad política y jurídica del país.</p> <p>En tal sentido, aquí opera plenamente el principio de justicia distributiva y equitativa, incluyendo una política tributaria igualmente equitativa.</p>
---	---	---

<p>salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general a las prestaciones sociales. La extensión y naturaleza de los derechos antes mencionados serán determinadas por la ley de acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo. Quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, entidades sociales y demás equiparables, serán considerados como trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a éstos.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 50.- La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma.</p> <p>Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los recursos.</p> <p>Al pago de la seguridad social</p>		
---	--	--

<p>contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y cuantía que determine la ley.</p> <p>El Estado y los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores, en la medida en que sean cubiertas por el Seguro Social.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 51.- La ley determinará las empresas y establecimientos que, por sus condiciones especiales, quedan obligados a proporcionar, al trabajador y a su familia, habitaciones adecuadas, escuelas, asistencia médica y demás servicios y atenciones</p>		
<p>Derecho a huelga</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 48.- Los trabajadores tienen derecho a la huelga y los patronos al paro. Para el ejercicio de estos derechos no será necesaria la calificación previa, después de</p>	<p>Normativa laboral, administrativa o de cualquier otra naturaleza que prohíba la huelga de manera genérica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación e interpretación judicial restrictiva al momento de evaluar la legalidad o ilegalidad de una deuda. • Persecución laboral en contra de trabajadores que participan en huelga. 	<p>Aun cuando este derecho no se reconoce de forma expresa en ningún Convenio relacionado con los derechos sindicales, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT siempre lo ha considerado como constitutivo de los derechos básicos de los trabajadores y sus organizaciones en la defensa de sus intereses laborales. La Comisión de Expertos ha vinculado el derecho que se reconoce a las organizaciones de trabajadores y empleadores a organizar sus actividades y a formular su programa de acción en aras de fomentar y defender los intereses de sus miembros (Arts. 3, 8 y 10 del Convenio 87) con la necesidad de disponer de los medios de acción que les permitan ejercer presiones para el logro de sus reivindicaciones. En consecuencia, la Comisión ha adoptado el criterio de que el significado corriente de la expresión</p>

<p>haberse procurado la solución del conflicto que los genera mediante las etapas de solución pacífica establecidas por la ley. Los efectos de la huelga o el paro se retrotraerán al momento en que éstos se inicien.</p> <p>La ley regulará estos derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de seguridad para garantizar procesos de huelga. • Amenazas de cualquier tipo para que los trabajadores y dirigentes sindicales no partipen de huelgas. • Represalias laborales por participar en huelgas. • Abuso de autoridad y violencia desproporcionada en casos de disturbios civiles ocurridos por huelgas. • Falta de implementación de tratados de la OIT que permiten, reglamentan y fortalecen las huelgas. 	<p>"programa de acción" incluye el derecho de huelga.</p> <p>La PDDH es veedora del cumplimiento e implementación de derechos laborales y el derecho a la huelga constituye un instrumento básico como parte de otras garantías sindicales. Este derecho, se vincula mucho con el derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica, por lo que el trabajo de observancia preventiva durante movimientos huelguísticos en que se realizan este tipo de manifestaciones, es sumamente necesario para garantizar el derecho a huelga en sí mismo, pero también la integridad física y psíquica de todas las personas que se podrían ver involucradas (trabajadores, sindicalistas, patronos, ciudadanos y transeúntes y agentes de seguridad).</p> <p>En situación de disturbios civiles como parte de una huelga, el papel conciliador y de consenso que podría jugar la PDDH es un referente para resolver esos conflictos por la vía de la distensión y del diálogo.</p>
<p>Derecho a la salud</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 65.- La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.</p> <p>El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud como resultado de la discriminación de cualquier tipo. • Denegación de atención médica gratuita en casos de emergencia. • Abandono de paciente. • Negligencia médica (mala praxis). • Desabastecimiento de medicamentos. • Cobros indebidos de cuotas por servicio en centros públicos de salud. • Utilización de instalaciones y equipos médicos públicos para 	<p>Desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el derecho relacionado con la salud también es complejo. Su alcance no se limita a la protección de la salud sino que, de acuerdo con el artículo 12 del PIDESC, se entiende como "el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".¹⁰¹</p> <p>La PDDH cuenta con facultades para proteger todos los derechos humanos que ampara el orden jurídico salvadoreño, incluyendo aquellos derechos contenidos en tratados internacionales. Al realizar su tarea, la PDDH no sólo debería tener en cuenta derechos reconocidos por el DIDH que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución, también debe ser capaz de otorgarles a los derechos humanos un contenido y alcance más amplios que los reconocidos en la Carta fundamental.</p> <p>El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud incluye la protección de la salud, pero también los factores determinantes básicos de ésta (alimentación, nutrición, vivienda, acceso a agua limpia y potable, condiciones de trabajo</p>

¹⁰¹ Artículo 12 del PIDESC.

<p>CP</p> <p>ARTICULO 66.- El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento.</p>	<p>atender a pacientes particulares con preferencia sobre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clausura injustificada de centros públicos de salud. • Desabastecimiento sistemático o mala calidad del agua. • Ocultar o tergiversar información fundamental para la protección de la salud y tratamiento de enfermedades. • Mala planificación estratégica para prevenir y combatir enfermedades contagiosas y pandemias. 	<p>seguras y sanas y un medio ambiente sano), así como otros derechos relacionados, entre ellos, el derecho a la no discriminación.¹⁰² En efecto, la actuación de la PDDH en esta área podría llegar a ser determinante para la atención de la salud individual de algunas personas, pero también para prevenir enfermedades o la violación a otros derechos humanos.</p>
<p>CP</p> <p>ARTICULO 67.- Los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones indebidas para autorizar la creación de centros privados de atención médica. • Autorización ilícita para la producción, distribución y suministro de productos químicos, farmacéuticos o veterinarios nocivos para la salud. • Omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente. 	<p>De acuerdo con la Observación General 14 del CDESC, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud comprende: la atención de la salud, los factores determinantes básicos de la salud y los derechos humanos vinculados. Aspectos fundamentales relacionados con las condiciones socioeconómicas esenciales de las personas tienen que ver con "toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud".¹⁰³ Estos factores incluyen "el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente".¹⁰⁴</p>
<p>CP</p> <p>ARTICULO 69.- El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de acceso a la salud preventiva para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. • Omisión del Estado para informar y disuadir sobre los riesgos del 	<p>Aunque tradicionalmente se ha considerado que estas obligaciones de progresiva realización "hasta el máximo de los recursos disponibles" del Estado (para usar los términos del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), no son exigibles de manera inmediata, los avances tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como del CDESC y del Relator Especial sobre este derecho han dado claros ejemplos sobre su medición. Así, en el derecho a la salud, sería necesario, por ejemplo, que la PDDH analizara el presupuesto disponible para los servicios de salud en comparación con los presupuestos destinados a otras actividades y servicios del Estado. A partir de esto, la PDDH habría de analizar si este es un uso eficiente o no de los recursos generales con los que cuenta el país para que, en caso de encontrar anomalías, pudiera reportarlas y recomendar la adopción de mejoras en el presupuesto. Además, en ese análisis presupuestario deberían considerarse, entre otros aspectos, la cantidad de recursos dedicados a zonas rurales, a mujeres y a niños, para de esta forma desagregar todos los elementos</p>

¹⁰² Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), HRV/GEN/1/Rev.7, 12 de mayo de 2004, párrafos 3 y 4.

¹⁰³ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, *Op. cit.* 138, párrafo 9.

¹⁰⁴ *Ibid.*, párrafo 11.

<p>veterinarios, por medio de organismos de vigilancia.</p> <p>Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 70.- El Estado tomará a su cargo a los indigentes que, por su edad o incapacidad física o mental, sean inhábiles para el trabajo</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 10 Derecho a la Salud</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.</p> <p>2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer</p>	<p>consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes no medicados y otras sustancias nocivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para supervisar el funcionamiento de los centros privados que brinden el servicio de salud. • Inadecuada infraestructura, equipo y funcionamiento de los centros de salud. • Inaplicación de métodos de medicina tradicional indígena útiles para complementar con la medicina moderna en comunidades indígenas. 	<p>que le pudieran ayudar a la PDDH a determinar si existe o no discriminación en la prestación de los servicios relacionados con la salud.</p> <p>El Comité de DESC expresa que “la realización progresiva significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12.”¹⁰⁵ Al respecto, la Corte sudafricana ha analizado si los programas de salud pública que excluyen a cierto tipo de pacientes de recibir tratamientos de diálisis están o no apegados a los derechos humanos.¹⁰⁶ La PDDH podría analizar dentro del ámbito de sus atribuciones no sólo las cuestiones presupuestarias, sino también las normas oficiales en materia de salud para determinar si cumplen con los requisitos de la realización progresiva al máximo de los recursos disponibles.</p> <p>Cabe recordar los elementos esenciales del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, los cuales podrían ser de gran utilidad para los funcionarios de la PDDH al analizar quejas individuales. De esta manera la PDDH podría evaluar de manera más eficiente las violaciones estructurales de este derecho. Estos elementos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Disponibilidad, b) Accesibilidad, en sus cuatro dimensiones, no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información c) Aceptabilidad, y d) Calidad.¹⁰⁷ <p>En suma, la atención a quejas donde se alegue la violación a derechos económicos, sociales y culturales, como es el caso del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud –más allá de la mera protección de la salud– requerirá que los funcionarios de la PDDH expandan sus criterios de análisis.</p>
--	---	---

¹⁰⁵ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, *Op. cit.* 144, párrafo 31.

¹⁰⁶ Corte Constitucional de Sudáfrica, Soobramoney v. Minister of Health KwaZulu Natal, 1998 (1) SA 765 (CC). Consultable en www.law-lib.utoronto.ca/Diana/TAC_case_study/MinisterofhealthvTACconst.court.pdf.

¹⁰⁷ Tanto el CDESC como el Relator Especial han desarrollado de manera amplia los contenidos y alcances de estos cuatro elementos.

<p>la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:</p> <p>a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;</p> <p>b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;</p> <p>c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;</p> <p>d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;</p> <p>e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y</p> <p>f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.</p>		
Derecho a la alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para controlar y evitar la especulación de precios 	Como todos los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la alimentación atiende a la satisfacción de una necesidad, no sólo básica, sino

<p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 12 Derecho a la Alimentación</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.</p> <p>2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.</p>	<p>en los productos de la canasta básica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para generar de manera progresiva condiciones que permitan el acceso a los alimentos en cantidad y calidad necesarias para el desarrollo. • Omisión del Estado para asegurar la disponibilidad de alimentos necesarios en condiciones de calamidad o desastre natural. • Omisión del Estado para asegurar el acceso de grupos en situación de vulnerabilidad a los alimentos. 	<p>fundamental, al tener una relación intrínseca con el derecho a la integridad física y al derecho a la vida.</p> <p>De igual manera, el derecho a la alimentación se puede lograr mediante otros derechos, como el derecho al trabajo y a un salario digno, que facilita la obtención de ingresos para el consumo alimentario.</p> <p>Sin embargo, desde la óptica de la PDDH, el enfoque es más bien hacia la observancia de una política alimentaria del Estado (seguridad alimentaria), donde se garantice la planificación de la producción agrícola e industrial de todo tipo de alimentos, pero en especial, los que respondan a una canasta básica accesible a toda la población, en especial a los grupos en situación de exclusión y de mayor vulnerabilidad.</p> <p>Corresponde al Estado, por medio de sus instituciones competentes, garantizar sostenibilidad alimentaria para todos sus habitantes.</p>
<p>Derecho a la educación</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 53.- El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cobros ilegales de cuotas escolares en instituciones públicas. • Discriminación para acceder a la educación. • Prohibir la matrícula escolar o colegial a migrantes indocumentados. • Denegación arbitraria de inscripción o matrícula en centros públicos de educación. 	<p>Derecho a la educación</p> <p>El DIDH, particularmente el PIDESC, enfatiza los fines y objetivos de la educación más que su definición. Dicho Pacto establece que:</p> <p>[L]a educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y</p>

<p>conservación, fomento y difusión.</p> <p>El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 13 Derecho a la Educación</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a la educación.</p> <p>2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de adaptación del pensum escolar y colegial a la cosmovisión, idioma y cultura de los pueblos indígenas en centros educativos dentro de esas comunidades. • Acciones u omisiones atentatorias contra la libertad académica de aprendizaje, investigación y de cátedra. • Actos atentatorios contra la autonomía universitaria. • No otorgamiento del presupuesto oficial fijado a la educación superior. • Inadecuada infraestructura de los centros de educación pública. • Utilización de libros de texto que incitan a la discriminación, así sea sin intencionalidad. • Inadecuada selección de personal docente en centros públicos de educación. • Aplicación de planes de estudio incompatibles con los objetivos de la educación. • Tolerancia del Estado en expulsiones ilegales en centros privados de educación. • Incapacidad del Estado para instrumentar programas de adecuación curricular para 	<p>entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.¹⁰⁸</p> <p>En realidad, el reto de ofrecer una definición en este caso consiste en que el derecho a la educación está establecido en una gran variedad de textos de naturaleza jurídica muy heterogénea: se encuentra en convenciones, declaraciones, marcos de acción, programas, recomendaciones, entre otros documentos.</p> <p>Del conjunto de instrumentos y estándares jurídicos internacionales normativos de la UNESCO se desprende un concepto del derecho humano a la educación que tiene al menos tres características fundamentales: a) se trata de un derecho fundamental para el desarrollo integral de la persona; b) es un derecho que potencia el disfrute de todos los demás derechos humanos; c) es un derecho que vigoriza, en particular, la posibilidad de la libertad de pensamiento y de expresión del individuo, así como su participación como ciudadano en la vida democrática, por lo que tiene gran relevancia social. En realidad, los beneficiarios del derecho a la educación son tanto los individuos como la sociedad.</p> <p>La UNESCO ubica el fundamento del derecho a la educación en un conjunto de instrumentos y estándares internacionales.</p> <p>Por ejemplo, el CDESC¹⁰⁹ ha sostenido que la gratuidad en la educación no consiste únicamente en que la matrícula sea gratuita: la gratuidad también significa que no deben existir “gastos indirectos”, “tales como los derechos obligatorios cargados a los padres (que en ocasiones se presentan como voluntarios cuando de hecho no lo son) o la obligación de llevar uniforme relativamente caro”.¹¹⁰ En el caso de que la PDDH recibiera una queja sobre el particular, debería atenderla a la luz de la observación general del Comité DESC.</p>
--	---	--

¹⁰⁸ Artículo 13(1) del PIDESC, Asamblea General, Resolución 2200 A(XXI), 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976.

¹⁰⁹ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, El derecho a la educación, 1999.

¹¹⁰ *Ibid.*, párrafo 7.

<p>todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.</p> <p>3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:</p> <p>a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;</p> <p>b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;</p> <p>c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por</p>	<p>personas con dificultad de aprendizaje en instituciones públicas y falta de control para que se instrumenten también en centros de educación privada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento del Estado del deber de inspeccionar y vigilar el funcionamiento y calidad de la educación en centros públicos y privados de educación. • Omisión del Estado para promover de manera progresiva el acceso a la educación secundaria y superior gratuita. • Clausura injustificada de instituciones públicas de enseñanza. • Falta de programas para combatir la deserción escolar y colegial. 	<p>En cuanto a la obligación del Estado de garantizar infraestructura normativa e institucional para prestar los servicios educativos, la PDDH debe destacar las distintas obligaciones que en este aspecto tiene el Estado en relación con cada nivel educativo. El DIDH aclara las distintas obligaciones de los Estados en este sentido.</p> <p>La labor de la PDDH debe considerar la dimensión que aporta el DIDH en la calificación de las quejas y violaciones al derecho humano a la educación. Si la legislación interna registra un déficit respecto de los derechos reconocidos en la norma internacional, corresponde a la PDDH instar a las autoridades correspondientes a satisfacer al quejoso en el caso particular. La PDDH también debe promover los cambios y adecuaciones que requieran las normas para que se establezcan las competencias y los procedimientos adecuados: el derecho humano menoscabado en un caso en particular debe ser satisfecho en todos los demás casos.</p> <p>El derecho a la educación es un derecho complejo. La PDDH debería aludir a parámetros que permitan evaluar el alcance concreto del derecho a la educación: la aceptabilidad, la adaptabilidad, la accesibilidad y la disponibilidad.¹¹¹ Existe una gama sistemática y coherente de indicadores específicos que permiten determinar la existencia o la ausencia de recursos, así como la evaluación de los actores involucrados en el uso de tales recursos y de conformidad con las metas o los fines definidos. Sólo recorriendo este camino podrán los funcionarios de la PDDH contar con las herramientas necesarias para realizar bien su trabajo en el ámbito del derecho a la educación.</p>
--	--	---

¹¹¹ *Ibid.*, pp. 33-41. Dichos parámetros fueron propuestos y desarrollados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General 13, *op. cit.*, párrafo 6. El Comité explica, en este sentido que, "Este planteamiento corresponde al marco analítico general seguido a propósito de los derechos a una vivienda y una alimentación adecuadas y a la labor de [Katarina Tomasevski] la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. [...] En su informe preliminar a la Comisión de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación menciona "cuatro características fundamentales que deben tener las escuelas primarias: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad" (E/CN.4/1999/49, párr. 50).

<p>la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;</p> <p>d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;</p> <p>e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.</p> <p>4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.</p> <p>5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes.</p>		
---	--	--

<p>CP</p> <p>ARTICULO 54.- El Estado organizará el sistema educativo para local creará las instituciones y servicios que sean necesarios. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 55.- La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano.</p> <p>Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos.</p>		
--	--	--

<p>CP</p> <p>ARTICULO 56.- Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial.</p> <p>La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 57.- La enseñanza que se imparta en los centros educativos oficiales será esencialmente democrática.</p> <p>Los centros de enseñanza privados estarán sujetos a reglamentación e inspección del Estado y podrán ser subvencionados cuando no tengan fines de lucro.</p> <p>El Estado podrá tomar a su cargo, de manera exclusiva, la formación del magisterio.</p>		
---	--	--

<p>CP</p> <p>ARTICULO 58.- Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosos, raciales o políticas.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 59.- La alfabetización es de interés social. Contribuirán a ella todos los habitantes del país en la forma que determine la ley.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 60.-</p> <p>...</p> <p>Se garantiza la libertad de cátedra.</p>		
<p>Derecho a la cultura y a gozar de los beneficios de la cultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política general de fomento a la cultura y todas sus derivaciones. • Falta de medidas de acción 	<p>Ver derecho a la educación, derecho a la propiedad social y colectiva</p> <p>Este es un derecho fundante colectivo de la sociedad salvadoreña que supone que todas las personas deben tener acceso a disfrutar de manera plena de los</p>

<p>CP</p> <p>ARTICULO 53.- El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.</p> <p>El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 14 Derecho a los Beneficios de la Cultura</p> <p>1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:</p> <p>a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;</p> <p>b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;</p> <p>c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le</p>	<p>afirmativa para garantizar el acceso y fomento de la cultura para los grupos en situación de vulnerabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restricciones ilegales o arbitrarias al desarrollo de actividades culturales y científicas. • Clausura injustificada de centros de difusión científica y cultural. • Destrucción del patrimonio histórico y cultural. • Omisión del Estado para proteger y conservar el patrimonio histórico y cultural. • Prohibición, restricción o interferencias ilícitas de los medios de difusión cultural. • Omisión del Estado para desarrollar y difundir proyectos de carácter cultural. 	<p>beneficios de la cultura en todas sus manifestaciones posibles. Siendo la cultura una actividad amplia del quehacer humano, en situaciones especiales, se convierte en un derecho fundamental con relación intrínseca a la integridad, a la vida y a la dignidad de ciertos grupos de la sociedad como los pueblos indígenas.</p> <p>Desde la perspectiva de la PDDH, el acceso a la cultura debe ser parte de una política de Estado de carácter transversal que hace parte de la formación y construcción de un proyecto de vida digna de todas las personas, de ahí que sus beneficios no pueden estar restringidos al goce de un sector económico determinado.</p> <p>En ese sentido, no puede haber en enfoque pasivo del goce de beneficios de la cultura, sino, más importante todavía, es que haya una política de promoción de la cultura acorde con programas de acción afirmativa que proyecten a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad a explotar sus habilidades, experiencias y costumbres como una forma de beneficiarse de esas actividades como parte principal o complementaria de su proyecto de vida.</p> <p>En otro ámbito de protección a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a la cultura y a sus beneficios hace parte del derecho integral a su vida y a la propiedad. Para esos efectos, véase el derecho a la propiedad colectiva en el siguiente apartado.</p>
--	---	---

<p>correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.</p> <p>2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.</p> <p>3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.</p> <p>4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 53.- El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y</p>		
--	--	--

<p>finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.</p> <p>...</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 62.- El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su conservación y enseñanza.</p> <p>Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 63.- La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación.</p>		
<p>Derecho al acceso al agua</p>	<ul style="list-style-type: none">• Desabastecimiento sistemático del servicio de agua potable.• Restricciones ilegales para acceder al servicio de agua potable.• Denegación de acceso al agua	<p>Ver derecho a la vida digna (proyecto de vida digna)</p> <p>El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud incluye la protección de la salud, pero también los factores determinantes básicos de ésta como el acceso a agua limpia y potable, a la alimentación, nutrición, vivienda,</p>

	<p>potable por discriminación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abastecimiento del servicio en condiciones no aptas para su consumo. • Cobros excesivos por el servicio. • Prestación irregular del servicio. • Omisión del Estado para promover progresivamente el acceso al servicio da agua potable. 	<p>condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano, así como otros derechos relacionados, entre ellos, el derecho a la no discriminación.¹¹² La actuación de la PDDH en esta área podría llegar a ser determinante para la atención de la salud individual de algunas personas, pero también para prevenir enfermedades o la violación a otros derechos humanos.</p> <p>De acuerdo con la Observación General 14 del Comité DESC, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud comprende: la atención de la salud, los factores determinantes básicos de la salud y los derechos humanos vinculados. Aspectos fundamentales relacionados con las condiciones socioeconómicas esenciales de las personas tienen que ver con “toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud”.¹¹³ Estos factores incluyen “el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente”.¹¹⁴</p> <p>El acceso al agua potable debe analizarse desde la óptica de un servicio público general que debiera tener un enfoque prioritario en aquellas comunidades rurales y marginadas donde la falta de acceso implica no solo una potencial afectación a las salud de esos colectivos, sino principalmente de las mujeres que son las que tienen mayor contacto con ese líquido en condiciones de contaminación.</p>
<p>Derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 53.-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para conservar, desarrollar y difundir proyectos de envergadura científica. 	<p>Desde la competencia de la PDDH, corresponde asumir una visión balanceada entre los derechos de protección de propiedad intelectual por la inventiva científica, pero también, para que esos beneficios favorezcan de ese progreso científico a la mayor cantidad de la población.</p> <p>En ese sentido, los estándares de la Organización Mundial del Comercio y la vigencia del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), suponen una serie de reglas y plazos de protección de esa invención que deben ser respetados. Sin embargo, cuando haya abuso en el cobro de los beneficios de la propiedad intelectual que</p>

¹¹² Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), HRI/GEN/1/Rev.7, 12 de mayo de 2004, párrafos 3 y 4.

¹¹³ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, *Op. cit.* 138, párrafo 9.

¹¹⁴ *Ibid.*, párrafo 11.

<p>...</p> <p>El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico.</p>		<p>obsta culicen derechos básicos de las personas, como podrá ser el progreso científico de descubrimientos medicinales para enfermedades y tratamientos que afectan a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, o el mejoramiento de la productividad alimentaria, el Estado deberá garantizar la provisión de esos beneficios mediante convenios o subsidios con los propietarios de esas invenciones para garantizar un disfrute más pleno de ese progreso científico.</p>
<p>Derecho a la propiedad social y colectiva</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 101.- El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano.</p> <p>El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 102.- Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social.</p> <p>EL Estado fomentará y protegerá la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de una política social enfocada en la redistribución de la propiedad para garantizar productividad agrícola sustentable. • Criterios de expropiación inadecuados o inoportunos. • Indemnizaciones por expropiación más altas que los estándares del mercado. • Criterios errados para justificación de interés común para realizar expropiaciones. • Irrespeto al concepto de propiedad colectiva de los territorios de los pueblos indígenas. • No reconocimiento de la posesión indígena ancestral como criterio válido para validación de la propiedad sin necesidad de inscripción registral. 	<p>Ver Derecho a la Propiedad</p> <p>En el apartado del derecho a la propiedad se tocó este derecho desde una óptica individual, pero se explicó también su dimensión social. Es este último enfoque el que debe estar patente en las políticas de distribución de la riqueza como parámetro de oportunidades para que personas que no tienen acceso a la tierra o a otras formas de propiedad, puedan ser beneficiarias de programas de reforma agraria o participar de organizaciones cooperativas y de autogestión para tomar ventaja de modalidades de producción social que les permitan ingresos, oportunidades y todo tipo de beneficios económicos legales.</p> <p>La justicia social reconocida en el artículo 101 de la Constitución responde a un enunciado de solidaridad que, a su vez obliga al Estado a ser proactivo en la promoción de un desarrollo económico integral con enfoque de acción afirmativa para aquellos grupos y personas en situación de desventaja y exclusión.</p> <p>Como parte de esas tareas, la inercia del Estado para promover opciones de desarrollo equitativo y diferenciado profundizan problemas estructurales que podrían generar violencia social.</p> <p>Otra dimensión de la propiedad social y colectiva es la obligación del Estado de respetar la propiedad y la posesión colectiva de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Este es un tema vital en El Salvador, que es el país de Centroamérica donde se invisibiliza más profundamente la misma existencia de los pueblos indígenas.</p> <p>A ese respecto, la violación al derecho a la propiedad colectiva de sus territorios trasciende hacia la violación del derecho a la vida, tal y como lo determinó la</p>

<p>iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.</p> <p>...</p> <p>El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 104.- Los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas dentro de los límites y en la forma establecida por la ley.</p> <p>La propiedad estatal rústica con vocación agropecuaria que no sea</p>		<p>Corte Interamericana en el Caso Yakie Axa vs. Paraguay. La principal construcción jurídica respecto del derecho a la propiedad desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, ha sido la de retomar los elementos constitutivos de la propiedad indígena dispuestos en el Convenio 169 de la OIT apoyados en la experticia de distintos antropólogos que confirman que esa propiedad conlleva otros aditamentos propios de una vida colectiva. Bajo esa tesis, la Corte Interamericana reconoce que la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras¹¹⁵. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.</p> <p>Conforme a esa óptica, la Corte Interamericana hace las siguientes contribuciones jurídicas en esta sentencia, no solo para el caso concreto, sino también para situaciones similares donde se discuta el derecho a la propiedad y que son insumos útiles para el trabajo que realiza la PDDH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme al artículo 13 del Convenio No. 169 de la OIT, los Estados deberán respetar “la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.” • En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorpóreos que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados
---	--	---

¹¹⁵ Cfr. *Caso Masacre Plan de Sánchez .Reparaciones* (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 85, y *Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra* nota 176, párr. 149.

<p>indispensable para las actividades propias del Estado, deberán ser transferidas mediante el pago correspondiente a los beneficiarios de la Reforma Agraria. Podrá también transferirse a corporaciones de utilidad pública.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 106.- La expropiación procederá por causas de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización.</p> <p>Cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública o cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser previa.</p> <p>Cuando justifique el monto de la indemnización que deba reconocerse por los bienes expropiados de conformidad con los incisos anteriores, el pago podrá hacerse a plazos, el cual no excederá en conjunto de quinceaños, en cuyo caso se pagará a la persona expropiada el interés</p>		<p>por el artículo 21 de la Convención Americana. El término “bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla “aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorpóreos y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”¹¹⁶.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad. • Al aplicar estos estándares a los conflictos que se presentan entre la propiedad privada y los reclamos de reivindicación de propiedad ancestral de los miembros de comunidades indígenas, los Estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho por sobre el otro. Así, por ejemplo, los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el <u>derecho colectivo a la supervivencia</u> como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural. • Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, <u>se podría estar afectando otros derechos básicos</u>, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros. • La restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el artículo 21.2 de la Convención. Esto no significa
--	--	--

¹¹⁶ Cfr. *Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni*, *supra* nota 176, párr. 144, y *Caso Ivcher Bronstein*, *supra* nota 176 párr. 122.,

<p>bancario correspondiente. Dicho pago deberá hacerse preferentemente en efectivo.</p> <p>Se podrá expropiar sin indemnización las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos.</p> <p>Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescindibles.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 110.- No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado.</p> <p>A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas.</p> <p>...</p> <p>Corresponde al Estado prestar por sí o</p>		<p>que siempre que estén en conflicto los intereses territoriales particulares o estatales y los intereses territoriales de los miembros de las comunidades indígenas, prevalezcan los últimos por sobre los primeros. Cuando los Estados se vean imposibilitados, por razones concretas y justificadas, de adoptar medidas para devolver el territorio tradicional y los recursos comunales de las poblaciones indígenas, la compensación que se otorgue debe tener como orientación principal el significado que tiene la tierra para éstas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas.
---	--	--

por medio de instituciones oficiales autónomas, los servicios de correos y telecomunicaciones. Podrá tomar a su cargo otros servicios públicos, cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente o por medio de las mencionadas instituciones o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales, las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador.

CP

ARTICULO 116.- El Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural. Facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras.

CP

ARTICULO 117.- Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y

<p>aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados.</p> <p>La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio serán objeto de leyes especiales.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 120.- En toda concesión que otorgue el Estado para establecimiento de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de servicio público, deberá estipularse, como condición esencial, que después de transcurrido cierto tiempo, no mayor de cincuenta años, tales obras pasarán por ministerio de ley, en perfectas condiciones de servicio, al dominio del Estado, sin indemnización alguna.</p> <p>Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.</p>		
---	--	--

DERECHOS		<p>Derechos de tercera generación</p> <p>El derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad, el derecho a la conservación del medio ambiente y el derecho al desarrollo han sido catalogados como derechos humanos de tercera generación.</p> <p>Es evidente que, por su propia naturaleza, la satisfacción de estos derechos depende en buena medida de la comunidad internacional. Sin embargo, hay actividades y omisiones de los servidores públicos que afectan su satisfacción, principalmente en materia del derecho a la conservación del medio ambiente, por lo que su inclusión en un manual como el que se propone permite poner de relieve las responsabilidades de la PDDH en cada caso.</p> <p>Este tipo de derechos tienen como rasgo común que su afectación involucra al común denominador de las personas y futuras generaciones, por lo cual se amplía el ámbito de protección y acceso a la justicia de manera que cualquier persona, o grupo de personas, aún cuando no demuestren tener un derecho subjetivo, tienen legitimidad activa para reclamar su violación por la vía de intereses difusos. Esa misma naturaleza compromete a la PDDH a utilizar la interposición de recursos de amparo o de cualquier otra naturaleza por medio de la actio popularis (acción de clase).</p>
Derecho a la paz	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política de fomento del derecho a la paz con visión integral. • Falta de programas educativos y culturales que fomenten la prevención de los conflictos. • Falta de cultura y de fomento de métodos para la resolución alternativa de los conflictos sociales, familiares, particulares y empresariales. 	<p>Derecho a la paz</p> <p>La paz no es solamente un concepto relacionado con la mera ausencia de guerra, también se asocia con la plenitud de un estado en el que se goza de la libertad y justicia, pilares fundamentales para el goce del resto de los derechos humanos.</p> <p>El derecho humano a la paz ha evolucionado de manera importante en el DIDH. En un primer momento, aparece la paz como un valor social fundamental, condición de la vida libre y democrática y susceptible de ser realizado a través del reconocimiento y garantía de los derechos humanos.</p>

		<p>En la actualidad, la paz no es reconocida únicamente como un valor social básico, sino como el objeto de protección de un derecho humano: el derecho a la paz. Ahora ya no es la paz el resultado de reconocer y garantizar los demás derechos humanos: en realidad, invirtiendo los términos, la paz es el derecho humano básico que habrá de asegurar el reconocimiento y garantía de los demás derechos.</p> <p>Como ha sido expresado por Héctor Gros Espiell, el derecho a la paz “tiene dos vertientes, dos caras. Es un derecho colectivo, de los pueblos pero al mismo tiempo, es una relación entrañable, necesaria e ineludible, es un derecho individual, del que son titulares todos los seres humanos, sin exclusión ni discriminación.”¹¹⁷</p> <p>El contenido normativo del derecho a la paz ciertamente no se limita a una “conducta de omisión”.</p> <p>Si la paz fuera sólo la ausencia de conflictos armados o de violencia, podría llegar a ser meramente pasiva, incluso ante la opresión y la violación del derecho. No obstante, la paz es no violencia más justicia. La paz es un estado dinámico para asegurar el imperio del derecho. Como dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la paz es clave para que “el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía o la opresión”.</p> <p>El artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.</p> <p>Como argumenta Gómez Isa, una de estas condiciones imprescindibles es una sociedad en paz, por lo que dicho artículo se convierte en uno de los fundamentos del derecho a la paz.¹¹⁸ En este mismo sentido, Gros Espiell</p>
--	--	--

¹¹⁷ Héctor Gros Espiell, “La implementación internacional del derecho humano a la paz” en *Diálogo UNESCO*, Núm. 21, junio 1997, p. 22. Véase también Jesús María Alemany Briz, “La paz, ¿un derecho humano?” en M. Contreras, L. Pomed y R. Salanova (coords.), *Nuevos escenarios y nuevos colectivos de los derechos humanos*, Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza, 1998, pp. 17-45.

¹¹⁸ Felipe Gómez Isa, “Derecho a la paz” en *Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo*, en <http://dicc.hegoa.efaber.net/>, fecha de consulta: 26 de agosto de 2008.

		<p>argumenta: “si el concepto de orden internacional incluye necesariamente la idea de paz, debe decirse que toda persona tiene derecho a que exista un orden internacional capaz de asegurar y garantizar la paz , tanto en lo individual como en lo colectivo.” ¹¹⁹</p> <p>El derecho a la paz, como el resto de los llamados “derechos de tercera generación” no ha sido reconocido mediante un instrumento jurídico internacional vinculante y susceptible de ratificación. Los también llamados “derechos de solidaridad” han sido recogidos fundamentalmente en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y en Declaraciones de Conferencias Mundiales convocadas por dicho organismo.</p> <p>La “Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz”, la cual es probablemente el texto más explícito e importante a probado por la Asamblea General en la materia, hace referencia al derecho a la paz. Otra Declaración de la Asamblea General que se considera como un importante ante referente de este derecho, es la “Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz” del 15 de diciembre de 1978. Esta Declaración se refirió por primera vez de manera significativa al derecho a la paz, al reafirmar “el derecho de las personas, los Estados y toda la humanidad a vivir en paz” e “instar solemnemente a todos los Estados” a observar los deberes que les incumben para garantizar este derecho.</p>
<p>Derecho al desarrollo</p> <p>Derecho al desarrollo sustentable</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política pública con enfoque de desarrollo humano sostenible. • Ausencia de espacios de participación de la sociedad civil para involucrarse en el diseño e implementación complementaria de planes de desarrollo. • Falta de enfoque de acción afirmativa para crear y desarrollar programas de desarrollo diferenciado a favor de los grupos 	<p>Ver derecho a la vida digna (proyecto de vida digna)</p> <p>Si bien es cierto que el contenido y alcance del Derecho al Desarrollo puede considerarse aún en formación, también lo es que ya existen líneas definidas sobre lo que implica este derecho. En efecto, a partir de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 (Declaración), así como de los puntos resolutive de la Convención de Viena de 1993, la Organización de las Naciones Unidas asumió un compromiso por delinear este derecho. En particular, se creó un Grupo de Trabajo sobre el tema así como el mandato de un Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo. Estas son, al día de hoy, las fuentes con mayor autoridad en el tema.</p>

¹¹⁹ Héctor Gros Espiell, *Derechos Humanos y Vida Internacional*, México, UNAM-CNDH, 1995, p. 119.

	<p>en situación de vulnerabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para controlar o regular actividades que atenten contra las especies en vías de extinción. • Sobreexplotación de los recursos naturales. 	<p>El derecho al desarrollo es distinto al desarrollo humano. Ambos se influyen mutuamente, pero cada uno tiene características y fines propios.</p> <p>La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo define al desarrollo como:</p> <p>... un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él (Declaración, artículo 1 (1).</p> <p>Aunque hay elementos comunes, es posible distinguir al derecho al desarrollo del desarrollo mismo. El derecho al desarrollo está constituido por tres principios:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hay un derecho humano inalienable que se llama derecho al desarrollo; b) Hay un proceso particular de desarrollo económico, social, cultural y político en el que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; y c) El derecho al desarrollo es un derecho humano en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en ese proceso particular de desarrollo, contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él.¹²⁰ <p>En otras palabras, el Derecho al Desarrollo no es cualquier tipo de desarrollo ni pretende la implementación y ejecución de cualquier clase de programas, aun cuando tiendan a mejorar de manera integral la calidad de vida humana, sino que se refiere a un proceso particular de desarrollo donde los individuos y la sociedad en general son sujetos activos del derecho y no sólo receptores de los beneficios producidos por el desarrollo. Dicho proceso de desarrollo únicamente puede ser aquél que tiene como fin la realización de <i>todos</i> los derechos humanos, sin que ninguno se vea perjudicado por las políticas de desarrollo.</p>
--	---	---

¹²⁰ Tercer informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, (2001), E/CN.4/2001/WG.18/2, p. 4.

	<p>Dicho proceso parte de la idea de que todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales están interrelacionados y son interdependientes. De esta forma, si cualquiera de ellos se ve afectado, los demás también se verán perjudicados. Sin embargo, esto no quiere decir que el Derecho al Desarrollo deba entenderse como una simple suma de derechos, sino más bien debe comprenderse como una forma de ejercer cada uno de los derechos que tenga en cuenta su interdependencia “sin socavar el ejercicio de otros derechos y sin pasar por alto los requisitos de sostenibilidad de todo el proceso de realización de dichos derechos”.¹²¹ Además, ese proceso particular conlleva la idea de crecimiento económico o más directamente de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y, desde luego, su justa distribución. Los recursos económicos son así una precondition para el establecimiento, por ejemplo, de un sistema de justicia respetuoso del debido proceso, y su justa distribución es a su vez condición para el acceso a la justicia.</p> <p>Ese proceso al que se refiere el Derecho al Desarrollo ha sido definido como un <i>vector</i>, en el sentido de que ese derecho está conformado por todos los derechos humanos y las libertades fundamentales más el PIB y otros recursos financieros, técnicos e institucionales que permiten el mejoramiento del bienestar de la población entera y la realización de los derechos que deban reivindicarse. Asimismo, ese proceso debe llevarse a cabo de conformidad con un enfoque basado en los derechos, es decir, de forma participativa, sin discriminación, equitativa y con transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.</p> <p>En resumen, esto significa que cualquier programa, política pública, legislación y, en general, toda medida adoptada por el Estado debe proteger todos los derechos en su conjunto sin demérito de ningún otro.</p> <p>El Derecho al Desarrollo es un derecho compuesto y no sólo un agregado de derechos.¹²² Se trata no de la realización individual de los derechos, sino de su ejercicio conjunto, “de manera que se tenga en cuenta su influencia recíproca, tanto sincrónica como diacrónica.”¹²³</p>
--	--

¹²¹ Tercer informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, *op. cit.*, p. 8.

¹²² Arjun Sengupta, “The Human Right to Development”, en B.A. Andreassen y S.P. Marks (eds.), *Development as a Human Right. Legal, Political and Economic Dimensions*, Boston MA, Harvard School of Public Health, 2006, p. 16.

¹²³ Tercer informe del Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, *op. cit.*, p. 11.

	<p>De esta forma, cualquier política pública debe tener como fin último la realización de todos los derechos, considerados en conjunto, y no sólo el cumplimiento de uno de ellos de manera aislada. Además, todos los recursos económicos de un país deben ponerse a disposición de la realización de los derechos humanos mediante un proceso que respete, a su vez, los derechos humanos.</p> <p>En el derecho al desarrollo la exigencia al Estado es muy alta. No se trata sólo de cumplir con un derecho, sino de cumplir con uno o varios derechos sin socavar otros. Se considerará que hay una mejora en el Derecho al Desarrollo sólo si:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Todos los elementos del <i>vector</i> (el proceso particular integrado por los derechos y el PIB) mejoran, b) Un elemento o algunos mejoran, pero ninguno empeora . <p>Lo anterior, implica que si un derecho mejora pero otro es violado, entonces hay un empeoramiento en el derecho. En consecuencia, el mejoramiento del Derecho al Desarrollo requiere que al menos un derecho humano mejore mientras que ningún otro empeore. De no evitar la violación de otros derechos, aunque se trate de mejorar uno, el Derecho al Desarrollo se vería violado. Lo que en este caso le corresponde a las autoridades es reconocer esa situación y “compensar la violación” antes de que suceda, de tal forma que las víctimas potenciales no sufran el daño de la violación pues han obtenido una reparación previa al daño.¹²⁴</p> <p>Ahora bien, la protección de este derecho no lo puede analizar la PDDH sólo mediante la investigación de quejas individuales, sino más bien por medio del análisis de los programas, las políticas públicas y las leyes aplicadas por las autoridades del país. Si bien las organizaciones de la sociedad civil también deben monitorear el tipo de políticas públicas impulsadas por el gobierno, le corresponde a la PDDH convertirse en el órgano fundamental de rendición de cuentas. Por las características propias de este derecho, su exigibilidad a través de los sistemas de justicia tradicionales es muy limitada. Se trata más de un análisis sustancial del quehacer público a la luz de los derechos humanos.</p>
--	--

¹²⁴ Cuarto informe del Experto Independiente en el Derecho al Desarrollo, Sr. Arjun Sengupta, (2002), E/CN.4/2002/WG.18/2, p. 40-41.

<p>Derecho al patrimonio común de la humanidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de normativa especializada en materia de conservación de patrimonio nacional declarado o con vocación de ser patrimonio de la humanidad. • Falta de planes para explotar y conservar con visión integral el patrimonio cultural y natural del país con vocación de patrimonio de la humanidad. 	<p>Derecho al patrimonio común de la humanidad</p> <p>El patrimonio común de la humanidad es un concepto novedoso que involucra la prevención, preservación y protección de recursos naturales y bienes culturales que tengan un valor significativo de carácter universal que pueda ser del disfrute de la humanidad, incluyendo su utilización y acceso mediante beneficio derivado de avances científicos y tecnológicos.</p> <p>La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” de la UNESCO enumera en sus artículos 1 y 2 los bienes pertenecientes al “patrimonio cultural” y al “patrimonio natural”. Esta convención utiliza el término “valor universal excepcional.”</p> <p>El concepto de “valor universal excepcional” por sí solo parece un concepto subjetivo difícil de aplicar. Por ello, en la Convención los Estados Partes definieron aquello que debía entenderse por “patrimonio cultural” y “patrimonio natural” de tal forma que no quedara al arbitrio su designación. El artículo primero, por ejemplo, considera como patrimonio cultural “los monumentos (...) que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.”</p> <p>Igualmente, resulta necesario definir el concepto “humanidad” para entender el contexto. Humanidad puede definirse como el “...conjunto de seres humanos, (que) presenta un marcado carácter prospectivo en la medida en que abarca igualmente las futuras comunidades humanas”.¹²⁵ Esta definición permite ampliar el ámbito de protección de los derechos humanos vigentes, ya que implica la preservación del patrimonio común para las generaciones venideras y no sólo la presente.¹²⁶ De esta manera, al analizar quejas relacionadas con este derecho, los funcionarios de la PDDH habrán de estudiar los impactos que la afectación al patrimonio común traen no sólo para los individuos actuales, sino principalmente para futuras generaciones, de tal forma que se requerirán estudios especializados y no sólo el análisis del impacto sobre las víctimas actuales.</p>
--	---	---

¹²⁵ Blanc Altemir, Antonio, *El patrimonio común de la humanidad: hacia un régimen jurídico internacional para su gestión*, Barcelona, Bosch, 1992, p. 34

¹²⁶ *Ibidem*.

		Adicionalmente, deberán considerarse las complicaciones que un concepto ampliado de humanidad acarrea tratándose de la reparación del daño. En efecto, en principio podría afirmarse que no existe una reparación apropiada para las generaciones futuras, por lo que la reparación del daño deberá estar vinculada con la reconstrucción, por ejemplo, de monumentos, o la preservación de alguna especie animal o vegetal con cargo al Estado.
<p>Derecho al medio ambiente sano Protección y conservación de la biodiversidad</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 101.-</p> <p>...El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 103.-</p> <p>...El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación sónica • Contaminación electromagnética • Contaminación del aire • Contaminación del suelo • Contaminación del recurso hídrico y de las aguas superficiales • Contaminación de área de trabajo • Depredación desmedida de áreas forestales • Autorización y falta de control para instalación de plantas o industrias altamente contaminantes en lugares cercanos a núcleos urbanos • Tolerancia estatal ante la contaminación sistemática del agua, suelo y aire. • Ausencia o aplicación deficiente de estrategias para conservar el medio ambiente, prevenir su deterioro o reparar los daños al mismo. • Deficiencia o ausencia de planificación del uso o aprovechamiento de los recursos naturales. • Omisión o negligencia para regular actividades que producen contaminación del espectro radiomagnético. 	<p>El derecho al medio ambiente, si bien está reconocido en la doctrina e instrumentos internacionales como un derecho humano, todavía no ha sido desarrollado en la práctica de manera amplia. La mayoría de las causas y medios de reclamación han sido enfocados desde una óptica activista y política muy importante, pero no ha encontrado suficiente espacio propiamente en la documentación de casos concretos debido a la complejidad del tema y a requerimientos técnicos como estudios de impacto ambiental que resultan onerosos para los denunciantes.</p> <p>La principal referencia convencional al medio ambiente como derecho humano en las Américas se ubica en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. En cambio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no lo reconoce de manera específica, sino mediante una interpretación integral del artículo 26 que convoca al deber de los Estados Parte de ese tratado de respetar los derechos económicos, sociales y culturales.</p> <p>Una revisión amplia de los casos conocidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencia como primera conclusión que no se han resuelto casos específicos sobre violaciones al medio ambiente. Sin embargo, sí ha habido planteamientos alternativos donde pueden ubicarse situaciones que involucran, aunque sea tangencialmente, violaciones a este derecho.</p> <p>De manera casi sistemática, son los casos relacionados con derechos de pueblos indígenas, los que más involucran violaciones ambientales. Ello no es casual. Factores propios atinentes al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, así como su percepción del territorio como un concepto integral donde se incluyen factores culturales y religiosos para ubicar un sentido de pertenencia que trasciende lo meramente espacial, es lo que fundamenta una idea de "propiedad" desde la cosmovisión indígena. Esta visión difiere en gran medida de la visión clásica occidental, más enfocada hacia su naturaleza de mero factor de producción.</p>

<p>CP</p> <p>ARTICULO 106.- La expropiación procederá por causas de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización.</p> <p>Cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública o cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser previa.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 117.- Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negligencia para regular actividades que producen contaminación sónica. • Omisión o negligencia en la investigación y sanción por incumplimiento de las normas ambientales. • Omisión de proteger contra toda forma de conducta que tenga como resultado la destrucción, deterioro o degradación del medio ambiente y afectaciones u otros derechos individuales o de la colectividad. • Omisión o negligencia en la regulación y control del manejo y disposición de todo tipo de desechos y, especialmente, de los más tóxicos y contaminantes. • Omisión del Estado para promover o facilitar la utilización de la ciencia y tecnología para descubrir, evitar y combatir riesgos que amenazan el medio ambiente. • Impedir u omitir acceso a la información y consulta a pueblos indígenas o a la población en general en relación con proyectos que puedan impactar sobre el medio ambiente. • Restricciones o limitaciones para acceder o recibir información sobre el medio ambiente o los 	<p>Precisamente, el reconocimiento del territorio indígena como un derecho colectivo en los términos del artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante “Convenio 169 de la OIT”), incluye no sólo el territorio específico donde se asienta la comunidad indígena, sino también lo que se reconoce como el “hábitat útil”;¹²⁷ todo lo cual involucra elementos propios hacia su conservación y sostenibilidad. De manera más clara, el artículo 7.4 del Convenio 169 integra esa protección con el medio ambiente al establecer que “[l]os gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”. De ahí que la protección al medio ambiente está en la agenda de lo cotidiano para los pueblos indígenas.</p> <p>El derecho al medio ambiente suele identificarse con el medio ambiente sano e implica la utilización sostenible, moderada y con enfoque de protección y conservación, de todos los elementos constitutivos del hábitat de la humanidad, incluyendo la flora y fauna y las condiciones colaterales para su realización. Algunas de las principales formas de violación del derecho al medio ambiente, sin que ello represente una lista taxativa, tienen que ver con actos de depredación indiscriminada de bosques y de la biodiversidad, contaminación de ríos y lagos, actividades y malas prácticas que provocan erosión de la tierra, funcionamiento de industrias altamente contaminantes, métodos inapropiados de explotación de los recursos naturales, incluyendo depredación de los recursos marinos, colonización agrícola que amenaza la conservación de las cuencas y el consecuente desabastecimiento de agua de las comunidades.</p> <p>En el Sistema Interamericano, a pesar de que no existe un vasto desarrollo convencional específico para proteger el medio ambiente, sí hay un reconocimiento de su importancia que trasciende del mero reconocimiento de un derecho humano más, para ser dimensionado como un objetivo adicional de la democracia, tal y como lo estipula la Carta Democrática Interamericana en su artículo 15, que dispone:</p>
---	---	---

¹²⁷ Dicho artículo dispone: “La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

<p>La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio serán objeto de leyes especiales.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 11 Derecho a un Medio Ambiente Sano</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.</p> <p>2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.</p>	<p>efectos que pueda ocasionar la ejecución de proyectos particulares.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión de las instituciones competentes sobre el estado del medio ambiente para controlar o regular actividades que atenten contra las especies en vías de extinción. • Restricciones ilegales o arbitrarias para participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente. • Omisión del Estado de prevenir o mitigar los riesgos a la integridad física y psíquica de las personas por eventuales desastres naturales. • Falta de tipificación penal de suficientes conductas que afectan el medio ambiente. • Recursos legales insuficientes para garantizar acciones colectivas o populares para proteger el medio ambiente (intereses difusos). • Inacción de los operadores de justicia para adoptar decisiones de carácter preventivo para proteger el medio ambiente. • Retardo injustificado en los procesos para resolver casos de graves violaciones al medio ambiente. 	<p>El ejercicio de la democracia facilita la <u>preservación y el manejo adecuado del medio ambiente</u>. Es esencial que los Estados del Hemisferio <u>implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente</u>, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un <u>desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones</u> (subrayado no es del original).</p> <p>Por su parte, el Protocolo de San Salvador reconoce al medio ambiente como un derecho humano, sin embargo, el enunciado es bastante general, tal y como se detalla en el artículo 11, que dispone:</p> <p>Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano</p> <p>1. Toda persona tiene derecho a vivir en un <u>medio ambiente sano</u> y a contar con servicios públicos básicos.</p> <p>2. Los Estados partes <u>promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente</u> (subrayado no es del original).</p> <p>En el marco de protección del Protocolo de San Salvador, se entiende que el medio ambiente sano es un derecho colectivo y, por tanto, parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, tomando en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos, es evidente que la protección del medio ambiente, por su amplitud y ámbito de abstracción, trasciende los límites de la subjetividad clásica de ser un derecho individual, para ser entendido también como un derecho social que afecta a grupos colectivos nacionales o colectivos en situación especial, como los pueblos indígenas, hasta dimensionarse hacia toda la humanidad e, incluso, a las futuras generaciones. La especificidad del derecho al medio ambiente sano es de tal magnitud que no puede existir “sentido de apropiación” por una sola persona. Por ello, en ocasiones se le ubica como un derecho de interés difuso, pero es inevitable que también puede tener características de derecho claramente subjetivo, dependiendo del caso en que nos encontremos.</p>
--	---	--

		<p>Precisamente, las actuales tendencias de los derechos humanos hacia esa interrelación con el medio ambiente, han sido absorbidas en otras iniciativas regionales que favorecen la protección del medio ambiente. Algunos ejemplos de ellas son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolución 1819 “Derechos Humanos y Medio Ambiente” de la Asamblea General de la OEA.¹²⁸ Señala que “el efectivo goce de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación, los derechos de reunión y de libertad de expresión, así como el disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, podría facilitar la mejor protección del medio ambiente, mediante la creación de condiciones para modificar los patrones de conducta que conllevan la alteración del ambiente, la reducción del impacto ambiental derivado de la pobreza y patrones de desarrollo no sostenibles, la difusión más efectiva de información sobre el problema, y la participación más activa de los grupos afectados por el problema en los procesos políticos”. En tal sentido, resolvió: <p><i>“1. Destacar la importancia de estudiar el vínculo que puede existir entre el medio ambiente y los derechos humanos, reconociendo la necesidad de promover la protección del medio ambiente y el pleno goce de todos los derechos humanos.</i></p> <p><i>2. Solicitar a la Secretaría General un estudio sobre la posible interrelación entre la protección ambiental y el pleno goce de los derechos humanos, en colaboración con otros órganos del sistema interamericano.</i></p> <p><i>3. Encomendar al Secretario General que informe sobre la ejecución de la presente resolución al trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General”</i> (el resaltado no es del original).</p>
--	--	--

¹²⁸ Asamblea General de la OEA, OEA/Ser.P. AG/RES. 1819 (XXXI-O/01), Tercera Sesión Plenaria, 5 de junio, 2001.

		<p>• Resolución 1896 “Derechos Humanos y Medio Ambiente en las Américas” de la Asamblea General de la OEA. En seguimiento de la Resolución 1819, resolvió:</p> <p>“1. Continuar acompañando el tema, poniendo especial atención a los trabajos que los foros multilaterales relevantes vienen desarrollando sobre el mismo. 2. Alentar la colaboración institucional en materia de derechos humanos y medio ambiente en el ámbito de la Organización, particularmente entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unidad para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente...”¹²⁹</p> <p>• Declaración de Guácimo. Alianza Centroamericana para el desarrollo Sostenible. Firmada por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y el Primer Ministro de Belice. (Guácimo, Limón, República de Costa Rica, 1994).</p> <p>• Declaración Concausa, firmada por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos y el Primer Ministro de Belice (Miami, Florida, 10 de diciembre de 1994).</p> <p>• Alianza para el Desarrollo Sostenible en Centroamérica, documentos firmados por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y un representante del Primer Ministro de Belice, en la Cumbre Ecológica Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Managua, Nicaragua (Octubre 12 de 1994).</p> <p>• Primera Cumbre de las Américas: Plan de Acción, suscrito por 34 Jefes de Estado asistentes a la Primera Cumbre de las Américas (Miami, Florida 1994).</p> <p>Más recientemente, en el mes de septiembre de 2007, en el ámbito universal de las Naciones Unidas, luego de décadas de debate, se aprobó finalmente la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la que en lo referente a materia de medio ambiente, o de manera conexa,</p>
--	--	--

¹²⁹ Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES. 1896 (XXXII-O/02), Cuarta Sesión plenaria, el 4 de junio de 2002.

		<p>dispone lo siguiente:</p> <p>Artículo 29</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.</p> <p>Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.</p> <p>Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.</p> <p>Artículo 25</p> <p>Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese propósito les incumben respecto de las generaciones venideras.</p> <p>La importancia de esa Declaración universal, es que precisamente fue adoptada de manera casi unánime¹³⁰ y que aunque sea un instrumento de la ONU,</p>
--	--	---

¹³⁰ Hubo 11 abstenciones y solo votaron en contra cuatro

países (Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda).

		<p>también puede ser invocada y utilizada como un documento de protección subsidiario en el Sistema Interamericano.</p> <p>Otros instrumentos internacionales de Naciones Unidas –tanto tratados como resoluciones y recomendaciones emanadas de organismos internacionales–, que pueden servir como fuente para la argumentación y documentación de casos sobre medio ambiente, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). • Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1989. • Declaración de Estocolmo o Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (1972). • Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). • Declaración de Principios Juridicamente no Vinculantes antes de la CNUMAD para un Consenso Mundial sobre el Manejo, Conservación y Desarrollo Sostenible de Todos los Tipos de Bosques (ONU 1992). • Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992). • Agenda 21: Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible. Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Declaración de Principios. Texto Final del Acuerdo firmado por los gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Junio 1992, Río de Janeiro, Brasil. • Resolución (k) sobre “El Desastre Humano y Ecológico en la Región de Pastaza en Ecuador”. • Resolución sobre el Bosque Tropical del Consejo Europeo (Mayo 29, 1990). • Informe de la Comisión Europea sobre “Problemas del Medioambiente en la Región Amazónica”, “Medidas para proteger la Ecología en los Bosques Tropicales” (Octubre, 1990).
--	--	---

		<p>Todo ese contexto regional e internacional sirve de marco para comprender mejor los antecedentes y jurisprudencia del Sistema Interamericano en materia de medio ambiente.</p> <p>La importancia y urgencia de proteger el medio ambiente por la gravedad de los daños irreparables que se podrían producir a lo largo de la discusión de un caso de fondo, obligan a la PDDH a considerar la solicitud de medidas cautelares o el Sistema Interamericano. Solo a modo de ilustración se trae a colación el caso de la represa RALCO en el Sistema Interamericano que, en principio, suspendieron la construcción de ese proyecto hidroeléctrico y que se resolvieron con una solución amistosa.</p> <p>Ello ocurrió en el contexto de la petición No. 4617 /02, en la que se emitió el Informe No. 30/04 de Mercedes Julia Huenteao Beroiz a y otras contra Chile, con motivo del desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, llevado adelante por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA). Las denunciante son miembros del pueblo Mapuche Pehuenche, del sector Alto del Bío Bío, VIII Región de Chile. El 5 de octubre de 1993 se aprobó un proyecto de la empresa ENDESA, para construir una central hidroeléctrica en Ralco, zona en la cual viven las denunciante.¹³¹</p> <p>En relación con la problemática ambiental, el acuerdo de solución amistosa adoptado por las partes, refrendado por la Comisión Interamericana, entre otras cosas tuvo los siguientes alcances:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fortalecer la participación indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío. ○ Acordar los mecanismos que aseguren la participación de las comunidades Indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco. ○ Medidas tendientes al desarrollo y preservación ambiental del sector del Alto Bío Bío. ○ Acordar mecanismos para asegurar que las comunidades indígenas
--	--	---

¹³¹ CIDH, *Caso Mercedes Julia Huenteao Beroiz y otras c. Chile*, Informe de Solución Amistosa de 11 de marzo de 2004, Informe No. 30/04, Petición No. 4617/02.

		<p>sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto o Central Hidroeléctrica Ralco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fortalecer el desarrollo económico del sector del Alto Bio Bio y, en particular, de sus comunidades indígenas, mediante mecanismos que sean aceptables para la parte denunciante. ○ Acordar mecanismos que faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses del Alto Bio Bio, en beneficio de las comunidades indígenas. ○ Acordar mecanismos vinculantes para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bio Bio.
<p>Contaminación visual</p> <p>En materia de medio ambiente agregar: como hecho violatorio la contaminación visual y la obligación del Estado de mejorar la consulta pública en materia de medio ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obras públicas o privadas que afecten los escenarios naturales de manera negativa. • Concesiones de obras públicas que afecten los parajes naturales y visuales. 	Ver: conservación de la biodiversidad

DERECHOS DE LAS MUJERES Y ENFOQUE DE GENERO

DERECHOS DE LAS MUJERES Y ENFOQUE DE GENERO		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
Derechos de las mujeres y enfoque de género	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de una política de protección de derechos humanos y enfoque de género de carácter interinstitucional. • Omisión de planes y programas de sensibilización para combatir la discriminación y la violencia contra la mujer. 	Las mujeres tienen reconocidos los mismos derechos de los hombres, pero adicionalmente, el Estado debe legislar para reconocer mayores derechos y oportunidades para combatir situaciones discriminatorias y de violencia contra la mujer como parte de un proceso histórico y cultural en que se ha visto afectada en cuanto a su condición de dignidad, incluyendo situaciones de invisibilización total o parcial de derechos, exclusión social y económica y otras modalidades de violencia y discriminación que deben eliminarse a partir de políticas públicas, planes o programas que incidan en un cambio de cultura de país más inclusivo y equitativo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de programas de capacitación a los funcionarios públicos para promover y proteger los derechos de las mujeres con enfoque de género. • Omisión del Estado para combatir la violencia de género en el ámbito particular. • Inexistencia de políticas y prácticas de acción afirmativa a favor de la mujer. • Invisibilización de los derechos de la mujer y de los fenómenos de discriminación y violencia de género. • Victimización primaria, secundaria y terciaria de la mujer. • Omisión del Estado para promover cambios culturales y educativos estructurales para eliminar la discriminación y violencia contra la mujer. • Falta o insuficiente normativa penal para investigar y castigar la discriminación y violencia contra la mujer. 	<p>Como pauta inicial, se debe incorporar el enfoque de acción afirmativa o discriminación positiva, el cual busca sustentar el reconocimiento de derechos de las mujeres de manera preferencial a los hombres de forma temporal hasta lograr estadios más equitativos e igualitarios en todo tipo de espacios laborales, políticos, económicos, sociales y culturales.</p> <p>ENFOQUE DE GENERO: El sector masculino en general, pero especialmente el que trabaja en el Estado, percibe a la mujer con indiferencia, desprecio e inferioridad, todo lo cual genera una cultura de invisibilidad y violencia contra las mujeres que se proyecta en todos los ámbitos de la sociedad. La falta de una política pública para promover los derechos de las mujeres y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, es la principal obligación internacional que debe asumir el Estado en el marco de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas para Erradicar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Combatir la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para).</p> <p>Esas obligaciones internacionales, si no son cumplidas ni instrumentadas adecuadamente, generan responsabilidad internacional, la cual se puede producir por los siguientes hechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de un marco normativo especial que adecue las normas de la CEDAW y Belem do en el derecho interno. • Ausencia de políticas públicas, planes o programas que complementen el cuadro normativo de adecuación interna. • Falta o insuficientes programas para incidir en un cambio educativo y cultural respecto de la discriminación y violencia contra la mujer. • Falta de investigación u obstaculización de la justicia en la investigación de casos de discriminación y violencia contra la mujer. • Inaplicación del enfoque de política afirmativa y de cuotas de representación para reivindicar derechos, participación y oportunidades para las mujeres. • Falta de tipificación penal o de esfuerzos y recursos para combatir delitos específicos contra las mujeres como explotación sexual comercial, acoso sexual, violencia intrafamiliar, feminicidios y trata de niñas y mujeres. • Inexistencia de una política educativa que incorpore en los textos escolares y colegiales contenidos para promover los derechos de las mujeres y el combate de la discriminación y la violencia de género. • Falta de programas de capacitación y sensibilización para introducir políticas transversales e integrales sobre derechos de las mujeres y enfoque de género en todas las esferas de la administración pública.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia o manejo impreciso y poco transparente de estadísticas de casos situaciones de violaciones de derechos de las mujer • Falta de dotación de recursos materiales y humanos para instrumentar medidas cautelares a favor de mujeres previamente amenazadas y agredidas por sus parejas. • Falta de programas de intervención inmediata y de contención médica y psicológica a mujeres víctimas de violaciones a derechos de las mujeres, discriminación y violencia de género. • Falta de programas de intervención inmediata y de contención médica y psicológica a victimarios de violaciones a derechos de las mujeres, discriminación y violencia de género para que se sometan a planes de prevención de la violencia. • Falta de programas integrales y de refugios o albergues adecuados para atender a mujeres víctimas de delitos y de violencia y de trata de personas. • Inexistencia o insuficientes recursos para instrumentar programas de protección de mujeres víctimas y testigos de casos de violaciones de derechos de las mujeres, violencia y cualquier modalidad de explotación. <p>En el caso de las mujeres, su situación de desventaja, discriminación y violencia ha sido por motivos culturales y patrones históricos, incluso por la desidia del Estado para modificar esos patrones –a todas luces injustificables- lo que las ha relegado a papeles dentro de la sociedad que le limitan sus opciones de desarrollo como personas, dificultándoseles el acceso a la educación, al trabajo y a ocupar cargos y puestos públicos; incluso al acceso a la justicia. Pero quizás la afectación más grave que afrontan las mujeres es la violencia doméstica o intrafamiliar, donde son las principales víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de sus compañeros en el hogar que las conducen hasta la muerte y, en el “mejor de los casos”, a problemas de autoestima que las mantiene en situación de constante vulnerabilidad por la dificultad de romper el “círculo de violencia” en que viven.</p> <p>La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para <u>prestar servicio a su país</u> y a la humanidad (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).</p> <p>En el ámbito del acceso a la justicia, la principal dificultad es que el tema de los derechos de la mujer con enfoque de género no está claramente visibilizado y no hay un tratamiento de atención</p>
--	--	--

		<p>especial ni enfoque de acción afirmativa.</p> <p>A lo interno de las instituciones del Estado, la mujer no solo debe tener los mismos derechos que el hombre en relación con sus oportunidades, sino también:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igual remuneración • Condiciones de ascenso paritarias • Las mismas oportunidades para su promoción y ascensos • Acceso a la formación y actualización profesional • No ser despedida por motivo de embarazo o en goce de licencia por maternidad • Licencia de maternidad conforme a la legislación laboral del país • Protección especial durante y después del embarazo • Protección judicial en casos de acoso sexual
Derecho a la Vida	<ul style="list-style-type: none"> • Muerte de mujeres durante disturbios en manifestaciones públicas por reivindicación de derechos de las mujeres o temas afines. • Muerte de mujeres durante partos por falta de atención y de servicios médicos oportunos. • Muerte de mujeres durante abortos ilegales • Muerte de mujeres por enfermedades propias a su condición de mujer por no existir políticas ni protocolos de prevención y atención médica oportuna (cáncer de mama, útero, papiloma humano, etc.) • Muerte de mujeres por 	<p>Ver: Derecho a la Vida, Derecho a la Vida Digna (Proyecto de Vida Digna)</p> <p>El derecho a la vida con enfoque de género, debe ser observado desde la competencia de la PDDH desde distintas aristas. La principal, es denunciar y prevenir las muertes de mujeres por su condición de tal. Igualmente, está la compleja tarea de garantizar a las mujeres un proyecto de vida digna. Esto quiere decir que no solo se debe enfocar en el derecho a la vida como derecho fundamental genérico, sino en las razones que pudieron causar la muerte de mujeres (feminicidios), pero no en un ejercicio estadístico por sexo. El enfoque es mucho más complejo, ya que la PDDH debe identificar la existencia de prácticas o situaciones que provocan la muerte de mujeres por ser mujeres y lo que ha provocado el debate por el reconocimiento de los feminicidios y femicidios (forma extrema de violencia contra las mujeres) como fenómeno social, pero también como delito calificado.</p> <p>Por lo tanto, la agenda de la PDDH incursiona en la sensibilización y ampliación de un debate por defender la vida y combatir toda forma de violencia a la integridad de las mujeres.</p> <p>Pero además, la PDDH debe ser vigilante de que el acceso a la justicia por denuncias de casos de muerte de mujeres por razón de tales, su posterior investigación y condena a los responsables, debe ser eficiente y eficaz y debe tener un mensaje reparador integral que incluya la sanción social a ese tipo de violencia para que los hechos no se repitan.</p>

	<p>contaminación de agua u otros elementos insalubres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muerte de mujeres por violencia intrafamiliar. • Muerte de mujeres con agresión y violencia sexual 	
Derecho a un proyecto de vida digna	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de políticas públicas, planes o programas de inversión social para dar asistencia e intervención a niñas y adolescentes de la calle, así como para garantizarles un proyecto de vida digna • Inexistencia de políticas penitenciarias y de servicios a niñas y adolescentes en conflicto con la ley bajo la custodia del Estado para que tengan opción a un proyecto de vida digna dentro de los Centros de Menores, así como cuando salgan de ellos. 	<p>Ver Derecho a la vida digna (proyecto de vida digna).</p> <p>Además del derecho a la vida en sentido estricto (apartado anterior), corresponde a la PDDH promover la protección del derecho a la vida desde la opción del derecho a un proyecto de vida digna de las mujeres. En ese aspecto, la PDDH debe profundizar en el caso de las mujeres doblemente discriminadas que tienen todavía menos opciones de proyecto de vida digna, como sería el caso de las mujeres indígenas, mujeres migrantes en situación irregular, mujeres menores de edad y en riesgo social, niñas y adolescentes en riesgos de ser víctimas de trata de personas, mujeres adultas mayores, mujeres con preferencia sexual diversa y mujeres en situación de pobreza y exclusión.</p> <p>Algunos referentes a considerar por parte de la PDDH son los que ha establecido la Corte Interamericana en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derecho a un proyecto de vida digna de niñas y adolescentes en la calle ó viviendo en la calle (Cf. CorteIDH. <i>Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala</i>). • Derecho a un proyecto de vida digna de niñas y adolescentes bajo custodia del Estado (Cf. CorteIDH. <i>Caso de Reeducación del Menor “Panchito López” vs. Paraguay</i>). • Derecho a un proyecto de vida digna de mujeres indígenas expulsadas de sus territorios ancestrales (Cf. CorteIDH. <i>Caso de la Comunidad Yakie Axa vs. Paraguay</i>). <p>En esos casos, el enunciado general de la doctrina del proyecto de vida digna, que es común para hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad específica (personas menores de edad en la calle, bajo custodia del Estado o indígenas), es el de la obligación del Estado de garantizar a esas personas la satisfacción de necesidades básicas y el acceso a servicios y derechos como educación, salud, vivienda y demás derechos propios de la niñez y adolescencia que los alejen de los riesgos de tener que vivir o estar en la “calle”.</p>

Derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación de los derechos de la mujer por medio del acoso o abuso sexual ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas. • Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas. • Omisión o negligencia del Estado para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. • Omisión o negligencia del Estado para prevenir y erradicar el acoso sexual en los ámbitos públicos y privados. • Omisión o negligencia del Estado para prevenir y erradicar el abuso sexual en los ámbitos públicos y privados. • Omisión o negligencia del Estado por prevenir, combatir e investigar la trata de personas y cualquier otra modalidad de explotación contra las mujeres. • Omisión o negligencia del Estado para prevenir, 	<p>Es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará), el tratado regional que mejor permite identificar, con el objeto de prevenir, todos los escenarios posibles de violencia contra la mujer, incluida la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La importancia de esta Convención radica en el hecho de que es el primer y único instrumento legal internacional de carácter vinculante sobre la violencia contra la mujer (la Convención de la ONU se refiere sobre todo a la discriminación contra la mujer).</p> <p>Esa Convención define la violencia contra la mujer, en el artículo 1 como: <i>“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”</i>. Esta definición es ampliada en el artículo 2, el cual incluye como violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y psicológica que ocurra cuando:</p> <p><i>“...tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;</i></p> <p><i>b. ...tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar;</i></p> <p><i>c. ...sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.</i></p> <p>En el Capítulo II se establece cuáles son los derechos protegidos. Con relación a este punto, se deben destacar dos conceptos importantes: a) el sustentado en el artículo 3, donde se afirma que <i>“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”</i> y b) el contenido en el artículo 5 <i>in fine</i> cuando reconoce que <i>“la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos”</i>, refiriéndose a los consagrados en el artículo 4, los cuales, en relación con la integridad</p>

	<p>investigar y sancionar prácticas de violencia y discriminación contra las mujeres en centros especiales (guarniciones o establecimientos militares y de seguridad, centros penitenciarios o de readaptación social, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausencia o deficiencia de asistencia y protección jurídica ante cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer. 	<p>personal son:</p> <p><i>a) el derecho a que se respete su vida;</i> <i>b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;</i> <i>c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales;</i> <i>d) el derecho a no ser sometida a torturas;</i> <i>e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;</i></p> <p>En relación con aspectos preventivos respecto de la violencia contra la mujer, los artículos 6 y 7, establecen el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, para lo cual se garantiza, entre otros, los siguientes aspectos que deben ser parte de una política pública:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación; • el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; • prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; • Incluir en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; • adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer; • tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; • Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y, • establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. <p>Tan importante es evitar los actos de violencia contra la mujer, como prevenirlos desde una óptica de acceso a la justicia para condenarlos y sancionarlos. Al respecto, la Comisión Interamericana</p>
--	--	--

		<p>de Derechos Humanos ha manifestado reiteradamente que un acceso <i>de jure</i> y <i>de facto</i> a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también la obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos. Sin embargo, la labor de la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, revela que a menudo las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando denuncian los hechos sufridos. Por este motivo, la gran mayoría de estos incidentes rechos quedan desprotegidos.</p> <p>El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja el consenso y el reconocimiento por parte de los Estados del trato discriminatorio que éstas reciben y han recibido en sus respectivas sociedades, lo que ha dado como resultado que sean víctimas y estén expuestas a diferentes formas de violencia, que incluyen la violencia sexual, psicológica y física y el abuso de sus cuerpos. Asimismo refleja el compromiso asumido por los Estados de adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación de estos actos. El hecho de que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante la "Convención de Belém do Pará") sea el instrumento más ratificado del sistema interamericano, y de que la mayoría de los Estados americanos hayan ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante la "CEDAW") así como su protocolo facultativo, refleja el consenso regional de que la violencia contra las mujeres constituye un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y reparación.</p> <p>Del mismo modo, el sistema interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los derechos básicos. En este sentido, los instrumentos de protección de derechos humanos vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de Belém do Pará, afirman el derecho de las mujeres de acceder a una protección judicial que e cuenta con adecuadas garantías frente a actos de violencia. En dicho marco, los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos. El deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a una disponibilidad formal, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas.</p>
--	--	--

		<p>La CIDH ha verificado que en el área específica de la administración de justicia, los Estados carecen de una visión y de una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. La Comisión observa algunas importantes deficiencias que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres: retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación, y vacíos e irregularidades en las diligencias <i>per se</i> que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. A estas dos variables contribuye la falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas, y para poder judicializar y sancionar los casos. Esta situación es particularmente crítica en las zonas rurales y marginadas.</p> <p>Además de las deficiencias en la etapa de investigación, hay ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres. Cabe señalar que si bien existen carencias estructurales en el ámbito económico y de recursos humanos para procesar casos con celeridad y eficacia, en casos de violencia contra las mujeres, con frecuencia la falta de investigación de los hechos denunciados, así como la ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y sancionar los casos de violencia se ve afectada por la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Éstos influyen en la actuación de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, quienes consideran los casos de violencia como no prioritarios y descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos. Estas deficiencias se traducen en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden al elevado número de denuncias y a la prevalencia del problema.</p> <p>También se ha constatado que en muchos casos las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso habiendo sido beneficiadas con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni supervisadas. En materia de prevención y protección, las autoridades estatales, y en particular la policía, no cumplen con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia contra actos inminentes. Entre las razones que explican la inacción de autoridades estatales se encuentran su desconfianza en lo alegado por las víctimas de violencia y su percepción del tema como un asunto privado y de baja prioridad.</p>
--	--	--

		<p>Otros obstáculos para investigar casos de violencia contra la mujer guardan relación con la precariedad y la falta de coordinación en los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, indispensables para examinar causas y tendencias de este fenómeno.</p> <p>La violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en la sociedad salvadoreña lo cual se refleja en la respuesta y en el tratamiento de los casos de violencia por parte de los funcionarios de la administración de la justicia y de la policía. En consecuencia, es evidente la necesidad de que la PDDH incida en que instituciones públicas competentes diseñen y fortalezcan programas de capacitación para funcionarios del sistema de justicia y de la policía sobre el problema de la violencia contra las mujeres como una grave violación a los derechos humanos y su obligación de ofrecer un trato digno y humano a las víctimas cuando intentan acceder a instancias judiciales.</p> <p>Otro reto que le corresponde a la PDDH es denunciar la victimización secundaria que pueden sufrir las víctimas al intentar denunciar los hechos perpetrados; la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger la dignidad y la seguridad de las víctimas y de los testigos durante el proceso; el costo económico de los procesos judiciales; y la ubicación geográfica de las instancias judiciales receptoras de denuncias.</p>
<p>Derecho a la protección de su integridad física y psíquica.</p> <p>Prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en razón de la condición de mujer. • Falta de investigación u obstaculización de justicia en relación con casos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en perjuicio de mujeres por su 	<p>Ver derecho a la integridad física y psíquica, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.</p> <p>Si bien la doctrina ha profundizado sobre el derecho a la integridad física y psíquica de las personas y a la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en lo que no se ha profundizado suficiente, es en la incidencia y en la forma en que las mujeres han sido sistemáticamente afectadas en su integridad personal por razón de género y cómo la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido históricamente utilizados de manera sistemática en perjuicio de las mujeres mediante tácticas perversas que van más allá de denigrar o de obtener información por medio de confesiones, para agregar otros efectos colaterales como el “blanqueamiento” étnico mediante embarazos producto de violaciones sexuales masivas, o para debilitar la moral de los hombres, esposos o compañeros, que se encuentran en combate, cuando</p>

	<p>condición de tales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de protección estatal para mujeres víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. • Represalias físicas o psicológicas contra mujeres que denuncian violación de sus derechos. • Omisión del Estado para brindar asistencia y atención integral adecuada a mujeres víctimas de su integridad física y psíquica. 	<p>las torturas contra las mujeres ocurren en el marco de conflictos armados o de persecución política de ciertos grupos.¹³²</p> <p>Para poder construir una base jurídica que obligue a comprender la urgencia de utilizar formas de aplicación e interpretación de acción afirmativa para prevenir y combatir la tortura y los tratos crueles en perjuicio de las mujeres, resulta emblemático identificar hechos y situaciones que marcan una diferencia entre la manera en que los hombres y las mujeres pueden sufrir y enfrentar las consecuencias de violaciones a su integridad física y psíquica. Mientras que los hombres víctimas de tortura pueden sufrir todo tipo de vejámenes físicos y psíquicos con cualquier finalidad, las mujeres las sufren de igual manera, pero de forma calificada en función de mayores contenidos de abuso sexual y de su condición biológica y riesgo de quedar embarazadas de sus perpetradores, sufrir abortos en caso de que se encuentren en situación de gravidez y de mayor ensañamiento físico. Adicionalmente a todas esas secuelas, y dependiendo del contexto social y cultural, las mujeres que han sido víctima de violación sexual pueden ser revictimizadas por sus propias parejas, familia y comunidad.</p> <p>En ese sentido, Relatorías Especiales de las Naciones Unidas especializadas en materia de género y derechos de las mujeres, se han referido con claridad al escenario de violencia de género durante el conflicto armado y los efectos y secuelas agravadas por su condición de mujer.¹³³</p> <p>Mientras que la Corte Interamericana ha tenido pocas oportunidades de desarrollar jurisprudencia sobre violencia de género, la Comisión Interamericana ha tenido conocimiento de más casos y situaciones que envuelven violencia contra las mujeres y, por ende, violaciones a la integridad personal. El siguiente cuadro ilustra los principales casos tramitados por la Comisión Interamericana con ese enfoque.</p>
--	---	--

¹³² En el conflicto de Kosovo, fue una práctica sistemática la violación de mujeres de distinta etnia o religión con fines de blanqueamiento étnico o de botín de guerra. El primer caso investigado por la Corte Internacional de Justicia para la Antigua Yugoslavia fue el seguido contra Dragoljub Kunarac, por violaciones y torturas contra mujeres Bosnias musulmanas. Cf. <http://www.icty.org/index.php>. Consultado 26 de diciembre de 2008.

¹³³ O.N.U., Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11º período de sesiones. Recomendación general 19 “La violencia contra la mujer”. Doc. HR/GEN/1/Rev. 1a/84 (1994), párr. 16; O.N.U., Comisión de Derechos Humanos, 57º período de sesiones de 2001, *Informe de la Sra. Radica Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias*, presentado de conformidad con la resolución 2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos, “La violencia contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado (1997- 2000)”, E/CN.4/2001/73, párr. 44.

		Casos de violación a la integridad personal con enfoque de género tramitados ante la Comisión Interamericana. ¹³⁴		
		CASO	HECHOS DENUNCIADOS	ESTADO PROCESAL
		Raque Martín de Mejía vs. Perú 10 de marzo de 1996	Violación sexual Desaparición de cónyuge, amenazas de muerte, acusación de terrorismo, posibilidad de ser sometida a un “tribunal sin rostro”.	No se remitió a la Corte Interamericana

¹³⁴ Adaptado de: PACHECO, Gilda. “Incorporación del enfoque de género en el litigio nacional e internacional de casos de violaciones graves a los derechos humanos”. Op.Cit.

		<p>X e Y vs. Argentina</p> <p>15 de octubre de 1996</p>	<p>Revisiones vaginales: a todas las mujeres que deseaban visitar a algún privado de libertad.</p>	<p>La responsabilidad por violación del derecho: - a la integridad personal, - a la protección de la honra - a la dignidad, y derecho de la familia de "X" e "Y".</p> <p>Este caso contra el Estado argentino, que denunciaba una práctica –las revisiones vaginales a todas las mujeres que visitaban en la cárcel a un privado de libertad–, produjo un cambio en la reglamentación pues llevó al Estado a tomar medidas para cumplir algunas recomendaciones y modificar su sistema penitenciario.</p>
--	--	---	--	---

		<p>María Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú</p> <p>3 de octubre de 2000</p>	<p>Muerte por esterilización forzada.</p> <p>Fue acosada por parte del personal del Centro de Salud del Distrito de La Encañada para que se esterilizara. Lamentablemente, murió durante la operación.</p>	<p>El Estado reconoce su responsabilidad por la violación en contra de María Mamérita de los derechos protegidos en los artículos 1.1, 4, 5, y 24 de la CADH y el Art. 7 de la Convención de Belem do Pará.</p> <p>La Comisión emitió informe de solución amistosa.</p>
		<p>Ana, Beatriz y Celia González vs. México</p> <p>4 de abril de 2001</p>	<p>Jóvenes menores de edad que son sometidas, por su supuesta pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a un interrogatorio y como parte del mismo, son víctimas de violencia sexual. En este caso, el informe final de la Comisión establece responsabilidad del Estado por violación al derecho a la integridad personal, libertad personal y garantías judiciales. El caso no se remitió a la Corte.</p>	<p>Informe del Artículo 50 de la Convención Americana</p>

		<p>Maria da Penha Maia vs. Brasil</p> <p>16 de abril de 2001</p>	<p>Maria da Penha quedó parapléjica a raíz de la como referente la Convención Americana, pero también se alude a la Convención de Belém do Pará, las mujeres. violencia ejercida por su compañero. Aquí se usa por no adoptar las medidas y políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra</p>	<p>Se llegó a una solución amistosa y no se remitió a la Corte Interamericana.</p>
		<p>Otro caso emblemático es el resuelto por la Corte I vs Perú, el cual tiene un enfoque más amplio e incluye las privadas de libertad y es la primera sentencia que la Corte interpretó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la normativa para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pronunciándose sobre violaciones de dicho instrumento internacional.</p> <p>En lo que respecta a la violencia de género, la Corte se encontró por primera vez con alegatos que planteaban un análisis de género que atravesaba todos los hechos. Debido a la importancia de este fallo respecto al enfoque de género en el marco de violencia institucional, se transcribe a continuación los principales párrafos de esa sentencia:</p> <p>223. Al analizar los hechos y sus consecuencias la Corte tomará en cuenta que las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres, que algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas y otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres. Ha sido reconocido por diversos órganos públicos y organismos internacionales que durante los conflictos armados las mujeres enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de</p>		

		<p><u>violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como “un medio simbólico para humillar a la parte contraria”</u>.</p> <p>224. Es reconocido que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las <u>mujeres como un medio de castigo y represión</u>. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarlas a ellas de forma directa, puede tener el <u>objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección</u>.</p> <p>...</p> <p>226. La Corte ha constatado que diversos actos que se dieron en el presente caso en perjuicio de las mujeres respondieron al referido contexto de <u>violencia contra la mujer en dicho conflicto armado</u> (<i>infra</i> párrs. 306 a 313)¹³⁵ (subrayado agregado).</p> <p>La Corte consideró también las agravantes concernientes a la violencia de género, al destacar que las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia identidad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos. En referencia a estos alegatos la Corte Interamericana reconoció que la inspección vaginal dactilar practicada en el caso constituye violación sexual y tortura, en contravención con el artículo 5.2 de la Convención Americana y los artículos 1,6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.</p>
<p>Prohibición de discriminación en razón de género</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 24. Igualdad ante la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión, negligencia o tolerancia del Estado ante la publicidad que atenta contra la condición de dignidad de la mujer y promueve la discriminación en razón de género. • Inexistencia o deficiencia de políticas, planes o programas 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver Derecho a la igualdad y no discriminación. <p>El derecho a la igualdad y no discriminación respecto de las mujeres representa el problema estructural del enfoque de género donde las mujeres son víctimas de desigualdad, inequidad y violencia por su condición de mujer.</p> <p>Nominal y formalmente, las mujeres tienen reconocidos los mismos derechos de los hombres, pero adicionalmente, el Estado debe legislar para reconocer mayores derechos y oportunidades para combatir situaciones discriminatorias y de violencia contra la mujer como parte de un</p>

¹³⁵ Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Op.Cit. párrs. 223, 224, 226.

<p>Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>	<p>para prevenir y combatir la discriminación contra la mujer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta o insuficientes programas para incidir en un cambio educativo y cultural respecto de la discriminación contra la mujer. • Falta de investigación u obstaculización de la justicia en la investigación de casos de discriminación contra la mujer. • Inaplicación del enfoque de política afirmativa y de cuotas de representación para reivindicar derechos, participación y oportunidades para las mujeres. • Falta de tipificación penal o de esfuerzos y recursos para combatir delitos de discriminación contra la mujer. • Inexistencia de una política educativa que incorpore en los textos escolares y colegiales contenidos para promover los derechos de las mujeres y el combate de la discriminación. • Falta de programas de capacitación y sensibilización para introducir políticas transversales e integrales para combatir la discriminación contra la mujer en todas las esferas de la administración pública. 	<p>proceso histórico y cultural en que se ha visto afectada en cuando a su condición de dignidad, incluyendo situaciones de invisibilización total o parcial de derechos, exclusión social y económica y otras modalidades de violencia y discriminación que deben eliminarse a partir de políticas públicas, planes o programas que incidan en un cambio de cultura de país más inclusivo y equitativo.</p> <p>Como pauta inicial, se debe incorporar el enfoque de acción afirmativa o discriminación positiva, el cual busca sustentar el reconocimiento de derechos de las mujeres de manera preferencial a los hombres de forma temporal hasta lograr estadios más equitativos e igualitarios en todo tipo de espacios laborales, políticos, económicos, sociales y culturales.</p> <p>En el caso de las mujeres, su situación de desventaja, discriminación y violencia ha sido por motivos culturales y patrones históricos, incluso por la desidia del Estado para modificar esos patrones –a todas luces injustificables- lo que las ha relegado a papeles dentro de la sociedad que le limitan sus opciones de desarrollo como personas, dificultándoseles el acceso a la educación, al trabajo y a ocupar cargos y puestos públicos; incluso al acceso a la justicia. Pero quizás la afectación más grave que afrontan las mujeres es la violencia doméstica o intrafamiliar, donde son las principales víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de sus compañeros en el hogar que las conducen hasta la muerte y, en el “mejor de los casos”, a problemas de autoestima que las mantiene en situación de constante vulnerabilidad por la dificultad de romper el “círculo de violencia” en que viven.</p> <p>La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).</p> <p>A lo interno de las instituciones del Estado, y como política de veeduría de la PDDH, se debe promocionar el combate de la discriminación contra la mujer desde las siguientes aristas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción afirmativa en espacios políticos, sociales, laborales, culturales, etc. • Inexistencia de leyes que promuevan criterios de selección de mujeres para optar a servicios públicos, trabajos o cualquier otro tipo de beneficio social y político en condiciones preferentes a los hombres.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de leyes que establezcan cuotas mínimas de participación de mujeres en partidos políticos y en cargos públicos. • Inaplicación o incumplimiento de leyes de acción afirmativa y de cuotas en razón de género. • Igual remuneración • Combate de todas formas de violencia de género • Condiciones de ascenso paritarias • Las mismas oportunidades para su promoción y ascensos • Acceso a la formación y actualización profesional • No ser despedida por motivo de embarazo o en goce de licencia por maternidad • Licencia de maternidad conforme a la legislación laboral del país • Protección especial durante y después del embarazo • Protección judicial en casos de acoso sexual
Derecho a la educación	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones o impedimentos en el acceso a la educación formal o no formal por motivos de género, maternidad o estado familiar. • Tolerancia u omisión ante prácticas discriminatorias o de violencia ejercidas en los centros de estudio. • Restringir o impedir el acceso a oportunidades y condiciones igualitarias en la enseñanza o en la capacitación vocacional y profesional. • Ausencia o deficiencia de programas y medidas que promuevan la eliminación de prejuicios y prácticas discriminatorias contra la mujer en todos los centros de estudio. • Expulsiones ilegales por 	Ver derecho a la educación

	<p>motivos de género, embarazo, maternidad, atributos físicos o estado familiar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textos educativos escolares y colegiales no idóneos para prevenir la discriminación contra la mujer. • Prácticas de segregación por género en actividades educativas, sociales, culturales y deportivas. • Ausencia o ineficacia de programas de combate de la deserción estudiantil de mujeres. • Restricción al acceso a la educación de mujeres migrantes indocumentadas. 	
Derecho a la salud y tratamientos médicos diferenciados	<ul style="list-style-type: none"> • Falta política de medicina preventiva y de campañas de prevención de enfermedades propias de las mujeres. • Denegación o restricción del acceso a servicios, instalaciones y bienes de salud generales y especializados por discriminación. • Ocultar o tergiversar información importante para la protección de salud para el tratamiento de enfermedades que afectan a las mujeres. 	Ver derecho a la salud

	<ul style="list-style-type: none">• Coacción o trato discriminatorio con respecto a la fecundidad y reproducción.• Violación de derechos sexuales y reproductivos al disponer de operaciones no consentidas o engañosas en el marco de políticas o prácticas de planificación familiar.• Falta de atención médica por disposición de ley (aborto como delito)• Tolerancia a la existencia de lugares clandestinos para práctica de abortos.• Poca o insuficiente información sobre derechos sexuales y reproductivos.• Excluir o restringir asesoría e información objetiva y completa sobre la utilización de métodos de planificación familiar.• Omisión o negligencia del Estado en adoptar medidas para prevenir y tratar las enfermedades que afectan a la mujer.• Omisión o negligencia del Estado para brindar a la mujer atención especializada en las diferentes etapas de su vida.• Inexistencia o ineficacia de programas de asistencia y prevención para mujeres	
--	--	--

	<p>adolescentes embarazadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negligencia del Estado para reducir los riesgos asociados a la maternidad y mortalidad materna. • Restricción al acceso a la salud de mujeres migrantes. • Desaplicación y desconocimiento de prácticas curativas tradicionales a mujeres indígenas. 	
<p>Derecho al trabajo sin discriminación</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 42.- La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación del empleo.</p> <p>Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de requisitos discriminatorios contra la mujer para el acceso y la estabilidad en el empleo. • Tolerancia o falta de protección estatal ante disposiciones y prácticas discriminatorias en las condiciones laborales y oportunidades de trabajo en razón del género, la maternidad o el estado familiar. • Restricciones o impedimentos de acceso a oportunidades de capacitación, adiestramiento y formación laboral y profesional en razón del género, la maternidad o el estado familiar. • Denegación del derecho de ascenso por discriminación de género. • Denegación de derechos o 	<p>Ver derecho al trabajo</p>

	<p>prestaciones laborales por discriminación de género.</p> <ul style="list-style-type: none">• Acoso laboral ejercido en centros de trabajo y falta de una política o plan para su combate.• Hostigamiento y/o violencia sexual en los centros de trabajo.• Desmejora o restricción en las condiciones, prestaciones y oportunidades laborales relacionadas con la discriminación de género, la maternidad o el estado familiar.• Actos atentatorios contra la estabilidad laboral por razón del género.• Desigualdad en la remuneración, prestaciones y trato con respecto a un trabajo o función de igual valor.• Tolerancia u omisión del Estado ante denegación sistemática de prestaciones y derechos laborales.• No reconocimiento del valor social y económico que tienen las labores del hogar desempeñadas por las mujeres.	
--	---	--

<p>Derecho a acceder a los beneficios de la seguridad social.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 42.- La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación del empleo.</p> <p>Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de criterios restrictivos y no favorables para acceder y gozar de los beneficios de seguridad social en razón del género y del estado familiar. • Trata discriminatorio en las oportunidades y condiciones para la jubilación y medidas que aseguren contra la enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar. • Suspensiones ilegales o arbitrarias de las pensiones u otros beneficios de la seguridad social en función del género. • Omisión o negligencia del Estado para garantizar el acceso y goce de las mujeres que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad a los beneficios de la seguridad social (empleadas domésticas, mujeres rurales, mujeres indígenas, trabajadoras del sector informal, etc. 	
<p>Derecho a la libre asociación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación o restricciones ilegales o arbitrarias a la participación o afiliación en organizaciones públicas o privadas de toda índole, por razones de género, maternidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver derecho a la libertad de reunión y de asociación

	<ul style="list-style-type: none"> o estado familiar. • Trato discriminatorio en razón del género en organizaciones públicas o privadas. • Denegación o limitaciones arbitrarias al derecho de las mujeres para organizarse y participar en la defensa y reivindicación de sus derechos e intereses específicos. • Restringir o impedir la legalización de asociaciones de mujeres o relacionadas. • Denegación o restricciones en el acceso, membresía y desempeño de cargos de dirección en asociaciones u organizaciones públicas o privadas. 	
Derecho a la propiedad y desarrollo sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones o denegación del otorgamiento de préstamos u otro tipo de crédito financiero u oportunidades de negocios por razón de género, maternidad o estado familiar. • Restricciones u obstaculización para acceder a programas de vivienda por razón del género o del estado familiar. • Discriminación en el acceso a servicios básicos. • Denegación o trato discriminatorio en las oportunidades y condiciones para acceder y ejercer actividades económicas, de 	Ver derecho a la propiedad y derecho a la propiedad social y colectiva

	<p>generación de ingresos o bienestar social.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausencia o deficiencia de políticas y medidas de protección del derecho de propiedad de las mujeres. 	
Derecho a la información	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negligencia del Estado frente a estereotipos o patrones discriminatorios de género en la producción o difusión de información. • Ausencia o negligencia del Estado para garantizar información confiable y suficiente sobre aspectos relevantes referidos a los derechos de las mujeres. • Ausencia de estadísticas o imprecisión en las mismas para determinar la situación de discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres. • Denegación, restricciones arbitrarias o trato discriminatorio para acceder a información de interés especializada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver derecho a la libertad de expresión y acceso a la información
Derecho al acceso a la justicia diferenciada	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de una política de justicia inclusiva y diferenciada a favor de las mujeres. • Normativa insuficiente para prevenir y combatir las violaciones de los derechos de las mujeres desde la aplicación y procuración de la justicia. • Falta de capacitación y 	<p>Tan importante es promover los derechos de las mujeres como prevenir sus violaciones desde una óptica de acceso a la justicia para condenarlas y sancionarlas. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado reiteradamente que un acceso <i>de jure</i> y <i>de facto</i> a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, así como también lo es el cumplimiento de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a tales actos. Sin embargo, la labor de la CIDH y de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, revela que a menudo las</p>

	<p>sensibilización de los operadores de justicia para aplicar normas y principios de interpretación a favor de los derechos de las mujeres (acción afirmativa).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de investigación y/u obstaculización de casos de violaciones de derechos humanos de las mujeres. • Impunidad sistemática en la investigación de casos de homicidios contra mujeres debido a ineficiencia e ineficacia fiscal y judicial, así como en alta tasa de evasión de la justicia de los perpetradores. • Revictimización judicial de las mujeres víctimas de delitos. • Falta de programas y medios eficaces de protección de mujeres víctimas y testigos en casos de violaciones de derechos humanos graves (trata de personas, explotación sexual laboral, violencia intrafamiliar, etc). • Retardo injustificado en la resolución de casos vinculados con violaciones de los derechos de las mujeres en cualquier ámbito (laboral, civil, penal, administrativo, etc.) • Denegación u obstaculización 	<p>mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando denuncian los hechos sufridos. Por este motivo, la gran mayoría de estos incidentes permanecen en la impunidad y en consecuencia sus derechos quedan desprotegidos.</p> <p>El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja el consenso y el reconocimiento por parte de los Estados del trato discriminatorio que éstas tradicionalmente han recibido en sus respectivas sociedades, lo que ha dado como resultado que sean víctimas y estén expuestas a diferentes formas de violencia, que incluyen la violencia sexual, psicológica y física y el abuso de sus cuerpos. Asimismo refleja el compromiso asumido por los Estados de adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación de estos actos. El hecho de que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante la "Convención de Belém do Pará") sea el instrumento más ratificado del sistema interamericano, y de que la mayoría de los Estados americanos hayan ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante la "CEDAW") así como su protocolo facultativo, refleja el consenso regional de que la violencia contra las mujeres constituye un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y reparación.</p> <p>Del mismo modo, el sistema interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los derechos básicos. En este sentido, los instrumentos de protección de derechos humanos vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de Belém do Pará, afirman el derecho de las mujeres de acceder a una protección judicial que cuente con adecuadas garantías frente a actos de violencia. En dicho marco, los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos. El deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a una disponibilidad formal, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas.</p> <p>La CIDH ha verificado que en el área específica de la administración de justicia, los Estados carecen de una visión y de una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. La Comisión observa algunas importantes deficiencias que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres: retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias</p>
--	---	--

	<p>de asistencia jurídica gratuita para la interposición de acciones legales en materia de alimentos y violencia intrafamiliar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denegación u obstaculización de asistencia jurídica gratuita para la interposición de acciones legales en materia laboral. • Ausencia o insuficientes programas de atención integral a mujeres víctimas de delitos, en especial para casos de explotación sexual comercial y violencia intrafamiliar. • Respuesta retardada o insuficiente para adoptar medidas cautelares judiciales a favor de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 	<p>encargadas de efectuar la investigación, y vacíos e irregularidades en las diligencias <i>per se</i> que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. A estas dos variables contribuye la falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas, y para poder judicializar y sancionar los casos. Esta situación es particularmente crítica en las zonas rurales y marginadas.</p> <p>Además de las deficiencias en la etapa de investigación, hay ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres. Cabe señalar que si bien existen carencias estructurales en el ámbito económico y de recursos humanos para procesar casos con celeridad y eficacia, en casos de violencia contra las mujeres, con frecuencia la falta de investigación de los hechos denunciados, así como la ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y sancionar los casos de violencia se ve afectada por la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Éstos influyen en la actuación de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, quienes consideran los casos de violencia como no prioritarios y descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos. Estas deficiencias se traducen en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden al elevado número de denuncias y a la prevalencia del problema.</p> <p>También se ha constatado que en muchos casos las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso habiendo sido beneficiadas con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni supervisadas. En materia de prevención y protección, las autoridades estatales, y en particular la policía, no cumplen con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia contra actos inminentes. Entre las razones que explican la inacción de autoridades estatales se encuentran su desconfianza en lo alegado por las víctimas de violencia y su percepción del tema como un asunto privado y de baja prioridad.</p> <p>Otros obstáculos para investigar casos de violencia contra la mujer guardan relación con la precariedad y la falta de coordinación en los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, indispensables para examinar causas y tendencias de este fenómeno.</p>
--	---	--

		<p>La violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en la sociedad salvadoreña lo cual se refleja en la respuesta y en el tratamiento de los casos de violencia por parte de los funcionarios de la administración de la justicia y de la policía. En consecuencia, es evidente la necesidad de que la PDDH incida en que instituciones públicas competentes diseñen y fortalezcan programas de capacitación para funcionarios del sistema de justicia y de la policía sobre el problema de la violencia contra las mujeres como una grave violación a los derechos humanos y su obligación de ofrecer un trato digno y humano a las víctimas cuando intentan acceder a instancias judiciales.</p> <p>Otro reto que le corresponde a la PDDH es denunciar la victimización secundaria que pueden sufrir las víctimas al intentar denunciar los hechos perpetrados; la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger la dignidad y la seguridad de las víctimas y de los testigos durante el proceso; el costo económico de los procesos judiciales; y la ubicación geográfica de las instancias judiciales receptoras de denuncias.</p>
Derecho a la igualdad en el matrimonio y en relaciones familiares	<ul style="list-style-type: none"> • Negligencia u omisión del Estado en promover la responsabilidad parental y proteger la igualdad de derechos de las mujeres y hombres en el ámbito familiar. • Falta de una política o plan adecuado para combatir la violencia intrafamiliar. • Negligencia u omisión del Estado en proteger la igualdad de derechos de mujeres y hombres relacionados con el matrimonio y su disolución. • Resoluciones arbitrarias o trato discriminatorio con relación a la disposición de los bienes familiares. • Violaciones a las garantías del debido proceso que tienen por resultado denegar la 	Ver derecho a la familia, derecho a la igualdad y no discriminación

	<p>participación de la mujer en los procesos de custodia, representación y guarda de sus hijos e hijas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negligencia del Estado en la protección de los derechos de la mujer en el plano familiar frente a cambios en la condición de nacionalidad de su persona, su cónyuge o sus hijos e hijas. 	
Derecho a participar en la vida política y pública del país	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de normativa o de aplicación de los principios de acción afirmativa para alcanzar una participación más representativa de la mujer en la vida política y pública del país. • Omisión o negligencia del Estado en la erradicación de prácticas discriminatorias que restringen o niegan su derecho a votar. • Restricciones u obstaculización, por razón del género, maternidad o estado familiar, para ser elegibles y optar a cargo públicos. • Discriminación por razón de género en el padrón electoral. • Restricciones u obstaculización de la participación de la mujer en actividades que promuevan el desarrollo local y comunitario. 	Ver derechos políticos

	<ul style="list-style-type: none"> • Obstaculizar el desempeño de funciones en el ámbito público por razones de discriminación por género. • Restringir o limitar la oportunidad de representar al gobierno en el plano internacional o de participar en organizaciones internacionales. 	
--	--	--

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<p>Derecho a que haya política de prevención y combate contra la discriminación de personas menores de edad.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 19. Derechos del Niño</p> <p>Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 16 Derecho de la Niñez</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de políticas, planes o programas para prevenir y combatir las violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, la discriminación y la violencia. • Falta de implementación adecuada de la Convención de los Derechos del Niño. • Falta de inversión, planificación y dotación de recursos suficientes para instrumentar programas de acción afirmativa y de desarrollo de proyectos de vida digna de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social y de mayor vulnerabilidad. 	<p>El sector de la niñez y la adolescencia, (menores de 18 años en los términos de la Convención de los Derechos del Niño), es de los que sufren mayores violaciones en relación con ciertas formas de explotación, en torno al trabajo infantil, la explotación sexual, el tráfico y la trata de personas y la falta de acceso a la educación. El marco de protección internacional especial para la niñez lo establece la Convención de la ONU de los Derechos del Niño, la cual ha estado siendo implementada en El Salvador por medio de la aprobación de legislación especial en la materia y la creación de jurisdicción tutelar de menores.</p> <p>En materia de niñez y adolescencia, El Salvador ha realizado importantes avances desde el punto del acceso a la justicia, especialmente con la entrada en vigor del Código de la Niñez y de la Adolescencia, el cual se ha convertido en un instrumento de consulta y aplicación cotidiana para funcionarios policiales y operadores de justicia, ya que desde el momento en que haya una persona menor de edad involucrada en cualquier tipo de proceso operativo, se debe aplicar de manera inmediata toda una dinámica</p>

<p>Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 24. Igualdad ante la Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>		<p>y normativa especializada que se rige por el principio conocido como “el mejor interés del niño”.</p> <p>Independientemente de esos avances, el principal referente que la PDDH debe tomar en cuenta al momento de realizar tareas propias de su mandato, es verificar si se cumple como parámetro de estándar mínimo el que este sector vulnerable de la población pueda contar con la satisfacción de necesidades básicas para tener una vida digna y, además, “un proyecto de vida”. No es por lo tanto suficiente con que se respete un núcleo de derechos civiles y políticos, que de por sí ningún Estado logra cumplir en forma ampliamente satisfactoria. Sin desmeritar importancia a esos derechos, la visión de integralidad de los derechos humanos obliga a que el Estado diseñe políticas públicas apropiadas para la realización y cumplimiento de todos los derechos humanos: civiles y políticos y económicos, sociales y culturales; estos últimos quizás los más complejos de proteger debido a un sesgo jurídico y político que ha incidido en la “creencia” de que no son tan justiciables y ejecutables como los civiles y políticos, error que debe ser erradicado con firmeza por la PDDH. Para contribuir con ese enfoque es importante tener como marco de interpretación el principio “pro homine” que, en el caso de las personas menores de edad está plasmado en el “principio del mejor interés del niño”. De manera tal, habrá que apelar a parámetros internacionales que han abierto y ampliado esa interpretación, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en un caso de “Niños de la Calle” contra Guatemala, determinó con total claridad los siguientes derroteros:</p> <p><i>“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisite para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser</i></p>
---	--	---

		<p><i>humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”.</i> ¹³⁶</p> <p>Y más adelante agregó:</p> <p><i>A la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los “niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”¹³⁷, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad</i></p>
--	--	--

¹³⁶ Corte ID.H., *Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”)*, Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.

¹³⁷ *Convención sobre los Derechos del Niño*, Preámbulo, párr. 6.

*física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida.*¹³⁸

En materia de trabajo infantil, además de la normativa ya mencionada, los operadores de justicia deben integrar al corpus juris aplicable los Convenios de la OIT Nos 29, 100, 105 y 182, que son los rectores en esa temática.

El Convenio 182 de la OIT para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, por ejemplo, ha sido objeto de varios esfuerzos importantes de campañas de concienciación entre asociaciones de patronos por intermedio de acciones de la Oficina Regional de la OIT. No obstante, sigue habiendo situaciones de alto riesgo laboral para personas menores de edad y, especialmente, para aquellas que provienen de sectores más excluidos.

Otro hecho preocupante es que aunque el trabajo forzoso está prohibido en El Salvador, y con mucho mayor razón respecto de los niños, niñas y adolescentes, el tráfico y la trata de personas menores de edad es una realidad en Centroamérica y El Salvador no está exenta de ella.

En el ámbito penal y, concretamente, en el del combate del crimen organizado, hay una agenda pendiente respecto de la protección de las personas menores de edad como víctimas de trata de personas para fines de explotación sexual comercial, o de cualquier otra naturaleza. Este tema es de tal sensibilidad y preocupación que las Naciones Unidas creó un Protocolo a la Convención Internacional contra el Crimen Transnacional Organizado, conocido como Protocolo de Palermo.

El Salvador ha ratificado dicho Protocolo, lo que lo conmina a

¹³⁸ *Ibid*, párr. 191.

		cumplir con obligaciones internacionales para investigar el delito de trata de personas; iniciando con la revisión del tipo penal de la trata de personas; el mejoramiento de los procesos de investigación criminal; la cooperación regional en la materia y la protección a las víctimas de trata de personas. Hay incluso un apartado sobre el tema de capacitación y protección de testigos.
<p>Derecho a la supervivencia y al desarrollo.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 34.- Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado.</p> <p>La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 35.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 36.- Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los</p>	<ul style="list-style-type: none">• Omisión del Estado para prevenir y reducir la mortalidad infantil.• Existencia de programas en Centros de Protección a cargo o supervisados por el Estado que no proporcionan las bases de un proyecto de vida digna.• Omisión del Estado para prevenir la malnutrición infantil.• Incumplimiento de obligaciones por parte del Estado con relación al derecho a la vida, salud, educación, alimentación y vivienda.	<p>Ver derecho a la vida digna (proyecto de vida digna)</p>

adoptivos, tienen iguales derechos frente a sus padres. Es obligación de éstos dar a sus hijos protección, asistencia, educación y seguridad.		
Derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de castigos disciplinarios atentatorios contra la dignidad del niño, la niña o joven en centros escolares, centros de internamientos, el hogar, etc. • Aislamiento o incomunicación prolongados. • Negligencia en la adopción de medidas de protección y supervisión por parte del Estado. 	Ver derecho a la integridad personal, prohibición de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes
Derecho a no ser abusado, descuidado o maltratado por las personas responsables de su cuidado personal.	<ul style="list-style-type: none"> • Abusos, descuido o maltratos cometidos en instituciones públicas. • Tolerancia u omisión del Estado ante abusos, descuido o maltrato ocurrida en el seno familiar, centros públicos o privados responsables de su cuidado personal. 	
Derecho a la prevención y protección contra todo tipo de explotación sexual comercial y laboral (prostitución ajena, trata y tráfico de personas, turismo sexual, tráfico de órganos, explotación laboral)	<ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia, negligencia u omisión del Estado para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de abuso, explotación económica o sexual, venta, trata y secuestro de personas menores de edad 	Ver Prohibición de esclavitud.
Derecho a medidas de atención, asistencia, recuperación y rehabilitación y resocialización a víctimas de explotación sexual comercial de personas menores de edad	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de planes o programas de atención a personas menores de edad víctimas de trata de personas para cualquier fin de explotación. 	Ver Prohibición de esclavitud.

<p>Derecho a medidas de recuperación y rehabilitación cuando hubiere sido víctima de explotación económica, incluido el trabajo infantil, uso indebido de estupefacientes, explotación y abuso sexual, venta, trata o secuestro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para adoptar medidas tendentes a lograr la recuperación y rehabilitación de las víctimas. 	<p>Ver Derecho a la integridad física y psíquica.</p>
<p>Derecho al nombre e identidad.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 36.- Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los adoptivos, tienen iguales derechos frente a sus padres. Es obligación de éstos dar a sus hijos protección, asistencia, educación y seguridad.</p> <p>No se consignará en las actas del Registro Civil ninguna calificación sobre la naturaleza de la filiación, ni se expresará en las partidas de nacimiento el estado civil de los padres.</p> <p>Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. La ley secundaria regulará esta materia.</p> <p>La ley determinará asimismo las formas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones para la inscripción en el registro del Estado Familiar. • Omisión del Estado para promover que los niños y niñas sean inscritos en el Registro del Estado Familiar. 	<p>Ver derecho al nombre, derecho a la imagen.</p>

<p>de investigar y establecer la paternidad.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 36.-</p> <p>...</p> <p>No se consignará en las actas del Registro Civil ninguna calificación sobre la naturaleza de la filiación, ni se expresará en las partidas de nacimiento el estado civil de los padres.</p> <p>Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. La ley secundaria regulará esta materia.</p> <p>La ley determinará asimismo las formas de investigar y establecer la paternidad.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 18. Derecho al Nombre</p> <p>Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.</p>		
---	--	--

<p>CADH</p> <p>Artículo 19. Derechos del Niño</p> <p>Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.</p>		
<p>Derecho a la protección de su vida privada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divulgación de información relacionada con su vida privada o la de su familia. 	<p>Ver derecho a la privacidad, a la imagen</p>
<p>Derecho a la protección de su imagen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exposición o presentación ilícita ante los medios de comunicación para su reconocimiento. 	<p>Ver derecho a la privacidad, a la imagen</p>
<p>Derecho a no ser trasladado/a o retenido/a ilícitamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Internamiento de niños y niñas de manera permanente en establecimientos del Estado o privados por considerarlo/as abandonado/as o en situación de riesgo. • Detención ilegal o arbitraria de niños, niñas y adolescentes. 	<p>Ver derecho a la libertad</p>
<p>Derecho a expresarse libremente, sin más límites que los establecidos por la ley.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones ilegales a exponer sus ideas u opiniones. • Restricciones ilegales a la investigación acorde a su edad. 	<p>Ver derecho a la libertad de expresión</p>
<p>Derecho a recibir información adecuada (acorde a los niveles o edad para su comprensión).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impedir u obstaculizar el acceso a información para la protección de su salud y desarrollo. • Obstaculizar el acceso a información para la formación de su propia opinión. • Restricciones ilegales o arbitrarias a la formación de asociaciones estudiantiles. 	<p>Ver derecho a la libertad de expresión y acceso a la información</p>

Derecho a asociarse y celebrar reuniones pacíficas.	<ul style="list-style-type: none"> • Obstaculización ilegal o arbitraria a la realización de reuniones pacíficas. 	Ver derecho a la libertad de reunión y de asociación
Derecho a recibir dirección y cuidado de los padres, salvo cuando sea para la protección de su interés superior.	<ul style="list-style-type: none"> • Separación de los niños y niñas de sus padres por considerar que éstos no poseen las condiciones o medios para su educación o sustento. • Proceder a la institucionalización de los niños y niñas sin agotar otras medidas que pudieran cumplirse en el entorno familiar. • Impedimento a que los niños y niñas separados de sus padres o guardadores se relacionen o comuniquen libremente con ellos, salvo orden judicial con fundamento en la protección de su interés superior. 	Ver derecho a la Familia.
Derecho a ser adoptado por persona idónea, con las garantías y controles previos y posteriores establecidos por la ley.	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negligencia en la supervisión y control en los procesos de adopción. • Incumplimiento de las garantías del debido proceso en la adopción. 	Ver derecho a la familia
Derecho a recibir pensión de alimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaciones indebidas en la tramitación de pensiones alimenticias. • Omisión del Estado para asegurar el goce adecuado de pensión de alimentos. • Denegación de asistencia legal para tramitar pensión de alimentos. 	Ver prisión por deudas
Derecho a la salud	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminación para acceder a los servicios de salud • Omisión del Estado para prevenir epidemias o enfermedades infectocontagiosas. • Omisión del Estado para ampliar la cobertura en la atención especializada. • Omisión del Estado de proporcionar inmunización contra las principales enfermedades que afectan a la niñez. • Omisión del Estado para adoptar medidas de 	Ver derecho a la salud

	protección y promoción de la salud mental de la niñez, adolescencia y juventud.	
Derecho a recibir cuidados en las diferentes discapacidades.	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación de atención médica, terapias o prótesis en casos de niño/as con discapacidad. • Omisión del Estado para ampliar la cobertura de centros de rehabilitación integral para niños y niñas. • Omisión del Estado para crear condiciones especiales para los niños y niñas con discapacidad en los centros de educación y recreación. 	Ver Apartado personas con discapacidad
<p>Derecho a los beneficios de servicios e instalaciones de guarda de niños y niñas</p> <p>ARTICULO 35.-</p> <p>...</p> <p>La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para crear centros de guarda de niños. • Denegación de acceso al servicio de guarda de niños en Guarderías públicas. 	Ver seguridad social
Derecho a la educación, incluida la formación y orientación profesionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminación para acceder a la educación. • Implementación de planes de estudio que no cumplen con los fines de la educación. • Exclusión de estudiantes en los consejos disciplinarios 	Ver derecho a la educación

<p>CP</p> <p>ARTICULO 34.- Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado.</p> <p>La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 35.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia.</p> <p>...</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 36.- Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los adoptivos, tienen iguales derechos frente a sus padres. Es obligación de éstos dar a sus hijos protección, asistencia, educación y seguridad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Expulsiones ilegales o arbitrarias. • Denegación arbitraria de matrícula. • Cobro ilegal de cuotas escolares. • Obstaculización del proceso enseñanza-aprendizaje en los centros públicos de educación. • Inadecuada infraestructura, condiciones de seguridad y funcionamiento de las instituciones públicas de educación. • Omisión del Estado para asegurar el acceso a la educación obligatoria y gratuita, inclusive la educación parvularia. • Omisión del Estado para investigar y sancionar actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra el derecho a la educación cometidos en centros públicos y privados de enseñanza. • Omisión del Estado para asegurar la continuidad y calidad de la educación en centros de enseñanza privados y públicos. 	
---	---	--

<p>Derecho al descanso, esparcimiento y actividades culturales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para generar, impulsar o difundir actividades culturales destinadas a niños, niñas y jóvenes. 	<p>Ver derecho a la educación, derecho a la cultura</p>
<p>Prohibición del trabajo infantil y derecho a protección contra las “peores formas de trabajo infantil.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 38.- ...</p> <p>10º Los menores de catorce años, y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo.</p> <p>Podrá autorizarse su ocupación cuando se considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de su familia, siempre que ello no les impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria.</p> <p>La jornada de los menores de dieciséis años no podrá ser mayor de seis horas y de treinta y cuatro semanales, en cualquier clase de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para crear espacios de esparcimiento accesibles. • Tolerancia u omisión del Estado ante la participación de niños y niñas en trabajos peligrosos o aquellos calificados como “peores formas de trabajo infantil”. • Omisión del Estado para regular y vigilar las condiciones de trabajo o aprendizaje de menores de edad. 	<p>Ver derecho al trabajo</p>

Se prohíbe el trabajo a los menores de dieciocho años y a las mujeres en labores insalubres o peligrosas. También se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de dieciocho años. La ley determinará las labores peligrosas o insalubres		
Derecho a recibir cuidados especiales en situaciones de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para proveer los recursos que satisfagan las necesidades especiales de los niños y niñas. • Omisión o tolerancia del Estado para garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad personal. • Restricciones para acceder a los servicios de salud y seguridad social. • Inclusión de niños y niñas en cualquier tipo de actividad bélica. • Suspensión ilegal o arbitraria de las actividades educativas. 	Ver derecho a la seguridad social
Derecho a recibir cuidados especiales en situaciones de calamidad o desastres naturales.	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negligencia del Estado en la adopción de medidas oportunas para proteger su vida e integridad. • Inexistencia de condiciones en albergues para atender necesidades de niños y niñas. • Omisión del Estado de adoptar medidas que protejan su salud. 	Ver derecho a la integridad personal, seguridad social
Derecho a una administración de justicia diferenciada al régimen de adultos.	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de procedimientos que no están contemplados en la ley penal especial y sin las garantías especiales que exige su condición. 	Ver derecho al acceso a la justicia

Derecho de los niños y niñas privado/as de libertad a permanecer en lugares diferentes de los destinados para adultos.	<ul style="list-style-type: none"> • Permanencia en centros de detención creados para adultos. • Permanencia junto con adultos durante la detención administrativa. 	Ver derechos de las personas privadas de libertad
Derecho a recibir asistencia legal especializada inmediata	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión o denegación para proporcionarle Abogado/a para su defensa o representación. 	Ver derecho al acceso a la justicia
Derecho a participar y estar representado en todo procedimiento en el cual puedan resultar afectado/a/s.	<ul style="list-style-type: none"> • Decidir en todo lo que esté de por medio sus derechos e interés superior sin considerar su opinión. 	Ver derecho al acceso a la justicia
Derecho de los niños y niñas viviendo con VIH/SIDA a recibir protección especial contra toda privación o vulneración de sus derechos.	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminación para el acceso a la educación y la salud. • Omisión del Estado para prevenir el desamparo o abandono de los niños y niñas viviendo con VIH/SIDA. • Omisión del Estado para crear políticas de prevención, atención y tratamiento que atiendan al principio de interés superior del niño/a. • Omisión del Estado garantizar la supervivencia y desarrollo. • Imposición de pruebas para la detección del VIH/SIDA. • Restricciones para acceder a servicios confidenciales de orientación y a pruebas de detección del virus. • Violación de la confidencialidad de su situación por parte de las autoridades que tengan conocimiento sobre la misma. 	Ver derecho a la salud, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a un proyecto de vida digna

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<p>Derecho a que haya política de prevención y combate contra la discriminación de adultos mayores.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p>Artículo 17 Protección de los Ancianos</p> <p>Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:</p> <p>a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de políticas, planes o programas que promuevan la prevención y el combate de la discriminación en contra de las personas adultas mayores. 	<p>Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, por haber alcanzado este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad.</p> <p>El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la que las obligaciones laborales ya se han consumado, siendo mayores poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien se mayores, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas discriminadas y excluidas por sus propias familias, por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el abandono.</p> <p>Ante situaciones de abandono, le corresponde al Estado crear y mantener espacios adecuados de atención de personas adultas mayores donde puedan tener su propio proyecto de vida y disfrutar de condiciones de vida digna.</p> <p>Le corresponde igualmente al Estado mantener un estándar de supervisión de hogares de adultos mayores manejados por organizaciones de la sociedad civil.</p>

<p>b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;</p> <p>c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 24. Igualdad ante la Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>		<p>Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente discriminadas, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con NuyoteNNN más básicas. Debido a lo anterior, las instituciones competentes del Estado deben crear políticas y centros especializados que se preocupan en forma especial de los adultos Nuyote, otorgándoles beneficios especiales en relación con los servicios sociales y de salud, contando además con actividades especiales creadas especialmente para mantener a esta población activa y participe de la sociedad.</p> <p>En lo que se refiere a la especial consideración que merecen las personas de edad avanzada, es importante que el Estado adopte medidas destinadas a mantener su funcionalidad y autonomía, garantizando el derecho a una alimentación adecuada acceso a agua limpia y a atención de salud. En particular, el Estado debe atender a los ancianos con enfermedades crónicas y en fase terminal, ahorrándoles sufrimientos evitables.</p> <p>La PDDH debe velar por identificar los problemas estructurales que provocan que las personas adultas mayores sufran de procesos de exclusión y discriminación social caracterizados por los siguientes hechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invisibilización • Discriminación • Violencia social • Falta de beneficios de seguridad social • Ausencia de políticas de acción afirmativa • Discriminación laboral • Discriminación política • Obstáculos materiales para su movilización • Violencia doméstica • Falta de un proyecto de vida digna
---	--	---

Derecho a la protección contra toda forma de abuso y explotación	<ul style="list-style-type: none"> • Maltrato, abuso y trato cruel o inhumano a las personas adultas mayores por parte de las personas encargadas de su cuidado y atención en instituciones del Estado o de instituciones privadas vigiladas por el Estado. • Omisión del Estado para crear programas e instituciones que brinden protección, orientación o rehabilitación a las personas adultas mayores víctimas de violencia o abuso. • Omisión o negligencia para investigar y sancionar el maltrato o abusos cometidos contra la población adulta mayor. • Omisión del Estado para crear instalaciones que ofrezcan albergue u otras alternativas de proyecto de vida digna para personas adultas mayores que han sido abandonadas o se encuentran en situación de riesgo e indigencia. 	Ver derecho a la integridad personal
Derecho a su autonomía y desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración judicial de interdicción sin las debidas garantías del debido proceso. • Despojo ilegal o arbitrario de su derecho a la propiedad y libre administración de sus bienes. • Ausencia o deficientes medidas que promuevan la capacitación o formación de las personas adultas mayores que deseen continuar su vida laboral. • Ausencia de programa o financiamiento para adquirir viviendas o desarrollar actividades económicas o empresariales. 	Ver derecho a un proyecto de vida digna
Derecho a salud preferente	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación total o parcial de atención médica. • Denegación o desabastecimiento de medicamentos para enfermedades propias 	Ver derecho a la salud

	<ul style="list-style-type: none"> de las personas adultas mayores. • Instalaciones inadecuadas de los centros de salud para atender a personas adultas mayores. • Omisión del Estado para brindar progresivamente atención integral especializada y accesible a las personas adultas mayores (geriatría y gerontología). 	
Derecho al trabajo sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Discriminación para el acceso al empleo por razón de la edad. • Discriminación para optar a ascensos por razón de la edad. • Actos de discriminación en el trabajo por razón de la edad. • Actos arbitrarios contra la estabilidad en el empleo por razón de la edad. • Denegación de prestaciones laborales en razón de la edad. • Omisión del Estado para garantizar el acceso y permanencia en el empleo sin discriminación. 	Ver derecho al trabajo
Derecho a obtener beneficios y prestaciones de seguridad social	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de requisitos restrictivos y contrarios al principio de favorabilidad para otorgar pensiones por vejez, viudez o discapacidad. • Retraso excesivo en el trámite y resolución de pensiones. • Denegación ilegal o arbitraria de pensión u otros beneficios de seguridad social. • Omisión del Estado para revalorizar las pensiones conforme a la ley y a la situación de exacción económica. 	Ver derecho a la seguridad social
Derecho de participar en políticas y decisiones del Estado que les afecten.	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado en informar a las personas adultas mayores sobre sus derechos. 	Ver: Derecho a la información.

	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de mecanismos de participación política e institucional de las personas adultas mayores en asuntos que les afecte. 	
--	--	--

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	CORRELACION DE DERECHOS, COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<p>Derecho a no ser discriminado por condición de discapacidad</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 24. Igualdad ante la Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p> <p>Protocolo San Salvador</p> <p><u>Artículo 18</u> Protección de los Minusválidos</p> <p>Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:</p> <p>a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política o plan para eliminar todas las formas de invisibilización y discriminación de las personas con discapacidad. • Falta de políticas y prácticas de acción afirmativa a favor de personas con discapacidad. 	<p>Hay personas que viven con retos especiales; es decir, con algún tipo de discapacidad física o mental que dificulta su desarrollo de proyecto de vida. De manera errada, en ocasiones se les denomina personas “discapacitadas”, cuando no es correcta esa terminología por cuando su limitación no implica que carezcan de facultades para su desarrollo en la sociedad. Por el contrario, los mayores obstáculos que enfrentan son los que derivan del resto de la sociedad que carece de la información necesaria para comprender su realidad y cómo sería la mejor forma de apoyarles a insertarse en los procesos productivos y sociales sin discriminación. El Estado, y la PDDH desde su ámbito de competencia, están llamados a incidir en políticas, planes, programas y campañas de sensibilización para modificar esos patrones sociales.</p> <p>Como primera providencia, corresponde al Estado generar las iniciativas que sean indispensables para remover los obstáculos materiales que limitan su movilidad y acceso a lugares públicos, especialmente aquellos donde se les debe proveer servicios públicos como educación, salud, trabajo, distracción y administración de justicia.</p> <p>Paralelamente, deben ser objeto de políticas públicas, para que puedan tener un proyecto de vida digna tomando en cuenta sus retos particulares. La legislación especial en la materia ha avanzado en el mejoramiento de las condiciones materiales de acceso y atención, así como en condiciones laborales más favorables, incluyendo la obligación de una cuota de contratación de personas con retos especiales en oficinas públicas. No</p>

<p>minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;</p> <p>b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos;</p> <p>c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;</p> <p>d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena.</p>		<p>obstante, el punto más importante es de carácter cultural y educativo que tienda hacia un cambio de visión para resolver sus necesidades con proyección socialmente integradora en todas sus áreas.</p> <p>Este tipo de obligaciones, también han asumido rango internacional en el marco del sistema interamericano con la entrada en vigor de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y en las Naciones Unidas con la Convención en la misma materia y la reciente instalación del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de las Personas con Discapacidad.</p> <p>En el ámbito de la Administración de Justicia, las autoridades respectivas deben asumir ciertas providencias respecto de estas personas, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asumir una política de contratación y no discriminación y permitir que personas con discapacidad puedan asumir roles dentro de la Administración de Justicia de acuerdo con sus habilidades particulares. • Revisar condiciones materiales de acceso físico a todas las instituciones vinculadas con el acceso a la justicia y remover todos los obstáculos para facilitar condiciones físicas. • Proveer a las personas privadas de con algún tipo de discapacidad, posibilidades de que ello no sea un obstáculo en los procesos de prestación de servicios para asumir su proyecto de vida una vez que cumplan con las sentencias condenatorias. • Propiciar planes de acción afirmativa para que personas con discapacidad se beneficien de incentivos para promociones y oportunidades conforme a su capacidad y las condiciones de sus habilidades.
--	--	--

Derecho a un nivel de vida adecuado	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de planes para que las personas con discapacidad pueden tener acceso a un proyecto de vida digna conforme a sus necesidades específicas y sus habilidades especiales. 	Ver derecho a vida digna (proyecto de vida digna)
Derecho a que se remuevan obstáculos físicos y materiales para facilitar su acceso a edificios y lugares públicos.	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de obstáculos físicos, materiales o de cualquier otra naturaleza que impidan o dificulten el acceso de las personas con discapacidad a edificios y lugares públicos o privados de acceso público. Omisión o tolerancia del Estado en supervisar que edificios y lugares de acceso público cumplan con la remoción de obstáculos materiales para el ingreso de personas con discapacidad. Otorgamiento de permisos de salud y de funcionamiento de negocios que no cumplen con estándares para el acceso de personas con discapacidad. 	
Derecho a que se facilite su acceso a servicios de transporte público	<ul style="list-style-type: none"> Tolerancia o falta de supervisión para que haya servicios de transporte público que puedan ser utilizados por personas con discapacidad. 	Ver derecho a la libertad de tránsito y de movimiento
Derecho a optar a cargos públicos y a participación política.	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de normativa y prácticas de acción afirmativa, incluyendo "cuotas", para que personas con discapacidad puedan optar a cargos y puestos públicos con representatividad. Denegación u omisión del Estado para garantizar la participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones de orden político y social. Denegación u omisión estatal de escuchar o atender las demandas de personas o de asociaciones de personas con discapacidad. 	Ver derechos políticos
Derecho a ejercer el sufragio	<ul style="list-style-type: none"> Inexistencia de condiciones que faciliten antes, durante o después, los medios idóneos para que las personas con 	Ver derechos políticos

	discapacidad puedan participar activamente en los procesos electorales.	
Derecho de asociarse para constituir partidos políticos e ingresar a los ya constituidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación o restricción ilegal o arbitraria para inscribirse en partidos políticos en razón de su discapacidad. • Tolerancia estatal frente a la discriminación en razón de discapacidades para el ingreso, inscripción y participación en partidos políticos. 	Ver derecho de reunión y de asociación
Derecho a acceso a una justicia diferenciada	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de un enfoque judicial que permita acceso físico y material para que las personas con discapacidad puedan ejercer de manera integral todos sus derechos en todos los ámbitos de la justicia. • Falta de servicios legales gratuitos para personas con discapacidad que requieran de atención especial en procesos no solo penales, sino de familia, alimentos y otros. • No eliminación de obstáculos físicos para que las personas con discapacidad puedan participar en audiencias procesales públicas o privadas en cualquier carácter en que comparezcan. • Incumplimiento de medidas preferenciales para que la justicia sea justa y cumplida con mayor celeridad que para el común denominador de los casos. • Dificultades e incumplimiento para ejercer el derecho a un recurso legal integral en función de su discapacidad. • Inexistencia de intérpretes a lenguajes requeridos en función de una discapacidad determinada. 	Ver derecho al acceso a la justicia, garantías judiciales
Derecho a una salud diferenciada	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de programas de salud diferenciados que incluyan acciones afirmativas para dar preferencia al acceso 	Ver derecho a la salud, derecho a la integridad, derecho a la vida

	<p>físico y a una atención más especializada, integral y humanizada para las personas con discapacidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausencia total o parcial de medicamentos especializados para el tratamiento de personas con discapacidad. • Ausencia total o parcial de material o equipo especializado para el tratamiento y/o rehabilitación de personas con discapacidad. • Ausencia total o parcial, o falta de incentivos para promover la existencia de profesionales especializados en el tratamiento de discapacidades diversas. 	
Acceso a la educación y derecho a una educación diferenciada	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación de matrícula en razón de discapacidades. • Carencia total o parcial de material y equipo necesario para la enseñanza y formación de personas con discapacidades diversas. • Carencia total o parcial de construcciones o instalaciones accesibles para personas con discapacidad. • Ausencia de textos escolares y colegiales que eduquen y sensibilicen sobre el combate a la discriminación y favorezcan enfoques inclusivos de las personas con discapacidad. • Falta de planes de combate a la deserción estudiantes de personas con discapacidad. 	Ver derecho a la educación, derecho a la cultura
Derecho y acceso al trabajo en condición diferenciada.	<ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia u omisión del Estado en casos de discriminación laboral de personas con discapacidad. • Tolerancia u omisión del Estado frente a la ausencia total o parcial de formación y 	Ver derecho al trabajo, derecho a igualdad y acción afirmativa

	<p>readaptación profesional a personas con discapacidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia u omisión de crear servicios de colocación profesional o incorporación al empleo que incluyan a personas con discapacidad. • Tolerancia del Estado en permitir prácticas de despidos o de no contratación de mujeres en estado de embarazo que requerirán de beneficios laborales y sociales en razón de su estado. 	
Derecho a la seguridad social diferenciada	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensión ilegal o arbitraria de pensiones de invalidez y otros beneficios de seguridad social de personas con discapacidad. • Denegación arbitraria o ilegal para incorporar o inscribir a personas con discapacidad al sistema de seguridad social. • Tolerancia u omisión del Estado ante dilaciones indebidas en los proceso de incorporación al sistema de seguridad social. • Omisión o negligencia del Estado ante denegación ilegal o arbitraria de pensiones de invalidez u otros beneficios de seguridad social. 	Derecho a la seguridad social, proyecto de vida digna (proyecto de vida digna)
DERECHOS DE LAS PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	CORRELACION DE DERECHOS, COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
Derecho a no discriminación	<ul style="list-style-type: none"> ○ Inexistencia de planes o programas que informen y sensibilicen sobre VIH/SIDA. ○ Actos discriminatorios y humillantes de 	<p>Derechos de las personas con VIH/SIDA: Derecho a la salud y a la no discriminación del</p> <p>Las personas con VIH/SIDA en el Salvador, su derecho a la salud y</p>

	<p>personal estatal hacia pacientes de VIH/SIDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Falta de campañas de prevención y combate contra la discriminación en perjuicio de personas con VIH/SIDA o Invisibilización del tema y manejo inadecuado de estadísticas 	<p>a ser tratadas con dignidad y sin discriminación fue un tema analizado por la Comisión Interamericana en el marco de un caso concreto (CIDH. Informe No. 27/09. Fondo. Caso 12.249. Jorge Odir Miranda Cortez y otros. El Salvador. 20 de marzo de 2009). Igualmente, ha habido otros casos en conocimiento de la Comisión Interamericana que han permitido destacar distintas obligaciones del Estado para con ese tipo de población en situación de vulnerabilidad y discriminación. Para efectos de enriquecer el enfoque que debe tener la PDDH al tratar temáticas generales específicas en ese ámbito, se facilitan algunos extractos de precedentes de la Comisión Interamericana, en especial, sobre el derecho a la salud, derecho a la integridad personal; todo en conexidad con el derecho a la vida y a vivir con dignidad y sin discriminación. A pesar de ser derechos que podrían tratarse de manera separada, la Comisión los trató de manera integral.</p> <p><i>Derecho a la salud. Relación con derecho a la vida.</i></p> <p>En relación con la situación de una persona natural de Jamaica con VIH/SIDA en el marco de un proceso de expulsión de Canadá hacia Jamaica por encontrarse indocumentada, la Comisión Interamericana relacionó los riesgos de una expulsión con una eventual muerte prematura.</p> <p>En esas circunstancias, la CIDH concluye que enviar conscientemente a Andrea Mortlock a Jamaica, a sabiendas de su actual régimen de atención médica y del insuficiente acceso en el país receptor a servicios similares de salud para los portadores de VIH/SIDA, sería violatorio de sus derechos y constituiría una sentencia <i>de facto</i> a un sufrimiento prolongado y una muerte prematura. (CIDH. Informe 63/08. Caso 12.534. Admisibilidad y Fondo. Andrea Mortlock. Estados Unidos. 25 de julio de 2008. Párr. 94).</p> <p><i>Derecho a no discriminación ni estigmatización de personas con VIH/SIDA</i></p> <p>De acuerdo con la Comisión Interamericana, las personas que</p>
--	--	---

		<p>viven con el VIH/SIDA en muchos casos sufren de discriminación, manifestada de diversas formas. Esta situación aumenta el efecto negativo de la enfermedad en sus vidas, y resulta en otros problemas como limitaciones en el acceso al empleo, vivienda, atención sanitaria y sistemas de apoyo social. No cabe duda de que el principio de no-discriminación debe ser observado muy estrictamente para garantizar los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH/SIDA. Incluso deben tenerse en cuenta consideraciones de salud pública, ya que la estigmatización o discriminación contra la persona portadora del virus puede conducir a una renuencia a acudir a los controles médicos, lo que dificulta la prevención de la infección... (CIDH. Informe No. 27/09. Fondo. Caso 12.249. Jorge Odir Miranda Cortez y otros. El Salvador. 20 de marzo de 2009. Párr. 70.).</p> <p>Igualmente, ha habido pronunciamiento sobre la importancia de tomar medidas razonables para evitar contagio de este tipo de enfermedad y evitar otras que podrían ser irrazonables y denigrantes. En esa oportunidad, la Comisión Interamericana dispuso:</p> <p>“Cabe referirse por separado a la situación del señor Jorge Odir Miranda Cortez. La CIDH considera demostrada la utilización del vaso marcado con las cruces que aparece en la foto del señor Miranda Cortez cuando estaba internado. Este hecho, que se constata incluso mediante una fotografía publicada en un periódico, no fue refutado por el Estado salvadoreño. La Comisión Interamericana determina que, efectivamente, se verificó una distinción de trato respecto a Jorge Odir Miranda Cortez. No cabe duda que el Estado tiene no solamente el derecho de aplicar las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, sino el deber de hacerlo, como parte de su obligación de proteger la salud de las personas sometidas a su jurisdicción. Sin embargo, el medio utilizado es absolutamente irrazonable y denigrante para el señor Jorge Odir Miranda Cortez, y constituye una estigmatización innecesaria (CIDH. Informe No. 27/09. Fondo. Caso 12.249. Jorge</p>
--	--	---

		<p>Odir Miranda Cortez y otros. El Salvador. 20 de marzo de 2009. Párr. 74).</p> <p>Hay otras dimensiones discriminatorias que tienen relación con el derecho al trabajo, derecho a recibir ascensos, derecho a la educación y acceso a los servicios públicos, donde se aprecia un trato claramente discriminatorio en la cultura institucional. Le corresponde a la PDDH elaborar un estudio de “estado del arte” donde se identifiquen todos los escenarios discriminatorios para recomendar pautas específicas a las distintas instituciones públicas involucradas según el área de intervención.</p>
Derecho a la vida	<ul style="list-style-type: none"> o Falta de atención médica oportuna para casos de pacientes con VIH/SIDA o Falta de medicamentos antirretrovirales que pongan en riesgo la vida de personas con VIH/SIDA. 	<p>El derecho a la vida de las personas con VIH/SIDA se encuentra más comprometido que la mayoría de personas afectadas por otro tipo de enfermedades infecto contagiosas. Por ese motivo, estas personas conforman un grupo más vulnerable desde el punto de vista de su salud, lo cual requiere del Estado una mayor atención preventiva para resguardar su vida.</p> <p>Ver derecho a la vida, derecho a un proyecto de vida digna.</p>
Derecho a la integridad física	<ul style="list-style-type: none"> o Falta de atención médica oportuna y gratuita. o Falta de previsión en la compra y manejo de inventarios de medicamento antirretrovirales. 	<p>Las mismas razones que ponen en riesgo la vida de las personas con VIH/SIDA, lo hacen con su integridad física. Desde una visión preventiva, corresponde a la PDDH asumir un monitoreo más proactivo e integral para evitar que situaciones de riesgo a la integridad física se conviertan en violaciones al derecho a la vida.</p> <p>Ver: derecho a la integridad física.</p>
Derecho a un trato humano	<ul style="list-style-type: none"> o Trato inhumano y degradante a personas con VIH/SIDA o Tratamientos médicos y psicológicos inadecuados. o 	<p>Ver: Derecho a la integridad física y psíquica</p>
Derecho a salud y acceso a medicamentos antirretrovirales adecuados	<ul style="list-style-type: none"> o Discriminación en las estrategias o programas de prevención, combate de la epidemia del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. o Falta de planificación presupuestaria para 	<p>atención y VIH/SIDA y</p> <p>Ver derecho a la salud</p>

	<p>garantizar dotación de medicamentos retrovirales de forma gratuita.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Falta de un programa de salud preventiva en materia de VIH/SIDA. ○ Tratamientos médicos obsoletos. ○ Manejo inadecuado de desechos hospitalarios. ○ Falta de tratamientos diseñados a las necesidades y condiciones de cada paciente. 	
--	---	--

DERECHOS DE LAS PERSONAS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	CORRELACION DE DERECHOS, COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<p>Derecho a que exista una política de prevención y combate contra la discriminación racial y reconocimiento de derechos de las personas y pueblos indígenas.</p> <p>CADH Artículo 24. Igualdad ante la Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de un marco normativo y de una política o plan de adecuación de los estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas acorde con el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. • Invisibilización y negación de la existencia de pueblos indígenas. • Omisión del Estado en garantizar un proyecto de vida digna a los miembros de las comunidades indígenas. • Violación al derecho a la propiedad colectiva y desarticulación de su forma de posesión comunitaria. • Inseguridad sobre la propiedad y posesión de los territorios que ocupan ancestralmente, tanto por falta de títulos y registros como por usurpación de sus tierras por población mestiza, incluyendo hostigamiento y engaño para la venta de tierras e incursiones constantes de hecho. • Falta de políticas, programas y proyectos para el 	<p>La mayoría de las Constitucionales Nacionales reconocen el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, lo cual debe tener incidencia y vivencia en la Administración de Justicia por medio del respeto básico de la diversidad, tanto de sus miembros como de las comunidades que intervienen.</p> <p>La Constitución Política de El Salvador no tiene una norma con ese nivel de reconocimiento, lo cual es cónsono con una política activa y omisiva de invisibilización de la existencia de pueblos indígenas en el país y, en segundo lugar, de su discriminación.</p> <p>Lo anterior hace que la situación de personas y pueblos indígenas en El Salvador sea la más comprometida de la región centroamericana. En el caso de población afrodescendiente, aún cuando en El Salvador no se identifica la existencia de grupos de esa naturaleza, en caso de que haya personas de esos colectivos de paso o viviendo en el país, y que mantienen características de grupos tribales conforme al Convenio 169 de la OIT, la PDDH debe estar atenta a que las instituciones estatales encargadas de</p>

	<p>manejo de recursos naturales con participación activa de los indígenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destrucción de las cuencas hidrográficas y otros recursos naturales por parte de terceros (ganaderos, campesinos y otros). • Intromisión de sectores ajenos en los asuntos internos de estos pueblos para asegurar sus intereses (políticos, empresarios, ganaderos). • Represión y amenazas permanentes al movimiento indígena y e impunidad de los responsables de violaciones y abusos. • Poco y deficiente acceso de servicios sociales (salud, educación, agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, carreteras e infraestructura) que inciden en aumento de las tasas de analfabetismo, deserción social escolar, desnutrición y mortalidad infantil. • Ausencia de implementación de educación intercultural bilingüe. • Procesos de desvalorización de su cultura entre la población más joven. • Pago inadecuado por los productos elaborados. • Falta de vías y medio de comunicación. • Falta de realización de consulta previa para aprobación de leyes y de proyectos que afecten la integridad de los pueblos indígenas o sus territorios ancestrales. 	<p>intervenir, sean respetuosos de esos estándares internacionales.</p> <p>La situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes es bastante compleja, ya que su mayor aspiración es que el Estado, pero también la población en general, les reconozcan su diversidad cultural y la respeten. Su lucha histórica es el reconocimiento a la diferencia y a que el sistema acepte y respete sus prácticas y costumbres como formas válidas, legítimas y auténticas de ordenar sus formas de vida, incluso de gobernarse, conforme a pautas ancestrales.</p> <p>Requieren sin embargo, de parte del Estado, la adopción de programas que impulsen su desarrollo y el acceso a derechos y servicios públicos, pero siempre dentro del ámbito de su realidad y costumbres para no afectar su forma de organización y su cultura. En especial, también se les debe respetar a estos grupos a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propia lengua.</p> <p>Igualmente, los Estados deben garantizar a estos grupos seguridad en cuanto a su permanencia en sus territorios ancestrales. Entre los derechos que se reconocen especialmente a los pueblos indígenas por parte del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, están los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. • Salvaguardar sus costumbres, instituciones y cultura propias, sus bienes, el trabajo y el medio ambiente que habitan. • Derecho a la posesión y propiedad de tierras y territorios que tradicionalmente ocupan por la importancia y valor que se atribuyen a su cultura. • Conservar su derecho consuetudinario, inclusive los métodos a los que recurren tradicionalmente para la represión de delitos cometidos por sus miembros, en la
--	--	--

		<p>medida que sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos universalmente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Derecho a no ser trasladados forzosamente de las tierras que ocupan y cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su libre y pleno conocimiento de causa y permitirles regresar en cuanto dejen de existir las causas que lo provocaron.• Derecho a comprender y hacerse comprender en procedimientos legales en su idioma a través de un traductor o intérprete. <p>De manera gráfica, estos son los principales derechos de los pueblos indígenas integrados con la Convención Americana:</p>								
		<table><tr><td>Artículo Convenio 169 OIT</td><td>Artículo CADH y Protocolo Facultativo</td></tr><tr><td>Artículo 2: promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas con respeto a su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones. Artículos 4 y 5</td><td>Artículo 26 CADH (desarrollo progresivo de los DESC). Protocolo Facultativo integralmente. Artículo 14: Protocolo Facultativo (Beneficios de la cultura).</td></tr><tr><td>Artículo 7: derecho a decidir sobre su propio desarrollo como pueblos conforme a sus instituciones y prácticas.</td><td>Artículo 26 CADH (desarrollo progresivo de los DESC). Protocolo Facultativo integralmente</td></tr><tr><td>Artículo 8: Derecho a conservar costumbres e instituciones propias en compatibilidad con el sistema</td><td>Artículo 8 CADH (Acceso a la justicia).</td></tr></table>	Artículo Convenio 169 OIT	Artículo CADH y Protocolo Facultativo	Artículo 2: promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas con respeto a su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones. Artículos 4 y 5	Artículo 26 CADH (desarrollo progresivo de los DESC). Protocolo Facultativo integralmente. Artículo 14: Protocolo Facultativo (Beneficios de la cultura).	Artículo 7: derecho a decidir sobre su propio desarrollo como pueblos conforme a sus instituciones y prácticas.	Artículo 26 CADH (desarrollo progresivo de los DESC). Protocolo Facultativo integralmente	Artículo 8: Derecho a conservar costumbres e instituciones propias en compatibilidad con el sistema	Artículo 8 CADH (Acceso a la justicia).
Artículo Convenio 169 OIT	Artículo CADH y Protocolo Facultativo									
Artículo 2: promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas con respeto a su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e instituciones. Artículos 4 y 5	Artículo 26 CADH (desarrollo progresivo de los DESC). Protocolo Facultativo integralmente. Artículo 14: Protocolo Facultativo (Beneficios de la cultura).									
Artículo 7: derecho a decidir sobre su propio desarrollo como pueblos conforme a sus instituciones y prácticas.	Artículo 26 CADH (desarrollo progresivo de los DESC). Protocolo Facultativo integralmente									
Artículo 8: Derecho a conservar costumbres e instituciones propias en compatibilidad con el sistema	Artículo 8 CADH (Acceso a la justicia).									

		<p>jurídico nacional.</p> <p>Artículo 9: Respeto a los métodos tradicionales para represión de delitos cometidos por sus miembros en cuanto sean compatibles con el sistema jurídico nacional.</p> <p>Artículo 10: Sanciones penales alternativas.</p>	
		<p>Artículo 11: Acceso a la justicia y derecho de petición. Facilitación de intérpretes.</p>	<p>Artículo 8. 2 y 25 CADH (Acceso a la justicia, derecho de petición y debido proceso legal).</p>
		<p>Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Derecho al territorio y a todos sus bienes y elementos colaterales – hábitat tradicional, medio ambiente, etc. -</p>	<p>Artículo 21 CADH. (Derecho a la Propiedad).</p> <p>Artículo 11 Protocolo Facultativo (Medio ambiente sano).</p>
		<p>Artículo 20: Derecho al trabajo y condiciones de empleo.</p> <p>Artículo 21, 22 y 23: Formación profesional y artesanal</p>	<p>Artículo 26 CADH (Desarrollo progresivo DESC).</p> <p>Artículos 6 y 7 Protocolo Facultativo (Derecho al trabajo y condiciones laborales)</p>
		<p>Artículo 24: Régimen de seguridad social.</p> <p>Artículo 25: Servicios de salud y asistencia social.</p>	<p>Artículo 26 CADH (Desarrollo progresivo DESC).</p> <p>Artículo 9 Protocolo Facultativo (Derecho a la seguridad social).</p> <p>Artículo 10 Protocolo Facultativo (Derecho a la salud).</p> <p>Artículo 12 Protocolo Facultativo (Derecho a la alimentación).</p>

		<table border="1"><tr><td>Artículo 26, 27, 28, 29, 30, 31: Derecho a la educación conforme a sus propias prácticas e instituciones, incluyendo enseñanza bilingüe e intercultural.</td><td>Artículo 26 CADH (Desarrollo progresivo DESC). Artículo 13 Protocolo Facultativo (Derecho a la educación).</td></tr><tr><td>Artículo 3: No discriminación.</td><td>Artículo 1 y 24 CADH (Derecho a la igualdad y no discriminación). Artículo 3: Protocolo Adicional (Obligación de no discriminación).</td></tr></table>	Artículo 26, 27, 28, 29, 30, 31: Derecho a la educación conforme a sus propias prácticas e instituciones, incluyendo enseñanza bilingüe e intercultural.	Artículo 26 CADH (Desarrollo progresivo DESC). Artículo 13 Protocolo Facultativo (Derecho a la educación).	Artículo 3: No discriminación.	Artículo 1 y 24 CADH (Derecho a la igualdad y no discriminación). Artículo 3: Protocolo Adicional (Obligación de no discriminación).
Artículo 26, 27, 28, 29, 30, 31: Derecho a la educación conforme a sus propias prácticas e instituciones, incluyendo enseñanza bilingüe e intercultural.	Artículo 26 CADH (Desarrollo progresivo DESC). Artículo 13 Protocolo Facultativo (Derecho a la educación).					
Artículo 3: No discriminación.	Artículo 1 y 24 CADH (Derecho a la igualdad y no discriminación). Artículo 3: Protocolo Adicional (Obligación de no discriminación).					

Acceso a la justicia vis a vis costumbre indígena (derecho propio)

Desde el punto de vista del acceso a la justicia de los pueblos indígenas, el primer tema a comprender es el concepto de pueblos indígenas y tribales en su amplia dimensión como pueblo en sentido socio-antropológico y como pueblo colectivo sujeto de derecho.

No se puede entender la subjetividad jurídica de ese colectivo si no comprendemos el concepto de "pueblo indígena o tribal" y los derechos que de ello se derivan. Para esos efectos, se debe hacer una remisión al concepto más universalmente aceptado que es el que establece el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales. Este artículo entiende por pueblos indígenas y tribales:

3. A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial:

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio (subrayado agregado).

En la definición anterior, el principal supuesto es el respeto de la costumbre indígena como parte de la identidad étnica de los pueblos indígenas y de todos los elementos colaterales para su supervivencia.

Ese tratado hace un reconocimiento al “derecho propio” de los pueblos indígenas, conocido también como “costumbre indígena”. Ese “derecho” supone que el Estado debe respetar la forma consuetudinaria y ancestral con que esos pueblos han regido sus conductas en su entorno social, el cual es diferente a la forma de vida del común denominador de la población salvadoreña. Se dice entonces, que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión diferente: entienden el universo, la naturaleza, la convivencia y todos los elementos que conforman su entorno de manera diversa. Tienen, además, distinta cultura, hábitos e idioma. Administran su propio sistema de resolución de conflictos mediante decisiones de

		<p>sus autoridades tradicionales, así como las penas o sanciones, las cuales excluyen la prisión para aplicar un sistema reparador del daño.</p> <p>Lo que es delito según el código penal salvadoreño, necesariamente dentro de una comunidad indígena y v podría no serlo iceversa.</p> <p>Todo ello, en conjunto, les da un estatuto de grupo por lo tanto, la aplicación del derecho salvadoreño consideración esa diferencia para determinar qué ti po de normativa puede aplicar o no. Ello no quiere decir que a una persona indígena no se le aplica el derecho civil o penal salvadoreño o. Lo que quiere decir es que, según el caso y las circunstancias, y si se demuestra que esa persona no tiene una comprensión de que su conducta representa un ilícito, en ese caso, se le exime de la sanción penal. Es lo que el Derecho Penal conoce como “error culturalmente condicionado”.</p> <p>Algunos Códigos Procesales Penales (Guatemala y Costa Rica) incluyen la posibilidad de que el juez de la causa penal recurra a un peritaje antropológico para comprobar si una costumbre indígena existe y si la misma implicaría un eximente de responsabilidad penal o un atenuante (error de prohibición).</p> <p>Para tener más clara la dimensión del derecho propio o la costumbre indígena y sus alcances, veamos un caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Suriname.</p> <p>La Corte Interamericana valoró lo siguiente:</p> <p>“La única cuestión que aquí interesa consiste en saber si las leyes de Suriname relativas a derecho de familia se aplican a la tribu Saramaca. En este sentido, las pruebas producidas permiten deducir que las leyes de Suriname sobre esa materia no tienen eficacia respecto de aquella tribu; sus integrantes las</p>
--	--	---

		<p>desconocen y se rigen por sus propias reglas y el Estado, por su parte, no mantiene la estructura necesaria para el registro de matrimonios, nacimientos y defunciones, requisito indispensable para la aplicación de la ley surinamesa. Además, los conflictos que ocurren en estas materias no son sometidos por los saramacas a los tribunales del Estado y la intervención de éstos en las materias mencionadas, respecto de los saramacas, es prácticamente inexistente. Cabe señalar también que en este proceso Suriname reconoció la existencia de un derecho consuetudinario saramaca ¹³⁹.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior respecto del derecho propio indígena o su costumbre ancestral “demostrada”, corresponde a los funcionarios que conocen casos o situaciones referentes a personas indígenas, tanto en el ámbito administrativo o judicial, conocer los derechos mínimos que establece el Convenio 169 como parte de la normativa a aplicar e interpretar.</p> <p>Una vez definido el concepto de pueblos indígenas y el de la costumbre o derecho propio, es fundamental identificar los derechos que establece el Convenio 169 de la OIT para efectos de su reconocimiento, interpretación y aplicación por parte de los funcionarios públicos salvadoreños.</p> <p>Los derechos reconocidos en el Convenio 169 son autoejecutables, en el sentido que autorizan a los pueblos indígenas (o a los miembros de estos pueblos) a exigir su respeto en justicia cuando las autoridades estatales actúan en su contra u omiten actuar a favor de su reconocimiento.</p>
--	--	---

¹³⁹ Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones.

		<p>En algunos casos las denuncias conciernen los actos violatorios de los derechos en cuestión, realizados por los representantes del Estado. En otros casos, los pueblos indígenas están legitimados a denunciar al Estado por omisión a sus deberes; en aquellos casos donde las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas resultan de la negligencia de las autoridades estatales en adoptar aquellas medidas (tanto legislativas como de otra naturaleza) ¹⁴⁰ necesarias para garantizar una efectiva protección e implementación de los derechos reconocidos en el Convenio.</p> <p>En más de una ocasión, un mismo derecho indígena puede ser violado tanto por acción como por omisión de parte del poder estatal.</p> <p>Sea que se trate de violaciones resultantes de acciones o de omisiones del Estado, los pueblos indígenas siempre deben tener la facultad de exigir el respeto de sus derechos frente a un tribunal o a otra autoridad competente. En ningún caso dichas autoridades están legitimadas a invocar la falta de disposiciones legales (o la falta de otras medidas) para justificar la no implementación de los derechos reconocidos por el Convenio 169.</p> <p>Tal actitud de las autoridades, además de determinar una pérdida de prestigio y de credibilidad para el Estado, pondría en marcha la responsabilidad internacional del mismo Estado, por no haber cumplido con sus compromisos y haber violado así los principios básicos del derecho internacional de buena fe ("<i>Pacta sunt servanda</i>" ¹⁴¹).</p> <p>Adicionalmente, siendo que el Convenio 169 tiene normas sustantivas de derechos humanos y de los pueblos indígenas, su vinculación con el derecho interno de El Salvador opera a partir del principio pro persona humana (<i>pro homine</i>), principio propio del</p>
--	--	---

¹⁴⁰ Cf. Convenio 169 OIT, artículos: 2, 4 (1 y 2), 7 (4), 26, etc.

¹⁴¹ Cf. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículo 26: "*Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe*".

		<p>derecho internacional de los derechos humanos, que plantea a que en todos los casos de derechos humanos (los derechos consagrados por el Convenio 169 de la OIT son, en gran medida, normas de derechos humanos) es menester buscar siempre la norma que prevé la solución más beneficiosa para la persona y sus derechos.</p> <p>Dicho principio, que aplicado a los pueblos indígenas podría definirse como principio <i>pro pueblos indígenas</i>, encuentra una clara enunciación en el artículo 35 del Convenio 169 de la OIT:</p> <p>La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberán menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.</p> <p>De manera específica, se detallan otros derechos establecidos en el Convenio 169 que requieren de particular atención del Estado, y del interés de la PDDH desde su competencia, a saber:</p> <p><i>Artículo 2:</i> Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad.</p> <p>Los pueblos indígenas del país no tienen asegurados, en pie de igualdad, los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. Por el contrario, existe una situación de exclusión y marginación que no abriga a los miembros de esa comunidad para tener por satisfechas las necesidades básicas como salud, educación, vivienda digna, trabajo, etc, como parte de la obligación señalada en el artículo 2.1.b) del Convenio 169 de promover la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos colectivos.</p>
--	--	--

		<p>Tampoco ha sido posible eliminar las diferencias socioeconómicas que existen entre los miembros de las comunidades indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional (art. 2.1.c)). La forma idónea para combatir esas diferencias es mediante la aprobación de leyes de acción afirmativa de carácter temporal que logren derribar prejuicios y otorgar mayores ventajas en materia de derechos económicos, sociales y culturales que respecto al común denominador de los habitantes no indígenas. En El Salvador se carece de ese tipo de legislación para alcanzar una igualdad real.</p> <p><i>Artículo 6.1: La consulta previa:</i> Es la norma más frecuentemente violada del Convenio 169 y se refiere a la obligación del Estado de consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.</p> <p><i>Artículo 9:</i> En El Salvador no existe una jurisdicción indígena plena y tampoco se respetan los métodos tradicionales para la represión de los delitos cometidos por miembros de los pueblos indígenas. Tampoco hay una práctica de parte de las autoridades y tribunales ordinarios de tomar en cuenta esas costumbres al momento de pronunciarse sobre cuestiones penales que involucren a miembros de esas comunidades étnicas.</p>
<p>Derecho a una justicia diferenciada y reconocimiento de la jurisdicción indígena plena y de la costumbre para resolver sus conflictos internos e interculturales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de la costumbre indígena (derecho propio) como derecho aplicable por los operadores de justicia para resolver los conflictos entre indígenas (jurisdicción indígena plena). • No aplicación de peritajes antropológicos para determinar la costumbre aplicable en casos donde estén involucradas personas indígenas, tanto en materia penal para la determinación de “errores culturalmente condicionados”, o en otras áreas de la justicia. • Ausencia de una política judicial que capacite y sensibilice a los operadores de justicia para mejorar el 	<p>En materia de acceso a la justicia de pueblos indígenas, la premisa principal es la existencia de la jurisdicción indígena plena (derecho propio), lo que supone que los conflictos entre personas indígenas deben resolverse por parte de sus propias autoridades tradicionales conforme a los dictados de la práctica y costumbre ancestral.</p> <p>Cuando el conflicto legal es entre personas indígenas y personas no indígenas, corresponde a las autoridades judiciales ordinarias aplicar el derecho civil o penal en consonancia con el derecho propio para determinar la existencia o no de elementos culturales que hagan aplicable el principio del error culturalmente condicionado. Para ello, el sistema judicial debe garantizar la</p>

	<p>trato a personas indígenas usuarias de la justicia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de intérpretes y traductores que asistan a personas indígenas en los asuntos judiciales en que sean parte. • Revictimización de víctimas de delito indígenas y falta de asistencia integral adecuada. • Desaplicación de los tratados internacionales en materia indígena ratificados por el país. • Denegación, retardo injustificado y/u obstáculos a la justicia en casos indígenas pendientes de resolver. • Falta o insuficiente capacidad para brindar asistencia legal gratuita a personas indígenas en todos los ámbitos judiciales. 	<p>utilización del peritaje antropológico para auxiliarse en la determinación de aplicación de la costumbre y de la modalidad de resolución de conflictos conforme a la experiencia de las autoridades tradicionales.</p>
<p>Derecho a la protección contra toda forma de abuso y explotación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maltrato o abuso de funcionarios basado en superioridad, discriminación o indiferencia (invisibilidad del indígena). • Tolerancia del Estado ante cualquier forma de explotación o abuso basados en discriminación o violencia racial. • Denegación de justicia o inexistencia de recursos efectivos para la reparación de daños causados por discriminación. • Maltrato, abuso y explotación de niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres por ser indígenas o afrodescendientes. 	<p>Ver derecho a la integridad personal</p>
<p>Derecho al reconocimiento y respeto de su identidad cultural</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No reconocimiento y/o invisibilización de la existencia de pueblos indígenas. • No adopción de medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de sus ciencia, cultura y prácticas. • Restricciones o no adopción de medidas para la conservación de sus costumbres y formas de organización social, siempre que éstas sean compatibles con el marco de respeto de los derechos humanos. 	<p>Corresponde a la PDDH promover la protección de los derechos indígenas, no solo desde una óptica de derechos individuales, sino como una entidad integrada por un grupo de personas que viven conforme a una cosmovisión de vida y a un conjunto de prácticas, costumbres, cultura, idioma y otros elementos que los distinguen sustancialmente del común denominador de la población. Todos esos elementos giran en torno a una identidad grupal que se caracteriza por derechos y visiones colectivas de la propiedad y de otros elementos comunes y del dominio de todos sus miembros (espiritualidad, ritos, tierra ancestral).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de acceso a los lugares considerados sagrados para poder llevar a cabo sus ceremonias y rituales. • No adopción por parte del Estado de instrumentos internacionales en materia de pueblos indígenas que los protejan y reconozcan como tales. • Restricciones para permitir el ingreso a lugares públicos a miembros de pueblos indígenas por portar su vestimenta tradicional. • Destrucción y apropiación indebida del patrimonio arqueológico encontrado en lugares considerados sagrados y patrimonio cultural. 	<p>Todos esos elementos se integran y complementan alrededor de la identidad étnica, la cual debe ser garantizada por el Estado para preservar su proyecto de vida colectivo en su territorio ancestral y hábitat útil. Cualquier tipo de amenaza inminente a su integridad cultural condiciona las acciones del Estado, de modo que debe abstenerse de ejecutarlas si hay prueba de que sus efectos podrían poner en riesgo a los pueblos indígenas como grupo.</p>
Derecho a la propiedad y posesión de territorios indígenas	<ul style="list-style-type: none"> • No reconocimiento de la posesión ancestral de sus territorios como título legítimo de propiedad (no requerimiento formal de inscripción registral, pero importante para garantizar su seguridad jurídica registral). • Expropiación, desocupación, traslados o desplazamientos ilegales o arbitrarios de los territorios que ocupan. • No restitución a sus territorios luego de que hayan finalizado las circunstancias de emergencia o fuerza mayor que hayan justificado su desplazamiento por razones de garantía de su integridad como grupo (desastres naturales, conflictos internos, etc.). • No reglamentación ni utilización del derecho a consulta previa a los pueblos indígenas como requisito <i>sine qua non</i> en casos de afectación a sus tierras y territorio. • Omisión de proteger o conservar las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre miembros de los pueblos indígenas. • No adoptar medidas para que personas extrañas a los 	<p>El derecho a la propiedad de los pueblos indígenas reviste la visión más colectiva de ese derecho, incluso para modificar el concepto tradicional del derecho civil que exige como prueba de la propiedad la inscripción registral del título. Por el contrario, los territorios indígenas no requieren necesariamente de la inscripción registral, sino de la demostración ancestral de la posesión (la posesión vale por título).</p> <p>A ese respecto, la violación al derecho a la propiedad colectiva de sus territorios trasciende hacia la violación del derecho a la vida, tal y como lo determinó la Corte Interamericana en el Caso Yakie Axa vs. Paraguay. La principal construcción jurídica respecto del derecho a la propiedad desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, ha sido la de retomar los elementos constitutivos de la propiedad indígena dispuestos en el Convenio 169 de la OIT apoyados en la experticia de distintos antropólogos que confirman que esa propiedad conlleva otros aditamentos propios de una vida colectiva. Bajo esa tesis, la Corte Interamericana reconoce que la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su</p>

	<p>pueblos indígenas se aprovechen de sus costumbres para arrogarse la propiedad, posesión o uso de las tierras que ocupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No participación a los pueblos indígenas de la administración y los beneficios de la explotación de los recursos de sus territorios en el marco de proyectos de interés nacional. 	<p>cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras¹⁴². La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural.</p> <p>Conforme a esa óptica, la Corte Interamericana hace las siguientes contribuciones jurídicas en esta sentencia, no solo para el caso concreto, sino también para situaciones similares donde se discuta el derecho a la propiedad y que son insumos útiles para el trabajo que realiza la PDDH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme al artículo 13 del Convenio No. 169 de la OIT, los Estados deberán respetar “la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.” • En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorpóreos que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. El término “bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla “aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una
--	---	--

¹⁴² Cfr. *Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones* (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 85, y *Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awá Tingsi*, *supra* nota 176, párr. 149.

		<p>persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporeales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor”¹⁴³.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad. • Al aplicar estos estándares a los conflictos que se presentan entre la propiedad privada y los reclamos de reivindicación de propiedad ancestral de los miembros de comunidades indígenas, los Estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho por sobre el otro. Así, por ejemplo, los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el <u>derecho colectivo a la supervivencia</u> como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural. • Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, <u>se podría estar afectando otros derechos básicos</u>, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros. • La restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el
--	--	--

¹⁴³ Cfr. *Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni*, *supra* nota 176, párr. 144, y *Caso Ivcher Bronstein*, *supra* nota 176, párr. 122.

		<p>sentido de la Convención Americana; y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el artículo 21.2 de la Convención. Esto no significa que siempre que estén en conflicto los intereses territoriales particulares o estatales y los intereses territoriales de los miembros de las comunidades indígenas, prevalezcan los últimos por sobre los primeros. Cuando los Estados se vean imposibilitados, por razones concretas y justificadas, de adoptar medidas para devolver el territorio tradicional y los recursos comunales de las poblaciones indígenas, la compensación que se otorgue debe tener como orientación principal el significado que tiene la tierra para éstas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas.
Derecho al acceso a la educación diferenciada y diversa	<ul style="list-style-type: none"> • No inclusión en el pensum escolar y colegial de contenidos culturales propios indígenas (conocimientos tradicionales, costumbres, valores, etc.). • Inexistencia de educación bilingüe en comunidades indígenas. • Denegación o restricciones para acceder a la educación sin discriminación. • No adoptar medidas para promover su enrolamiento en el sistema escolar. • No adoptar medidas para enseñarle a los niños y niñas 	Ver derecho a la educación.

	<p>de los pueblos indígenas a leer y escribir en su propia lengua o la que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenecen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de planes educativos que comprendan adecuaciones curriculares grupales o personales. 	
Derecho al desarrollo conforme a su cosmovisión	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de políticas o planes que implementen y adecuen procesos de desarrollo que tengan en cuenta la realidad y cosmovisión de las comunidades indígenas. • Ausencia de propuestas integrales que permitan a todas la personas indígenas lograr un proyecto de vida digna conforme a su entorno y cosmovisión. • Ausencia de programas para transferir a los pueblos indígenas tecnología apropiada que mejore su calidad de vida. • Ausencia de programas que otorguen a los pueblos indígenas medios necesarios para el desarrollo de sus tierras. • Ausencia de programas de formación profesional voluntaria acorde con sus tradiciones y aspiraciones sociales, económicas y culturales. • Ausencia de programas que promuevan la nutrición balanceada y ajustada a sus patrones alimentarios. 	Ver derecho al desarrollo, derecho a vida digna (proyecto de vida digna).
Derecho a la salud diferenciada e integrada con sus sistemas tradicionales	<ul style="list-style-type: none"> • No poner a disposición de los pueblos interesados los servicios básicos de salud. • Imposición de modelos de salud ajenos a la cosmovisión y costumbre indígena sin atención de criterios interculturales para combinarlos con métodos tradicionales. • Prohibición a los pueblos indígenas, de utilizar su medicina tradicional como una práctica propia de sus comunidades. 	Ver derecho a la salud
Derecho al trabajo sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones discriminatorias para acceder al empleo. • Desigual remuneración por trabajo de igual valor. • Tolerancia u omisión del Estado ante condiciones de trabajo peligrosas para la salud, integridad y la vida. 	Ver derecho al trabajo

	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de planes de sustitución de trabajos riesgosos por actividades, empresariales o económicas que favorezcan oportunidades laborales más ventajosas y preferenciales. • Tolerancia u omisión del Estado para garantizar los derechos laborales, y prestaciones sociales. 	
Derecho a la consulta previa y a obtener información	<ul style="list-style-type: none"> • No instrumentación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas para obtener su consentimiento respecto de los temas y proyectos que puedan afectar su territorio e integridad como pueblos. • Ausencia de información traducida en su propia lengua sobre asuntos que atañen sus derechos y decisiones que afecten o beneficien a su comunidad. • Restricciones para participar plenamente en las decisiones que puedan afectar a la comunidad. 	<p>El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT regula el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas ante cualquier actividad estatal o proyecto público o privado que afecte sus territorios ancestrales y su integridad étnica. Igualmente está regulada en la más reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas de la siguiente manera:</p> <p>“ a) <u>consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;</u> b) establecer los medios a través de los cuales los <u>pueblos interesados puedan participar libremente...en la adopción de :ayotes;; en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;</u> c) establecer los <u>medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin</u>”.</p> <p>Un aspecto medular es que la consulta previa no implica un derecho al veto de los pueblos indígenas respecto del punto en debate, sino un proceso para generar acuerdos:</p> <p>“Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio <u>deberán efectuarse de :ayot fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas</u>”(Art. 6 Convenio 169).</p>

		<p>De manera medular, la consulta previa es consustancial con el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, conforme lo dispone el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT:</p> <p><i>Artículo 15</i></p> <p>1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales ;ayotes;; en sus tierras deberán protegerse especialmente. <u>Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.</u></p> <p>2. <u>En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los ;ayotes; o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos ;ayotes;; en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos ;ayotes;; en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea ;ayotes; en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.</u></p> <p>En lo que respecta a la PDDH, los referentes de vigilancia de la consulta previa a tomar en cuenta son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe ser un proceso "legítimo": Identificación de las autoridades tradicionales y legítimas, • Debe ser un proceso "previo", • Debe ser un proceso "informado", • Debe ser un proceso amplio, • Debe ser un proceso constructivo: (interculturalidad e intereses diversos (interés común e interés colectivo debidamente integrados), • Debe ser un proceso eventualmente reparador: Identificación y mitigación del daño, • Debe dejar a buen recaudo la integridad étnica y cultural del pueblo indígena afectado.
--	--	--

Derecho a la protección de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios	<ul style="list-style-type: none"> • Inobservancia del derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas como requisito sine qua non anterior a tomar cualquier decisión estatal o privada que pudiera afectar los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. • Restricciones o denegación para participar en la toma de decisiones relacionadas con la utilización, administración y conservación de los recursos naturales. • Uso o explotación de recursos naturales sin su consentimiento. 	Ver derecho a la propiedad y posesión de los territorios indígenas
--	--	--

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
Derecho a un proyecto de vida digna	<ul style="list-style-type: none"> • Falta o insuficiente política penitenciaria que garantice un proyecto de vida dentro, y luego fuera, de los centros penitenciarios a las personas privadas de libertad (con especial énfasis de los niños, niñas y adolescentes) 	<p>Independientemente de los motivos por los que una persona se encuentre privada de su libertad, tiene siempre a resguardo el derecho a que se le respete su dignidad y las condiciones mínimas para que pueda gozar de un proyecto de vida digna dentro del centro penal con miras a su reinserción y resocialización. Le corresponde a la PDDH realizar visitas a todos los lugares de privación de libertad (policiales, penitenciarios, centros de atención de menores de edad, hospitales psiquiátricos, etc.) y elaborar informes de situación para prevenir casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.</p> <p>La agenda de verificación de las visitas de la PDDH debe comprender al menos las siguientes situaciones.</p> <p>Las condiciones mínimas de privación de la libertad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ser tratado humanamente, con respeto a la dignidad y tener opciones de desarrollo como persona, incluyendo opciones de educación, oficio y esparcimiento. Las necesidades básicas como alimentación adecuada, agua potable y vestido deben ser cubiertas a cargo del Estado. Cada recluso dispondrá de una cama individual y de ropa de cama individual limpia, con facilidades para asegurar su limpieza.

		<ul style="list-style-type: none"> • Los locales destinados a los reclusos deberán tener suficiente volumen cúbico de aire, superficie mínima, alumbrado y ventilación. • Derecho a la salud: Servicios médicos, psicológicos , psiquiátricos y aquellos necesarios y de calidad para resguardar la integridad física y psíquica. • Respeto a la integridad física y moral. No ser sometido, bajo ninguna circunstancia, a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. • Todos los reclusos dispondrán de instalaciones sanitarias limpias para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en forma aseada y decente y mantener su higiene general y un buen aspecto. • Todos los reclusos deberán disponer, si el tiempo lo permite, de por lo menos una hora al día de ejercicio físico. • Dar a conocer los derechos y deberes que tienen las personas privadas de libertad y los mecanismos para protegerlos y reclamarlos. • Ingreso informado. La persona privada de libertad debe ingresar al lugar de detención plenamente informada e inducida sobre sus derechos y deberes y de las condiciones de su privación de libertad, en cuenta, la necesidad de hacerle un examen médico inicial y el levantamiento de un expediente administrativo personal. • Notificación. Desde el primer momento del ingreso o de la detención, debe facilitarse a la persona privada de libertad los medios para que pueda comunicarse libre y privadamente con sus familiares y con su abogado defensor. Cuando la persona sea extranjera, debe hacerse la notificación a las autoridades consulares de su país. • El establecimiento de un régimen de visitas de sus familiares y, particularmente, de un espacio para visita conyugal en condiciones dignas y privadas.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a que antes de que se le establezca una sanción disciplinaria, se le conceda una audiencia previa para que ejerza su defensa. Todas las infracciones disciplinarias y las sanciones del caso deben ser especificadas por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho y debidamente publicados. <p>Derechos de los reclusos en materia de salud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toda prisión deberá tener instalaciones de salud y personal médico adecuados para proporcionar toda una gama de servicios, tales como atención dental y psiquiátrica. Los reclusos enfermos que no pudieran recibir tratamiento en la cárcel, tales como los que adolezcan de enfermedades mentales, deberán ser trasladados a un hospital civil o un hospital penitenciario especializado. • Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. • Cualquier tratamiento médico necesario se ofrecerá en forma gratuita. Los reclusos tendrán libre acceso a los servicios de salud de que disponga el país • Las decisiones acerca de la salud de un recluso solamente serán adoptadas por razones médicas por personas debidamente calificadas. • Todo recluso deberá poder utilizar los servicios de un dentista calificado. • Toda prisión dispondrá de un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuera necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. • Los reclusos que sufran otras enfermedades mentales deberán ser tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. • Durante su permanencia en la prisión, los reclusos alienados y enfermos mentales estarán bajo la vigilancia especial de un médico. <p>Utilización óptima de las prisiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La finalidad esencial de las autoridades de las cárceles en su trato de los reclusos será alentar la reforma y la readaptación social de los penados. • La finalidad del régimen carcelario ha de ser ayudar a los reclusos a vivir
--	--	--

		<p>conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo después de concluida la condena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dará formación profesional a los reclusos, particularmente a los jóvenes. • El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado. • Se ofrecerán y alentarán actividades educativas y culturales, y se dará a los reclusos acceso a una biblioteca adecuada. • Las actividades educativas en las cárceles tenderán a desarrollar plenamente la personalidad humana, teniendo presentes los antecedentes de orden social, económico y cultural del recluso. • La instrucción de los analfabetos y de los reclusos jóvenes será obligatoria, y la administración deberá prestarles particular atención. • Deberá procurarse contar con la mayor participación posible de la comunidad exterior en las actividades educativas y culturales desarrolladas en las cárceles. • Todos los reclusos tienen derecho a observar los principios de su religión y a tener acceso a un ministro de dicha religión. Los reclusos tendrán acceso a representantes autorizados de cualquier religión. <p>Contacto de los reclusos con el mundo exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. • Todos los reclusos tendrán el derecho a comunicarse con el mundo exterior, especialmente con sus familias • La petición de un recluso de estar en una cárcel si tuada cerca de su lugar de residencia habitual se cumplirá en la medida de lo posible. • Se considerarán cuanto antes las posibilidades de poner en libertad al recluso de un establecimiento y asignarlo a un programa no privativo de la libertad. <p>Situación de las personas que tienen necesidades especiales</p> <p>Es un principio básico que todas las personas privadas de libertad sean tratadas de igual manera y sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, hay personas que por razón de su edad (menores de edad y adultos mayores), sexo, condición étnica o por</p>
--	--	--

		<p>tener algún tipo de discapacidad, tienen necesidades diversas que requieren un trato diferenciado por parte del sistema penitenciario:</p> <p>Derechos de indígenas y de afrodescendientes</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de los reclusos con una cultura diferente (indígenas, afrodescendientes), se les debe respetar su forma distinta de ver las cosas, su cultura, religión y prácticas. • Se debe promover medidas para evitar su desarraigo de su población originaria, para lo cual, deben planificarse traslados para que estén más cerca de sus comunidades. • Los indígenas y afrodescendientes pueden hablar en el idioma de su predilección y no se les puede limitar el uso de su lengua tradicional en ninguna circunstancia. • Cuando no hable el idioma español, deberá proveerse a la persona detenida de un intérprete. • Los defensores públicos a los que les corresponda ejercer la defensa de las personas indígenas y afrodescendientes deben ser conocedores del derecho indígena y de la utilización de los instrumentos legales en esa materia. <p>Derechos de las mujeres. Las mujeres privadas de la libertad no serán objeto de discriminación y estarán protegidas de todas las formas de violencia o explotación. Entre sus derechos están los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estarán alojadas en locales separados de los hombres. • Las reclusas serán vigiladas y registradas exclusivamente por funcionarias del sexo femenino. Cuando se requiera hacer una revisión más minuciosa por razones excepcionales, debe ser hecha por personal médico capacitado. • En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento penitenciario, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño o niña, deberán tomarse disposiciones para organizar el cuidado infantil, con personal calificado, donde estarán los niños menores de edad y serán atendidos por sus madres. <p>Las personas menores de edad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se tratará a los niños y niñas privadas de la libertad de una forma que promueva su sentido de la dignidad y del decoro, facilite su reintegración a la sociedad, satisfaga su interés superior y tenga en cuenta sus necesidades como personas menores de edad. • Ningún niño o niña serán sometidos a castigos corporales. • Todo niño y niña privados de la libertad estarán se parados de los adultos. Los menores acusados estarán separados de los adultos y serán juzgados lo antes posible. • Todo menor tendrá derecho a recibir educación y formación profesional. • En toda institución donde haya menores detenidos se prohibirá al personal portar armas. • Los procesos penales contra menores de edad deberán ser tramitados y resueltos con la mayor celeridad y rapidez para que la detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables. • Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de capacitación. • Los menores no serán trasladados arbitrariamente de un centro a otro.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Deben organizarse centros de detención abiertos para menores donde las medidas de seguridad sean escasas o nulas. Si no es posible, los centros de detención deberá ser lo menos numerosos a fin de que el tratamiento rehabilitador pueda tener carácter. Convendrá establecer pequeños centros de detención e integrar entorno social, económico y cultural de la comunidad. <p>“Gays”, Lesbianas y “trans”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las personas privadas de libertad con preferencia s exual distinta (“gays”, lesbianas y “trans”) deben ser tratadas sin discriminación de ningún tipo. No serán sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. • Las personas gays, lesbianas y trans deben estar i ntegradas con el resto de la población penitenciaria, salvo que por razones de su seguridad, deban ser separadas de manera temporal. • Todos los derechos reconocidos a las personas priva das de libertad, deben ser igualmente reconocidos a las personas gays, lesbianas y “trans” <p>Personas viviendo con alguna discapacidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las personas privadas de libertad que tienen o vive n con algún tipo de discapacidad física o mental requieren de un trato distinto en función de su condición. No deberán estar reclusos en prisiones, sino en establecimientos especiales para enfermos mentales. • Respecto de las dificultades físicas de movilizació n, los centros penitenciarios deben modificar y eliminar todos los obstáculos al libre movimiento y acondicionar los pabellones, dormitorios, servicios sanitarios y demás espacios necesarios para que esas personas no sean limitadas en sus derechos y oportunidades. • Las personas con problemas mentales severos diagnos ticados oficialmente, deben estar separados del resto de las personas privadas de libertad para que sean atendidas por personal de la salud especializado (médicos, psiquiatras, psicólogos, etc.
--	--	---

		<p>“Presos sin condena”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principio de inocencia. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. • Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma y de sus derechos. Deberá ser notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. • Toda persona que sea detenida será llevada sin demora ante una autoridad judicial competente para que ésta decida si la detención es lícita, y deberá ser puesta en libertad si se determina que es ilícita. • Toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad. • Toda persona detenida tendrá acceso a un abogado u otro tipo de representante legal y tendrá suficientes oportunidades para comunicarse con dicho representante en forma privada. • Los acusados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un trato distinto. • Si un acusado lleva el uniforme del establecimiento, éste será diferente del uniforme de los condenados. • Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su petición es razonable. • Se considerarán cuanto antes las posibilidades de poner en libertad al acusado de un establecimiento y asignarlo a un programa no privativo de la libertad <p>Inspecciones externas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las prisiones serán inspeccionadas regularmente por inspectores
--	--	--

		<p>calificados y experimentados designados por una autoridad competente e independiente de la administración de la prisión o de entidades externas como la PDDH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • También podrán ser visitadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) y más periódicamente, por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, en caso de que El Salvador ratifique en el futuro del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT). En cualquiera de los casos, el sistema penitenciario debe girar las instrucciones necesarias a todas las autoridades de los lugares de detención para que esos órganos tengan libre acceso a sus instalaciones, a realizar entrevistas a las personas privadas de libertad de manera privada y confidencial y a revisar todo tipo de documentos y expedientes. • Todo recluso tendrá el derecho de comunicarse en forma libre y confidencial con los inspectores o visitantes, con sujeción únicamente a las condiciones de orden y disciplina de la institución. <p>Recepción y trámite de quejas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toda persona privada de libertad a la que se le violen sus derechos humanos o se le nieguen sus derechos, se le discrimine o se le trate de manera inhumana o degradante, tiene derecho a presentar una denuncia y a que su caso sea pronto e imparcialmente examinado por las autoridades competentes, así como por la PDDH. • Debe proveerse a la persona privada de libertad de los medios para que ejerza un recurso legal efectivo ante una autoridad administrativa y judicial competente en demanda de sus derechos. • Cuando el reclamo fuere por denuncia de tortura se deberá abrir un proceso administrativo inmediato y deben aplicarse disposiciones y procedimientos acordes con exámenes médicos y psicológicos independientes y, en la medida de lo posible, deben seguirse los parámetros del Protocolo de Estambul.
--	--	--

Derecho a no ser torturada	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas o violaciones a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad que califiquen como tortura. • Ausencia de programas de capacitación y sensibilización a funcionarios penitenciarios y policías para prevenir la comisión de torturas. • No implementación de medios de información para que personas privadas de libertad conozcan sus derechos de respetar su integridad física y psíquica. • Comisión o tolerancia de hechos que califiquen como tortura. 	Ver derecho a la integridad, derecho a no ser torturado y derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes
Derecho a ser tratada humanamente y con respeto a su integridad física y psíquica	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas y situaciones en contra del respeto a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad que califiquen como tratos crueles, inhumanos y degradantes. 	Ver derecho a la integridad personal, derecho a no ser torturado y derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes
Derecho a identidad	<ul style="list-style-type: none"> • Negativa de las autoridades a registrar o identificar a las personas privadas de libertad por su nombre. • Inexistencia o mal control de libros de entrada, permanencia y salida de centros de detención de personas privadas de libertad. 	Ver derecho a la identidad
Derecho a la documentación	<ul style="list-style-type: none"> • Negativa de las autoridades a registrar o identificar por su nombre a las personas privadas de libertad para la realización de actos a los que estén facultados. • Pérdida o extravío institucional de documentos de identificación de las personas privadas de libertad. 	Ver derecho a la información

	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones arbitrarias para obtener o reponer sus documentos de identificación. • Inexistencia de un expediente único. 	
Derecho a la intimidad	<ul style="list-style-type: none"> • Injerencias ilegales o arbitrarias a la correspondencia y comunicaciones. • Injerencias ilegales o arbitrarias a su vida privada. 	Ver derecho a la privacidad
Derecho a no ser restringido en sus derechos en grado mayor que lo señalado por la ley o por su condena	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones arbitrarias de cualquiera que no estén limitados por la ley o la condena. 	Ver derecho a la integridad personal
Derecho a libertad ambulatoria dentro del Centro de detención	<ul style="list-style-type: none"> • Aislamiento injustificado, prolongado o indefinido. • Aislamiento por causas no previstas en la norma penitenciaria. 	Ver derecho a la libertad de tránsito y ambulatoria
Derecho a separación en razón de edad, sexo, situación jurídica y motivo de la detención	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de condiciones en los lugares de detención para separar a las personas privadas de libertad conforme a las categorías establecidas en la ley (por edad, sexo, situación jurídica –imputados y condenados-. 	Ver derecho a la integridad
Derecho a la salud sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación de atención médica en los centros hospitalarios. • Falta de exámenes médicos generales para verificar condición de las personas privadas de libertad al momento en que son ingresadas por primera vez. • Omisión de exámenes médicos a 	Ver derecho a la salud

	<p>personas privadas de libertad que lo solicitan como parte de una denuncia de tortura o castigo corporal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión o negligencia para su traslado a un centro hospitalario. • Omisión de adoptar medidas para dotar a las personas privadas de libertad de medicamentos especiales o esenciales. • Negación de las autoridades a suministrar el régimen alimenticio adecuado para la preservación de la salud. • Inexistencia de condiciones que permitan realizar actividades recreativas y deportivas. • Condiciones inadecuadas de saneamiento que afectan la salud. 	
Derecho a la educación	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones ilegales o arbitrarias para acceder a la educación. • Falta de programas de educación formal y no formal a impartir en los centros de reclusión. • Ausencia de programa de capacitación e instrucción formativa profesional. 	Ver derecho a la educación, derecho a la cultura
Derecho a acceder a los beneficios de la cultura	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de información y fuentes bibliográficas o centros de documentación y biblioteca. • Inexistencia o escasos programas o actividades culturales. • Omisión de las autoridades competentes de adoptar medidas para garantizar el acceso a la educación con calidad a los beneficios de la cultura. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Restricción ilegal o arbitraria para que personas que no hablan el idioma español no puedan utilizar su lengua propia. • Obstrucción u obstaculización para que privados de libertad con una cultura y cosmovisión diversa no puedan realizar sus prácticas y costumbres. 	
Derecho a mantener relaciones familiares y sociales.	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación o restricciones ilegales o arbitrarias para recibir visitas de familiares o de personas allegadas. • Denegación arbitraria o restricciones para recibir visita íntima. Lo mismo que las visitas se permitan muy espaciadamente. • Inadecuadas condiciones de privacidad para recibir visita íntima. • Registros indebidos o abusivos que atentan contra la dignidad de las personas visitantes. • Denegación de visita íntima en razón de preferencia sexual de la persona privada de libertad. 	Ver derecho a la familia
Derecho al trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para crear condiciones que promuevan la realización de actividades laborales que le permitan obtener ingresos. • Ausencia de programas de capacitación y formación que le permitan reincorporarse a la vida laboral. • Explotación laboral y remuneraciones indignas por trabajos y actividades desempeñadas dentro de programas de trabajo. 	Ver derecho al trabajo

Derecho al acceso a la justicia y garantías del debido proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Violación del derecho de defensa y de audiencia previa al momento de imponer sanciones disciplinarias. • Inexistencia de jurisdicción penal especial para atender asuntos relacionados con la ejecución de la pena y la obtención de sus beneficios. • Falta de defensa penal gratuita para asuntos de ejecución de la pena. • Inobservancia de los principios y de la valoración correcta de la prueba en situaciones de otorgamiento de beneficios carcelarios. 	Ver derecho al acceso a la justicia y derecho a las garantías judiciales
Derecho a evaluaciones oportunas para optar a beneficios penitenciarios	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones ilegales o arbitrarias para ser evaluado periódica y oportunamente. • Aplicación de medidas inadecuadas o contrarias a la ley. 	Ver derecho a la petición, derecho a debido proceso
Derecho a acceder a información personal	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación arbitraria del acceso a información personal contenida en bases de datos públicos. • Restricción ilegal o arbitraria para acceder u obtener información de su expediente penitenciario administrativo. • Pérdida o desaparición en todo o en parte de su expediente personal. • Negligencia u omisión en la conformación y custodia de su expediente único. 	Ver derecho a acceso a información
Derecho a obtención oportuna de permisos especiales y de salida	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación ilegal o arbitraria de permisos especiales de salida. • Dilación indebida en la tramitación o resolución de las solicitudes de permisos especiales. 	Ver derecho a petición

Derecho a la libertad de religión y culto.	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones para comunicarse con su guía religioso o espiritual. • Restricciones para realizar reuniones y practicar cultos religiosos de cualquier iglesia o culto. 	Ver derecho a la religión y de culto
Derechos de las personas privadas de libertad en situación de “prisión preventiva” o como inculpad.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de políticas o planes de sensibilización para que a las personas privadas de libertad en situación de “inculpad”, se les tenga un trato diferenciado de las personas acusadas (Principio de inocencia). • Falta de previsión de cualquier naturaleza que mezcle a los inculpad de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales por razón de seguridad o de otra naturaleza. • Utilización de uniformes iguales a los de personas condenadas. 	Ver debido proceso, principio de inocencia
Derechos de las mujeres privadas de libertad a recibir un trato diferenciado	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de condiciones para que las mujeres puedan estar alojadas en locales separados de los hombres. • Falta de previsiones para que las reclusas sean vigiladas y registradas exclusivamente por funcionarias del sexo femenino. • Inobservancia de condiciones para que cuando se requiera hacer una revisión más minuciosa por razones excepcionales, debe ser hecha por personal médico capacitado. • Inexistencia de instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que 	Ver derechos de las mujeres

	<p>acaban de dar a luz y de las convalecientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omisión o falta de previsión para que existan condiciones que permitan a las madres reclusas conservar su niño o niña nacidos durante su internamiento (ausencia de guardería infantil, con personal calificado). 	
<p>Derechos de las personas menores de edad bajo custodia del Estado a recibir un trato diferenciado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sometimiento de los niños y niñas a castigos corporales de cualquier naturaleza o como medida de “corrección”. • Falta de previsión para que las personas menores de edad estén separadas de los adultos. • Falta de previsión para que las personas menores de edad en conflicto con la ley acusados estén separados de los condenados. • Ausencia de centros de detención abiertos para menores donde las medidas de seguridad sean escasas o nulas. 	<p>Ver derechos de los niños, niñas y adolescentes.</p> <p>Los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado representan uno de los sectores más vulnerables de la población y requieren del Estado la mayor atención para garantizarles un proyecto de vida digna bajo el supuesto de que se tratará a los niños y niñas privadas de la libertad de una forma que promueva su sentido de la dignidad y del decoro, facilite su reintegración a la sociedad, satisfaga su interés superior y tenga en cuenta sus necesidades como personas menores de edad.</p> <p>Conforme a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de Reeducción del Menor “Panchito López” vs. Paraguay, el Estado debe garantizar a las personas menores de edad un proyecto de vida digna mientras se encuentran en situación de custodia para que se proyecte hacia fuera.</p>
<p>Derechos de las personas gay, lesbianas y “trans” privadas de libertad de ser tratadas sin discriminación en razón de su preferencia sexual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sometimiento, por parte de funcionarios policiales o penitenciarios, a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en razón de preferencia sexual. • Comportamientos u omisiones de las autoridades penales que permitan a otras personas privadas de libertad, cometer actos de violencia sexual, torturas, o tratos crueles inhumanos o degradantes en perjuicio de personas privadas de libertad con diferente 	<p>Las personas privadas de libertad con preferencia sexual distinta (“gays”, lesbianas y “trans”) deben ser tratadas sin discriminación de ningún tipo.</p>

	<p>preferencia sexual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política penitenciaria de segregación de las personas con preferencia sexual diversa, salvo que se justifique una separación por razones de seguridad y de manera temporal. 	
Derechos de las personas privadas de libertad con discapacidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Inexistencia de condiciones materiales para que las personas privadas de libertad que tienen o viven con algún tipo de discapacidad física o mental tengan un trato distinto en función de su condición. • Falta de remoción de obstáculos físicos o estructurales para que las personas con dificultades físicas de movilización, puedan tener libre movimiento y no sean limitadas en sus derechos y oportunidades. • Incapacidad material o legal de las autoridades penitenciarias para que las personas con problemas mentales severos diagnosticados oficialmente, puedan estar separadas del resto de las personas privadas de libertad para que sean atendidas por personal de la salud especializado (médicos, psiquiatras, psicólogos, etc). 	<p>Las personas privadas de libertad que tienen o viven con algún tipo de discapacidad física o mental requieren de un trato distinto en función de su condición. No deberán estar reclusos en prisiones, sino en establecimientos especiales para enfermos mentales cuando la discapacidad sea psiquiátrica o similar. Respecto de las dificultades físicas de movilización, los centros penitenciarios deben modificar y eliminar todos los obstáculos al libre movimiento y acondicionar los pabellones, dormitorios, servicios sanitarios y demás espacios necesarios para que esas personas no sean limitadas en sus derechos y oportunidades. Las personas con problemas mentales severos diagnosticados oficialmente, deben estar separados del resto de las personas privadas de libertad para que sean atendidas por personal de la salud especializado (médicos, psiquiatras, psicólogos, etc).</p>
Derechos de los indígenas y afrodescendientes privados de libertad	<ul style="list-style-type: none"> • Adopción de medidas administrativas o de cualquier naturaleza que produzcan distanciamiento y desarraigo de su población originaria. • Denegación arbitraria de solicitudes de traslados a centros penitenciarios más cercanos a sus comunidades 	<p>En el caso de los reclusos con una cultura diferente (indígenas, afrodescendientes), se les debe respetar su forma distinta de ver las cosas, su cultura, religión y prácticas. Se debe promover medidas para evitar el desarraigo de su población originaria, para lo cual, deben planificarse traslados para que estén más cerca de sus comunidades. Los indígenas y afrodescendientes pueden hablar en el idioma de su predilección y no se les puede limitar el uso de su lengua tradicional en ninguna circunstancia. Cuando no hable el idioma español, deberá proveerse a la persona</p>

	<p>originarias para mantener su arraigo cultural, religioso y de grupo étnico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obstaculizar de cualquier forma el que indígenas y afrodescendientes puedan hablar en el idioma de su predilección y se les limite el uso de su lengua tradicional. • Falta de previsión para que cuando un indígena o afrodescendiente no hable el idioma español, pueda tener a su disposición a un intérprete. • Falta de defensores públicos conocedores del derecho indígena y de la utilización de los instrumentos legales en esa materia que puedan representar mejor sus derechos en materia de ejecución de la pena. 	<p>detenida de un intérprete. Los defensores públicos a los que les corresponda ejercer la defensa de las personas indígenas y afrodescendientes deben ser conocedores del derecho indígena y de la utilización de los instrumentos legales en esa materia.</p>
--	---	---

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<p>Derecho a ser tratado de manera digna y sin discriminación</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 24. Igualdad ante la Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas consentidas por el Estado –por acción u omisión– que discriminen o fomenten actos o situaciones xenofóbicas de funcionarios públicos o de particulares. • Ausencia de programas educativos y de campañas sociales que fomenten el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas extranjeras que sufren tratos discriminatorios o xenofóbicos. • Obstáculos al derecho a la información sobre requisitos para admisión al país, condiciones aplicables para su admisión, o 	<p>En el entendido de que los derechos humanos son inherentes a todas las personas que se encuentran en un territorio determinado, en un momento dado, la población en tránsito temporal en un país también debe estar cubierta con garantías suficientes y eficaces para que no sea objeto de transgresiones por su especial condición de relativa vulnerabilidad por motivo de su desarraigo. En teoría, los extranjeros tienen los mismos derechos establecidos en las constituciones políticas y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado, con la salvedad de aquellos derechos que naturalmente le están vedados y que guardan relación con los derechos políticos.</p>

	<p>para iniciar su regularización, y sobre los procedimientos aplicables en caso de expulsión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derecho a no ser expulsados de forma colectiva, sino individualizada cuando se encuentre en una situación jurídica irregular. 	<p>Es parte de la función de Estado practicar actos vinculados con criterios de discrecionalidad para decidir sobre el control migratorio. Esa potestad, legítima de los Estados, no puede ser abusiva, porque la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad ni puede violentar derechos humanos.</p> <p>Sin embargo, es común que sea con esta práctica de determinación de criterios de supuesta ilegalidad o “indeseabilidad”, que los Estados optan muchas veces por expulsar de su territorio a personas extranjeras sin que se les permita ejercer su derecho de defensa mediante un proceso administrativo dentro de un periodo de tiempo que, generalmente, es fugaz. Es común la práctica de expulsiones masivas de extranjeros sin posibilidad de accionar mecanismos legales de protección.</p> <p>Es a partir de esa circunstancia que se inicia el camino hacia una concatenación de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, pero especialmente para los que se encuentran en ese rango de incertidumbre que es la indocumentación. Ese catálogo de derechos violentados incluye: violación del principio fundamental de la no devolución, no aceptación de solicitudes de asilo y refugio, no acceso al mercado laboral o acceso en términos discriminatorios, detenciones masivas crecientes, tráfico y trata ilegal internacional de trabajadores migrantes, dificultad para acceder la justicia, etc.</p> <p>El acceso a la justicia:</p> <p>La situación de persona “indocumentada” es la más compleja porque se saben candidatas a una expulsión inminente de parte de las autoridades administrativas si se determina su indocumentación, ya que los sistemas de reclamo requieren de algún documento de identificación.</p> <p>Sabedores de ello, muchos empresarios inescrupulosos dentro</p>
--	--	---

		<p>del país receptor, realizan contrataciones laborales al margen de la ley, sin cubrir niveles de salario mínimo ni cargas sociales obligatorias. Saben que no serán denunciados por la persona migrante porque el riesgo de hacerlo es mayor. Eso se traduce en reducción de gastos operativos y en un precio final más “competitivo” para sus productos. Las personas migrantes, antes, por ende, ven agravada su condición por el carácter de invisibilidad que toma como población para evadir una probable deportación, lo cual la sume dentro de un conjunto de estereotipos que hacen que su permanencia en los países receptores sea de completa marginalidad.</p> <p>Adicionalmente, hay una transgresión al derecho a la información, el cual es básico para ejercitar el reclamo por violaciones a otros derechos humanos, ya que si las personas migrantes no tienen modo de saber qué medios y recursos tienen para defenderse de actos estatales arbitrarios, no pueden entonces accionarlos. Ante esas circunstancias, poco hace el Estado por incluir en su agenda un proceso informativo para hacer del conocimiento de los migrantes sus derechos.</p> <p>Libertad de tránsito:</p> <p>La situación descrita incide directamente en prácticas estatales de abuso de autoridad en detenciones en casos de deportación y de prolongadas estadías en centros de detención en condiciones impropias.</p> <p>Derechos económicos, sociales y culturales:</p> <p>Tratándose de población migrante, la marginación conlleva a que los ya de por sí insuficientes servicios de salud, educación, vivienda, etc., no sean asequibles a ella en un todo, o, o solo en parte, lo cual implica una violación adicional al derecho a la igualdad y no discriminación.</p>
--	--	---

		<p>En el caso de la salud, como ya se indicó, la negativa de los patronos y empresarios a asegurar a sus empleados y empleadas extranjeras, sobre todo si son indocumentadas, los inhibe de ser atendidos por los sistemas de seguridad social.</p> <p>Otra forma de marginación se produce cuando el Estado no participa al sector migrante de los programas de beneficios sociales relacionados con el acceso a préstamos preferenciales o bonos para la adquisición de vivienda o alimentos, ya que no califican por su condición migratoria.</p> <p>En el campo laboral, las manifestaciones de injusticia van desde jornadas laborales excesivas, hasta falta de pago de salarios inferiores al de ley. Es común, además, que ese salario sea todavía más reducido para la contratación de mujeres y personas menores de edad. Colateralmente, no participan de otros beneficios como cotizar para optar a sistemas de pensiones, riesgos de trabajo, pólizas de vida, etc. Como corolario de lo anterior, se produce una violación al derecho a tener un salario digno y oportunidades de tener acceso a actividades culturales, deportivas y de distracción.</p> <p>Aunado a lo anterior, se produce complacencia estatal debido a la ausencia total o parcial de inspección y control de los órganos competentes.</p> <p>A nivel internacional, la protección para los trabajadores migrantes es bastante débil. El único tratado internacional en esa materia, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, entró en vigor en julio de 2003. Por su parte, la Asamblea General de la OEA le dio un espaldarazo con la emisión de la resolución AG/RES 2130 (XXXV-O/05), aprobada en la cuarta sesión plenaria del 7 de junio de 2005 ("Los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias"), la cual tuvo, a su vez, un importante impulso y antecedente desde la</p>
--	--	--

		<p>Relatoria del mismo tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.</p> <p>Esa resolución, tomó como fuente primaria la opinión consultiva OC-18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que claramente se indicó que “la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre otros los de carácter laboral”.</p> <p>Derecho a la propiedad</p> <p>Cuando ocurre una deportación individual o masiva de extranjeros en forma ilegal, sin abrir un proceso administrativo y sin posibilidades de ejercer el derecho de defensa, se sucede una serie de hechos que inciden en la violación del derecho a la propiedad. La “eficacia” de la deportación no permite ni siquiera que la persona a deportar pueda recoger sus pertenencias y sus bienes en general; mucho menos poner en regla sus propiedades, lo cual resulta confiscatorio de su propiedad.</p> <p>Derecho a la no devolución</p> <p>En el caso de los refugiados, se ha desarrollado el principio de la no devolución y se busca alcanzar procesos de repatriación voluntaria. Sin embargo, ese principio es violentado en forma frecuente.</p> <p>En una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas provisionales a favor de varias personas migrantes haitianas ante una inminente deportación desde República Dominicana, se desarrolló una pionera jurisprudencia dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Corte decretó la protección de tales personas, ordenando que la República Dominicana se abstuviera</p>
--	--	---

		<p>de deportarlas o expulsarlas; requirió el permiso para que otras personas – ya expulsadas- pudiesen retornar; requirió su colaboración para obtener información acerca de otras personas desaparecidas y la realización de determinadas reunificaciones familiares. También pidió mayor información sobre la situación de los miembros de las comunidades o “ayotes” que pueden estar sujetos a expulsión y la efectiva protección de las personas que habían actuado en el proceso como testigos.¹⁴⁴</p> <p>En su voto concurrente a esa resolución, el Presidente de ese Tribunal reforzó esa tesis al señalar que se deben adoptar nuevas formas de protección para erradicar la exclusión social y la pobreza extrema “aunque no estén literalmente contempladas en los instrumentos internacionales de protección del ser humano vigentes”. Una de ellas debe recordar que el principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular de la protección de los refugiados, es un principio que “puede invocarse inclusive en contextos distintos, como el de la expulsión colectiva de migrantes ilegales o de otros grupos.”¹⁴⁵</p> <p><i>Algunos Principios Rectores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia migratoria</i></p> <p>La aplicación práctica de la protección internacional de derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, encuentra como fuente primaria a nivel regional, las opiniones y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta rica y vasta jurisprudencia debe orientar y obligar la labor de los Estados y sus autoridades en materia migratoria.</p> <p>Esa Corte Interamericana ha indicado en el tema en materia de <u>política migratoria</u> que esta está “Constituida por todo acto,</p>
--	--	--

¹⁴⁴ Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de agosto de 2000. Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Dominicana.

¹⁴⁵ Ibid. Voto concurrente del juez A.A. Cancado Trindade, ns. 7 y 7.

		<p>medida u omisión institucional (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc. ...) que ver sa sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio. ¹⁴⁶ }</p> <p>Este desarrollo jurisprudencial, ha abordado temas como los alcances de derechos humanos y los límites al derecho soberano de los Estados de fijar su política migratoria; el principio a la no discriminación y la igualdad ante la ley; y el Debido Proceso para la materia migratoria.</p> <p>Desde la función natural de la PDDH, se hacen las siguientes recomendaciones para verificación de políticas y acciones de prevención y protección de los derechos de las personas migrantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incidir en la obligación del Estado de diseñar políticas migratorias dentro de los planes nacionales de desarrollo para incorporarlas dentro de programas sociales para propiciar relaciones sociales integradoras y no discriminatorias. • Promover e interesar a las instituciones competentes para la promulgación de leyes o políticas administrativas de amnistía para inmigrantes indocumentados para lograr su inserción social. • Promover la ratificación de instrumentos internacionales en la materia y supervisar el cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazados Internos emitidos por las Naciones Unidas. • Promover la participación de las instituciones nacionales en foros internacionales y regionales donde se aborde el tema migratorio, incluyendo el
--	--	---

¹⁴⁶ Corte IDH, *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, párr. 163.

		<p>Sistema Interamericano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difundir y promover la aplicación del artículo 36 d e la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que obliga al Estado receptor a notificar a las autoridades consulares de los nacionales de otros países sobre la detención y procesamiento de estos, incluyendo la interpretación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-16/99. • Promover la instrumentación de medios más eficaces para el manejo de estadísticas del flujo migratorio a nivel nacional y regional, tomando en cuenta categorías por sexo, edad, etnia, etc. • Plantear a las instituciones competentes el diseño de campañas nacionales de información sobre las realidades de la inmigración, sus riesgos y sus desventajas. • Instar a las instituciones correspondientes para que adecuen la legislación nacional y las prácticas en relación con tratados internacionales que contemplen protección general o parcial a las personas migrantes. • Promover la definición de directrices para la utilización adecuada de las remesas del exterior, complementándolas con otros recursos financieros destinados a programas de apoyo a la reinserción de migrantes deportados al país. • Supervisar programas de migraciones temporales, según estudios de demanda y programas de retorno asistido, concomitantemente con medidas de reintegración. • Promover estrategias integrales para el combate contra el tráfico y la trata de personas.
Derecho a no ser sometido a condiciones de detención por causa de su situación jurídica migratoria irregular	<ul style="list-style-type: none"> • Detención ilegal o arbitraria por razones de nacionalidad o de indocumentación. • Inexistencia de lugares adecuados de “retención” de personas migrantes 	Ver derecho a la libertad personal

	<p>indocumentadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a personas migrantes retenidas. • Detención o permanencia en lugares destinados para imputados o condenados por la comisión de delitos o faltas penales. 	
Derecho a ser protegido contra toda forma de maltrato, abuso o explotación	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado de realizar todas las acciones a su alcance para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de maltrato, abuso o explotación cometidos por un agente de autoridad o particulares contra personas extranjeras. • Omisión del Estado de realizar todas las acciones a su alcance para proteger a los nacionales residentes o de paso en el extranjero contra todo maltrato, abuso o explotación. 	Ver derecho a la integridad personal, derecho a no ser torturado y derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes
Derecho a la salud	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión de atención y de servicios básicos de salud a personas extranjeras en razón de su nacionalidad o de encontrarse indocumentadas. 	Ver derecho a la salud
Derecho a la educación	<ul style="list-style-type: none"> • Denegación de acceso a la educación formal o informal a personas en razón de su nacionalidad o por encontrarse en situación de indocumentación. 	Ver derecho a la educación
Derecho a la libertad de expresión	<ul style="list-style-type: none"> • Actos ilegales o arbitrarios que restrinjan o impidan el ejercicio de la libertad de expresión de personas extranjeras por razón de su nacionalidad. • Omisión del Estado de realizar todas las acciones a su alcance para proteger la libertad de expresión de un connacional en otros Estados. 	Ver derecho a la libertad de expresión

Derecho a mantener las relaciones familiares y el arraigo nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Actos ilegales o arbitrarios que atenten contra la unidad familiar por razón de la nacionalidad. • Actos ilegales o arbitrarios que restrinjan o impidan a las personas extranjeras el derecho a mantener relación o comunicación con sus familiares. • Omisión del Estado de realizar todas las acciones a su alcance para proteger el derecho a mantener las relaciones familiares de un connacional residente en el extranjero. 	Ver derecho a la familia
Derecho a no imponer restricciones a sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios, salvo las impuestas por ley a todos los habitantes	<ul style="list-style-type: none"> • Actos ilegales o arbitrarios que restringen o impiden a las personas extranjeras transferir sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios, sin más restricciones que las establecidas por la ley. • Omisión del Estado de realizar todas las acciones a su alcance para que un connacional que se encuentra en el extranjero transfiera al país sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios sin más restricciones que las establecidas en las leyes del Estado que se encuentra para todas las personas. 	Ver derecho a la propiedad privada
Derechos laborales sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Actos ilegales o arbitrarios que restringen o impiden el goce de los derechos laborales por razón de la nacionalidad. • Tolerancia del Estado ante la denegación ilegal o arbitraria de derechos y prestaciones laborales de personas extranjeras. • Omisión del Estado de realizar todas las acciones a su alcance para que un connacional en el extranjero goce de los derechos laborales sin discriminación en el Estado donde se encuentra. 	Ver derecho al trabajo

Derecho a las libertades sindicales sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Actos ilegales o arbitrarios que impidan o restrinjan las libertades sindicales, prestaciones laborales y sociales de personas extranjeras trabajadoras. • Omisión del Estado para realizar todas las acciones a su alcance para que un connacional en el Estado en que se encuentra pueda ejercer sus derechos sindicales sin discriminación por su nacionalidad. 	Ver derecho a la libertad sindical
Derecho a preservar su idioma, religión, costumbres y tradiciones	<ul style="list-style-type: none"> • Actos ilegales, arbitrarios u omisivos que restrinjan a la persona extranjera conservar su propio idioma, cultura o tradiciones. 	Ver derecho a la religión y al culto
Derecho a la justicia sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> • Actos ilegales o arbitrarios, o situaciones que produzcan temor a los extranjeros para peticionar o acceder a la justicia en reclamación de sus derechos de cualquier naturaleza. • Falta de notificación a las autoridades consultares del país de nacionalidad de la persona extranjera acusada de algún tipo de delito conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. • Falta de intérpretes o de traductores del idioma de la persona extranjera acusada de comisión de algún tipo de delito. • No disposición de defensa penal gratuita a personas extranjeras en función de su nacionalidad. 	Ver derecho al acceso a la justicia, derecho a las garantías judiciales
DERECHOS DE LOS EMIGRANTES SALVADOREÑOS	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión de las autoridades salvadoreñas para la realización de campañas informativas sobre los riesgos de viajes al exterior en carácter de emigrantes 	
• Derecho a la información		

<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la protección especial a los niños y niñas que viajan indocumentados. • Derecho a un proceso ágil de retorno. • Derecho a la imagen y a la privacidad y mecanismos de protección de estos derechos en el proceso de retorno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de mecanismos para la implementación de un proceso ágil de retorno en coordinación con los países de tránsito y de destino. • Ausencia de acciones para evitar por todos los medios que las personas deportadas sean sometidas a la exposición pública por los medios informativos para evitar daños a su imagen y privacidad. • Falta de agilización del procedimiento de registro a la llegada a El Salvador. • Falta de un trato preferencial a los niños y niñas que son deportados. • Falta de mecanismos o programas que permitan brindar protección a menores no acompañados, mujeres embarazadas, personas de tercera edad y/o con discapacidad física. • Acciones estatales que atenten contra el derecho a la igualdad; tomando en consideración que los retomados con antecedentes penales cumplieron su condena en el país expulsor. • Falta de acciones de las autoridades responsables del recibo de personas retomadas encaminadas a proporcionar información actualizada por cualquier medio de fácil comprensión sobre los cambios que 	
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la protección especial niños, niñas y familiares repatriados. • Derecho a la no Discriminación en la Recepción. • Derecho a información sobre la situación actual del país. 	<p>ha experimentado el país a nivel social, económico, cultural y político, con énfasis en la situación de empleo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de implementación de programas para brindar a las personas repatriadas orientación suficiente acerca del lugar en que se encuentran y cómo llegar hasta sus hogares, para lo cual es necesario brindarles un medio de transporte o la ayuda económica necesaria según el caso. • Denegación de información y ayuda monetaria. • Ausencia de personal médico en los lugares destinados para la recepción de personas retornadas o falta de equipo adecuado para atender o trasladar a un centro de asistencia médica a las personas que presenten algún síntoma de problemas físicos, psíquicos o que haya sufrido asalto o violación sexual. • Ausencia de programas y acciones destinadas a implementar los programas necesarios para que las personas que retoman en condiciones de mutilación, puedan tener acceso a un trabajo digno según sus limitaciones físicas. • Falta de incorporación a las políticas estatales de todos los programas que sean necesarios para la reinserción a la producción laboral y económica del país de los compatriotas retornados. 	
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la orientación y ayuda económica para las personas al momento del recibo. • Derecho a la atención médica integral a personas repatriadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de implementación de mecanismos legales, logísticos y destinacion de recursos para que los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior puedan emitir el sufragio y participen en los procesos electorales del país en forma igualitaria a como lo hacen los ciudadanos que viven en el territorio nacional. • Ausencia de acciones que sean necesarias para crear un mecanismo que permita a los salvadoreños que se encuentran en el exterior la posibilidad real de contar con representación en la Asamblea Legislativa. • Falta de acciones necesarias a efecto que los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en el exterior cuenten con mecanismos apropiados que les permitan la posibilidad real de participar en la discusión de temas de interés nacional. • Falta de satisfacción de sus necesidades básicas de salud y educación, durante el tiempo en que las autoridades hondureñas les deben emitir sus documentos de nacionalidad y de sus títulos de propiedad, provocado por retrasos injustificados en los procedimientos por las autoridades hondureñas. Incluso se han registrado casos de afectaciones a los derechos a la seguridad e integridad personal de los y las habitantes por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. 	
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Derecho a la asistencia y protección a las para personas con discapacidad. • Derecho a la Incorporación de programas de inserción a las políticas de Estado • Derecho a emitir el sufragio desde el exterior. • Derecho a tener representación legislativa. • Derecho a la participación en la discusión de temas de interés nacional e incidencia en la toma de decisiones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de acciones encaminadas a gestionar y coordinar con las autoridades hondureñas para velar por los derechos reconocidos en la “Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en la Zonas Delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya” vigente en el país desde 1992. • Omisión de parte de las autoridades de la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar ante las autoridades hondureñas que inicien acciones de investigación en casos de afectaciones a los derechos a la seguridad e integridad de los habitantes. • Falta de seguimiento de parte de la Comisión a las denuncias concretas recibidas o gestiones a casos específicos sobre los procesos de nacionalidad o de adquisición de propiedades. • Falta de establecimientos u oficinas salvadoreñas en la zona fronteriza que de forma accesible se encarguen de proporcionar información y orientación sobre los trámites a seguir en cuanto a los procesos de nacionalidad y de adquisición de propiedades. • Omisión de las autoridades salvadoreñas para realizar las coordinaciones con las autoridades competentes de Honduras en casos de denegación a recibir atención 	
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Derechos humanos de los salvadoreños que residen en los ex bolsones. 	<p>médica o de falta de acceso a la educación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de mecanismos concretos que evalúen el cumplimiento de la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos. • Falta de mecanismos que faciliten la participación efectiva de la población de los ex bolsones en la discusión de los problemas nacionales y de temas que los afecten de forma directa. 	
<p>Derecho a la notificación, asistencia y protección consular.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de exigencia del Estado para que sus autoridades consulares en otros países donde haya personas salvadoreñas acusadas o procesadas por delito, sean notificadas por el Estado requerido sobre esas circunstancias para ejercer, eventualmente, la protección diplomática. • No ejercicio de asistencia y protección diplomática a las personas salvadoreñas viviendo en el exterior. 	<p>La notificación, asistencia y protección consular son derechos que se distinguen entre la notificación consular en sí misma, que es un derecho que tienen los Estados, como parte de las relaciones internacionales, para que sus autoridades consulares en otros países sean notificadas oficialmente sobre la situación jurídica de sus nacionales en el extranjero cuando están siendo investigados por la comisión de algún delito. La asistencia y protección consular es, en cambio, una expectativa-derecho de los nacionales salvadoreños en otros países para que el Estado ejerza derechos en su favor. El que el Estado salvadoreño ejerza o no protección diplomática es una situación más discrecional, aún cuando en El Salvador hay una política amplia para su instrumentación.</p> <p>La garantía de notificación al Estado debe ser de acatamiento obligatorio, ya que a partir de su omisión pueden presentarse las primeras violaciones al debido proceso, por lo que representan una marcada preocupación en el Derecho Internacional, al punto que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares la ha establecido a través de un mecanismo indirecto como parte de una obligación internacional recíproca en su artículo 36 que establece el derecho de las personas detenidas en otros países diferentes al de su nacionalidad, de ser informadas sin dilación por parte del Estado receptor, de su derecho a comunicarse con</p>

		<p>las autoridades consulares de su país. La finalidad de esta obligación para el Estado receptor es que el procesado extranjero tenga oportunidad de que autoridades consulares de su Estado, mediante el mecanismo que consideren oportuno, le provean un defensor a fin de que su derecho al debido proceso no sea nugatorio. Ello por cuanto probablemente se encuentre en desventaja por diferencias de idioma, desconocimiento del sistema legal, etc. Esa situación es aún más palpable cuando se trata de procesos en que está de por medio la pena de muerte.</p> <p>Finalmente, esta garantía se complementa con la de la asistencia de un intérprete o traductor para el imputado que no habla el mismo idioma del tribunal que conoce la causa, ya que la información detallada del hecho imputado (intimación e imputación), se le deberá hacer saber al procesado por medio de intérprete en esos casos.</p> <p>Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado, en su Opinión Consultiva OC-16/99 sobre <i>El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal</i>, que:</p> <p><i>El corpus juris</i> del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo¹⁴⁷.</p>
--	--	---

¹⁴⁷

El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, supra nota 1, párr. 115.

Derecho de defensa y protección frente a la expulsión	<ul style="list-style-type: none"> • Expulsiones ilegales o arbitrarias del país. • Expulsiones inmediatas sin derecho de defensa ni audiencia previa. • Utilización de modalidades de expulsión, declaraciones de “non grata” o cualquier tipo de deportación para evadir los procesos de extradición cuando correspondan. 	Ver derecho al debido proceso
---	--	-------------------------------

DERECHOS DE LAS PERSONAS REGUGIADAS Y DESPLAZADAS		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<ul style="list-style-type: none"> ○ Derecho al refugio de personas en situación de riesgo por conflictos armados o desplazamientos. ○ Derecho a la integridad física y psíquica. ○ Derecho a regresar libre y voluntariamente a su lugar de origen en condiciones de seguridad. ○ Derecho de no devolución. ○ Restitución de bienes confiscados. ○ Reparación por daños y perjuicios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de una política pública, planes y programas para regular situaciones de refugio y desplazamiento interno. • Falta de una política pública, planes y programas para mitigar la situación de personas refugiadas y desplazadas de otros países hacia El Salvador. • Restricciones, obstáculos y denegación a la obtención de documentos migratorios para personas que califican como refugiados y desplazados. • Falta de cooperación a proyectos e iniciativas del ACNUR en el país. • Devolución de personas migrantes y desplazadas a sus países de origen o terceros países con riesgo a su integridad física y psíquica. • Falta de políticas y planes para la restitución de derechos y bienes de personas refugiadas y desplazadas que regresan al país voluntariamente. 	<p>Los derechos de las personas refugiadas y desplazadas se circunscriben a un contexto muy particular de violencia general o regional en un país donde grupos de personas, ya sea por razones de discriminación racial, religiosa, política o de cualquier otra naturaleza, o bien por efecto de la misma violencia, deben salir de su país o de la región por riesgo inminente a su integridad física y psíquica.</p> <p>La Convención de 1951 sobre los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados son los principales instrumentos del sistema internacional para la protección de los refugiados en general. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es la entidad rectora en la material.</p> <p>El Salvador ratificó en el año de 1983 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de 1951 y su Protocolo de 1967 y elaboró la Ley Para la Determinación de las</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ Derecho a la rehabilitación. ○ Derecho a participar en decisiones públicas que le afecten 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de oportunidades e imposición de límites a la participación de personas refugiadas y desplazadas en asuntos de su interés. • Falta de medidas y proyectos de rehabilitación social y familiar a víctimas de refugio y desplazamiento. • Falta de información y de acceso y comunicación con las entidades pertinentes para la atención y recepción de su caso. • Violación al derecho al debido proceso y de los plazos y derechos durante la recepción, evaluación y determinación de las solicitudes y para la interposición de recursos. • Negativa a la emisión de un documento provisional a todas las personas solicitantes de refugio mientras dure su proceso de evaluación y determinación, así como el correspondiente carné de identidad a las personas a quienes se les otorga el estatuto de refugiada. • Negación de condiciones básicas para que el o la solicitante sea ubicada/o en un espacio físico digno, en condiciones humanas básicas y no en bartolinas u oficinas de fronteras improvisadas como albergues. • Falta de implementación de programas de capacitación y formación constante de funcionarios de Migración, Policía Nacional Civil y operadores de justicia que garantice que los funcionarios de migración, policía nacional civil, fiscales y jueces conozcan sobre el debido tratamiento de los casos de refugio. 	<p>Personas Refugiadas que entró en vigencia en el año 2002, cuyo Reglamento fue aprobado en el año 2005.</p> <p>A través de estos instrumentos, El Salvador está comprometido a ofrecer protección a todas las personas solicitantes de refugio y refugiadas en el país, por medio de una atención coordinada con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), su agencia de enlace en el país.</p> <p>Desde el mandato de la PDDH, sus principales funciones relacionadas con derechos de los refugiados deben responder a monitorear que las instituciones públicas competentes en los diferentes estadios de protección (autoridades migratorias, policía, asistencia social, etc.), cumplan con el marco de las obligaciones internacionales en materia de refugio y, concretamente, con los siguientes: Derecho a la integridad física y psíquica; derecho a regresar libre y voluntariamente a su lugar de origen en condiciones de seguridad; derecho de no devolución; restitución de bienes confiscados; reparación por daños y perjuicios; derecho a la rehabilitación; derecho a participar en decisiones públicas que le afecten. Esas obligaciones han sido resaltadas por los distintos Comités de Derechos Humanos, incluido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (cf. Recomendación General No. XXII, 49 Período de Sesiones, 1996).</p>
--	--	---

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PREFERENCIA SEXUAL DIVERSA		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<p>Derecho a la no discriminación (combate a la homofobia)</p> <p>CADH</p> <p>Artículo 24. Igualdad ante la Ley</p> <p>Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa discriminatoria en perjuicio de personas con preferencia sexual diversa. • Prácticas discriminatoria. • Negación de inscripción de asociaciones civiles con el objeto de reivindicar derechos de personas con preferencia sexual diversa. • Cancelación de permisos de reunión y manifestación de organizaciones y personas con preferencia sexual diversa. • Discriminación laboral. • Acoso laboral. • Denegación de ascensos laborales, políticos y de otra naturaleza por razón de preferencia sexual diversa. 	<p>Las personas con preferencia sexual diversa ("gays", lesbianas y "trans" conforman un colectivo fuertemente discriminado por problemas culturales, educativos y de prejuicios contruidos sobre bases pseudo morales o argumentos de carácter religioso al margen de un enfoque de derechos humanos.</p> <p>Las personas con preferencia sexual diversa son víctimas de discriminación y de violencia, por lo que el principal derecho violado es el de la igualdad ante la ley y no discriminación.</p> <p>El principio de no-discriminación forma parte de la esencia misma del sistema interamericano de derechos humanos. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido:</p> <p>La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.</p>

		<p>Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos' definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando 'carece de justificación objetiva y razonable' (European Court H.R., <i>Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium"</i> (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34). Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.</p>
--	--	---

		<p>No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana...</p> <p>CIDH. Informe No. 27/09. Fondo. Caso 12.249. Jorge Miranda Cortez y otros. El Salvador. 20 de marzo de 2009. Párr. 69.</p> <p>Odir</p>
Derecho a la vida (combate a crímenes de odio)	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión en la prevención de crímenes de odio contra las personas con preferencia sexual diversa. • Falta de investigación e impunidad para investigar muertes de personas con preferencia sexual diversa. 	Ver derecho a la vida
Protección ante la homofobia (tipificación de ésta como delito)	<ul style="list-style-type: none"> • Actos estatales que pudieran fomentar la homofobia y persecución en razón de la preferencia sexual. • Omisión del Estado en combatir la homofobia y la discriminación contra las 	

	<ul style="list-style-type: none"> personas con preferencia sexual diversa. Falta de tipificación de la homofobia como delito. 	
Derecho de acceso a instituciones y oficinas públicas	<ul style="list-style-type: none"> Obstáculos al ingreso físico de personas con preferencia sexual diversa. Discriminación y atención indebida para personas con preferencia sexual diversa. 	Ver: acceso a la justicia, acceso a la petición, no discriminación.

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES		
DERECHOS	HECHOS VIOLATORIOS	COMENTARIO GENERAL, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA, PAUTAS RECOMENDADAS
<p>Derecho de los consumidores</p> <p>...</p> <p>El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.</p> <p>CP</p> <p>...EL Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de</p>	<ul style="list-style-type: none"> Falta de regulación y de establecimientos de multas y sanciones por competencia desleal entre empresas y oferentes de productos y servicios. Falta de combate efectivo de monopolios y oligopolios de empresas de productos y servicios. Falta de procedimientos administrativos eficaces para reclamación y reonomiento de derechos de los consumidores. Ausencia de información para educar y generar una cultura de consumo más responsable y comprometida. Falta de campañas de sensibilización sobre mejores prácticas de consumo. 	<p>El derecho de los consumidor es constituye una subcategoría de derechos humanos que no está expresamente reconocida en instrumentos internacionales de derechos humanos, pero sí de manera générica dentro del alcance de los derechos económicos y, de manera específica, en el derecho de gozar de los beneficios del desarrollo, de la economía y de acceso a la satisfacción de necesidades básicas.</p> <p>Igualmente, los derechos de los consumidores afectan o favorecen su derecho a la propiedad y a su patrimonio al promoverse las ventajas de la competencia entre productores y oferentes, por lo que el principal riesgo y obstáculo al derecho de los consumidores lo representa la creación de monopolios u oligopolios que es cuando una empresa o un grupo de empresas consensuan, de manera ilegal e impropia, reglas de precios que afectan los precios de los productos finales de bienes y servicios.</p>

<p>habitantes del país.</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 110.- No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado.</p> <p>A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas.</p> <p>Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos.</p> <p>Corresponde al Estado prestar por sí o por medio de instituciones oficiales autónomas, los servicios de correos y telecomunicaciones. Podrá tomar a su cargo otros servicios públicos, cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente o por medio de las mencionadas instituciones o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales, las empresas salvadoreñas de servicios</p>		
---	--	--

públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador.		
Derecho a recibir información adecuada y suficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia estatal frente a la ausencia total o parcial de formas y métodos de información para el consumo. • Omisión o retardo para informar sobre estado de alerta o emergencia nacional para que habitantes tomen previsiones de consumo. • Falta de control y supervisión de negocios comerciales y de servicios para que informen clara y verazmente sobre las calidades, garantías y precios de productos y servicios. • Falta de transparencia para brindar información pública sobre presupuestos estatales de gastos y consumo de las diversas instituciones del Estado. • Ausencia de normativa, reglamentación y control que obligue a comerciantes a colocar etiquetas o información que explique claramente los ingredientes o calidades de productos y servicios. 	Ver Derecho al acceso a la información
Derecho a organizarse para la defensa de sus intereses	<ul style="list-style-type: none"> • Restricciones al derecho de asociación y reunión para la defensa de los intereses de los consumidores. • Omisión o retardo en los procesos de reconocimiento de personalidad jurídica de asociaciones y organizaciones para reivindicar y proteger derechos e intereses de consumidores. 	Ver derecho a la reunión y derecho a la asociación
Derecho a la protección de sus intereses económicos	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de control o supervisión efectiva sobre las actuaciones de los prestadores de servicios financieros. 	Ver derecho a la propiedad privada

	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para investigar y sancionar los abusos de oferentes de bienes y servicios financieros. 	
Derecho a que se promueva la competencia leal empresarial	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de políticas y planes de promoción de competencia leal y justa entre diversos oferentes de bienes y servicios. • Falta de sanciones y de control de actividades que generan competencia desleal entre oferentes competidos. 	Ver derecho a la libertad
<p>Derecho a que se combatan los monopolios y oligopolios</p> <p>CP</p> <p>ARTICULO 110.- No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado.</p> <p>A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas.</p> <p>Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de normativa y de práctica para combatir la creación de monopolios y oligopolios. • Falta de supervisión y de sanciones para empresas que promueven prácticas monopólicas u oligopólicas ilegales. 	<p>Ver derecho a la propiedad privada, derecho a la propiedad colectiva</p>

Derecho a que se promuevan modalidades de consumo sustentable	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para promover o estimular la aplicación de modalidades de consumo sustentable. 	Ver derecho a la información
Derecho de acceso a la justicia	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de procedimientos administrativos expeditos para documentar casos de reclamación de derechos e intereses de consumidores. • Negativa a admitir o conocer denuncias sobre presuntas anomalías en la oferta de bienes y servicios. • Dilaciones indebidas en los procesos de resolución de conflictos o en la ejecución de resoluciones judiciales respecto de situaciones de derechos de los consumidores. • Retardo injustificado de casos sobre competencia desleal y creación y combate de prácticas monopólicas. • Falta de promoción de resoluciones alternativas de conflictos entre oferentes y consumidores, tanto en vía administrativa como judicial. 	Ver derecho al acceso a la justicia, derecho a las garantías judiciales
Derecho a recibir reparación por daños y perjuicios	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión del Estado para garantizar reparaciones y compensaciones por daños y perjuicios ocasionados a los consumidores. 	Ver derecho a la propiedad, derecho de petición, derecho al acceso a la justicia

San Salvador, Junio 2010

Con el apoyo financiero de:

